

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2003-00874-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2003-00874-00
Demandante	INMOBILIARIA CASTELLANA 2000
Demandado	FRANCISCO GONZALEZ CASTILLO Y OTROS
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando se actualice los oficios de embargo de cuentas en los diferentes bancos de la ciudad.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 04 de mayo del 2004 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTS y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea el demandado, en los diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 04 de mayo del 2004.

Adicional se solicita decretar el embargo de los dineros que se encuentren o se llegaren a recibir en las diferentes fiducias en el país, por tanto accede a lo anterior.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 04 de mayo del 2004.

TERCERO: DECRETAR el embargo y secuestro de los dineros, dividendos y/o ingresos que tenga o reciban legalmente embargables que posea los demandados FRANCISCO GONZALEZ CASTILLO Y SAUL GONZALEZ PORRAS Y VICTOR FIDEL MONTAVOL identificados con CC N° 73.167.599, 9.074.928 Y 9.054.312 respectivamente, en la diferentes fiducias del país.

Limítese la cuantía en la suma de \$ 2.000.000 pesos.

CUARTO: Por secretaria librense los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUÍS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2003-00874-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

17c24df6e01e74274514f5f2184d11f9e3e04007449535cff7d95c2c04da6181

Documento generado en 02/08/2021 08:00:41 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2004-00600-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-001-2004-00600-00
Demandante	BANCO CONAVI
Demandado	NANCY GARZON PALACIO Y OTRO
Asunto	Comisiona Notaría.

Haciendo una revisión del expediente se encuentra memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante en el que solicita que se COMISIONE A LA NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE CARTAGENA, para que se lleve a cabo diligencia de remate del bien garantía de la ejecución.

Por ser procedente y toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 448 del C.G.P en concordancia con el artículo 454 del C.G.P. Ahora bien por ser procedente y toda vez que se cumple con los requisitos del art. 448 del C.G.P., ésta autoridad procede a comisionar a la Notaria Tercera del Circulo de Cartagena.

RESUELVE:

PRIMERO: Comisionese a la Notaría Sexta del Circulo de Cartagena, a fin de que realice la diligencia de remate del bien inmueble identificado con F.M.I No 060-177065, ubicado en Urbanización el Rodeo, Sector 3 Manzana 6 Lote 07

SEGUNDO: Librese el respectivo Despacho comisorio con los insertos del caso.

TERCERO: Por Secretaría expídase copias auténticas de los autos de la sentencia de la liquidación del crédito y costas y del avalúo, para los fines del remate a costas de la parte interesada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2005-00492-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2005-00492-00
Demandante	WILLIAM CEBALLOS CORTES
Demandado	HENRY RAMIREZ

Previo a señalar fecha para diligencia de remate se observa que en auto de fecha 04 de mayo de 2021 fue dado en traslado el avalúo del inmueble FMI N° 060-22013 el cual no fue objetado por ninguno de los extremos del litigio; se impartirá aprobación de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 444 del CGP. En consecuencia, este juzgado.

Por otro lado, solicita fecha para diligencia de remate el despacho ordena a la secretaria remitir el presente proceso luego que se cumpla la ejecutoria del presente auto, para seguir con el tramite solicitado.

En consecuencia,

RESUELVE:

PRIMERA: por no haber sido objetado y encontrarse ajustado a la ley, APRUEBASE, el avalúo del inmueble identificado con 060-22013 de propiedad del demandado perseguido dentro del presente proceso, en la suma de \$187.698.000 de conformidad al avalúo catastral aportado.

SEGUNDO: ordenar a la secretaria remitir nuevamente el presente expediente luego que se cumpla la ejecutoria del presente auto para resolver memorial solicitando fecha de remate.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2005-00492-00

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

bd6f2d3ce2704f1eb24b9e4b271c41ffe776d8cbe1252db4ce45dfc50184e6f6

Documento generado en 02/08/2021 08:00:43 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

rad. 13001400300120140063200

CIRO ANTONIO HUERTAS <cirohuertas2012@gmail.com>

Vie 9/07/2021 4:29 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (37 KB)

13001400300120140063200.pdf;

Buenas tardes.

En mi calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, me permito solicitar medida cautelar del siguiente proceso dirigido al juzgado 03 de ejecución civil municipal de Cartagena bol:

tipo de proceso: EJECUTIVO SINGULAR

demandante: BANCO DE BOGOTA

demandado: OMAR ARCON SANTIAGO

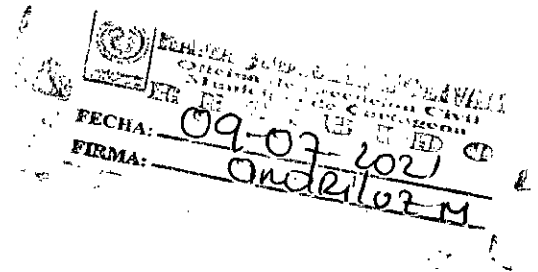
rad. 13001400300120140063200

Cordial saludo,

CIRO ANTONIO HUERTAS

Edificio Banco del Estado Of. 903 Cartagena

Tels. 6538934 -3017717625



Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA -
BOLIVAR.

E.

S.

D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA

DEMANDADO: OMAR ARCON SANTIAGO

RAD: 13001400300120140063200

JUZGADO DE ORIGEN: 01 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

CIRO ANTONIO HUERTAS, de condiciones civiles conocidas dentro del proceso de la referencia, por el presente escrito y con el debido respeto, le solicito a Su Señoría la siguiente medida cautelar:

- El embargo y secuestro del bien inmueble propiedad del demandado OMAR ARCON SANTIAGO, identificado con matricula mobiliaria No. 060-59445 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena, sírvase librar oficio en tal sentido a la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena.

Del Sr. Juez

Atentamente,

CIRO ANTONIO HUERTAS.

C.C. No. 19.373.593 de Bogotá.

TP No. 100.395 del C.S.J

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2014-00632-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2014-00632-00
Demandante	BANCO DE BOGOTA
Demandado	OMAR ARCON SANTIAGO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a elaborar nuevos oficios de embargo del bien.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 06 de julio de 2015 el cual ordena el embargo de la cuota a parte del bien inmueble con FMI N°060-59445 de propiedad del demandado. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 06 de julio de 2015.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 06 de julio de 2015.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2015-00025-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2015-00025-00
Demandante	TUYA SA
Demandado	ALVARO ROJAS MOLINARES
Asunto	Cesión del Crédito.

Advierte el Despacho a folio 11 del cuaderno de ejecución, cesión de crédito celebrada entre TUYA SA y CONTACTO SOLUTIONS SAS identificado con NIT 900.097.543-9 esta última que para todos los efectos legales se denominará el cesionario, según el contrato aportado. Para el efecto, se anexó el correspondiente contrato firmado y autenticado por la parte demandante, mediante el cual se ceden los derechos del presente proceso a CONTACTO SOLUTIONS SAS.

Por ser procedente y por cumplir con los requisitos señalados en el artículo 1959 del Código Civil Colombiano, acéptese la cesión del crédito presentada por TUYA SA y CONTACTO SOLUTIONS SAS, con todos sus privilegios y prerrogativas respecto del crédito existente a favor de TUYA SA.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 1960 del Código Civil, con relación a la cesión, expresa: *"Notificación o aceptación. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste"*

La parte demandada ALVARO ANTONIO ROJAS MOLINARES se entienden notificados de conformidad a lo que exige la norma, con la publicación del correspondiente proveído mediante la NOTIFICACION POR ESTADO.

En consecuencia el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena:

RESUELVE:

PRIMERO: ACÉPTESE la cesión del crédito realizada entre TUYA SA y CONTACTO SOLUTIONS SAS como cesionario, con todos sus efectos y prerrogativas, respecto del crédito existente a favor de TUYA SA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral anterior, CONTACTO SOLUTIONS SAS. Como parte demandante en este asunto.

TERCERO: ENTIENDANSE notificados el demandado ALVARO ANTONIO ROJAS MOLINARES con la publicación del proveído en el correspondiente estado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2015-00025-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8e3fb4a6fe4db8dba2b3efde94f2e7f9bbb6b04230f37f8bfd085595475f8143**
Documento generado en 02/08/2021 08:00:46 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2015-00897-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2015-00897-00
Demandante	MONICA HAMBURGER ALANDETE
Demandado	JOSE ALFONSO LOPEZ MORA Y OTROS
Asunto	Medida Cautelar

Visto el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, a través del cual solicita auto de terminación sin embargo realizando una revisión del mismo no se evidencia auto que ordene terminación del proceso por lo que no se accede a lo requerido por la parte demandada.

Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: NO ACCEDE a lo solicitado por la parte demandada toda vez que el presente proceso no se encuentra terminado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 7c5387e5b173c2d8a5acf08be32f66c5968a5dee3be569c7ea60bfd2b164068b
Documento generado en 02/08/2021 08:00:48 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2016-00983-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-001-2016-00983-00
DEMANDANTE	COOCREDIEXPRESS
DEMANDADO	JOSE ORTIZ HERNANDEZ Y OTRO
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Sería del caso entrar a modificar o aprobar la liquidación ADICIONAL del crédito presentada por el apoderado judicial de la parte demandante que obra de folios 31 a 32 del CE; sin embargo, se observa que se calculan nuevamente intereses moratorios desde la exigibilidad siendo que por tratarse de una liquidación adicional, el valor a liquidar corresponde solo a los valores adicionales a partir de la última liquidación aprobada, tal como lo dispone el numeral 4 del artículo 446 del C.G.P. que reza:

*(...)“4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual **se tomará como base la liquidación que esté en firme.**”(...*

Por lo anterior, esta Agencia judicial se abstendrá de dar trámite a lo solicitado, hasta tanto el memorialista aclare la liquidación del crédito presentada bajo los presupuestos del artículo 446 del C.G.P.

RESUELVE

PRIMERO: NO ACCEDER a impartir aprobación de la liquidación ADICIONAL del crédito presentado por la parte actora del proceso de la referencia, hasta tanto se presente en debida forma, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente auto, en los términos del artículo 446 del C.G.P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

28

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2017-001087-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

16 MAR 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2017-01087-00
Demandante	EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC
Demandado	MAURICIO RAMIREZ FRANCH

Se advierte memorial por parte del apoderado de la parte demandante solicitando la corrección del auto de fecha 2 de febrero de 2021, toda vez que se encuentra un error en la parte resolutive sobre la orden emitida de la medida cautelar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra auto de fecha 02 de febrero de 2021, donde se vislumbra el error en mención. En consecuencia se procede a corregir teniendo en cuenta el artículo 268 del C.G.P el cual manifiesta se podrá corregir el auto en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, mencionando que la parte resolutive siendo de la siguiente manera.

“PRIMERO: ORDENAR el embargo y secuestro del remanente de los bienes embargados o que se le llegaren a desembargar al demandado MAURICIO RAMIREZ FRANCH con C.C N° 3.226.702, dentro del proceso de radicado con N° 11001-31-03-017-2017-00551, que se encuentra en el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÀ, con juzgado de origen JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. Límitese la cuantía en la suma \$21.953.947.”

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: Corregir el auto de fecha 02 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

“PRIMERO: ORDENAR el embargo y secuestro del remanente de los bienes embargados o que se le llegaren a desembargar al demandado MAURICIO RAMIREZ FRANCH con C.C N° 3.226.702, dentro del proceso de radicado con N° 11001-31-03-017-2017-00551, que se encuentra en el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2017-001087-00

CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÀ, con
juzgado de origen JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA. Límitese la cuantía en la suma \$21.953.947."

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

OFICINA DE APOYO
JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
ESTAL N° 09
Por medio del cual se notifica a las partes que no
lo han sido personalmente de la providencia:
AUTO DE FOLIA DIA 16 MES 03 AÑO 2021
FOLIO EN LA FOLIA DIA 17 MES 03 AÑO 2021

2

**ENVIO DE CORRESPONDENCIA RAD 001-2017-01087-00 EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 806/2020**

Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 13/04/2021 9:59 AM

Para: Juzgado 04 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C. <j04ejecbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: cabralesabog@hotmail.com <cabralesabog@hotmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (146 KB)

001-2017-01087 OFICIO DE MEDIDAS.pdf;

Cartagena D T y C; 13 de abril de 2021

Estimado,

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ

OECM-2212

ESM

Cordial saludo,

Por medio de la presente se le hace envío de la presente comunicación en cumplimiento del Decreto 806 de del 4 de junio del 2020; Señores Instrumentos Públicos y Usuario, tenga en cuenta que la Resolución 6610 de 27 de mayo del 2019 "Por medio del cual se fijan las tarifas por conceptos de ejercicio de la función registral" expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, NO ESPECIFICA el acto o nuestra entidad como sujeto a registro exento en el artículo 22, razón por la cual, le corresponde al usuario interesado cuando vaya a realizar el trámite ante ustedes hacer los pagos respectivos.

Así mismo, Oficina de Instrumentos Públicos, se le informa que en razón a que la Oficina de Apoyo le estamos dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020, absténgase, de pedirnos confirmación de autenticidad del mismo por prohibición expresa que el artículo les hace a ustedes.

Entiéndase entonces, que los documentos que se les remiten son auténticos y no podrán desconocerse siempre que provengan de este correo electrónico de esta autoridad judicial.

En concordancia con lo ordenado en Artículo 11, que señala: "Comunicaciones, oficios y despachos. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso. Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad pública, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial".

Señor usuario para su conocimiento, le adjuntamos la resolución 6610 y la siguiente información que le servirá de apoyo.

Atentamente,

JULIO DAVID ALVARINO MUÑOZ

PRACTICANTE AD HONOREM

Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

3

Cartagena de Indias, 13 de abril de 2021
OFICIO No OECM - COVID19 - 2212

SEÑORES
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ

La ciudad

Va dirigido al proceso con RAD: **11001-31-03-017-2017-00551**

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2017-01087-00
Demandante	EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC NIT. 900.480.588-1
Demandado	MAURICIO RAMIREZ FRANCH C.C. 3.226.702

Cordial saludo,

Comunico a Usted que mediante auto de fecha Dieciséis (16) de Marzo de dos mil Veintiuno (2021), el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena resolvió:

CUESTIÓN ÚNICA: Corregir el auto de fecha 02 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

"PRIMERO: ORDENAR el embargo y secuestro del remanente de los bienes embargados o que se le llegaren a desembargar al demandado MAURICIO RAMIREZ FRANCH con C.O N° 3.226.702, dentro del proceso de radicado con N° 11001-31-03-017-2017- 00551, que se encuentra en el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, con Juzgado de origen JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. Límitese la cuantía en la suma \$21.953.947."

Dando cumplimiento a lo ordenado en esta providencia nos permitimos informar que los dineros descontados deben ser depositados en:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA DE LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA	130012041800
Código de Identificación	130014303000
NUMERO DE PROCESO	13001-40-03-001-2017-01087-00
DEMANDANTE	EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC NIT. 900.480.588-1
DEMANDADO	MAURICIO RAMIREZ FRANCH C.C. 3.226.702

Importante digitar los 23 dígitos del radicado del proceso; señalado en el cuadro anterior

La inobservancia a esta orden, lo hará acreedor de la imposición de multas sucesivas de 2 a 5 S.M.L.M.V
Al contestar sírvase citar la referencia del proceso.

Atentamente,


SECRETARIO

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Atendiendo a la necesidad de nuevas estrategias de trabajo, en razón a las contingencias causadas por la pandemia mundial del COVID 19, se deja constancia que la información consignada en esta esta comunicación fue extraída del expediente judicial, y las identificaciones de la suministrada en la demanda. Así mismo que en cumplimiento del artículo 11 del decreto 806 de 4 de junio del 2020, la oficina realizara la notificación de la comunicación, siempre que la dirección electrónica sea de dominio público, o se encuentre suministrada en el expediente. En caso de solicitar alguna corrección de la comunicación, la solicitud deberá ser enviada al correo cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co indicando en el asunto CORRECCION DE OFICIO identificando el número de la comunicación ejemplo CORRECCION DE OFICIO N° COVID- 01 y adjuntarlo, el cual se estudiara y será corregido en el turno correspondiente. Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismo se le recuerda que OECMC no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente.

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda – piso 2 oficina 212
cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 035-6602070
Cartagena -Colombia

PROYECTO JUICIO ALVARINO

13001-40-03-001-2017-01087-00

Manuel cabrales solano <cabralesabog@hotmail.com>

Jue 15/07/2021 2:59 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (50 KB)

SOLICITUD DE RESPUESTA DEL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA EN EL PROCESO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC VS. MAURICIO RAMIREZ FRANCH.pdf;

Cordial saludo

Adjunto solicitud de respuesta del juzgado cuarto de ejecución civil del circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo del Edificio Palmetto Elíptico contra Mauricio Ramirez.

Atentamente,

MANUEL CABRALES SOLANO

Abogado

Centro, Avenida Daniel Lemaitre No. 9-45

Edificio Banco del Estado Oficina 906

Teléfono: 6551638

Cel: 310-3668053

Cartagena de Indias D. T. y C.

13

MANUEL CABRALES SOLANO
ABOGADO

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

JUZGADO DE ORIGEN: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

E. S. D.

RAD: 1087-2017

REF: PROCESO EJECUTIVO DE EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC CONTRA MAURICIO RAMIREZ FRANCH.

MANUEL CABRALES SOLANO, abogado titulado con T.P.No.30.118 del C.S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado judicial de **EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC.**, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me solicitar lo siguiente:

1.- **ENVIAR** a mi correo electrónico cabralesabog@hotmail.com, la respuesta dada por el **JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ**, frente al oficio de embargo de remanente de los bienes embargados o que se llegaren a desembargar dentro del proceso que se encuentra bajo su conocimiento con radicado **11001-31-03-017-2017-00551-00**, oficio que le fue remitido por usted mediante correo electrónico de fecha 13 de abril de 2021.

En caso de no haberse recibido respuesta alguna por parte de dicho Juzgado, solicito se sirva **REQUERIRLO** a fin de que informe si procedió a tomar atenta nota de la medida oficiada.

Atentamente,



MANUEL CABRALES SOLANO

T.P.No.30.118 del C.S. de la J.

C.C.No.73.082.028 de C/gena.

Centro, Av. Daniel Lemaitre #9-45 Edificio Banco de Estado Oficina 906
Teléfonos: 6551638 - 3137102484
Cartagena de Indias D. T. y C

563-287



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, FECHA 19 de Julio DE 2021

Señor (a), paso al despacho el proceso identificado bajo el radicado 13001-40-03-001-2017-0687 00-00, para dar trámite a la siguiente actuación y/o información:

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES	FL. _____ CUADER. _____	INMOVILIZACION DE VEHICULO	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE PRETENSIONES	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA ENTREGA DE TITULOS	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITUD DE TERMINACION POR TRANSACCION	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITUD DE CORRECCION Y/O ADICION DE PROVIDENCIA	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITUD DE TERMINACION POR ACUERDO DE PAGO	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITA FECHA DE REMATE	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO	FL. _____ CUADER. _____
PRESENTA LIQUIDACION DE CREDITO	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA DESGLOSE DE TITULO	FL. _____ CUADER. _____
PRESENTA CESION DE CREDITO	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA REQUERIMIENTO A CAJERO PAGADOR	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITA DESPACHO COMISORIO	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA OFICIAR A INSTRUMENTOS PUBLICOS	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITUD DE NULIDAD	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA SECUESTRO DE BIEN MUEBLE	FL. _____ CUADER. _____
POSTURA DE REMATE	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE	FL. _____ CUADER. _____
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS	FL. _____ CUADER. _____	NOMBRAMIENTO A SECUESTRE	FL. _____ CUADER. _____
PAGO DE IMPUESTO DE REMATE	FL. _____ CUADER. _____	TERMINACION POR PAGO TOTAL DE CUOTA	FL. _____ CUADER. _____
VENCIMIENTO DE TRASLADO DE AVALUO	FL. _____ CUADER. _____	VENCIMIENTO TRASLADO DE LIQUIDACION DE CREDITO	FL. _____ CUADER. _____
REMATE	FL. _____ CUADER. _____	INFORME DEL SECUESTRE	FL. _____ CUADER. _____
RENUNCIA DE PODER	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA DESISTIMIENTO TACITO	FL. _____ CUADER. _____
OTORGAMIENTO DE PODE	FL. _____ CUADER. _____	OFICIO JUZGADO ORDENADO EMBARGO DE REMANENTE	FL. _____ CUADER. _____
SUSTITUCION DE PODER	FL. _____ CUADER. _____	PRESENTA SUBROGACION LEGAL	FL. _____ CUADER. _____
REVOCATORIA DE PODER	FL. _____ CUADER. _____	AMPLIACION DE MEDIDA CAUTELARES	FL. _____ CUADER. _____
PRESENTACION DE AVALUO	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITA ILEGALIDAD	FL. _____ CUADER. _____
DEMANDA ACUMULADA	FL. _____ CUADER. _____	SOLICITUD DE EMBARGO DE REMANENTE	FL. _____ CUADER. _____

OTROS Requerir Juzgado

EL EXPEDIENTE ESTA COMPUESTO POR 2 CUADERNOS (S) CERRADOS, FOLIOS 4315 Y 26 FOLIOS UTILES (CE).

JHOANA SEGURA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 5

JHOANA SEGURA

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2017-01087-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2017-01087-00
Demandante	EDIFICIO PALMETTO ELIPTIC
Demandado	MAURICIO RAMIREZ FRANCH
Asunto	Medida Cautelar

Se observa a folio 23 del cuaderno de ejecución, por la parte demandante solicitando se le ponga en conocimiento la respuesta obtenida por parte del Juzgado Cuarto Civil del circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, sin embargo después de revisar el expediente no se encontró respuesta alguna por tanto se oficia nuevamente al Juzgado Cuarto Civil del circuito de Ejecución de Sentencias Civiles de Bogotá, para que informe si ha tomado atenta nota de lo ordenado en auto de fecha 2 de febrero de 2021 y corregido en auto de fecha 16 de marzo de 2021.

En consecuencia,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: OFICIAR al Juzgado Cuarto Civil del circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, para que informe si ha tomado atenta nota de lo ordenado en auto de fecha 2 de febrero de 2021 y corregido en auto de fecha 16 de marzo de 2021.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2018-00160-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2018-00160-00
Demandante	BANCO DE OCCIDENTE
Demandado	MARLON ALBERTO FIGUEROA ANGULO
Asunto	Medida Cautelar

Visto el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita se inmovilice el vehículo de placa UEY648, lo anterior toda vez que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, manifiesta que fue inscrito la medida de embargo al vehículo anteriormente referenciado, por lo tanto se ordena la inmovilización del vehículo identificado con la placa UEY648 denunciado como propiedad del demandado MARLON ALBERTO FIGUEROA ANGULO.

Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: DECRETAR la inmovilización del automotor de UEY648 de propiedad del demandado MARLON ALBERTO FIGUEROA ANGULO identificado con C.C N° 3.907.722, para tal efecto **COMISIONESE** a la **SIJIN** para que efectué la captura e inmovilización del citado automotor.

Por secretaría **LÍBRESE** el respectivo oficio.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2018-00160-00

Código de verificación: **052e64e75b1e1c0c8ea3dff8ecf1e86697618fc9787eb014897eb3920a30e778**

Documento generado en 02/08/2021 08:00:52 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-001-2019-00086-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-001-2019-00086-00
Demandante	JAIRO PAZ PEREZ
Demandado	FLOR CONTRERAS BUITRAGO
Asunto	DIGITALIZAR

Teniendo en cuenta la solicitud del apoderado judicial de la parte demandante ésta autoridad ordenará a la secretaria de apoyo de los Juzgados de ejecución allegar a través del área de títulos judiciales relación de los mismos.

. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: ORDENAR a la secretaria de apoyo área de títulos allegar relación de los depósitos judiciales por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO JUZGADO DE ORIGEN PROCESO CON RAD

13001400300120190023800

Rayza Canabal Machado <rayzalcma@gmail.com>

Lun 21/06/2021 1:49 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (831 KB)

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO EDUARDO DEL RIO Y EDINSON HERNANDEZ.pdf;

Señor
JUEZ 3 EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE:	COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP COLOMBIA" NIT.805.004.034-9
DEMANDADO:	EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ C.C 19.173.817
	EDINSON HERNANDEZ WATTS C.C 9.085.121
ASUNTO:	CONVERSION DE DEPOSITOS JUDICIALES
RADICADO:	13001400300120190023800

RAYZA LUZ CANABAL MACHADO, mayor de edad y vecina de la ciudad de Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.143.431.441 de Barranquilla - Atlántico, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 347.670 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, tal como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de **APODERADA JUDICIAL** para el cobro **LA COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP COLOMBIA"**, identificado con Nit. No. **805.004.034-9**, mediante el presente escrito solicito señor juez con todo respeto, se realice la conversión de los diferentes depósitos judiciales que se encuentran a órdenes de la cooperativa, provenientes del proceso que se adelanta en contra de los señores **EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ** y **EDINSON HERNANDEZ WATTS**, como resultado del proceso ejecutivo con radicado **2019 - 238**, del cual conoció el **JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**; los cuales fueron enviados a esté despacho, producto de los descuentos propios del embargo realizados por el cajero pagador de la **ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA**.

En reiterativas ocasiones se ha solicitado entrega de títulos ante los Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, obteniendo como respuesta que el proceso no tiene depósitos judiciales a favor de la Cooperativa, ni en el juzgado de origen, lo cual como parte interesada nos llevó a revisar la información facilitada por el Banco agrario, donde se evidencia que si hay depósitos provenientes del proceso de la referencia y a favor de la cooperativa, los cuales se en encuentran en el juzgado de origen es decir el **Juzgado 1 Civil Municipal de Cartagena**. A continuación, se relacionan con detalle los títulos que a la fecha aparecen consignados en la cuenta del juzgado ya anteriormente mencionado.

NUMERO DE TITULO	FECHA DE ELABORACIÓN	VALOR DEL TITULO
412070002306298	20191227	\$855.765
412070002291828	20191128	\$1.436.218

Con la anterior información será más eficiente la identificación de dichos depósitos; por ende, muy respetuosamente solicito sea **REQUERIDO** el **JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA** para que realice la **CONVERSIÓN** de los depósitos judiciales y sean enviados a las cuentas bancarias de los juzgados de **EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**, para su cobro y próximamente terminación del proceso por pago total de la deuda.

Quedo atento a sus comentarios y deseándole éxito en sus labores.

Nota: acusar de recibido.
Agradeciéndoles de ante mano.

21-06-2021
Atena Segura

Del Señor Juez,

RAYZA LUZ CANABAL MACHADO
C.C. No. 1.143.431.441 de Barranquilla
T.P. No. 347.670 del C. S. de la J
APODERADA

Anexo:

- Relación de títulos del Banco Agrario.
- Copia de desprendibles de pago de los meses de noviembre y diciembre de 2019.

RAYZA L. CANABAL MACHADO.
ABOGADA.
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN.

Señor
JUEZ 3 EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE:	COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP COLOMBIA" NIT.805.004.034-9
DEMANDADO:	EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ C.C 19.173.817 EDINSON HERNANDEZ WATTS C.C 9.085.121
ASUNTO:	CONVERSION DE DEPOSITOS JUDICIALES
RADICADO:	13001400300120190023800

RAYZA LUZ CANABAL MACHADO, mayor de edad y vecina de la ciudad de Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanía **No.1.143.431.441** de Barranquilla - Atlántico, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional **No. 347.670** expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, tal como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de **APODERADA JUDICIAL** para el cobro **LA COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP COLOMBIA"**, identificado con Nit. No. **805.004.034-9**, mediante el presente escrito solicito señor juez con todo respeto, se realice la conversión de los diferentes depósitos judiciales que se encuentran a órdenes de la cooperativa, provenientes del proceso que se adelanta en contra de los señores **EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ** y **EDINSON HERNANDEZ WATTS**, como resultado del proceso ejecutivo con radicado **2019 - 238**, del cual conoció el **JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**; los cuales fueron enviados a esté despacho, producto de los descuentos propios del embargo realizados por el cajero pagador de la **ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA**.

En reiterativas ocasiones se ha solicitado entrega de títulos ante los Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, obteniendo como respuesta que el proceso no tiene depósitos judiciales a favor de la Cooperativa, ni en el juzgado de origen, lo cual como parte interesada nos llevó a revisar la información facilitada por el Banco agrario, donde se evidencia que si hay depósitos provenientes del proceso de la referencia y a favor de la cooperativa, los cuales se encuentran en el juzgado de origen es decir el **Juzgado 1 Civil Municipal de Cartagena**. A continuación, se relacionan con detalle los títulos que a la fecha aparecen consignados en la cuenta del juzgado ya anteriormente mencionado.

NUMERO DE TITULO	FECHA DE ELABORACIÓN	VALOR DEL TITULO
412070002306298	20191227	\$855.765
412070002291828	20191128	\$1.436.218

Con la anterior información será más eficiente la identificación de dichos depósitos; por ende, muy respetuosamente solicito sea **REQUERIDO** el **JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA** para que realice la **CONVERSIÓN** de los depósitos judiciales y sean enviados a las cuentas bancarias de los juzgados de **EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**, para su cobro y próximamente terminación del proceso por pago total de la deuda.

Quedo atento a sus comentarios y deseándole éxito en sus labores.

Nota: acusar de recibido.
Agradeciéndoles de ante mano.

Del Señor Juez,

Rayza Canabal M.
RAYZA LUZ CANABAL MACHADO
C.C. No. 1.143.431.441 de Barranquilla
T.P. No. 347.670 del C. S. de la J
APODERADA

Anexo:

- Relación de títulos del Banco Agrario.
- Copia de desprendibles de pago de los meses de noviembre y diciembre de 2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	OFI	CONSEC	EXPEDIENTE	Ciudad	JUZGADO	ELABORA	VALOR	ESTADO	IDENTIFICA	NOMBRE	IDENTIFI	NOMBRE	APELLIDO DEL DE	APELLIDO2											
2	4	1207	2306298	201900238	CARTAGENA	001 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA	20191227	855765	PENDIENTE DE PAGO	8050040349	COOPSERP	49085121	EDINSON HERNANDEZ WATTS	ALC DE CARTAGENA											
3	4	1207	2291828	201900238	CARTAGENA	001 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA	20191128	1436218	PENDIENTE DE PAGO	8050040349	COOPSERP	49085121	EDINSON HERNANDEZ WATTS	ALC DE CARTAGENA											
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

NIT. 890480184

Recibo de Pago

Fecha: 2019/12/20

Hora: 10:53:08 AM

Pagina: 1 de 2

Contrato:	0728	Periodo:	2019/12/01 a 2019/12/30			
Empleado:	9085121 HERNANDEZ WATTS EDINSON	Basico Neto:	5,342,392.00			
Dirección:	Urbanizacion Florida Blanca Mz A Lote 12 Sector de	Telefono(s):	3116979363			
Centro Costo:	07-01 Secretaría de Infraestructura	Cargo:	021 PROF.ESPECIALIZADO C222 - G41			
Codigo	Descripción del Concepto	Cantidad	Vr Devengos	Vr Descuentos	Saldo	Acumulado
DV01	SUELDO BASICO	30.00	5,342,392.00	0.00		
DX01	RETENCION INGRESOS LABORALES		0.00	74,000.00		
DX02	APORTES SALUD - 09 - COOMEVA E.P.S.		0.00	213,700.00		
DX23	APORTES PENSION - 14 - COLPENSIONES		0.00	213,700.00		
DX24	APORTE SOLIDARIDAD - 14 - COLPENSIONES		0.00	53,600.00		
DX39	SEGUROS BOLIVAR S.A		0.00	349,968.00		
DX63	A.M.I.		0.00	87,600.00		
DX98	EMBARGO COOPERATIVA # 53B		0.00	855,765.00		
Totales			5,342,392.00	1,848,333.00		

Neto a Pagar en Transferencia: 3,494,059.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100

Firma del Empleado

24

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

NIT. 890480184

Recibo de Pago

Fecha: 2019/11/25

Hora: 2:35:19 PM

Pagina: 1 de 2

Contrato: 0728
Empleado: 9085121 HERNANDEZ WATTS EDINSON
Dirección: Urbanización Florida Blanca Mz A Lote 12 Sector de CARTAGENA
Centro Costo: 07-01 Secretaria de Infraestructura 001
Periodo: 2019/11/01 a 2019/11/30
Basico Neto: 5,342,392.00
Telefono(s): 3116979363
Cargo: 021 PROF.ESPECIALIZADO C222 - G41

Codigo	Descripción del Concepto	Cantidad	Vr Devengos	Vr Descuentos	Saldo	Acumulado
DV01	SUELDO BASICO	30.00	5,342,392.00	0.00		
DX01	RETENCION INGRESOS LABORALES		0.00	74,000.00		
DX02	APORTES SALUD - 09 - COOMEVA E.P.S.		0.00	213,700.00		
DX23	APORTES PENSION - 14 - COLPENSIONES		0.00	213,700.00		
DX24	APORTE SOLIDARIDAD - 14 - COLPENSIONES		0.00	53,600.00		
DX39	SEGUROS BOLIVAR S.A		0.00	349,968.00		
DX63	A.M.I.		0.00	87,600.00		
DX98	EMBARGO COOPERATIVA # 538		0.00	1,436,218.00		
Totales			5,342,392.00	2,428,786.00		

Neto a Pagar en Transferencia: 2,913,606.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 0/100

Firma del Empleado

75.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-001-2019-00238-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,



03 AGO 2021

PROCESO	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-001-2019-00238-00
Demandante	COOPERATIVA COOPSER
Demandado	EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ
Asunto	Oficiar para conversión

Se observa memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante en el que solicita que se oficie al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena a fin de que sirva realizar la conversión y/o traslado de los depósitos judiciales a la cuenta de ésta autoridad debido a que fueron consignados equivocadamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se oficiará al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, para que informe si actualmente en esa dependencia se encuentran consignados depósitos judiciales a favor del proceso con radicado No 001-2019-00238-00 promovido por COOPERATIVA COOPSER contra EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ en caso de existir poner a disposición de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, toda vez que actualmente asumimos el conocimiento del proceso. Por lo anterior, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Oficiar al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, para que informe si actualmente en esa dependencia se encuentran consignados depósitos judiciales a favor del proceso con COOPERATIVA COOPSER contra EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ radicado No 001-2019-00238-00 promovido en caso de existir poner a disposición de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, toda vez que actualmente asumimos el conocimiento del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

Cartagena de Indias, D. T. y C., 19 de julio de 2021

Señor;

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

Ref. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE INVERBIENES S.A.S. CONTRA CENON
PALACIO Y LIBIA ESTHER PEREZ VERGARA.
RAD. 13001-40-03- 001-2016-00924-00

MARCELO JIMÉNEZ JIMÉNEZ conocido de autos e identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, me dirijo a usted muy respetuosamente, para solicitarse sirva:

1. Expedir nuevo oficio de embargo y secuestro de los dineros que en cuentas de ahorros, Corrientes, C.D.T.'S., C.D.A.T.'S, y /o por cualquier concepto legalmente embargable posean los demandados **CENON PALACIO MAYO Y LIBIA ESTHER PEREZ VERGARA** en los diferentes Bancos, Corporaciones, Cooperativas, y entidades financieras y fiducias **DEL PAÍS** con el fin de ACTUALIZAR dicha medida.

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que en auto de fecha 9 de mayo de 2019 se aprueba transacción y se decreta la terminación del proceso por pago total de la obligación respecto del demandado **JORGE LUIS IMBETT RODRIGUEZ.**

2. Decretar embargo y secuestro de los dineros, dividendos y/o ingresos que tengan o reciban los demandados **TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA Y MARIO SOLACHE ALVARADO** en las diferentes FIDUCIAS del país.

Las fiducias a embargar son las siguientes:

Centro, Edificio Concasa, Piso 15 Oficina 1505-Teléfonos: 6641987 Cel. 315 721 92 53
e-mail: marcelojimenezjimenez@hotmail.com Cartagena- Colombia

19-07-21
cesar

49

Fiduciaria Bancolombia S.A	Fiduciaria La Previsora	Fiduciaria Bogotá S.A
Fiduciaria De Occidente S.A	SERVITRUST GNB SUDAMERIS COLOMBIA	Fiducoomeva
Colpatría Fiduciaria	Davivienda Fiduciaria	Fiduagraria
Fiduoccidente	Fiduciaria Popular	Cititrust Colombia S.A.
Itaú Asset Management Colombia S.	Acción fiduciaria S.A	Fiduciaria central
Alianza fiduciaria	BBVA Asset Management sociedad fiduciaria	Colmena fiduciaria
Fiduciaria Corficolombiana	Fiducoldex	

De antemano agradezco la colaboración que se nos pueda brindar.

Renuncio a notificación y ejecutoria favorable.

Atentamente,



MARCELO JIMENEZ JIMENEZ

C.C. No. 73.573.269 de Cartagena

T.P. No. 106.777 del H. C. S de la J.

• RAD: 113001-4003-001-2016-0924-00// ACTUALIZACION DE EMBAGOS.

marcelo jimenez jimenez <marcelojimenezjimenez@hotmail.com>

Lun 19/07/2021 10:20 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: secretariaalianzaygestionlegal@gmail.com <secretariaalianzaygestionlegal@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (436 KB)

CENON PALACIO. CUENTAS. .pdf

Cartagena de Indias D. T. y C., 19 de julio de 2021

Señores;

JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

REF.

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DTE: INVERBIENES SAS

DDO: CENON PALACIO Y OTRO.

RAD: 113001-4003-001-2016-00924-00

MARCELO JIMENEZ JIMENEZ, abogado de la parte demandante, me dirijo a usted muy respetuosamente, para aportar memorial solicitando actualización de embargos dentro del asunto de la referencia.

De antemano agradezco su atención y la colaboración que se nos pueda brindar.

Atentamente,

MARCELO JIMENEZ JIMENEZ

C.C. No. 73.573.269 de Cartagena

T.P. No. 106.777 del H. C. S de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2016-00924-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-001-2016-00924-00
Demandante	INVERBIENES
Demandado	CENON PALACIO MAYO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando se actualice los oficios de embargo de cuentas en los diferentes bancos de la ciudad.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 05 de junio del 2017 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTS y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea el demandado, en los diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 06 de junio del 2017.

Adicional se solicita decretar el embargo de los dineros que se encuentren o se llegaren a recibir en las diferentes fiducias en el país, por tanto accede a lo anterior por lo que se le ordena a la secretaria elaborar nuevos oficios de acuerdo con lo ordenado en el auto de fecha 25 de septiembre de 2019 en su numeral tercero.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 05 de junio del 2017.

TERCERO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 25 de septiembre del 2019.

CUARTO: Por secretaria librense los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-001-2016-00924-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

4ede470cf8b470f22e5152a52636841784d85db45045740ce477f39807178cd3

Documento generado en 02/08/2021 08:00:50 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-002-2014-00490-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021.

Proceso Ejecutivo	HIPOTECARIO
Radicado	13001-43-03-002-2014-00490-00
Demandante	LOZANO BENITO REBOLLO Y CIA S EN C
Demandado	BLADIMIRO JOSE AMELLCUELLO
Asunto	Aprueba Avalúo

Previo a señalar fecha para la diligencia de remate se observa que en auto de fecha 09 de Junio de 2021 fue dado en traslado el avalúo del inmueble con F.M.I No 060-24194 el cual no fue objetado por ninguno de los extremos del litigio; por tanto, se impartirá aprobación de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 444 del C.G.P. En consecuencia, este Juzgado

RESUELVE

CUESTIÓN UNICA: Por no haber sido objetado y encontrarse ajustado a la ley, APRUEBASE, el avalúo del inmueble identificado con 060-241194 de propiedad del demandado perseguido dentro del presente proceso, en la suma de \$288.936.000.00 de conformidad al avalúo Catastral aportado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-002-2015-01405-00

Cartagena de Indias D. T. y C., **03 AGO 2021**

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-002-2015-01405-00
Demandante	BANCO DE OCCIDENTE
Demandado	EDWIN POLO SANDOVAL

Visto el memorial presentado por la parte demandante, a través del cual solicita el embargo del vehículo identificado con la placa BPW 949 denunciado como propiedad del demandado EDWIN POLO SANDOLVAL, registrado en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Turbaco. En relación con lo anterior este Despacho accede a lo solicitado.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decrétese el embargo del vehículo de placas BPW 949 denunciado como propiedad del demandado EDWIN POLO SANDOLVAL identificado con la CC No. 9.200.596.

SEGUNDO: Librese el oficio respectivo para la inscripción del embargo, dirigido a DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO, de conformidad a lo establecido en el # 1 del artículo 593 del C.G.P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-002-2016-00946-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-002-2016-00946-00
DEMANDANTE	COOPERATIVA COOMULGAR
DEMANDADO	ORLANDO GORDON HERRERA
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación ADICIONAL del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **seis millones ciento noventa y ocho mil ciento tres pesos (\$6.198.103)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$7.429.205	Folio 35 CP
Liquidación adicional 1	\$6.198.103	Folio 68 CE
Liquidación de costas	\$383.460,25	Folio 38 CP

ADVERTIR a la Secretaria, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-002-2018-00066-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-002-2018-00066-00
Demandante	BANCOLOMBIA SA
Demandado	DIEGO ALEJANDRO SANDOVAL BOTERO

A folio 59 del cuaderno de ejecución, se advierte memorial presentado por el Dr. CARLOS OROZCO TATIS, ratificando el poder conferido en memorial de cesión a folio 21 del referido cuaderno, a través del cual el cesionario ahora parte demandante REINTEGRA SAS confiere poder al Dr. CARLOS OROZCO TATI, identificado con C.C. No. 73.558.798 y T.P. No. 121.981 del C.S. de la J., para que lo represente dentro del proceso judicial de la referencia. Por lo que se le reconocerá personería al Dr. CARLOS OROZCO TATIS, como apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con el memorial poder conferido.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: RECONOCER al Dr. CARLOS OROZCO TATIS, identificado con C.C. No. 73.558.798 y T.P. No. 121.981 del C.S. de la J., como apoderado judicial de la parte demandante REINTEGRA SAS, de conformidad con el memorial poder conferido.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-002-2018-00066-00

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7e7e8ef341796fbe85ba9f22f240b87bb1993efb1e40c1124afcacb54075c854

Documento generado en 02/08/2021 08:00:54 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-002-2019-00328-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,



03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-002-2019-00328-00
Demandante	RF ENCORE SAS
Demandado	REINALDO DAVID ROA

Se advierte memorial presentado por la parte demandante solicitando un relacion de las depositos judiciales que se encuetren a favor de este proceso hasta el momento. Se le ordena a la secretaria de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecucion Civil de Cartagena allegue una relacion de los depositos judiciales que se encuentren hasta el momento a favor del presente proceso.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTION UNICA: ORDENAR a la secretaria de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecucion Civil de Cartagena allegue una relacion de los depositos judiciales que se encuentren hasta el momento a favor del presente proceso.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

12

SOLICITUD CORRECCIÓN DE AUTO, EJECUTIVO HIPOTECARIO DE ELSA BLANCO
CONTRA FREDIS CONTRERAS Y OTRO, RADICADO 13001400300320040103300,
JUZGADO DE ORIGEN TERCERO CIVIL MUNICIPAL

JoRg3 PoRtAcIO <portacio83@hotmail.com>

Area de Entada.

Vie 9/07/2021 11:46 AM

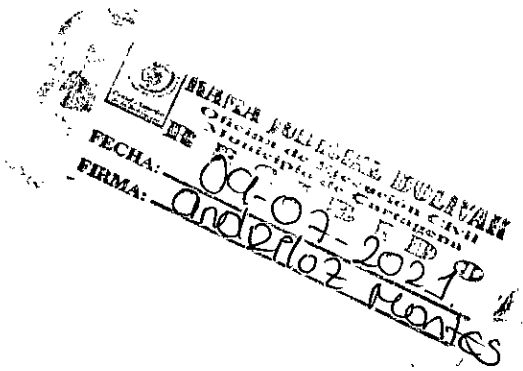
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3Eje.

1 archivos adjuntos (614 KB)

CamScanner 07-09-2021 11.43.pdf;

Obtener Outlook para iOS



726

JORGE ARMANDO PORTACIO NIEVES

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

ABOGADO



Señor(a):

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO

DEMANDANTE: ELSA BLANCO MORELO

DEMANDADOS: FREDIS CONTRERAS ARDILA Y OTRO

RADICADO: 13001400300320040103300

ASUNTO: SOLICITUD CORRECCIÓN DEL AUTO

JUZGADO DE ORIGEN: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

JORGE ARMANDO PORTACIO NIEVES, mayor, de este domicilio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, conocido de auto, mediante el presente escrito acudo a este Despacho, con el fin de solicitarle a usted, o a quien corresponda, favor corregir el auto de fecha 7 de julio de 2021, toda vez que por error volvieron a poner como demandante a la señora MIRIAM ESTHER PAYARES DIAZGRANADOS, cuando quien funge como demandante es mi clienta, la señora ELSA BLANCO MORELO, ya que fue reconocida como demandante por su señoría, a través de un auto de fecha del 15 de julio del 2020, en este orden de ideas solicito la corrección inmediata del auto del 7 de julio de 2021.

Por otra parte, es menester informarles, que no deben tener en cuenta el memorial aportado por el suscrito el día 28 de junio del presente año, donde solicité un cambio de juzgado por competencia, en razón a que su señoría ya atendió lo que nos atañe, lo cual era fijar la fecha de remate, por lo que solicito hacer caso omiso a esa solicitud y abstenerse de darle tramite a ese memorial.

Sírvase proveer de conformidad.

Atentamente,


JORGE ARMANDO PORTACIO NIEVES
C.C. N° 78077298 de Loricá - Córdoba
T.P. N° 249377 del C.S. de la J.



JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2004-01033-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2004-01033-00
Demandante	ELSA BLANCO MORELO
Demandado	FREDIS CONTRERAS ARDILA Y OTRO
Asunto	Corrección de auto.

Se observa memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante en el que solicita la corrección del auto de fecha 07 de Julio de 2021 como quiera que el nombre correcto del demandante es ELSA BLANCO MORELO y no Miriam Esther Payares Diazgranados.

Haciendo una revisión del auto se tiene que efectivamente le asiste razón al apoderado judicial de la parte demandante de conformidad al artículo 286 del C.G.P que señaló:

"Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (...) Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella."

De conformidad a lo anterior ésta Judicatura **corregirá el ENCABEZADO del auto de fecha 07 de Julio de 2021 se entenderá que el demandante es ELSA BLANCO MORELO** . En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: Corregir el ENCABEZADO del auto de fecha 07 de Julio de 2021 se entenderá que el demandante es ELSA BLANCO MORELO, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

30

M.D
33

Fwd: PODER y MEMORIAL
Forza Abogados <forzabogados@gmail.com>
Mié 21/07/2021 11:05 AM
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (155 KB)
Memorial Solicitud de Traslado de Demanda.pdf; PODER OMILDRE.pdf;

cordial saludo

con la presente presento solicitud de digitalización del expediente que se detalla, con la finalidad de allegar incidente de OPOSICIÓN, el cual tiene un tiempo perentorio y se necesita el expediente completo para su estudio. Adjunto igualmente memoriales entregados directamente al juzgado, sin embargo no se ha podido obtener respuesta lo mas anticipada posible.

agradecido con su respuesta y pronta gestión

Señor
JUEZ TERCERO CIVIL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E.S.D

Rad. 13001-40-03-003-2006-00677-00
DTE: ARGELIA JULIO ORTEGA
DDO: OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS

FORZA ABOGADOS
Abogados Especialistas
Cartagena - Bogota

 Libre de virus. www.avg.com

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO
FECHA: 26-07-2021
FIRMA: [Firma]

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA: 26-07-2021
MEMORIAL: X EXPEDIENTE
JUZGADO DE EJECUCION 1° 2° 3° X
[Firma]
SECRETARIA

10

FORZA ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO CONTRACTUALES y
RELACIONES JURIDICOS NEGOCIALES
Asuntos Civiles – Administrativos- Constitucionales.
Cartagena – Bogotá D.C.

Forza Abogados

Señor
JUEZ TERCERO CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA
E.S.D

Rad. 13001-40-03-003-2006-00677-00
DTE: **ARGELIA JULIO ORTEGA**
DDO: **OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS**

Ref. Solicitud de Traslado de la Demanda.

TYRONE RODRIGUEZ LLAMAS, presentándose ante esta judicatura como abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado especial de la señora **OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS**, quien obra en el proceso como Demandada, de manera más respetuosa concurro a usted a fin de solicitar con debida URGENCIA, dada la etapa en la que se encuentra el proceso, traslado de la toda la demanda y sus anexos para su completo estudio.

Agradecido por su atención y pronta gestión.

Atentamente,

TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS
C.c. 1143359337 de Cartagena.
T.P. 271091 del C. S. de la J.

Correos: tyrone.llamas@gmail.com // Forzabogados@gmail.com



tyrone rodriguez llamas <tyrone.llamas@gmail.com>

PODER

Renzo Barrios Pájaro <renzo.barrios1407@gmail.com>
Para: tyrone.llamas@gmail.com

14 de julio de 2021, 9:09

Cordial saludo

Con la presente misiva manifestamos inequívocamente otorgarle poder especial al abogado TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS en los siguientes términos:

Cartagena de indias D.T. y C, 13 de julio del 2021.

Señor(a)
JUEZ TERCERO CIVIL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E.S.D

REF. PODER

Asunto.

OMILDRE DEL SOCORRO PÁJARO CARDENAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 45.437.509 de Cartagena, mediante el presente escrito acudo ante usted, con en el fin de manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS, mayor de edad, residente en la ciudad de Cartagena, identificado con cédula de ciudadanía N°1.143.359.337 de Cartagena, abogado titulado e inscrito con la Tarjeta Profesional N°271.091 del Consejo superior de la Judicatura, con el fin de ser representada dentro del proceso EJECUTIVO con radicado 13001-40-03-003-2006-00677-00 del Juzgado Tercero Civil de Ejecución de Cartagena, en el que figuró como demandada.

El apoderado queda expresamente facultado para recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir y reasumir el presente mandato, interponer recursos, solicitar y aportar pruebas, así como recibir títulos judiciales celebrar acuerdos con la parte demandante y dar por terminado el proceso, y, en fin, ejercer la defensa necesaria de mis intereses.

Atentamente,

OMILDRE DEL SOCORRO PÁJARO CARDENAS
45.437.509 de Cartagena

TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS
C.C. 1.143.359.337 de Cartagena.
T.P N° 271.091 del C.S.de la J.

22/7/2021

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena - Outlook

30

003-2006-677

Envío Despacho Comisorio No Covid-19-2445 de fecha 24 de noviembre del 2020

LWOODBINE <mardanna35@gmail.com>

Mié 21/07/2021 8:32 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Documento 7.pdf;

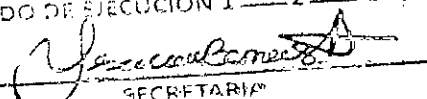
Hola buenas noches

Cordial saludo

Envío Despacho Comisorio No Covid-19 2445 de fecha 24 de noviembre de 2020

M.D.
3EJE



OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA 26-07-2021
MEMORIAL ☒ EXPEDIENTE ☐
JUZGADO DE EJECUCION 1° ☐ 2° ☐ 3° ☒

SECRETARIA



Cartagena de Indias D.T y C. 06 de julio del 2021

ALCALDIA LOCAL DE LA CIENEGA DE LA VIRGEN Y TURISTICA

Señores

JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL

Dir.: Calle del cuartel, edificio Cuartel del fijo

Correo: cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: **SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE-DESPACHO COMISORIO N° COVID-19-2445 de fecha 24 de noviembre del 2020**
Rad: No. 13001-31-03-003-2006-00677-00
Demandante: **ARGELIA JULIO ORTEGA**
Demandado: **OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS**

Asunto: REMISION AL COMITENTE.

Esta Alcaldía Local Localidad De La Virgen y Turística, se dirige a su digno despacho para informar y dejar constancia que se cumplió con **DESPACHO COMISORIO No. Covid19-2445/2020** Por lo anterior, en constancia de cumplimiento, nos permitimos aportar los siguientes documentos:

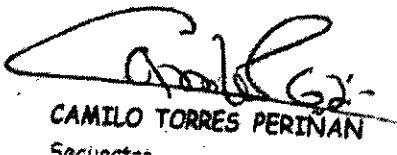
1. Acta que contiene practica de diligencia de embargo de bien inmueble realizada el día **01 DE JULIO DEL 2021**

Con suma cortesía


INGRID DEL CARMEN ROJAS DIAZ
Asesora Jurídica

Alcalde de la Localidad de la Virgen y turística

Virgen y Turística


CAMILO TORRES PERINAN
Secretario



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

DESPACHO COMISORIO No. COVID19-2445

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGENA, BOLIVAR.

ALCALDE DE LA LOCALIDAD 3 "INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA"

ACCIÓN	PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
RADICADO	13-001-40-03-003-2006-00677-00
DEMANDANTE	ARGELIA JULIO ORTEGA CC. 45.498.954
DEMANDADO	OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS CC. 45.437.509

JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, Cartagena de Indias, Nueve (09) de Noviembre de dos mil Veinte (2020). Resuelve: **PRIMERO:** (...) **SEGUNDO:** REVOCAR de las funciones al auxiliar de la justicia SERVIEXPRESS MAYOR LTDA y asignar como nuevo auxiliar al GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAJES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, quien puede ser ubicado en la Cra. 3 No. 46 B - 36. Teléfono 3174301257, grupomultigraficas@gmail.com, dentro del presente proceso. Hágase la comunicación por el medio mas expedito **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE** - **LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO - JUEZ**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, Cartagena de Indias, Veintidós (22) de Enero de dos mil Veinte (2020). Resuelve: **PRIMERO:** Decrétese el secuestro de la cuota parte (225 m2 restante) del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 060-217288 de propiedad del demandado OMILDRE DEL SOCORRO PAJARO CARDENAS Ubicado en el barrio Sevilla calle 31 C #64 - 73, esto es, La Localidad 3, "Industrial y de la Bahía" (...) **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE** - **LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO - JUEZ**

Se anexa los insertos del caso:

- Auto decreta embargo, secuestro
- Certificados - Copia de esta providencia
- Certificado de Libertad y Tradición

Atentamente,

SECRETARIO

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Para que usted se sirva diligenciarlo, y devolverlo oportunamente, se libra el presente Despacho Comisorio el Veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil Veinte (2020).

La presente comunicación se publica con firma digital, atendiendo a la necesidad de nuevas estrategias de trabajo, en razón a las contingencias causadas por la pandemia mundial del COVID 19, se deja constancia que la información consignada en esta carta comunicación fue extraída del expediente judicial, y las identificaciones de la suministrada en la demanda. Así mismo que en cumplimiento del artículo 11 del decreto 806 de 4 de junio del 2020, la oficina realizará la notificación de la comunicación, siempre que la dirección electrónica sea de dominio público, o se encuentre suministrada en el expediente. En caso de solicitar alguna corrección de la comunicación, la solicitud deberá ser enviada al correo cserejcmec@cenj.gov.co indicando en el asunto CORRECCION DE OFICIO identificando el número de la comunicación, siempre CORRECCION DE OFICIO N° COVID- 01 y adjuntando el cual se estudiará y será respondido en el turno correspondiente. Es importante anotar que este oficio NO requiere a actualización. Así mismo se le recuerda que OECMC no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente.

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda - piso 2 oficina 212
cserejcmec@cenj.gov.co
Teléfono: 035-6602070
Cartagena - Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2006-00677-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2006-00677-00
Demandante	FLOR CONTRERAS BUITRAGO
Demandado	OMILDRE DEL SECORRO PAJARO CARDENAS

A folio 42 del cuaderno de ejecución, se advierte memorial presentado por OMILDRE DEL SOCORRO, en calidad de demandada dentro del proceso, a través del cual confiere poder al Dr. TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS, identificado con C.C. No. 1.143.359.337 y T.P. No. 271.091 del C.S. de la J., para que lo represente dentro del proceso judicial de la referencia. Por lo que se le reconocerá personería al Dr. TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS, como apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con el memorial poder conferido.

Por otro lado, solicita copia del expediente para estudio, por lo que se le ordena a la Secretaria de la oficina de apoyo de los juzgados de ejecución de Cartagena enviar copia del presente proceso a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER al Dr. TYRONE LUIS RODRIGUEZ LLAMAS, identificado con C.C. No. 1.143.359.337 y T.P. No. 271.091 del C.S de la J., como apoderado judicial de la parte OMILDRE DEL SOCORRO, de conformidad con el memorial poder conferido.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaria de la oficina de apoyo de los juzgados de ejecución de Cartagena enviar copia del presente proceso a la parte demandada.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-03-2009-01106-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	HIPOTECARIO
Radicado	13001-43-03-003-2009-01106-00
Demandante	BANCOLOMBIA S.A
Demandado	LUIS PACINI
Asunto	Da traslado del avalúo.

El apoderado judicial de la parte demandante mediante escrito que antecede aporta avalúo catastral a fin que se dé traslado del avalúo del inmueble embargado y secuestrado dentro del presente proceso, y para tales efectos allega avalúo **catastral** del inmueble embargado dentro del sub exámine.

El artículo 444 del C.G.P. establece: "(...) *Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo (...)*"

Ahora bien, revisado el expediente se considera que se ha cumplido con los requisitos contemplados por la normatividad en cita, para que sea procedente ordenar dar traslado del avalúo CATASTRAL, tal como se observa en la siguiente tabla:

Requisitos	Sí	No	Folio
Auto decreta embargo.	X		91 C.P
Medida inscrita	X		93 C.P
Auto decreta secuestro.	X		330 C.P
Despacho comisorio diligenciado.	X		339--340 C.E
Aporta avalúo catastral/impuesto rodamiento.	X		35C.E
Aporta avalúo comercial		X	
Queda pendiente por resolver nulidad, recurso, etc?		X	
Hay acreedor prendario/hipotecario?			
Fue citado acreedor hipotecario/prendario?			

De conformidad con lo anterior, considera el despacho procedente ordenar que se de traslado del avalúo presentado para efectos de que pueda ser objetado, modificado o aclarado. En mérito de lo expuesto el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: El avalúo Catastral del inmueble de Matrícula Inmobiliaria con F.M.I 060-31490 embargado y secuestrado dentro del proceso de la referencia, es el siguiente:



AVALUO CATASTRAL----- \$518.659.000

INCREMENTO DEL 50%----- \$259.329.500

TOTAL AVALÚO----- \$777.988.500

SEGUNDO: Córrase traslado del avalúo a las partes por un término de tres (03) días.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNELES DORADO

JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-003-2011-01054-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-003-2011-01054-00
Demandante	AMAUARYS TEHERAN LOPEZ
Demandado	FREDYS ARROYO MANJARREZ
Asunto	ALLEGAR RELACIÓN

Teniendo en cuenta lo indicado por el apoderado judicial, ésta autoridad ordenará a la secretaría allegar relación de depósitos judiciales y oficiará al cajero pagador a fin de que indique y aclare el radicado del proceso al que ha efectuado los descuentos del demandado. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN ÚNICA: ORDENAR a la secretaría de apoyo área de títulos allegar relación de los depósitos judiciales y oficiará al cajero pagador a fin de que indique y aclare el radicado del proceso al que ha efectuado los descuentos del demandado por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

22

M.B
3

RV: proceso 084- 2013

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 27/05/2021 11:14 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (114 KB)
JUZGADO 3 EJECUCION ACLARACION.pdf;

De: zuny margarita badel coronel <zunybadel@hotmail.com>
Enviado: jueves, 27 de mayo de 2021 10:59
Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: proceso 084- 2013

Buenos días, se le solicita al juzgado s le de tramite al memorial presentado, ya que desde octubre 13 del año pasado, se esta en espera de respuesta por parte del juzagdo, para asi seguir con el tramite del proceso, y se han presentado mas de 3 memoriales en el mismo sentido y no se han tramitado.

Zuny badel

cc: J03
cc: J03
Para: J
cc: J03
cc: J03

cc: J03
cc: J03
Para: J
cc: J03
cc: J03

cc: J03
cc: J03
Para: J
cc: J03
cc: J03

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
FECHA: 27-05-2021
FIRMA: *[Signature]*

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA 01-06-21
MEMORIAL X EXPEDIENTE
JUZGADO DE EJECUCION 1° 2° 3°
SECRETARIA *[Signature]* 27/05/21

Señor:

JUEZ TERCERO CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA
Ciudad.

**REFERENCIA: Proceso ejecutivo hipotecario de STEFAN SCHMIDLEINER Y
LUZ MARINA LOPEZ CONTRA RODOLFO FIGUEROA Y OTROS.**

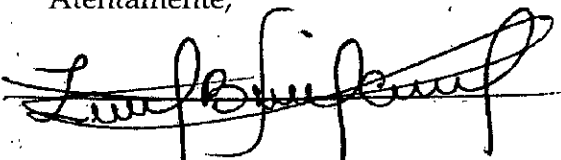
RADICADO No. 084 - 2013.

JUZGADO DE ORIGEN: Tercero civil municipal.

ZUNY MARGARITA BADEL CORONEL, apoderada judicial de la parte demandante, a usted con todo respeto, mediante el presente escrito, me permito solicitar a este Juzgado, aclarar la diligencia de secuestro decretada por este Despacho en auto anterior, ya que a este Juzgado llego por acumulación de procesos, del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Turbaco, proceso adelantado por mi mandante señor **JOSE BOTERO SALAZAR**, quien ya realizo dicha diligencia de secuestro del bien inmueble del proceso de la referencia; por lo tanto no se debería volver a secuestrar un bien que ya ha sido secuestrado; y en caso de que el Juzgado indique que se debe volver a secuestrar, a que parte de los demandantes le tocaría hacerlo, ya que además de la demanda acumulada de Turbaco, también se acumulo en el mismo expediente la demanda ejecutiva de la señora **LUZ MARINA LOPEZ**, por lo cual solicito con todo respeto a este despacho aclarar tal situación, y así tener la claridad al respecto y seguir con el trámite correcto del proceso de la referencia.

Sírvase proceder de conformidad.

Atentamente,



ZUNY MARGARITA BADEL CORONEL.

C.C. 45.766.586 de Cartagena

T.P. 106.772 del C. S. de la J.

RV: RADICADO 084- 2013

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 6/07/2021 7:43 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (114 KB)

SOLICITUD TRASLADO AVALUO JUZGADO 3 EJECUCION.pdf;

103-283

De: zuny margarita badel coronel <zunybadel@hotmail.com>

Enviado: viernes, 2 de julio de 2021 13:19

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RADICADO 084- 2013

Recibido
06-07-2023

z Señor:

JUEZ TERCERO CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA
Ciudad.

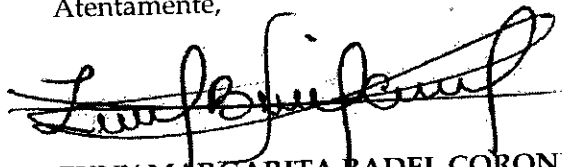
**REFERENCIA: Proceso ejecutivo hipotecario de STEFAN SCHMIDLEINER Y LUZ
MARINA LOPEZ CONTRA RODOLFO FIGUEROA Y OTROS.**

RADICADO No. 084 - 2013.
JUZGADO DE ORIGEN: Tercero civil municipal.

ZUNY MARGARITA BADEL CORONEL, apoderada judicial de la parte demandante, a usted con todo respeto, mediante el presente escrito, me permito solicitar al despacho; se proceda a dar traslado al avalúo del bien inmueble, el cual fue presentado en su oportunidad el día 5 de noviembre del 2019; por la parte demandante **LUZ MARINA LOPEZ**, y si no es objetado, se proceda a su aprobación; ya que sería el trámite pendiente, después de haber; sido aclarado, por este Despacho, la situación del secuestro del bien inmueble del proceso de la referencia.

Sírvase proceder de conformidad.

Atentamente,



ZUNY MARGARITA BADEL CORONEL.

C.C. 45.766.586 de Cartagena
T.P. 106.772 del C. S. de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-003-2013-00084-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	Singular
Radicado	13001-43-03-003-2013-00084-00
Demandante	STEFAN SCMDILETINER
Demandado	MARINA LOPEZ MARTINEZ
Asunto	Requiere actualización avalúo y Oficia al Igac.

El expediente de la referencia ingresa al Despacho a fin de resolver la solicitud sobre fijación de fecha para llevar a cabo la diligencia de remate.

Haciendo una revisión del mismo se encuentra que el avalúo obrante en el expediente data de fecha 01 de Noviembre de 2019 visible a folio 134 del C.P.

Frente a la necesidad de la actualización del avalúo se ha dicho ampliamente que es necesario que el valor del inmueble corresponda a lo real al momento de llevar a cabo la diligencia, es así como se ha afirmado en Sentencia T-016-2009:

“Al fijar fecha para llevar a cabo la diligencia de remate, el juez de conocimiento no advirtió la necesidad de actualizar los avalúos de inmuebles aprobados en el año 2001, por lo cual, “si dicha diligencia llega a realizarse, se estarían vulnerando nuestros derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad, ya que el juez de conocimiento modificó y aprobó la liquidación del crédito, actualizando su valor a la fecha, situación que se encuentra dentro del marco legal, pero con ello solo garantizó los derechos e intereses del acreedor, y es claro, que en este y en todos los procesos judiciales, al juez le asiste el deber de asegurar la protección de los derechos de las partes, independientemente de la calidad en que se actúa dentro del proceso (...).” “el Juzgado reitera los argumentos dados en dicho momento, es decir, que la diligencia de remate debe ser lo más acorde y coherente con el valor real comercial del inmueble, dado que los incrementos sufridos por el paso del tiempo no pueden ser despreciados por el Juzgado, especialmente cuando benefician a la parte pasiva o ejecutada”. Por lo anterior, se requerirá a las partes a fin de que alleguen avalúo de conformidad al artículo 444 del C.G.P, debidamente actualizado.

Así mismo, se observa que la parte demandante aporta liquidación adicional del crédito por lo que de conformidad al artículo 446 del C.G.P se ordenará fijar en lista la misma a través de la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución. De conformidad a lo anterior, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: No acceder a fijar fecha para llevar a cabo diligencia de remate por lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO: OFICIAR al IGAC para que a costas de la parte interesada, a la mayor brevedad, expida el certificado de avalúo catastral del inmueble identificado con



Radicado No. 13001-43-03-003-2013-00084-00

F.M.I No 060-168766, materia de este proceso, para los efectos indicados en el artículo 444 del CGP. Elabórese el oficio correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

RAD. 255/2013 IMPULSO PROCESAL

J_Orlando oficina de abogado <jorlandoabogados@hotmail.com>

Mar 6/07/2021 3:39 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (211 KB)

RAD. 255-2013 IMPULSO PROCESAL JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ.pdf;

Buenos días.

**JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
ORIGEN JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**

Mediante la presente envío IMPULSO PROCESAL del siguiente proceso en formato PDF;

Referencia: Ejecutivo Singular

Demandante: Banco de Bogotá

Demandado: Jose Luis Naranjo Martinez

Rad: 13001400300320130025500

CORREO BANCO DE BOGOTA: rjudicial@bancodebogota.com.co

Agradeciendo toda su atención.

Atentamente,

GERALDINE ALVAREZ GONZALEZ

Oficina del Dr. Jaime Orlando Cario.

Marbella Carrera 3 No. 46 - 51 Oficina 1104

Cartagena (Bolívar)



JAIME A. ORLANDO CANO
ABOGADO

29

Cartagena, junio de 2021

SEÑOR (A)

JUEZ ~~tercero~~ DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
ORIGEN: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E.S.D.

Referencia: Proceso Ejecutivo Singular
Demandante: Banco de Bogotá
Demandado: José Luis Naranjo Martínez
Rad: 13001-40-03-003-2013-00255-00

ASUNTO: IMPULSO PROCESAL

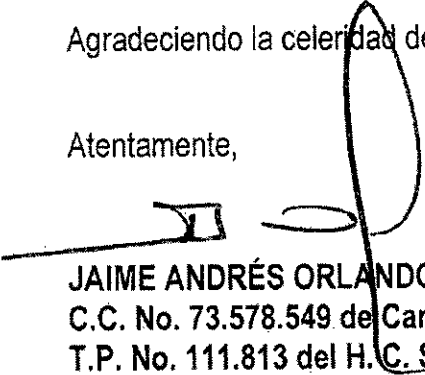
JAIME A. ORLANDO CANO, actuando como apoderado especial de la parte demandante, con mi usual cortesía por medio del presente escrito concurre a su despacho a fin de **SOLICITAR IMPULSO PROCESAL** al proceso de la referencia teniendo en cuenta que el día **21 DE OCTUBRE DE 2020** se radico memorial donde se solicita se actualicen los oficios a fin de que se lleve a cabo la medida de embargo de inmueble de cuota parte con FMI No.018-92155, pero hasta la fecha no se le ha dado trámite correspondiente.

Se reciben notificaciones en los siguientes correos:

Oficina apoderado: jorlandoabogados@hotmail.com,
Apoderado: Jaime Orlando- jaimeorlando76@hotmail.com
Banco de Bogotá: Sara Milena Cuestas- rjudicial@bancodebogota.com.co

Agradeciendo la celeridad del caso,

Atentamente,


JAIME ANDRÉS ORLANDO CANO.
C.C. No. 73.578.549 de Cartagena.
T.P. No. 111.813 del H. C. S. De la J.

MM

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2013-00255-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2013-00255-00
Demandante	BANCO DE BOGOTA
Demandado	JOSE LUIS NARANJO MARTINEZ
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a elaborar nuevos oficios de embargo del bien.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 18 de noviembre de 2019 el cual ordena el embargo de la cuota a parte del bien inmueble con FMI N°018-92155 de propiedad del demandado. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 18 de noviembre de 2019.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 18 de noviembre de 2019.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ACTUALIZADA

Tatiana Urbina <abogadacolp@velezbenedetti.com>

Vie 9/07/2021 2:38 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (165 KB)

MEMORIAL LIQ. CREDITO ACT - DISTRIBUCIONES ALEAN.pdf;

REF: PROCESO EJECUTIVO**DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA S.A.****DEMANDANDO: DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S – DALILA ALEAN****RAD. 13001400300320150002000****ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO****APODERADO: ERNESTO VELEZ BENEDETTI**

Cordialmente,

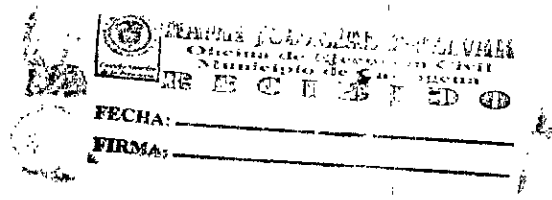
Tatiana Urbina

COMPAÑIA DE RECAUDO CORI S.A.S

Tel: 6640140

Cel. 3017264992

Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo

**CORI SAS****VELEZ BENEDETTI**
ABOGADOS&CONSULTORES

09 JULIO 2021

ERNESTO VELEZ BENEDETTI
ABOGADO
Edif. Bco Popular Piso 13 Of. 13-02 Tel: 6640140 – 6642144
Cartagena Col.

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL (JUZGADO DE ORIGEN)
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL (JUZGADO DE ORIGEN)

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA
DEMANDADO: DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S – DALILA ALEAN
RAD. 13001400300320150002000

ERNESTO VELEZ BENEDETTI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.947.585 y T.P. No. 117.726 del C.S. de la J., actuando como apoderado de BANCO COLPATRIA dentro del proceso de la referencia, acudo a usted respetuosamente con el fin de aportar al proceso la liquidación actualizada del crédito. Sírvasse darle el trámite legal.

Del señor Juez,



ERNESTO VELEZ BENEDETTI
C.C.79.947.585 de Bogotá
T.P. 117.726 del C.S.J.

CREDITO No.		8621000544
TITULAR:		DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S - DALILA ALEAN
FECHA LIQUIDACION:		09/07/2021
CAPITAL		
CAPITAL EN PESOS		\$2,086,459
INTERES CTE		
INTERESES		
FECHA INICIACION MORA		29/08/2014
FECHA DE LIQUIDACION		09/07/2021
DIAS EN MORA		2,506
TASA DE INTERES		28%
INTERESES		\$4,066,740.42
SEGUROS		
TOTAL LIQUIDACION		\$6,153,199.42

CREDITO No.		15801405
TITULAR:		DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S - DALILA ALEAN
FECHA LIQUIDACION:		09/07/2021
CAPITAL		
CAPITAL EN PESOS	\$35,181,036	
INTERES CTE		
INTERESES		
FECHA INICIACION MORA	06/10/2014	
FECHA DE LIQUIDACION	09/07/2021	
DIAS EN MORA	2,468	
TASA DE INTERES	28%	
INTERESES	\$67,531,953.10	
SEGUROS		
TOTAL LIQUIDACION		\$102,712,989.10

CREDITO No.		5474790000129421
TITULAR:		DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S - DALILA ALEAN
FECHA LIQUIDACION:		09/07/2021
CAPITAL		
CAPITAL EN PESOS	\$1,564,779	
INTERES CTE		
INTERESES		
FECHA INICIACION MORA	17/09/2014	
FECHA DE LIQUIDACION	09/07/2021	
DIAS EN MORA	2,487	
TASA DE INTERES	28%	
INTERESES	\$3,026,804.18	
SEGUROS		
TOTAL LIQUIDACION		\$4,591,583.18

11

CREDITO No.		4546010000190704
TITULAR:		DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S - DALILA ALEAN
FECHA LIQUIDACION:		09/07/2021
CAPITAL		
CAPITAL EN PESOS	1342976	
INTERES CTE		
INTERESES		
FECHA INICIACION MORA	29/09/2014	
FECHA DE LIQUIDACION	09/07/2021	
DIAS EN MORA	2,475	
TASA DE INTERES	28%	
INTERESES	\$2,585,228.80	
SEGUROS		
TOTAL LIQUIDACION		\$3,928,204.80
OFICINA DE APOYO JUZGADOS EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL TRASLADO (Art. 110 CGP) FECHA DE 19-16-MES-01-AÑO 2021 FECHA DE 22-01-MES-01-AÑO 2021		

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-00020-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-003-2015-00020-00
DEMANDANTE	BANCO COLPATRIA S.A
DEMANDADO	DISTRIBUCIONES ALEAN S.A.S
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **ciento diecisiete millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos con 05/100 (\$117.385.976,5)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación ACTUALIZADA del crédito	\$117.385.976,5
Liquidación de costas	\$4.891.166

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-00708-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2015-00708-00
Demandante	COOPERATIVA INTEGRAL DE BOLIVAR
Demandado	OLIVIA MARSIGLIA BONFANTE

Se advierte memorial por parte del apoderado de la parte demandante solicitando corrección de oficio frente a la cedula de ciudadanía de la demandada OLIVIA MARSIGLIA BONFANTE manifestando que no es el mismo mencionando en memorial presentado el de 3 mayo de 2021. Sin embargo se realiza revisión y en el memorial en mención no se encuentra cedula escrita de la parte demandada, y además dentro del libelo se encuentra la cc N° 3.808.425. por lo que en el oficio enviado se encuentra la cedula correcta. Por lo que no se accede a lo solicitado hasta que aclare la parte demandante sobre la cedula de la demandada OLIVIA MARSIGLIA BONFANTE.

Por otro lado, se observa manifestación por parte del cajero/pagador de SEGUROS ALFA por lo que se pone en conocimiento a la parte demandante visto a folio 46 del ce.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMEO: NO SE ACCEDE a lo solicitado de la parte demandante hasta tanto aclare la cedula de la parte demandada OLIVIA MARSIGLIA BONFANTE.

SEGUNDO: PONER EN CONOCIMEINTO a la parte demandante lo manifestado por el cajero/pagador SEGUROS ALFA visto a folio 46CE.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-00708-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

fd1fa8bccedd5134cb8ceb4031c36739761219603238bdcd944610aaa1ae89a0

Documento generado en 02/08/2021 08:00:57 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-00972-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2015-00972-00
Demandante	CONSTRUCTORA VALDEZ EU
Demandado	MANUEL FLOREZ SARABIA

A folio 22 del cuaderno de ejecución, se advierte memorial presentado por el demandado MANUEL FLOREZ SARABIA, a través del cual confiere poder especial, amplio y suficiente a EDGARDO HERRERA MUÑOZ con CC N° 73.108.257 y T.P. 8594 del C.S. de la J.

Con relación a lo anterior, considera esta Despacho reconocer personería jurídica al Dr. EDGARDO HERRERA MUÑOZ con CC N° 73.108.257 y T.P. 8594 del C.S. de la J. el cual se entenderá como apoderado del mismo, teniendo en cuenta lo preceptuado en artículo 75 del C.G.P.

Por otro lado, solicita que se le envía copia de presente proceso, por cuanto se le ordena a la secretaria realizar copia del proceso a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER a la al Dr. EDGARDO HERRERA MUÑOZ con CC N° 73.108.257 y T.P. 8594 del C.S. de la J. el cual se entenderá como apoderado de la parte demandada, de conformidad con lo preceptuado en artículo 75 del C.G.P y del poder conferido.

SEGUNDO: ORDENAR a la secretaria realizar copia del proceso y enviarlo a la parte demandada.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-00972-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7b2b7f34d395127bb65111ae152cc34b5b131cae7bda03ebd273ecfac1382e07

Documento generado en 02/08/2021 08:00:59 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL PROCESO

Tatiana Urbina <abogadacolp@velezbenedetti.com>

Jue 24/06/2021 2:39 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (70 KB)

Suspensión del proceso - ARLEY PEREZ 2021.pdf;

703-092.95

Buen día, cordial saludo, se anexa memorial del siguiente proceso:

REF: PROCESO EJECUTIVO**DEMANDANTE: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. "HITOS"****DEMANDANDO: ARLEY PEREZ****RAD. 13001400300320150102200****ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL PROCESO****APODERADO: ERNESTO VELEZ BENEDETTI**

Cordialmente,

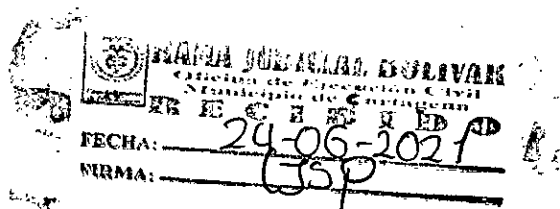
Tatiana Urbina

COMPAÑIA DE RECAUDO CORI S.A.S

Tel: 6640140

Cel. 3017264992

Considere el medio ambiente antes de imprimir este correo

**CORI SAS****VELEZ BENEDETTI**
ABOGADOS & CONSULTORES

24 JUNIO 2021

ERNESTO VELEZ BENEDETTI
ABOGADO

Edif. Bco. Popular Piso 13 Of. 13-02 Tel: 6640140 – 6642144
Cartagena Col.

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

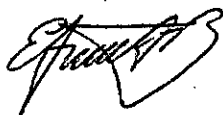
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. "HITOS"
DEMANDANDO: ARLEY PEREZ

RAD. 13001400300320150102200

ERNESTO VELEZ BENEDETTI, con **T.P. No. 117.726** del C.S. de la J., conocido de autos dentro del asunto de la referencia, actuando en mi condición de apoderado de **TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. "HITOS"**, por medio del presente escrito acudo a usted respetuosamente con el fin de informarle que de mutuo acuerdo las partes hemos decidido **SUSPENDER** el proceso por el termino de seis meses.

De usted atentamente,



ERNESTO CARLOS VELEZ BENEDETTI
C.C. No. 79.947.585 de Bogotá
T.P.No.117.726 del C.S de la J

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-003-2015-01022-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-003-2015-01022-00
Demandante	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A
Demandado	ARLEY PEREZ
Asunto	SUSPENSION DEL PROCESO

En escrito presentado la partes allegan solicitud de suspensión del proceso por el término de 06 meses contados a partir del 24 de Junio de 2021

El artículo 161 del C. G. del P., dispone: *"El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos: ..2). Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa."*

Si bien la norma transcrita precisa que la solicitud de suspensión del proceso debe elevarse antes de la sentencia, en el entendido de que ésta coloca fin al proceso, y por ello no hay lugar a suspensión, debe advertirse, que en el presente asunto resulta oportuno la misma, pues el proceso ejecutivo no finaliza con el auto que ordena seguir adelante la ejecución, sino con el pago total de la obligación, por lo que el equivalente aquella decisión sería el auto que ordena la terminación del mismo.

Según la solicitud de suspensión se tiene que las partes acuerdan lo siguiente:

1. La parte demandante, a través de su apoderada judicial solicita la suspensión del proceso por el término de seis (06) meses

Teniendo en cuenta la voluntad expresada por las partes, se va a suspender el proceso hasta por el término de 06 meses, contados desde 24 de Junio de 2021 y hasta el 24 de Diciembre de 2021, de conformidad a lo solicitado. Por todo lo anterior, el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal,

RESUELVE,

PRIMERO: Decretar la suspensión del proceso ejecutivo que inició TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A contra ARLEY PEREZ

SEGUNDO: La suspensión del proceso será por el término de 06 MESES, los cuales se cumplen el 24 DE DICIEMBRE DE 2021, de conformidad a lo solicitado por las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-003-2015-01022-00

53,28 folios.

46

Caja
digitalizada
16-07-21

SOLICITUD TERMINACION . JOSE FERNANDO ZAPATA LUNA y KATHERINE ZAPATA GAZABON.- -13001-40-03-003- 2015-01036-00

abogadabancol@velezbenedetti.com <abogadabancol@velezbenedetti.com>

Lun 19/07/2021 11:15 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (143 KB)

Terminacion por Pago total Jose F Zapata.pdf;

BUENOS DIAS

CORDIAL SALUDO

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Ref.: Proceso Ejecutivo Mixto ADELANTADO POR BANCOLOMBIA S.A. contra
JOSE FERNANDO ZAPATA LUNA y KATHERINE ZAPATA GAZABON.-

RAD:13001-40-03-003- 2015-01036-00
APODERADO ERNESTO VELEZ BENEDETTI

19-07-21
cesv

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E.

S.

D.

Ref.: Proceso Ejecutivo Mixto ADELANTADO POR BANCOLOMBIA S.A. contra JOSE FERNANDO ZAPATA LUNA y KATHERINE ZAPATA GAZABON.-

RAD:13001-40-03- 2015-01036-00

ERNESTO VELEZ BENEDETTI identificado con C.C. No.79.947.585 de Bogotá, con tarjeta profesional No.117.726 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de REINTEGRA SAS y JOSE FERNANDO ZAPATA LUNA, Varón, mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con la C.C No.73.113.974 y KATHERINE ZAPATA GAZABON, Mujer, mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad, identificada con la C.C No.1.047.439.654 demandados dentro del proceso de la referencia acudimos a usted de común acuerdo con el fin de solicitar:

1. Dar por terminador el proceso por pago TOTAL de las obligaciones.
2. Ordenar el desembargo de los bienes embargados dentro del proceso.
3. Entregar los títulos dentro del proceso al demandante

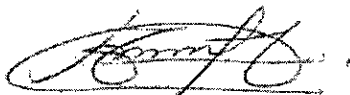
Del señor Juez, Atentamente,



ERNESTO VELEZ BENEDETTI

C.C. No.79.947.585 de Bogotá

T.P. No. 117.726 del C.S. de la J



JOSE FERNANDO ZAPATA LUNA,

C.C No.73.113.974



KATHERINE ZAPATA GAZABON

C.C No.1.047.439.654

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2015-01036-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-003-2015-01036-00
Demandante	BANCOLOMBIA S.A
Demandado	JOSE FERNANDO ZAPATA Y LUNA Y KATERINE ZAPATA GAZABON
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante su apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el apoderado judicial de la parte demandante con facultad para recibir tal como consta a folio 10 del c.p . Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello.



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

Juez

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2016-01043-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2016-01043-00
Demandante	JHOVANY MARTINEZ CASAS
Demandado	MARGARITA LÓPEZ RODRIGUEZ
Asunto	Agregar al expediente.

Se observa constancia de oficios remitidos por la oficina de apoyo de los Juzgados de ejecución al cajero pagador del sub examine.

Por lo expuesto, se agrega al expediente a fin de esperar el término otorgado por el Despacho a fin de tomar las medidas que se consideren pertinentes. En virtud, de lo anterior el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN ÚNICA: AGREGAR al expediente la constancia remitida de los oficios al cajero pagador por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2017-00136-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2017-00136-00
Demandante	COOPSERP
Demandado	SHIRLEY PRADA BERMUDEZ
Asunto	Medida cautelar

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el que solicita requerir al cajero pagador de la SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CARTAGENA, para que explique las razones por las cuáles no ha cumplido la orden de embargo de lo que devengue el demandado SHIRLEY PRADA BERMUDEZ como empleado de SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CARTAGENA.

Revisado el expediente, observa el Despacho que a través de auto de fecha 24 de julio de 2017 proferido por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples de Cartagena, se decretó el embargo del 35% de la mesada y demás factores salariales que perciba SHIRLEY PRADA BERMUDEZ, identificada con C.C N° 45.754.921 como pensionado de SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CARTAGENA, asimismo, se observa que dicha medida fue comunicada mediante Oficio, sin pronunciamiento alguno por parte del requerido.

Teniendo en cuenta lo antecedido, se ordenará requerir al cajero pagador de las empresas en mencion , a fin de que informe las razones por las cuales no ha seguido efectuando los descuentos ordenados en auto de fecha 24 de julio de 2017.

Por otro lado, solicita el embargo de parte de las cesantías que devengue la demandada SHIRLEY PRADA BERMUDEZ que registra en el SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA. Teniendo en cuenta lo anterior se accede a lo requerido.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2017-00136-00

SEGUNDO: Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador, de la SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CARTAGENA, a fin de que explique las razones por las cuales no ha realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 24 de julio de 2017 por medio del cual se decretó el embargo del 35% de la mesada y demas factores salariales que perciba SHIRLEY PRADA BERMUDEZ, identificada con C.C N° 45.754.921 como pensionado de SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CARTAGENA

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.

CUARTO: Prevengase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P.

QUINTO: Decretar el embargo y secuestro del 30% de las cesantías y demás emolumentos legalmente embargables que tenga consignados los demandados SHIRLEY PRADA BERMUDEZ con CC N°45.754.921 en calidad de titular de las cesantías que tiene consignadas en la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA.

Limitese la cuantía en la suma de \$13.946.968 pesos.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2017-00136-00

Código de verificación: b1fe2d809731d054dcde803f04719707afac0140d68a66a10e2972b01bd402a9

Documento generado en 02/08/2021 08:01:01 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2017-00424-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-003-2017-00424-00
DEMANDANTE	LUIS WATTS PAJARO
DEMANDADO	JORGE MARTINEZ MONTERROSA
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **ciento sesenta y ocho millones seiscientos veintiún mil setecientos setenta y cinco pesos (\$168.621.775)**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

**Re: IMPULSO PROCESAL PROCESO EJECUTIVO DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CONTRA: JULIO CESAR GUARDO BARRIOS RADICACION: 130014003003-20170015000**

Ms Ivonne Linero <ivonnelinero@yahoo.com>

Vie 2/07/2021 11:46 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos Días

PC-303-01.

Cordial Saludo,

Damos respuesta a su solicitud el Radicado correcto es **130014003003-20180015000** les agradecemos se nos corrija el error.

Atentamente,

130014003003-20180015000

OFICINA DRA. IVONNE LINERO

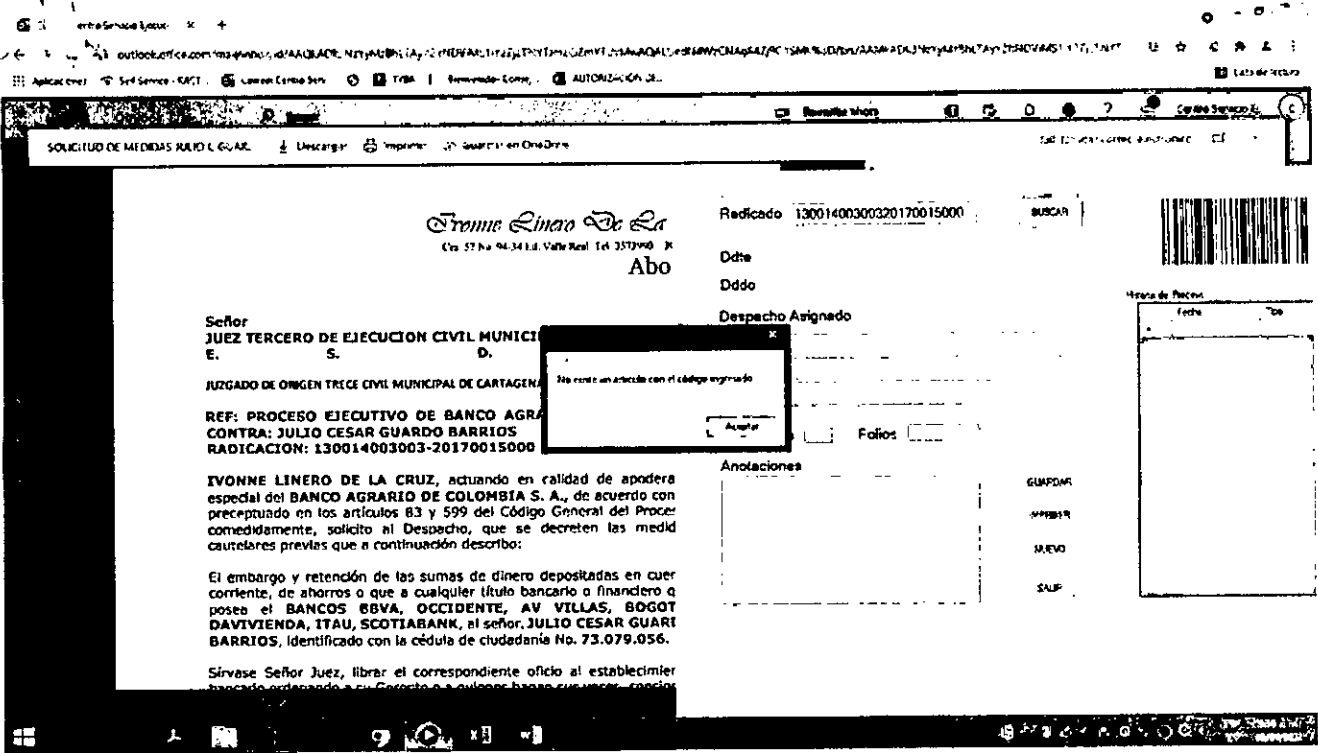
El viernes, 2 de julio de 2021, 09:58:29 a. m. COT, Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

Cartagena 02 DE JULIO DE 2021

Apreciado Usuario (a)

Revisado la base de datos Justicia XXI de la Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecución, se encuentra que el radicado del proceso relacionado por usted, no existe en la oficina, por favor verifique la identificación.

02-07-21
Sandra Pardo



Atentamente,

SANDRA PAOLA PACHECO BURGOS
Auxiliar Administrativo Grado 5

De: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de julio de 2021 8:28 a. m..
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rv: IMPULSO PROCESAL PROCESO EJECUTIVO DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONTRA: JULIO CESAR GUARDO BARRIOS RADICACION: 130014003003-20170015000

De: Ms Ivonne Linero <ivonnelineiro@yahoo.com>
Enviado: jueves, 1 de julio de 2021 9:50
Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: IMPULSO PROCESAL PROCESO EJECUTIVO DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONTRA: JULIO CESAR GUARDO BARRIOS RADICACION: 130014003003-20170015000

Buenos Días

Por medio de la presente, en archivo adjunto remitimos impulso procesal con solicitud de medidas de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONTRA: JULIO CESAR GUARDO BARRIOS RADICACION: 130014003003-20170015000.

Atentamente,

OFICINA DRA. IVONNE LINERO

46

9

Ivonne Linero De La Cruz

Cra. 57 No. 94-34 Ed. Valle Real. Tel: 3573990 – 300 8000867

Abogada

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E.

S.

D.

JUZGADO DE ORIGEN TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

REF: PROCESO EJECUTIVO DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

CONTRA: JULIO CESAR GUARDO BARRIOS

RADICACION: 130014003003-20170015000

IVONNE LINERO DE LA CRUZ, actuando en calidad de apoderada especial del **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.**, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 83 y 599 del Código General del Proceso, comedidamente, solicito al Despacho, que se decreten las medidas cautelares previas que a continuación describo:

El embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en cuenta corriente, de ahorros o que a cualquier título bancario o financiero que posea el **BANCOS BBVA, OCCIDENTE, AV VILLAS, BOGOTA, DAVIVIENDA, ITAU, SCOTIABANK**, al señor, **JULIO CESAR GUARDO BARRIOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **73.079.056**.

Sírvase Señor Juez, librar el correspondiente oficio al establecimiento bancario ordenando a su Gerente o a quienes hagan sus veces, consignar a órdenes de su despacho, cuenta de depósitos judiciales, las sumas retenidas o las que con posterioridad llegare a existir a favor de **JULIO CESAR GUARDO BARRIOS**.

Barranquilla, 25 de junio del 2021

Del señor Juez, atentamente,



IVONNE LINERO DE LA CRUZ

T. P. 22.417 del C. S. J.

C. C. No. 22.421.755 de B/quilla

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2018-00150-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2018-00150-00
Demandante	BANCO AGRARIO
Demandado	JULIO CESAR GUARDO BARRIOS
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 09 de julio de 2018 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en las diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 09 de julio de 2018.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 09 de julio de 2018.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

RAD. 217-2018 RELIQUIDACION DE CREDITO Y ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES.

Sica Legal <jorlandoabogados@hotmail.com>

Jue 15/07/2021 2:49 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

RAD. 217-2018 RELIQUIDACION DEL CREDITO Y ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES.pdf;

D03-240

Buenas tardes:

**JUZGADO 03 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
ORIGEN - JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**Mediante la presente envío **RELIQUIDACION DE CREDITO Y ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES** del siguiente proceso en formato PDF;

Referencia: Ejecutivo Singular

Demandante: Banco de Bogotá

Demandado: Diana Margarita Martínez Vega

Rad: 13001400300320180021700

Se recibe notificaciones a los siguientes correos electrónicos:

Oficina apoderado: jorlandoabogados@hotmail.comApoderado: jaimeorlando76@hotmail.comBanco de Bogotá: rjudicial@bancodebogota.com.co

Agradeciendo toda su atención.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ORLANDO

Oficina del Dr. Jaime Orlando Cano.

Marbella Carrera 3 No. 46 - 51 Oficina 110

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA 19-07-2021
MEMORIAL X EXPEDIENTE _____
JUZGADO DE EJECUCION 1° _____ 2° _____ 3° X
Jaime Orlando Cano
SECRETARIA

15/07/2021
Norma Poyet



JAIME A. ORLANDO CANO

ABOGADO

Cartagena, Junio del 2021.

SEÑOR (A):

JUEZ(A) TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

ORIGEN JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E.S.D.

Referencia: Proceso Ejecutivo

Demandante: Banco de Bogotá.

Demandado: Diana Margarita Martínez Vega

Radicado: 13001-40-03-003-2018-00217-00

ASUNTO: RELIQUIDACION DEL CREDITO Y ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES

JAIME A ORLANDO CANO, actuando como apoderado especial de la parte demandante por medio del presente escrito, me permito concurrir a su despacho a lo siguiente:

1. Anexo **RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO** del proceso de la referencia de conformidad con el artículo 446 del C.G.P.

De todo lo anterior, fijese en lista la liquidación para que presente las objeciones del caso si así lo dispusiere la parte contraria.

2. solicito la **ENTREGA DE LOS TÍTULOS JUDICIALES** existentes a favor del demandante Banco de Bogotá dentro del presente proceso producto de la retención de dineros de propiedad de la demandada en las diferentes entidades financieras de la ciudad, de conformidad con la medida de embargo decretada por este despacho.

Partes dentro del presente proceso:

Demandante: Banco de Bogotá Nit. No. 860.002.964-4

Demandada: Diana Margarita Martínez Vega CC. 43.254.110

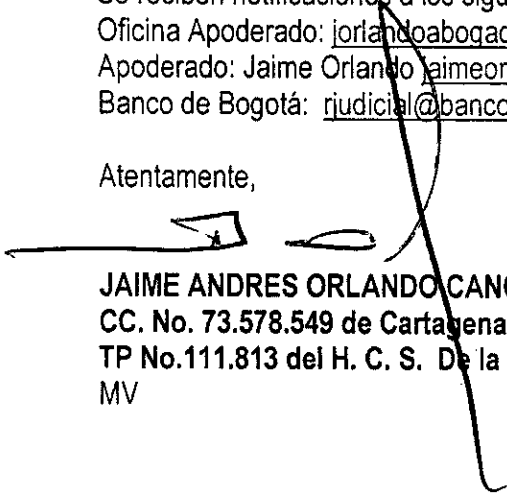
Se reciben notificaciones a los siguientes correos:

Oficina Apoderado: jorlandoabogados@hotmail.com

Apoderado: Jaime Orlando jaimeorlando76@hotmail.com

Banco de Bogotá: rjudicial@bancodebogota.com.co

Atentamente,


JAIME ANDRES ORLANDO CANO

CC. No. 73.578.549 de Cartagena

TP No.111.813 del H. C. S. De la J

MV

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO													
Deudor: DIANA MARGARITA MARTINEZ VEGA		Deudor: 43254110											
Pagara: 355267685													
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>				Para dar aplicación a los Arts. 111 L. 510 y 305 C. P., si no se									
Tasa nominal mensual pactado >>>				pactó tasa de mora, o se pactó la máxima autorizada, estas									
				celdas aparecerán vacías.									
CAPITAL: 13.178.334,00													
VIGENCIA		Brto. Cto.	LÍMITE USURA		TASA		LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO						
DESDE	HASTA	T. Efectiva	Efectiva Anual	Nominal	actada	FINAL	Capital Liquidable	días	Liq Intereses	ABONOS	Saldo Intereses	Saldo de Capital más Intereses	
							13.178.334,00				0,00	13.178.334,00	
							13.178.334,00				0,00	13.178.334,00	
19-feb-19	28-feb-19	19,70%	29,55%	2,18%	0,00%	2,18%	13.178.334,00	12	114.963,27		0,00	13.178.334,00	
1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%	2,15%	0,00%	2,15%	13.178.334,00	30	283.113,03		283.113,03	13.461.447,03	
1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	13.178.334,00	30	282.460,93		565.573,96	13.743.907,96	
1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%	2,15%	0,00%	2,15%	13.178.334,00	30	282.721,81		848.295,78	14.026.629,78	
1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,95%	2,14%	0,00%	2,14%	13.178.334,00	30	282.200,00		1.130.495,78	14.308.829,78	
1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,92%	2,14%	0,00%	2,14%	13.178.334,00	30	281.939,00		1.412.434,78	14.590.768,78	
1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	13.178.334,00	30	282.460,93		1.694.895,71	14.873.225,71	
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	13.178.334,00	30	282.460,93		1.977.356,65	15.155.690,65	
1-oct-19	31-oct-19	18,10%	28,65%	2,12%	0,00%	2,12%	13.178.334,00	30	279.587,57		2.256.944,21	15.435.278,21	
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%	2,11%	0,00%	2,11%	13.178.334,00	30	278.671,90		2.535.616,11	15.713.950,11	
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	13.178.334,00	30	277.100,58		2.812.716,70	15.991.050,70	
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%	2,09%	0,00%	2,09%	13.178.334,00	30	275.264,83		3.087.981,52	16.266.315,52	
1-feb-20	29-feb-20	19,06%	28,59%	2,12%	0,00%	2,12%	13.178.334,00	30	279.064,41		3.367.045,93	16.545.379,93	
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%	2,11%	0,00%	2,11%	13.178.334,00	30	277.624,58		3.644.670,51	16.823.004,51	
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%	2,08%	0,00%	2,08%	13.178.334,00	30	274.214,58		3.918.885,10	17.097.219,10	
1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%	2,03%	0,00%	2,03%	13.178.334,00	30	267.674,07		4.186.559,17	17.364.893,17	
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	13.178.334,00	30	266.705,39		4.453.264,55	17.631.598,55	
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	13.178.334,00	30	266.705,39		4.719.969,94	17.898.303,94	
1-ago-20	31-ago-20	18,29%	27,44%	2,04%	0,00%	2,04%	13.178.334,00	30	268.993,77		4.988.963,71	18.167.297,71	
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%	2,05%	0,00%	2,05%	13.178.334,00	30	269.740,97		5.258.704,67	18.437.038,67	
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%	2,02%	0,00%	2,02%	13.178.334,00	30	266.352,95		5.525.057,62	18.703.391,62	
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%	2,00%	0,00%	2,00%	13.178.334,00	30	262.999,69		5.788.057,31	18.966.391,31	
1-dic-20	31-dic-20	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	13.178.334,00	30	277.144,26		6.065.201,57	19.243.535,57	
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,98%	1,94%	0,00%	1,94%	13.178.334,00	30	256.087,73		6.321.289,30	19.499.623,30	
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%	1,97%	0,00%	1,97%	13.178.334,00	30	259.016,79		6.580.306,09	19.758.640,09	
1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%	1,95%	0,00%	1,95%	13.178.334,00	30	257.331,22		6.837.837,31	20.015.971,31	
1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,87%	1,94%	0,00%	1,94%	13.178.334,00	30	255.954,42		7.093.591,74	20.271.925,74	
SUBTOTALES: >>>>							13.178.334,00	792	7.208.555,01	-	14.302.146,74	20.271.925,74	
							CAPITAL		13.178.334,00				
							INTERESES		7.208.555,01				
							TOTAL: CAPITAL+INTERESES		20.386.889,01				

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO												
Deudor: DIANA MARGARITA MARTINEZ VEGA		Deudor: 43254110										
pagare: 355658879												
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>		Para dar aplicación a los Art. 111 L. 510 y 305 C. P., si no se										
Tasa nominal mensual pactada >>>		pactó tasa de mora, o se pactó la máxima autorizada, estas										
		celdas aparecerán vacías.										
CAPITAL: 3.433.584,00												
VIGENCIA		Brio. Cte.	LÍMITE USURA		TASA		LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO					
DESDE	HASTA	T. Efectiva	Efectiva Anual	Nominal	actada	FINAL	Capital Liquidable	días	Liq Intereses	A B O N O S	Saldo Intereses	Saldo de Capital más Intereses
							3.433.584,00				0,00	3.433.584,00
							3.433.584,00				0,00	3.433.584,00
19-feb-19	28-feb-19	19,70%	29,55%	2,18%	0,00%	2,18%	3.433.584,00	12	29.953,41		0,00	3.433.584,00
1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%	2,15%	0,00%	2,15%	3.433.584,00	30	73.764,44		73.764,44	3.507.348,44
1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,88%	2,14%	0,00%	2,14%	3.433.584,00	30	73.594,53		147.358,97	3.580.942,97
1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%	2,15%	0,00%	2,15%	3.433.584,00	30	73.662,51		221.021,47	3.654.605,47
1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,95%	2,14%	0,00%	2,14%	3.433.584,00	30	73.526,55		294.548,02	3.728.132,02
1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,92%	2,14%	0,00%	2,14%	3.433.584,00	30	73.458,55		368.006,57	3.801.590,57
1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	3.433.584,00	30	73.594,53		441.601,10	3.875.185,10
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	3.433.584,00	30	73.594,53		515.195,63	3.948.779,63
1-oct-19	31-oct-19	18,10%	28,65%	2,12%	0,00%	2,12%	3.433.584,00	30	72.845,88		588.041,52	4.021.825,52
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%	2,11%	0,00%	2,11%	3.433.584,00	30	72.607,31		660.648,83	4.094.232,83
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	3.433.584,00	30	72.197,91		732.846,73	4.166.430,73
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%	2,09%	0,00%	2,09%	3.433.584,00	30	71.719,60		804.566,34	4.238.150,34
1-feb-20	29-feb-20	19,06%	28,59%	2,12%	0,00%	2,12%	3.433.584,00	30	72.709,58		877.275,92	4.310.859,92
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%	2,11%	0,00%	2,11%	3.433.584,00	30	72.334,43		949.610,35	4.383.194,35
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%	2,08%	0,00%	2,08%	3.433.584,00	30	71.445,97		1.021.056,32	4.454.640,32
1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%	2,03%	0,00%	2,03%	3.433.584,00	30	69.741,85		1.090.798,17	4.524.382,17
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	3.433.584,00	30	69.489,46		1.160.287,63	4.593.871,63
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	3.433.584,00	30	69.489,46		1.229.777,09	4.663.361,09
1-ago-20	31-ago-20	18,29%	27,44%	2,04%	0,00%	2,04%	3.433.584,00	30	70.085,70		1.299.862,79	4.733.446,79
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%	2,05%	0,00%	2,05%	3.433.584,00	30	70.280,38		1.370.143,16	4.803.727,16
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%	2,02%	0,00%	2,02%	3.433.584,00	30	69.397,64		1.439.540,80	4.873.124,80
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%	2,00%	0,00%	2,00%	3.433.584,00	30	68.523,95		1.508.064,75	4.941.648,75
1-dic-20	31-dic-20	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	3.433.584,00	30	72.209,29		1.580.274,04	5.013.858,04
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,88%	1,94%	0,00%	1,94%	3.433.584,00	30	66.723,06		1.646.997,09	5.080.581,09
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%	1,97%	0,00%	1,97%	3.433.584,00	30	67.496,22		1.714.483,31	5.148.067,31
1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%	1,95%	0,00%	1,95%	3.433.584,00	30	67.047,05		1.781.530,36	5.215.114,36
1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,97%	1,94%	0,00%	1,94%	3.433.584,00	30	66.688,32		1.848.218,68	5.281.802,68
SUBTOTALES: >>>>							3.433.584,00	792	1.876.172,09	-	3.726.390,77	5.281.802,68
							CAPITAL		3.433.584,00			
							INTERESES		1.876.172,09			
							TOTAL: CAPITAL+INTERESES		5.311.756,09			

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO												
Deudor: DIANA MARGARITA MARTINEZ VEGA			Deudor: 43254110									
pagare: 43254110-2												
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>			Para dar aplicación a los Arts. 111 L. 510 y 308 C. P., si no se pactó tasa de mora, o se pactó la máxima autorizada, estas celdas aparecerán vacías.									
Tasa nominal mensual pactada >>>												
CAPITAL: 19.419.879,00												
VIGENCIA		Brio. Cte.	LÍMITE USURA		TASA		LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO					
DESDE	HASTA	T. Efectiva	Efectiva Anual	Nominal	Pactada	FINAL	Capital Liquidable	días	Liq Intereses	ABONOS	Saldo Intereses	Saldo de Capital más Intereses
							19.419.879,00				0,00	19.419.879,00
							19.419.879,00				0,00	19.419.879,00
19-feb-19	28-feb-19	19,70%	29,55%	2,18%	0,00%	2,18%	19.419.879,00	12	169.412,37		0,00	19.419.879,00
1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%	2,15%	0,00%	2,15%	19.419.879,00	30	417.201,51		417.201,51	19.837.080,51
1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	19.419.879,00	30	416.240,56		833.442,07	20.253.321,07
1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%	2,15%	0,00%	2,15%	19.419.879,00	30	416.625,00		1.250.067,07	20.669.948,07
1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,85%	2,14%	0,00%	2,14%	19.419.879,00	30	415.856,04		1.665.923,11	21.085.802,11
1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,82%	2,14%	0,00%	2,14%	19.419.879,00	30	415.471,44		2.081.394,55	21.501.273,55
1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	19.419.879,00	30	416.240,56		2.497.635,11	21.917.514,11
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	19.419.879,00	30	416.240,56		2.913.875,67	22.333.754,67
1-oct-19	31-oct-19	19,10%	28,65%	2,12%	0,00%	2,12%	19.419.879,00	30	412.006,31		3.325.881,98	22.745.760,98
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%	2,11%	0,00%	2,11%	19.419.879,00	30	410.656,96		3.736.538,94	23.156.417,94
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	19.419.879,00	30	408.341,43		4.144.880,37	23.564.759,37
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%	2,09%	0,00%	2,09%	19.419.879,00	30	405.636,22		4.550.516,59	23.970.395,59
1-feb-20	29-feb-20	19,06%	28,59%	2,12%	0,00%	2,12%	19.419.879,00	30	411.235,37		4.961.751,97	24.381.630,97
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%	2,11%	0,00%	2,11%	19.419.879,00	30	409.113,61		5.370.865,57	24.790.744,57
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%	2,08%	0,00%	2,08%	19.419.879,00	30	404.088,56		5.774.954,14	25.194.833,14
1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%	2,03%	0,00%	2,03%	19.419.879,00	30	394.450,32		6.169.404,45	25.589.283,45
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	19.419.879,00	30	393.022,84		6.562.427,30	25.982.306,30
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	19.419.879,00	30	393.022,84		6.955.450,14	26.375.329,14
1-ago-20	31-ago-20	18,29%	27,44%	2,04%	0,00%	2,04%	19.419.879,00	30	396.396,06		7.351.845,20	26.771.724,20
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%	2,05%	0,00%	2,05%	19.419.879,00	30	397.496,14		7.749.341,34	27.169.220,34
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%	2,02%	0,00%	2,02%	19.419.879,00	30	392.503,46		8.141.844,82	27.561.723,82
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%	2,00%	0,00%	2,00%	19.419.879,00	30	387.562,05		8.529.406,88	27.949.285,88
1-dic-20	31-dic-20	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	19.419.879,00	30	408.405,79		8.937.812,67	28.357.691,67
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,98%	1,94%	0,00%	1,94%	19.419.879,00	30	377.376,43		9.315.189,11	28.735.068,11
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%	1,97%	0,00%	1,97%	19.419.879,00	30	381.692,77		9.696.881,88	29.116.750,88
1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%	1,95%	0,00%	1,95%	19.419.879,00	30	379.208,87		10.076.090,75	29.495.969,75
1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,97%	1,94%	0,00%	1,94%	19.419.879,00	30	377.179,99		10.453.270,74	29.873.149,74
SUBTOTALES: >>>>							19.419.879,00	792	10.622.683,11		21.075.953,85	29.873.149,74
							CAPITAL		19.419.879,00			
							INTERESES		10.622.683,11			
							TOTAL: CAPITAL+INTERESES		30.042.562,11			

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Deudor: DIANA MARGARITA MARTINEZ VEGA
pagare: 3531821883

Deudor: 43254110

Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>> Para dar aplicación a los Arts. 111 L. 510 y 305 C. P., si no se pactó tasa de mora, o se pactó la máxima autorizada, estas celdas aparecerán vacías.

CAPITAL: 15.506.276,00

VIGENCIA		Bño. Cte.	LÍMITE USURA		TASA	TASA	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO					
DESDE	HASTA	T. Efectivo	Efectiva Anual	Nomina	actada	FINAL	Capital Liquidable	días	Liq Intereses	A B O N O S	Saldo Intereses	Saldo de Capital más Intereses
							15.506.278,00				0,00	15.506.278,00
							15.506.278,00				0,00	15.506.278,00
15-feb-18	28-feb-19	19,70%	29,55%	2,18%	0,00%	2,18%	15.506.278,00	12	135.271,46		0,00	15.506.278,00
1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%	2,15%	0,00%	2,15%	15.506.278,00	30	333.124,76		333.124,76	15.839.402,76
1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,86%	2,14%	0,00%	2,14%	15.506.278,00	30	332.357,47		665.482,23	16.171.760,00
1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%	2,15%	0,00%	2,15%	15.506.278,00	30	332.664,44		988.148,67	16.504.424,67
1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,95%	2,14%	0,00%	2,14%	15.506.278,00	30	332.050,44		1.330.197,11	16.836.475,11
1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,92%	2,14%	0,00%	2,14%	15.506.278,00	30	331.743,34		1.661.940,45	17.168.218,45
1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	15.506.278,00	30	332.357,47		1.994.297,92	17.500.575,92
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%	2,14%	0,00%	2,14%	15.506.278,00	30	332.357,47		2.326.655,39	17.832.933,39
1-oct-19	31-oct-19	19,10%	28,65%	2,12%	0,00%	2,12%	15.506.278,00	30	328.976,53		2.655.631,92	18.161.909,92
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%	2,11%	0,00%	2,11%	15.506.278,00	30	327.898,11		2.983.531,03	18.489.809,03
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	15.506.278,00	30	326.500,22		3.308.581,24	18.815.859,24
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%	2,09%	0,00%	2,09%	15.506.278,00	30	323.890,18		3.633.471,42	19.139.749,42
1-feb-20	29-feb-20	19,05%	28,59%	2,12%	0,00%	2,12%	15.506.278,00	30	328.380,96		3.961.832,38	19.468.110,38
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%	2,11%	0,00%	2,11%	15.506.278,00	30	326.668,78		4.288.499,15	19.794.777,15
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%	2,08%	0,00%	2,08%	15.506.278,00	30	322.654,41		4.611.153,58	20.117.431,58
1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%	2,03%	0,00%	2,03%	15.506.278,00	30	314.958,52		4.926.112,08	20.432.390,08
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	15.506.278,00	30	313.818,72		5.239.930,80	20.746.208,80
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	27,18%	2,02%	0,00%	2,02%	15.506.278,00	30	313.818,72		5.553.749,51	21.060.027,51
1-ago-20	31-ago-20	18,20%	27,44%	2,04%	0,00%	2,04%	15.506.278,00	30	316.511,34		5.870.260,85	21.376.538,85
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%	2,05%	0,00%	2,05%	15.506.278,00	30	317.390,53		6.187.851,38	21.693.929,38
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%	2,02%	0,00%	2,02%	15.506.278,00	30	313.404,02		6.501.055,40	22.007.333,40
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%	2,00%	0,00%	2,00%	15.506.278,00	30	309.458,41		6.810.513,81	22.316.791,81
1-dic-20	31-dic-20	18,91%	28,37%	2,10%	0,00%	2,10%	15.506.278,00	30	326.101,61		7.136.615,42	22.642.893,42
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,98%	1,94%	0,00%	1,94%	15.506.278,00	30	301.325,46		7.437.940,88	22.944.218,88
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%	1,97%	0,00%	1,97%	15.506.278,00	30	304.771,94		7.742.712,82	23.248.990,82
1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%	1,95%	0,00%	1,95%	15.506.278,00	30	302.788,51		8.045.501,43	23.551.779,43
1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,97%	1,94%	0,00%	1,94%	15.506.278,00	30	301.168,60		8.346.670,03	23.852.948,03
SUBTOTALES: >>>>							15.506.278,00	792	8.481.941,49	-	16.828.811,52	23.852.948,03
CAPITAL												15.506.278,00
INTERESES												8.481.941,49
TOTAL: CAPITAL+INTERESES												23.988.219,49

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003-2018-00217-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003-2018-00217-00
Demandante	BANCO DE BOGOTÀ S.A
Demandado	DIANA MARGARITA MARTINEZ VEGA
Asunto	Agregar al expediente.

Se observa solicitud de reliquidación del crédito y entrega de títulos judiciales, sin embargo se tiene que en el mismo no se ha corrido traslado por la secretaría de apoyo de los Juzgados de ejecución. En virtud, de lo anterior el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN ÚNICA: Ordénese que por secretaria de ejecución Civil Municipal, se haga la correspondiente fijación de la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutante.-

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ.

6

Encuestado

696

Anónimo

12:52

Tiempo para completar

¿Comprendió las instrucciones? *

☒ SI
☐ NO

Fecha de la solicitud

27/7/2020

Nombre y apellido/Solicitante *

SERVIPIEDRA

Identificación/Solicitante.

Fecha de

NIT: 900153589-7

27/7/2020

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=s&id=Analysis&FormId=mlLsYvA8DGN9Y65mQFZiWw_JrZnHpNMtThU-vMGI3BURVVTOVQWME1GVISRFpQzFOM0ZBDEZWS4u 1/5

SERVIPIEDRA

¿El proceso sobre el cual quiere agendar la entrega de depósitos tiene orden de entrega proferida por el Juez?

☒ SI
☐ No

Nombre y/o Apellido - Demandado *

MALLERLYN GONZALEZ GOMEZ Y OTROS

Identificación - Demandado. *

45690331

Nombre y/o Apellido - Demandante *

SERVIPIEDRA

Identificación - Demandante *

NIT: 900153589-7

Correo electrónico/Solicitante *

servi.piedra@hotmail.com

Teléfono de contacto/solicitante.

3205677280

Radicado completo del expediente sobre el cual pide agenda y entrega de depósitos Judiciales *

Recuerde colocar los 23 dígitos del Radicado. Evite colocar letras y signos, sólo se permiten números. Ejemplo: 13001400300120190012300. Recuerde que si es un proceso que proviene de pequeñas causas el radicado cambia.

13001418900320170017200

Juzgado de Ejecución al cual esta repartido el expediente. *

Si no lo conoce consúltelo aquí:

<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>
(<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>)

- ☐ Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena
- ☐ Juzgado Segundo De Ejecución Civil Municipal de Cartagena
- ☒ Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=s&id=Analysis&FormId=mlLsYvA8DGN9Y65mQFZiWw_JrZnHpNMtThU-vMGI3BURVVTOVQWME1GVISRFpQzFOM0ZBDEZWS4u 2/5

14

¿Quiere que se le envíe solicitud de conversión y traslado al Juzgado de Origen? *

Las ordenes de pago que se libren se harán en base a los depósitos que se encuentren en nuestra cuenta a la fecha de elaboración; en el evento que no estén depósitos no podemos darle trámite a la solicitud de entrega, pero mediante un correo electrónico (con copia a usted) le pedimos al Juzgado Civil Municipal de Cartagena que realice la CONVERSIÓN Y TRASLADO DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES A FAVOR DEL PROCESO en ese orden es su responsabilidad el seguimiento y el cumplimiento de esta solicitud ante el Juzgado Civil Municipal de Cartagena, y una vez ese despacho, le responda que la conversión y traslado fue exitoso, deberá diligenciar nuevamente el link para el agendamiento de fecha https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mlLsYvA8DGN9Y65mQFZiWw_JrZnHpNMtThU-vMGI3BURVVTOVQWME1GVISRFpQzFOM0ZBDEZWS4u (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mlLsYvA8DGN9Y65mQFZiWw_JrZnHpNMtThU-vMGI3BURVVTOVQWME1GVISRFpQzFOM0ZBDEZWS4u) Siguiendo los pasos correspondientes.

Septiembre/2020

- ☐ SI
- ☐ NO

Esta pregunta es obligatoria.

15



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first three parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first four parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first five parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 696

Depósitos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena

depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mie 02/09/2020 14:24

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (173 KB)

172.pdf

Cartagena de Indias, D. T. y C. 2 de septiembre de 2020.

Resp

Oficio No. 538

Dep

Mie 02/

Estimado

Usuario

ESM

Cartag

Ref:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No.	696
Fecha de presentación de la solicitud	27-07-2020
Radicado	13001418900320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con la solicitud que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, nos permitimos informarle que dentro un término prudencial, nuestra Oficina de Apoyo, le estará respondiendo de vuelta a este mismo correo o el suministrado por usted, una confirmación con el número de depósitos ingresados y autorizados para el pago; así como su respectivo número del Oficio de la orden de Pago DJ04, o de ser el caso la confirmación o no del respectivo abono a cuenta.

Radi

Solo en ese momento, cuando reciba el correo electrónico referido en el párrafo anterior, es cuando podrá acercarse al Banco Agrario (si es del caso) y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquelo al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio.

De op

perm

Adjuntamos consulta por número de proceso arrojada por el PTW del Banco Agrario de nuestra cuenta, correo o el para el pago; así confirmación o no del

Atentamente,

Atenti

BUZ MERY PELUFFO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 5

P.D: En todo caso, podrá revisar el estado de su trámite mediante el link de consulta de procesos, que está en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, o en el link que le facilitamos a continuación:

<https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?>

RelogId=av0Oh79rhrxiOP8I_Gn3vvnC..lix4%3d

15/9/2020

Correo: Depósitos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena - Outlook

RESPUESTA SOLICITUD 696 RADICADO 13001400320170017200

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 15/09/2020 8:19

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>

Estimado

Usuario

ESM

Ref.:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos	696
Fecha de presentación de la solicitud	27/07/2020
Radicado	13001400320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con las solicitudes que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, advertimos que dentro del mismo:

Existe ordene de entrega de depósitos judiciales por parte del Juez, lo que procedió a elaborarse los depósitos judiciales correspondientes al oficio No. 2020001699 -oficio 2020001700 - oficio 2020001701- oficio 2020001702 por un valor de \$2.558.579 - \$1.727.824 - \$2.0804-536 - \$823.509 - 2.017.407 - \$899.658 a favor de SERVIPIEDRA.

Con este correo usted podrá acercarse al Banco Agrario dentro del término de 10 días a partir del día siguiente hábil a la recepción de este correo electrónico y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquelo al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio.

Atentamente,

MARIA LUISA RUEDA ANGULO**Auxilair administrativo grado 5**

Respuesta solicitud 1601 radicado 13001400300320170017200

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 24/11/2020 16:45
Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>; Edgar Ulloque <edgar6315@hotmail.com>

Estimado
Usuario

ESM

Referencia:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos	1601
Fecha de presentación de la solicitud	7-10-2020
Radicado	13001400300320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con las solicitudes que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, advertimos que dentro del mismo:

Existe ordene de entrega de depósitos judiciales por parte del Juez, lo que procedió a elaborarse los depósitos judiciales correspondientes a:.

Título 412070002391088: Transacción exitosa, número de transacción: 306634700. La orden de pago para el título 412070002391088 ha quedado en estado ingresado. Para que el pago quede en firme debe cumplir con el proceso de autorización. Recuerde que la transacción puede ser rechazada. - Título 412070002391091: Transacción exitosa, número de transacción: 306634701. La orden de pago para el título 412070002391091 ha quedado en estado ingresado. Para que el pago quede en firme debe cumplir con el proceso de autorización. Recuerde que la transacción puede ser rechazada. - Título 412070002398773: Transacción exitosa, número de transacción: 306634702. La orden de pago para el título 412070002398773 ha quedado en estado ingresado. Para que el pago quede en firme debe cumplir con el proceso de autorización. Recuerde que la transacción puede ser rechazada. - Título 412070002398776: Transacción exitosa, número de transacción: 306634703. La orden de pago para el título 412070002398776 ha quedado en estado ingresado. Para que el pago quede en firme debe cumplir con el proceso de autorización. Recuerde que la transacción puede ser rechazada.

Número de Oficio: 202002542

Por un valor de \$889.559

A favor de SERVIPIEDRA

Usted podrá acercarse al Banco Agrario transcurridos 10 días hábiles luego de la recepción de este correo electrónico y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquelo al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio.

RECUERDE QUE:

El Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PCSJC20-17, tomó medidas temporales por COVID-19 respecto a la autorización de depósitos judiciales por el PWT del Banco Agrario de Colombia, señalando específicamente en el numeral 5, en lo que refiere al pago; que la autorización virtual en el PWT y la confirmación adicional para los depósitos superiores a 15 SMLMV, serán suficientes para que el

banco Agrario realice los pagos de cualquier concepto de depósitos judiciales, a la persona autorizada en el portal, **SIN exigir formato físico, título materializado, documento o validación adicional por parte del Juzgado, siempre que esté plenamente identificada la persona beneficiaria del pago en el PWT, según presentación de los documentos de identificación del beneficiario que se exigirá por el banco al momento de realizar el Pago, según el tipo de persona natural o jurídica.**

Adicional a lo anterior, es importante que tenga en cuenta que la expedición de pantallazos está circunscrita a los Bancos, en este caso en específico el Banco Agrario de Colombia, quienes son los encargados del manejo y aprovechamiento de los dineros en el consignado. En ese orden, lo invitamos a la utilización de las múltiples alternativas que posee el Banco para sus consultas, emisiones y pago de Depósitos Judiciales. Una de ella es; por **internet, mediante esta opción usted no tendría que ir a una Oficina del banco Agrario para conocer el estado de sus depósitos judiciales, y podría hacerlo desde la tranquilidad de su casa u oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Simplemente, deberá:**

1. Ingresa a www.bancoagrario.gov.co y selecciona el botón "**Depósitos Judiciales**".
2. Entra a la opción "**Portal de Pagos y Depósitos Judiciales**".
3. Realiza el pago de la consulta (\$5.000+IVA) a través del botón PSE o botón BAC.
4. Obtendrás la información que necesitas actualizada y al instante.

El otro canal que le recomendamos, es a través de las líneas telefónicas: (1) 5948500 si llama desde Bogotá, y 018000915000, si lo hace desde cualquier parte del país. Y a través de este medio usted podrá: Recibir información y asesoría en los diferentes productos y servicios ofrecidos por el Banco Agrario; Consultar el saldo y los últimos 5 movimientos de sus productos; Realizar pagos de créditos y tarjetas de crédito; Realizar transferencias entre cuentas del Banco Agrario; Consultar sus giros, depósitos especiales y solicitudes de crédito; Bloquear productos por pérdida o robo; Recibir asesoría sobre el uso de la Banca Virtual; Actualizar sus datos básicos; y Presentar peticiones, quejas o reclamos. La utilización de este canal tiene como beneficio que es Disponible las 24 horas y los 7 días de la semana, y recibirá un número de soporte correspondiente a las operaciones realizadas.

Además de lo anterior, el banco agrario posee muchos más canales de atención, pero este no es el medio para informarlos por lo que lo invitamos a que consulte la página www.bancoagrario.gov.co o si quiere de manera más rápida acceda a través del siguiente link. <https://www.bancoagrario.gov.co/Canales/Paginas/default.aspx>

Cualquier tipo de información adicional requerida respecto al estado actual de los procesos, puede ser tomada de primera mano, en el aplicativo de Justicia XXI el cual se puede ver desde cualquier PC a través de la página Web www.ramajudicial.gov.co, en el vínculo de consulta de procesos.

Adicional a ello, si su expediente cuenta con orden de pago, puede solicitar entrega de depósitos mediante el siguiente vínculo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVTQVQwME1GVIIISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u mediante este canal recibiremos su solicitud y en un tiempo prudencial recibirá respuesta nuestra, al correo electrónico suministrado.

Ahora, si usted desea presentar algún memorial, lo puede hacer a través del correo electrónico cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co .

Atentamente,

MARIA LUISA RUEDA ANGULO

Auxiliar administrativo grado 5

149

Encuestado

<

2032

Anónimo

>

03:44

Tiempo para completar

1

¿Comprendió las instrucciones? *

☒ SI

☐ NO

2

Fecha de la solicitud

11/11/2020

3

Nombre y apellido/Solicitante *

Edgar Ulloque Suárez

4

Identificación/Solicitante.

19767338

5

Correo electrónico/Solicitante *

edgar6315@hotmail.com

6

Teléfono de contacto/solicitante.

3114036692

7

Radicado completo del expediente sobre el cual pide agenda y entrega de depósitos Judiciales *

Recuerde colocar los 23 dígitos del Radicado. Evite colocar letras y signos, sólo se permiten números. Ejemplo: 13001400300120190012300. Recuerde que si es un proceso que proviene de pequeñas causas el radicado cambia.

13001418900320170017200

8

Juzgado de Ejecución al cual esta repartido el expediente. *

Si no lo conoce consúltelo aquí:
<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>
(<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>)

☐ Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

☐ Juzgado Segundo De Ejecución Civil Municipal de Cartagena

☒ Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell&Analysis=true&FormId=mLooYVIA80GN9Y65mQFZwv_JiZnHpNMzTnU-VMG3BURVV... 2/4

3/12/2020

Microsoft Forms

9

¿El proceso sobre el cual quiere agendar la entrega de depósitos tiene orden de entrega proferida por el Juez?

☒ SI

☐ No

10

Nombre y/o Apellido- Demandado *

Mallerin González Gomez y Delcy Velasquez Jimenez

11

Identificación - Demandado. *

45.690.331 - 45.425.730

12

Nombre y/o Apellido- Demandante *

Servipiedra

13

Identificación - Demandante *

900.153.589

14

¿Desea que el pago de su deposito judicial sea abonado directamente a una cuenta bancaria de su titularidad?

Se hace la aclaración que si escoge la opción de pago con Abono a Cuenta, el Banco Agrario de Colombia puede hacer cobro de una comisión e IVA, los cuales, serán descontados del valor del o de los depósitos judiciales. Para los beneficiarios que ingresen cuenta de otros bancos, el valor de la comisión dependerá de la plaza donde se encuentre apertura de la cuenta de ahorros o corriente, de conformidad a lo establecido en el tarifario vigente.

☐ SI

☒ NO

15

Sugerencia.

Por favor hacer la solicitud de conversión al juzgado de origen, ambas demandadas le realizan descuentos

INFORMACION DE OFICIOS DE EMBARGO

Litigando Audiencias <yonatan.litigar@gmail.com>

Mié 1/07/2020 11:57 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; beatriz.luna
<beatriz.luna@litigando.com>

Buenas tardes solicito muy respetuosamente me informen por favor si los oficios de embargos dirigidos a cajero
pagador de los procesos bajo radicado:

13001400300420080015300 - 703 - 262
13001400300420110091300 - 703 - 122
13001400300620100082100 - 703 - 115
13001400300620110091700 - 703 - 122 ✓
13001400300120170024200 → 703 - 135
13001400301020110081000 → 703 - 280
13001400300720170001400 → Andry
13001400300820160096500 - 703 - 155

se encuentran realizados, y
que se tendría que hacer o porque medio se podría obtener para tal diligencia después de retirado. Siendo estos
proceso del juzgado 3 de ejecución civil municipal de Cartagena.

SEMPRE PRESENCIA, SOLICITUD
FECHA: 02-07-20
FIRMA: JUAN CARLOS
10:36 AM

5

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 1649-2032

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 23/11/2020 16:24

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>; Edgar Ulloque <edgar6315@hotmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (175 KB)
172 3.pdf;

Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 de Noviembre de 2020.

Oficio No. 1290

Estimado

Usuario

ESM

Ref.:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No.	1649-2032
Fecha de presentación de la solicitud	13-10-2020 11-11-2020
Radicado	13001418900320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con la solicitud que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, una vez revisado el proceso de la referencia, nos permitimos informarle que dentro un término prudencial, nuestra Oficina de Apoyo, le estará respondiendo de vuelta a este mismo correo o el suministrado por usted, una confirmación con el número de depósitos ingresados y autorizados para el pago, así como su respectivo número del Oficio de la orden de Pago DJ04, o de ser el caso la confirmación o no del respectivo abono a cuenta.

Solo en ese momento, cuando reciba el correo electrónico referido en el párrafo anterior, es cuando podrá acercarse al Banco Agrario (si es del caso) y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquelo al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio.

Adjuntamos consulta por número de proceso arrojada por el PTW del Banco Agrario de nuestra cuenta.

Atentamente,

LUZ MERY PELUFFO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 5

P.D.: En todo caso, podrá revisar el estado de su trámite mediante el link de consulta de procesos, que está en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, o en el link que le facilitamos a continuación:

<https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=ay0OhZ9rbxiOP8LGg3vygCJjx4%3d>

16

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 1649-2032 Y remisión de Solicitud de Conversión y Traslado al Juzgado Civil Municipal de Cartagena.

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 23/11/2020 16:31

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>; Edgar Ulloque <edgar6315@hotmail.com>; Juzgado 03 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bolivar - Cartagena <j03peqcacmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cartagena de Indias, D. T. y C., 23 de noviembre de 2020.

Oficio No. 1291

Estimado
Usuario
Juzgado
ESM

Ref.:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No.	1649-2032
Fecha de presentación de la solicitud	13-10-2020 11-11-2020
Radicado	13001418900320170017200

Y remisión de Solicitud de Conversión y Traslado al Juzgado Civil Municipal de Cartagena.

Cordial saludo,

De conformidad con la solicitud que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, advertimos que dentro del mismo:

Corresponde a un proceso ejecutivo, que tiene orden de entrega, sin embargo, al realizar una consulta por número de proceso en portal Web transaccional del Banco Agrario en la cuenta de la oficina de Apoyo, no tiene depósitos Judiciales, pero al parecer si tiene en el Juzgado de Origen, en razón de lo anterior, no podemos darle tramite a la solicitud por usted presentada, pero mediante este mismo correo electrónico le rogamos al Juzgado Civil Municipal de Cartagena que realice la **CONVERSION Y TRASLADO DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES A FAVOR DEL PROCESO**

RADICADO:	13001418900320170017200	
DEMANDANTE C.C.	GARCIA HOYOS INVERPIEDRA Y CIA S EN C	NIT. 900.153.589
APODERADO:	EDGAR ULLOQUE	C.C 19.767.338
DEMANDADO C.C.	MALLERLIN GONZALEZ GOMEZ	C.C 45.690.331
	DEL CY DEL CARMEN VELASQUEZ	C.C 45.425.730

Finalmente, señor usuario le informamos que, corresponde a su responsabilidad el seguimiento y el cumplimiento de esta solicitud ante el Juzgado Civil Municipal de Cartagena, y una vez ese despacho, le responda que la conversión y traslado fue exitoso, deberá diligenciar nuevamente el link para el agendamiento de fecha
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMrtNu-vMGI3BURVVTOVQwME1GVIISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u
Siguiendo los pasos correspondientes.

Atentamente,

LUZ MERY PELUFFO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 5



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

**Prosperidad
para todos**

Datos Transacción

Tipo Transacción: INGRESO PAGO POR FRACCIONAMIENTO
Resultado Transacción: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 318668956.
EL PAGO POR FRACCIONAMIENTO PARA EL TÍTULO
412070002436394 HA QUEDADO EN ESTADO INGRESADO. PARA
QUE EL PAGO POR FRACCIONAMIENTO QUEDE EN FIRME DEBE
CUMPLIR CON EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN. RECUERDE QUE
LA TRANSACCIÓN PUEDE SER RECHAZADA.
Usuario: MARIA LUISA RUEDA ANGULO
Estado: INGRESADO

Datos de la Autorización

Realizado por: INGRESO - MARIA LUISA RUEDA ANGULO - 22/03/2021 08:44:32
A.M. - 190.217.19.156

Datos del Título

Número de Título: 412070002436394
Número de Proceso: 13001418900320170017200
Valor: \$ 111.943,00

Datos del Demandante

Identificación del Demandante: NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA) 9001535897
Nombres del Demandante: SERVIPIEDRA LTDA

Datos del Demandado

Identificación del Demandado: CEDULA DE CIUDADANIA 45690331
Nombres del Demandado: GONZALEZ GOMEZ MALLERLIN

Fracciones

Valor: \$ 31.514,00
Valor: \$ 80.429,00

Datos del Fraccionamiento

Número de Oficio: 2021000905

Respuesta solicitud 4617 radicado 13001418900320170017200

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 22/03/2021 8:46

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>

Estimado
Usuario

ESM

Referencia:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos.	4617
Fecha de presentación de la solicitud	18/03/21
Radicado	13001418900320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con las solicitudes que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, advertimos que dentro del mismo:

Existe ordene de entrega de depósitos judiciales por parte del Juez, lo que procedió a elaborarse los depósitos judiciales correspondientes a:

Número de Oficio: 2021000904

Por un valor de \$607.348

A favor de SERVIPIEDRA

Usted podrá acercarse al Banco Agrario transcurridos 10 días luego de la recepción de este correo electrónico y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquele al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio. (En las oficinas del Banco Agrario de cualquier ciudad del país).

RECUERDE QUE:

Usted puede solicitar sus títulos con abono directo a una cuenta de la titularidad del beneficiario.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PCSJC20-17, tomó medidas temporales por COVID-19 respecto a la autorización de depósitos judiciales por el PWT del Banco Agrario de Colombia, señalando específicamente en el numeral 5, en lo que refiere al pago; que la autorización virtual en el PWT y la confirmación adicional para los depósitos superiores a 15 SMLMV, serán suficientes para que el banco Agrario realice los pagos de cualquier concepto de depósitos judiciales, a la persona autorizada en el portal, SIN exigir formato físico, título materializado, documento o validación adicional por parte del Juzgado, siempre que esté plenamente identificada la persona beneficiaria del pago en el PWT, según presentación de los documentos de identificación del beneficiario que se exigirá por el banco al momento de realizar el Pago, según el tipo de persona natural o jurídica.

Adicional a lo anterior, es importante que tenga en cuenta que la expedición de pantallazos está circunscrita a los Bancos, en este caso en específico el Banco Agrario de Colombia, quienes son los encargados del manejo y aprovechamiento de los dineros en el consignado. En ese orden, lo invitamos a la utilización de las múltiples alternativas que posee el Banco para sus consultas, emisiones y pago de Depósitos Judiciales. Una de ella es; por internet, mediante esta opción usted no tendría que ir a una Oficina del banco Agrario para conocer el estado de sus depósitos judiciales, y podría hacerlo desde la tranquilidad de su casa u oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Simplemente, deberá:

1. Ingresa a www.bancoagrario.gov.co y selecciona el botón “Depósitos Judiciales”.
2. Entra a la opción “Portal de Pagos y Depósitos Judiciales”.
3. Realiza el pago de la consulta (\$5.000+IVA) a través del botón PSE o botón BAC.
4. Obtendrás la información que necesitas actualizada y al instante.

El otro canal que le recomendamos es a través de las líneas telefónicas: (1) 5948500 si llama desde Bogotá, y 018000915000, si lo hace desde cualquier parte del país. Y a través de este medio usted podrá: Recibir información y asesoría en los

diferentes productos y servicios ofrecidos por el Banco Agrario; Consultar el saldo y los últimos 5 movimientos de sus productos; Realizar pagos de créditos y tarjetas de crédito; Realizar transferencias entre cuentas del Banco Agrario; Consultar sus giros, depósitos especiales y solicitudes de crédito; Bloquear productos por pérdida o robo; Recibir asesoría sobre el uso de la Banca Virtual; Actualizar sus datos básicos; y Presentar peticiones, quejas o reclamos. La utilización de este canal tiene como beneficio que es Disponible las 24 horas y los 7 días de la semana, y recibirá un número de soporte correspondiente a las operaciones realizadas.

Además de lo anterior, el banco agrario posee muchos más canales de atención, pero este no es el medio para informarlos por lo que lo invitamos a que consulte la página www.bancoagrario.gov.co o si quiere de manera más rápida acceda a través del siguiente link. <https://www.bancoagrario.gov.co/Canales/Paginas/default.aspx>

Cualquier tipo de información adicional requerida respecto al estado actual de los procesos, puede ser tomada de primera mano, en el aplicativo de Justicia XXI el cual se puede ver desde cualquier PC a través de la página Web www.ramajudicial.gov.co, en el vínculo de consulta de procesos.

Adicional a ello, si su expediente cuenta con orden de pago, puede solicitar entrega de depósitos mediante el siguiente vínculo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMtTnU-vMGI3BURVVTOVQwME1GVIIISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u mediante este canal recibiremos su solicitud y en un tiempo prudencial recibirá respuesta nuestra, al correo electrónico suministrado.

Ahora, si usted desea presentar algún memorial, lo puede hacer a través del correo electrónico cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Atentamente,

MARIA LUISA RUEDA ANGULO

Auxiliar administrativo grado 5

Respuesta solicitud 4617 radicado 13001400300320170017200

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 08/04/2021 16:41

Para: SERVI.PIEDRA@HOTMAIL.COM <SERVI.PIEDRA@HOTMAIL.COM>

Estimado
Usuario

ESM

Referencia:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos	4617
Fecha de presentación de la solicitud	18/03/21
Radicado	13001400300320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con las solicitudes que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, una vez revisado el proceso de la referencia, advertimos que dentro del mismo:

Existe ordene de entrega de depósitos judiciales por parte del Juez, lo que procedió a elaborarse los depósitos judiciales correspondientes a:

Número de Oficio: **2021001046**

Por un valor de **\$31.514**

A favor de **SERVIPIEDRA**

Usted podrá acercarse al Banco Agrario transcurridos 10 días luego de la recepción de este correo electrónico y realizar el trámite de cobro de los mismos, indíquelo al cajero los depósitos que están autorizados y el correspondiente número de Oficio. (En las oficinas del Banco Agrario de cualquier ciudad del país).

RECUERDE QUE:

Usted puede solicitar sus títulos con abono directo a una cuenta de la titularidad del beneficiario.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PCSJC20-17, tomó medidas temporales por COVID-19 respecto a la autorización de depósitos judiciales por el PWT del Banco Agrario de Colombia, señalando específicamente en el numeral 5, en lo que refiere al pago; que la autorización virtual en el PWT y la confirmación adicional para los depósitos superiores a 15 SMLMV, serán suficientes para que el banco Agrario realice los pagos de cualquier concepto de depósitos judiciales, a la persona autorizada en el portal, SIN exigir formato físico, título materializado, documento o validación adicional por parte del Juzgado, siempre que esté plenamente identificada la persona beneficiaria del pago en el PWT, según presentación de los documentos de identificación del beneficiario que se exigirá por el banco al momento de realizar el Pago, según el tipo de persona natural o jurídica.

Adicional a lo anterior, es importante que tenga en cuenta que la expedición de pantallazos está circunscrita a los Bancos, en este caso en específico el Banco Agrario de Colombia, quienes son los encargados del manejo y aprovechamiento de los dineros en el consignado. En ese orden, lo invitamos a la utilización de las múltiples alternativas que posee el Banco para sus consultas, emisiones y pago de Depósitos Judiciales. Una de ella es; por **internet**, mediante esta opción usted no tendría que ir a una Oficina del banco Agrario para conocer el estado de sus depósitos judiciales, y podría hacerlo desde la tranquilidad de su casa u oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Simplemente, deberá:

1. Ingresa a www.bancoagrario.gov.co y selecciona el botón “**Depósitos Judiciales**”.
2. Entra a la opción “**Portal de Pagos y Depósitos Judiciales**”.
3. Realiza el pago de la consulta (\$5.000+IVA) a través del botón PSE o botón BAC.
4. Obtendrás la información que necesitas actualizada y al instante.

El otro canal que le recomendamos es a través de las líneas telefónicas: (1) 5948500 si llama desde Bogotá, y 018000915000, si lo hace desde cualquier parte del país. Y a través de este medio usted podrá: Recibir información y asesoría en los diferentes productos y servicios ofrecidos por el Banco Agrario; Consultar el saldo y los últimos 5 movimientos de sus productos; Realizar pagos de créditos y tarjetas de crédito; Realizar transferencias entre cuentas del Banco Agrario; Consultar sus giros, depósitos especiales y solicitudes de crédito; Bloquear productos por pérdida o robo; Recibir asesoría sobre el uso de la Banca Virtual; Actualizar sus datos básicos; y Presentar peticiones, quejas o reclamos. La utilización de este canal tiene como beneficio que es Disponible las 24 horas y los 7 días de la semana, y recibirá un número de soporte correspondiente a las operaciones realizadas.

Además de lo anterior, el banco agrario posee muchos más canales de atención, pero este no es el medio para informarlos por lo que lo invitamos a que consulte la página www.bancoagrario.gov.co o si quiere de manera más rápida acceda a través del siguiente link. <https://www.bancoagrario.gov.co/Canales/Paginas/default.aspx>

Cualquier tipo de información adicional requerida respecto al estado actual de los procesos, puede ser tomada de primera mano, en el aplicativo de Justicia XXI el cual se puede ver desde cualquier PC a través de la página Web www.ramajudicial.gov.co, en el vínculo de consulta de procesos.

Adicional a ello, si su expediente cuenta con orden de pago, puede solicitar entrega de depósitos mediante el siguiente vínculo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVTOVQwME1GVIISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u mediante este canal recibiremos su solicitud y en un tiempo prudencial recibirá respuesta nuestra, al correo electrónico suministrado.

Ahora, si usted desea presentar algún memorial, lo puede hacer a través del correo electrónico cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Atentamente,

MARIA LUISA RUEDA ANGULO

Auxiliar administrativo grado 5

13

Encuestado

6155

Anónimo

07:28

Tiempo para completar

1. ¿Comprendió las instrucciones? *

- ☒ SI
- ☐ NO

2. Fecha de la solicitud

25/6/2021

3. Nombre y apellido/Solicitante *

inversiones servipiedra

4. Identificación/Solicitante.

900153589-7

5. Correo electrónico/Solicitante *

servipiedra@hotmail.com

6. Teléfono de contacto/solicitante.

3145870205

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=dejudofecmcgna%40cendoj.ramajudicial.gov.co&lang=es-419&origin... 1/4

28/6/2021 ENLACE AGENDAMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE PAGO DE DEPOSITO JUDICIAL OFICINA DE APOYO (Editor) Microsoft ...

12. Nombre y/o Apellido- Demandante *

SERVIPIEDRA

13. Identificación - Demandante *

900153589-7

14. Señale a favor de quien sugiere se expida la orden de Pago

Se advierte que nuestra Oficina, hará las ordenes de pago a favor de la persona que tenga la facultad de recibir y/o a favor de quien el juez haya dado la orden de entrega. El hecho que usted ponga un nombre en esta casilla no significa que necesariamente saldrá a su favor, ya que el mismo está sujeto a la información contenida en el expediente

A NOMBRE DE INVERSIONES SERVIPIEDRA

15. ¿Desea que el pago de su deposito judicial sea abonado directamente a una cuenta bancaria de su titularidad?

El Beneficiario de la orden de pago, debe ser el titular de la cuenta bancaria, de no coincidir el titular de la cuenta, con el beneficiario de la orden de pago, se expedirá la orden de pago a favor de la persona (natural/jurídica) con facultades de recibir correspondiente a fin de que sea cobrado en ventanilla del Banco.

Se hace la aclaración que si recoge la opción de pago con Abono a Cuenta, el Banco Agrario de Colombia puede hacer cobro de una comisión e IVA, los cuales, serán descontados del valor del o de los depósitos judiciales. Para los beneficiarios que ingresen cuenta de otros bancos, el valor de la comisión, dependerá de la plaza donde se encuentre apertura de la cuenta de ahorros o corriente, de conformidad a lo establecido en el tarifario vigente

- ☐ SI
- ☒ NO

16. Sugerencia.

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=dejudofecmcgna%40cendoj.ramajudicial.gov.co&lang=es-419&origin... 3/4

7. Radicado completo del expediente sobre el cual pide agenda y entrega de depósitos Judiciales *

Recuerde colocar los 23 dígitos del Radicado. Evite colocar letras y signos, sólo se permiten números. Ejemplo, 13001400300120190012300. Recuerde que si es un proceso que proviene de pequeñas causas el radicado cambia

13001418900320170017200

8. Juzgado de Ejecución al cual esta repartido el expediente. *

Si no lo conoce consúltelo aquí
<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>
(<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>)

- ☐ Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena
- ☐ Juzgado Segundo De Ejecución Civil Municipal de Cartagena
- ☒ Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

9. ¿El proceso sobre el cual quiere agendar la entrega de depósitos tiene orden de entrega proferida por el Juez?

- ☒ SI
- ☐ No

10. Nombre y/o Apellido- Demandado *

Mallerlin Gonzalez - Delcy Velazquez Jimenez

11. Identificación - Demandado. *

45690331 - 45425730

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=dejudofecmcgna%40cendoj.ramajudicial.gov.co&lang=es-419&origin... 2/4

28/6/2021 ENLACE AGENDAMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE PAGO DE DEPOSITO JUDICIAL OFICINA DE APOYO (Editor) Microsoft ...

POR FAVOR VERIFICAR EN EL JUZGADO DE ORIGEN EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DEPOSITOS JUDICIALES, MUCHAS GRACIAS

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=dejudofecmcgna%40cendoj.ramajudicial.gov.co&lang=es-419&origin... 4/4

Respuesta solicitud 6155 radicado 130014003000320170017200

Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 28/06/2021 15:44

Para: INVERSIONES SERVIPIEDRA SAS <servi.piedra@hotmail.com>

Estimado

Usuario

ESM

Referencia:

Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos	6155 y todas las presentadas hasta la fecha del envío de este correo.
Fecha de presentación de la solicitud	25-06-21
Radicado	130014003000320170017200

Cordial saludo,

De conformidad con las solicitudes que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que, NO se procedió a elaborar depósitos judiciales debido a que en el proceso ya se pagó lo correspondiente a liquidación de crédito y costas al demandante.

RECUERDE QUE:

Usted puede solicitar sus títulos con abono directo a una cuenta de la titularidad del beneficiario.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PCSJC20-17, tomó medidas temporales por COVID-19 respecto a la autorización de depósitos judiciales por el PWT del Banco Agrario de Colombia, señalando específicamente en el numeral 5, en lo que refiere al pago; que la autorización virtual en el PWT y la confirmación adicional para los depósitos superiores a 15 SMLMV, serán suficientes para que el banco Agrario realice los pagos de cualquier concepto de depósitos judiciales, a la persona autorizada en el portal, SIN exigir formato físico, título materializado, documento o validación adicional por parte del Juzgado, siempre que esté plenamente identificada la persona beneficiaria del pago en el PWT, según presentación de los documentos de identificación del beneficiario que se exigirá por el banco al momento de realizar el Pago, según el tipo de persona natural o jurídica.

Adicional a lo anterior, es importante que tenga en cuenta que la expedición de pantallazos está circunscrita a los Bancos, en este caso en específico el Banco Agrario de Colombia, quienes son los encargados del manejo y aprovechamiento de los dineros en el consignado. En ese orden, lo invitamos a la utilización de las múltiples alternativas que posee el Banco para sus consultas, emisiones y pago de Depósitos Judiciales. Una de ella es; por internet, mediante esta opción usted no tendría que ir a una Oficina del banco Agrario para conocer el estado de sus depósitos judiciales, y podría hacerlo desde la tranquilidad de su casa u oficina las 24 horas del día, los 7 días de la 7 semana. Simplemente, deberá: /

1. Ingresa a www.bancoagrario.gov.co y selecciona el botón “Depósitos Judiciales”.
2. Entra a la opción “Portal de Pagos y Depósitos Judiciales”.
3. Realiza el pago de la consulta (\$5.000+IVA) a través del botón PSE o botón BAC.
4. Obtendrás la información que necesitas actualizada y al instante.

El otro canal que le recomendamos es a través de las líneas telefónicas: (1) 5948500 si llama desde Bogotá, y 018000915000, si lo hace desde cualquier parte del país. Y a través de este medio usted podrá: Recibir información y asesoría en los diferentes productos y servicios ofrecidos por el Banco Agrario; Consultar el saldo y los últimos 5 movimientos de sus productos; Realizar pagos de créditos y tarjetas de crédito; Realizar transferencias entre cuentas del Banco Agrario; Consultar sus giros, depósitos especiales y solicitudes de crédito; Bloquear productos por pérdida o robo; Recibir asesoría sobre el uso de la Banca Virtual; Actualizar sus datos básicos; y Presentar peticiones, quejas o reclamos. La utilización de este canal tiene como beneficio que es Disponible las 24 horas y los 7 días de la semana, y recibirá un número de soporte correspondiente a las operaciones realizadas.

Además de lo anterior, el banco agrario posee muchos más canales de atención, pero este no es el medio para informarlos por lo que lo invitamos a que consulte la página www.bancoagrario.gov.co o si quiere de manera más rápida acceda a través del siguiente link. <https://www.bancoagrario.gov.co/Canales/Paginas/default.aspx>

b

Cualquier tipo de información adicional requerida respecto al estado actual de los procesos, puede ser tomada de primera mano, en el aplicativo de Justicia XXI el cual se puede ver desde cualquier PC a través de la página Web www.ramajudicial.gov.co, en el vínculo de consulta de procesos.

Adicional a ello, si su expediente cuenta con orden de pago, puede solicitar entrega de depósitos mediante el siguiente vínculo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVTOVQwME1GVlISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u mediante este canal recibiremos su solicitud y en un tiempo prudencial recibirá respuesta nuestra, al correo electrónico suministrado.

Ahora, si usted desea presentar algún memorial, lo puede hacer a través del correo electrónico cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Atentamente,

MARIA LUISA RUEDA ANGULO

Auxiliar administrativo grado 5

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-003 (pe cau)2017-00172-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-003 (peq cau)2017-00172-00
Demandante	SERVIPIEDRA S.A
Demandado	MALLERLIN GONZALEZ Y DELCY VELASQUEZ
Asunto	Terminación por pago.

En el proceso de la referencia se aprobó la liquidación del crédito (folio 61 del C.P) por la suma de \$10.846.200, y las costas por la suma de \$793.734.oo. (Folio 75 del C.P), para un monto total de la obligación por \$11.639.934.oo por informe secretarial a folio 26 del C.E. se tiene que se dio el pago de lo ordenado.

Se observan formatos DJ04 visibles a folio 21-24 del C.E, en el expediente que dan cuenta de los depósitos judiciales. entregados a la parte demandante en la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, por la totalidad del monto total de la obligación esto es la suma de \$11.639.934.oo

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. (...) Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. Por lo precedente el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Una vez ejecutoriado el auto se archive el proceso”. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: Dese por terminado el proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la ejecutada. Por secretaría librense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**



TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los ejecutados, o por intermedio de sus apoderados con facultades para recibir, si hay lugar a ello previa verificación de los Antecedentes Disciplinarios.

CUARTO: Sin condena en costas

QUINTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNELES DORADO

Juez

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-004-2005-00117-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-004-2005-00117-00
Demandante	MARLENE JIMENEZ DE PEÑARANDA
Demandado	CARLOS GIRALDO PEREIRA
Asunto	Aprueba Avalúo

Previo a señalar fecha para la diligencia de remate se observa que en auto de fecha 29 DE JUNIO DE 2021 fue dado en traslado el avalúo del inmueble con F.M.I No 060-6757 el cual no fue objetado por ninguno de los extremos del litigio; por tanto, se impartirá aprobación de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 444 del C.G.P.

Así mismo, se encuentra memorial en el que se solicita copia del expediente de la referencia, porque según el apoderado se dio la terminación del proceso sin que corresponda a la realidad. En consecuencia, este Juzgado

RESUELVE

PRIMERO: Por no haber sido objetado y encontrarse ajustado a la ley, APRUEBASE, el avalúo del inmueble identificado con F.M.I No 060-6757 de propiedad del demandado perseguido dentro del presente proceso, en la suma de \$95.640.000.00 de conformidad al avalúo Catastral aportado.

SEGUNDO: ALLEGAR expediente digitalizado a la parte interesada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-004-2005-00907-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-004-2005-00907-00
Demandante	ANIBAL OCHOA TORO
Demandado	LUZ ELENA QUINTERO
Asunto	Aprueba Avalúo

Previo a señalar fecha para la diligencia de remate se observa que en auto de fecha 16 DE ENERO DE 2020 fue dado en traslado el avalúo del inmueble con F.M.I No 060-119898 el cual no fue objetado por ninguno de los extremos del litigio; por tanto, se impartirá aprobación de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 444 del C.G.P. En consecuencia, este Juzgado

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: Por no haber sido objetado y encontrarse ajustado a la ley, APRUEBASE, el avalúo del inmueble identificado con F.M. I No 060-119898 de propiedad del demandado perseguido dentro del presente proceso, en la suma de \$436.837.500.00 de conformidad al avalúo Comercial aportado.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

SÓLICITUD CONTROL DE LEGALIDAD RAD. 13001400300420060001700

Jorgè Franco de la Rosa <francodelarosa@gmail.com>

Mié 14/07/2021 12:22 PM

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolívar - Cartagena <j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co <notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)

14-07-2021 -TODO-SOLICITUD DE TERMINACIÓN POR FALTA DE REESTRUCTURACIÓN-CONTROL DE LEGALIDAD.pdf;

DOCTOR:
ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ 003 DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

Referencia:	Proceso ejecutivo HIPOTECARIO
Cuaderno:	Principal
Radicación:	13001400300420060001700
Demandante:	Bancolombia S.A.
Demandado:	ARNOLDO VELAZQUEZ ACOSTA
Apoderado:	<i>jorge enrique franco de la rosa</i>

jorge enrique franco de la rosa, francodelarosa@gmail.com, en mi calidad de apoderado judicial de **Arnoldo Velázquez Acosta**, por medio del presente, concurre a su Despacho, en forma respetuosa para solicitar se sirva usted conforme al control de legalidad consagrado en el CGP, declarar la ilegalidad de todo lo actuado en este proceso, imponiendo a la parte demandante condena en costas, de conformidad a los precedentes judiciales; ya que de continuarlo, estaríamos frente a una violación directa de varios derechos fundamentales y a un pleno desconocimiento a las ordenes contenidas en la Ley 546 de 1.999, reconocidas por la Corte Suprema de Justicia en recientes pronunciamientos, desobedeciendo los precedentes de la más alta Corte en lo Civil, además violado los preceptos del artículo 42 de ley 546 de 1.999, la cual es una norma de orden y derecho público, por tanto de obligatorio cumplimiento para todos, en especial para los operadores judiciales.

jorge enrique franco de la rosa
C.C. 19.414.418 de Bogotá D.C.
T.P. 59277 CSJ

Se remite copia al Bancolombia, notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co declaro bajo la gravedad del juramento, que desconozco otros correos de la parte demandante.

--
Si el presente correo es recibido en alguna entidad judicial fuera del horario de recepción (8:00 A.M. a 5:00P.M.) o en día inhábil, se deberá entender que su recibo corresponde al siguiente día hábil, según lo previsto en la legislación Colombiana vigente.

"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe"
- Eric Hoffer -

jorge enrique franco de la rosa
C.C. 19.414.418 de Bogotá
T.P. 59.277 del C. S. J.

Consultor General e Integral en Derecho - Abogado Litigante

Asesoría Integral a usuarios bancarios, **UPAC-UVR**

Conciliador, Árbitro y Amigable Composedor (SICAAC)

Insolvencia Económica y Reactivación Empresarial

Coach Empresarial - Marketing y Liderazgo

Networker Profesional

IMMUNOTEC-Omnilife

Life Coach, en formación en el ICG

Móvil: (57) 300-208-4978

Cartagena de Indias D.T. y C.

Montería (Córdoba)

Colombia-América del Sur

jorge enrique franco de la rosa

Abogado-Universidad INCCA de Colombia

Diplomado en derecho procesal - U Cartagena - Colegio Mayor del Rosario
Diplomado en Derecho Marítimo Internacional y Puriuario - Armada Republica de Colombia - DIMAR

Conciliador - Árbitro - Amigable Compositor (SICAC)

Corporación Corporativistas - Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje de Colombia

Insolvencia de persona natural no comerciante

Experto en reestructuración empresarial

francodelarosa@gmail.com

Calle 26 # 71-231 Torre 1 Apto 1104

Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia

Teléfono: 57-3002084978

DOCTOR:

ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ 003 DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

Referencia:	Proceso ejecutivo HIPOTECARIO
Cuaderno:	Principal
Radicación:	13001400300420060001700
Demandante:	Bancolombia S.A.
Demandado:	ARNOLDO VELAZQUEZ ACOSTA
Apoderado:	jorge enrique franco de la rosa

PRINCIPIO PRO HOMINE - Alcance / PRINCIPIO PRO HOMINE - Concepto / PRINCIPIO PRO PERSONA - Concepto / PRINCIPIO PRO PERSONA - Alcance

"Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que "sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental"." (Corte Constitucional, Sentencia C-438/13, M.P. Dr. ALBERTO ROJAS RIOS).

"...En ese orden de ideas, puesta nuevamente la Sala en la necesidad de examinar el asunto resulta necesario adoptar una única posición en cuanto a si la existencia de procesos coactivos o de embargos de remanentes en contra del demandado impide o no la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, por la falta de reestructuración del crédito. Es decir, a través de estas líneas la Sala procederá a unificar su posición.

Sobre el particular, la Sala considera que lo más razonado es mantener la postura adoptada en la sentencia STC14779-2019, toda vez que, además de lo dicho en esa oportunidad, se advierte que la legislación vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad económica de una persona. Por el contrario, conforme al artículo 176 del Código General del Proceso, el juez deberá apreciar las pruebas «en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».

Entonces, no basta con advertir la existencia de un trámite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido

reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales están en la obligación de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminación del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, según lo expuesto, y en aras de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, cuando éste se vea comprometido.

5. Bajo el anterior contexto, se anticipa la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la determinación cuestionada no tuvo en cuenta la normatividad aplicable ni los precedentes jurisprudenciales atinentes a la obligatoriedad de la reestructuración de los créditos de vivienda adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, como lo es el crédito de vivienda que contrajo el señor Suárez Rangel. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC5248-2021, M.P. Dr. Francisco Ternera Barrios).

jorge enrique franco de la rosa, varón, mayor de edad, identificado con C.C. 19.414.418 de Bogotá D.C., abogado inscrito en el Registro Nacional de Abogados, titular de la tarjeta profesional 59277 del Consejo Superior de la Judicatura, vecino de esta ciudad, residente en la calle 26 número 71-231, torre 1 apartamento 1104, Conjunto Residencial Plazuela Mayor, electrónica francodelarosa@gmail.com, en mi calidad de apoderado judicial de Arnoldo Velázquez Acosta, por medio del presente, concurro a su Despacho, en forma respetuosa para solicitar se sirva usted conforme al control de legalidad consagrado en el CGP, declarar la ilegalidad de todo lo actuado en este proceso, por consiguiente, el rechazo de la presente demanda, imponiendo a la parte demandante condena en costas, de conformidad a los precedentes judiciales existentes al respecto; ya que de continuarlos, estaríamos frente a una violación directa de varios derechos fundamentales y a un pleno desconocimiento a las ordenes contenidas en la Ley 546 de 1.999, reconocidas por la Corte Suprema de Justicia en recientes pronunciamientos, desobedeciendo los precedentes de la más alta Corte en lo Civil, además violado los preceptos del artículo 42 de ley 546 de 1.999, la cual es una norma de orden y derecho público, por tanto de obligatorio cumplimiento para todos, en especial para los operadores judiciales.

ANTECEDENTES

1.- La parte demandante instaura demanda Ejecutiva Hipotecaria a efecto de obtener por dicha vía, el pago de una suma de dinero contenida en el título valor allegado con la demanda, suscrito por mis mandantes antes del 23 de diciembre de 1.999 (fecha de expedición de la Ley de Vivienda 546 de 1.999), sin cumplir con el lleno total de los requisitos para conformar un título valor complejo, pues no obra en el plenario la aprobación de la reliquidación aprobada y tampoco la reestructuración de la obligación perseguida, se libró mandamiento de pago. Máxime si se tiene en cuenta que este proceso se instauró por la misma obligación que ya había sido debatida en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena, cuya radicación era 14846, Con lo que de por si violó lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias SU-813 de 2.007 y T-1240 de 2008, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, en la que reitera que sin reestructurar la obligación, es imposible reiniciar o presentar a su cobro la misma obligación, lo que los jueces de instancia se negaron a aplicar, y este Juagado Tercero De Ejecución Civil Municipal de Cartagena, ha omitido darlo por terminado, sin justificación.

2.- El título valor original, base de la presente acción, fue suscrito en UPAC y se garantizó dicha obligación con una hipoteca de primer grado, un pagaré, obligación que por ser instrumentada bajo el sistema UPAC, la cual por ley al parecer fue reliquidada, más no consta

la aprobación debida por parte de la Superintendencia Bancaria, para luego, proceder a hacer la **reestructuración** y finalmente la redenominación del pagaré en UVR o en pesos, contando con la anuencia y acuerdo entre las partes, en las condiciones más favorables para el deudor, etcétera, tal como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia SU-813 de 2.007, lo que jamás sucedió, habiendo iniciado este nuevo proceso, en forma ilegal y violando con ello lo dicho por la Corte Constitucional, por lo que elevo nuevamente la petición, basado en las nuevas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que pasaré a enunciar y que aporé.

3.- El despacho al momento de proferir mandamiento de pago, no se percató que la entidad demandante no había obtenido la aprobación de la Superbancaria sobre la reliquidación y mucho menos, que haya aportado la **reestructuración** del crédito tal como lo había ordenado la ley 546 de 1.999 en su artículo 42, y la Corte en sus reiteradas jurisprudencias, artículo plenamente complementado y desarrollado en los diferentes fallos judiciales de las altas Cortes, tal como lo sustentaré, por ende, el título valor pierde toda su eficacia y se torna inejecutable, así existan otras obligaciones.

4.- Este Juzgado tiene pleno conocimiento que esta situación es así y que debe darse por terminado el proceso, por antecedente directo, ya que dentro del proceso seguido contra Germán Enrique Pérez Berthel la Corte Suprema de Justicia, le ordenó darlo por terminado, sin más reparos, mediante sentencia de tutela STC15892-2019, del 25 de noviembre de 2019, de la que fue M.P. el Dr. Ariel Salazar Ramírez. Que adjunto como precedente.

“...5. Establecido entonces que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que tratándose de la reestructuración de créditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del título, de modo que no consumir esa premisa impide la ejecución, así se trate de un nuevo acreedor.

En tal sentido, ha expresado la Sala que:

En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados (...). Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00)

Este mismo criterio se expresó en sentencias de 20 de mayo de 2013, rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, rad. 2013-0645-01.

De ahí, que la falta de la realización del procedimiento mencionado, se convierte en una limitación insuperable para que se presente una demanda y se continúe con la ejecución del juicio hipotecario en el que específicamente se cobran créditos de vivienda.

6. En estricta sujeción a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecución adelantada inicialmente por el Banco Granahorrar S.A., y con posterioridad por el cesionario Héctor Manuel Lobelo Romero, contra el accionante no podía llevarse a cabo, porque no se atendió el presupuesto de la reestructuración, circunstancia que torna la obligación en inexistente por desconocer la expresa condición impuesta por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que previó que aplicada la reliquidación, la entidad financiera debía proceder en la forma explicada.

Destáquese que el ejecutante en momento alguno manifestó que hubiese agotado dicho procedimiento ineludible con posterioridad a la aplicación del alivio

estatal y reliquidación de las obligaciones, y mucho menos allegó prueba que así lo demostrara.

Al respecto, debe recordar la Sala que la Corte Constitucional previó inclusive la posibilidad de que deudor y acreedor no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificación de las condiciones del crédito, y en atención a ello, indicó varias alternativas en la Sentencia SU-787 de 2012, dentro de las que se encuentran:

(...) reconstituir las condiciones del crédito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicaría que una vez reliquidado el crédito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligación por lo que restase del tiempo inicialmente pactado. Así por ejemplo, en un crédito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 años, a partir del 7 de julio de ese año, si el deudor entró en mora en marzo 7 de 1999 y se le inició un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese año, que por virtud de la ley debía darse por terminado en el año 2000, para normalizar su situación, una vez reliquidada la obligación y realizados los abonos correspondientes, el deudor tendría que pagar la cuotas vencidas, que serían al menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes once años.

La anterior solución, sin embargo, resulta insuficiente para el propósito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidación de los créditos.

Una segunda posibilidad, entonces, sería reestructurar la obligación, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurrió en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aquí cabría, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuración, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurrió en mora.

Una tercera posibilidad sería aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuración se hiciese tomando para ello el plazo máximo previsto en la ley, que es de quince años, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuración. Las demás condiciones serían las del crédito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte más beneficioso para el deudor.

7. En ese orden, es claro que el juzgado accionado transgredió el derecho al debido proceso del extremo pasivo del juicio ejecutivo, pues continuó con el trámite del cobro compulsivo, sin que se reunieran los requisitos indispensables para que las deudas fueran exigibles, de conformidad con la legislación y la jurisprudencia, a pesar de que como lo ha referido esta Corte, el juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encontraban presentes –artículo 430 del Código General del Proceso –, y así verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al título base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuación procesal, para optar por no continuar con la misma, si fuera el caso. (CSJ STC, 8 ago. 2012, rad. 00134-01).

Al respecto esta Corporación, en un caso de similares características precisó que: *Del contenido de la enunciación anterior se deduce la procedencia de la protección extraordinaria demandada en este caso, por cuanto del repaso de la sentencia aquí cuestionada se establece, que ciertamente la Corporación acusada incurrió en un*

proceder opuesto al ordenamiento jurídico, puesto que la interpretación del Tribunal se aparta de los pronunciamientos que la Corte ha emitido sobre la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio terminado en virtud del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar la nueva ejecución. (CSJ STC 13 feb. 2013, Rad. 02956-00).

8. Con fundamento en lo expuesto, se impone revocar el fallo que por vía de impugnación se ha revisado, y en su lugar, conceder la tutela incoada, cuestión que atribuye impartir las ordenes necesarias para que dentro de las cuarenta y horas siguientes a la notificación de esta providencia, el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena deje sin valor y efecto los proveídos 23 de marzo, 26 de septiembre de 2017 y, 26 de febrero de 2018 que negaron la solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito presentada por el accionante con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio, como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte una nueva decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley **REVOCA**, la sentencia impugnada y en su lugar, **CONCEDE** el amparo constitucional invocado. En consecuencia, dispone:

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia deje sin valor y efecto los proveídos 23 de marzo, 26 de septiembre de 2017 y, 26 de febrero de 2018 que negaron la solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito presentada por el accionante con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio, como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte una nueva decisión.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE telegráficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, remítase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión."

PRECEDENTES JUDICIALES QUE SUSTENTAN LA PRESENTE SOLICITUD

Para efectos de determinar el precedente en cada una de las sentencias que alego, me permito transcribir el criterio esbozado por la Corte Constitucional en la Sentencia **T-292 de 2006**, en la cual establece como identificarlo en cada una de las Sentencias, dice la Corte en esta sentencia:

"De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes". (negritas y subrayas fuera de texto)

Fincada en este criterio la Corte Suprema de Justicia, decidió y resolvió un conflicto cuya Ratio está en la Sentencia CSJ STC, 3 de julio de 2014 dentro del proceso radicado con el Número 01326-00 y que luego fue ratificada por otras Sentencias, lo que implica entonces, una reiteración jurisprudencial, en salvaguarda del derecho a la igualdad, el debido proceso, acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el respeto al acto propio.

Nos enseña la sentencia en mención o siguiente:

"Los razonamientos del ad quem en la sentencia que confirmó la orden de seguir adelante con la ejecución, son contrarios a la verdadera esencia de la ley de vivienda, los pronunciamientos de exequibilidad de la misma y numerosos fallos de tutela sobre la materia, que, como se dejó explicado con antelación, tienen como obligatoria la reestructuración de los créditos hipotecarios de vivienda pendientes de satisfacción, adquiridos con antelación a 1999 en UPAC, antes de proceder a su recaudo ejecutivo. El título ejecutivo presentado tiene origen en un crédito para la adquisición de vivienda, resulta necesario analizar la exigibilidad de la obligación contenida en el mismo siendo que existen pronunciamientos jurisprudenciales atinentes a la necesidad de la reestructuración de la obligación".

El anterior criterio ya había sido esbozado o fundamentado en la ST-107-12 de la Corte Constitucional, sin olvidar que ya la obligatoriedad o exigencia de la reestructuración venía reglada desde 1999 con la expedición del artículo 42 de la Ley 546 de ese mismo año, reiterándose aún más con los fundamentos esbozados en la SU-813/07, siendo entonces, la Sentencia CSJ STC, 3 de julio de 2014 una reiteración de la obligatoriedad de reestructurar el crédito de vivienda a efecto de poder incoar la acción ejecutiva.

Así mismo, la Corte en Providencia STC 20 de mayo del 2013, en el proceso radicado 2013-00914-00 viene nuevamente a ratificar **la obligatoriedad de la reestructuración del crédito** cuando expresamente manifestó:

"En sentencia de 28 de Marzo de 2012, exp. 2012-00546-00 se acusó la actuación de un Tribunal Superior al revocar la sentencia que había declarado probada la excepción de prescripción al considerar que el título base de la ejecución no cumplía con los requisitos para ser exigible por falta del presupuesto de reestructuración del crédito..."

Hasta lo aquí expuesto, es clara la reiterada ratificación jurisprudencial de la exigibilidad de la obligación de acreditar el agotamiento del proceso de reestructuración de la obligación, por lo que es claro entonces, que es un expreso requisito de procedibilidad que el ejecutante debe agotar previa a la iniciación de una acción ejecutiva so pena, de que la demanda sea rechazada o en su defecto se declare en cualquier instancia del proceso su ilegalidad y/o su terminación a efecto de no incurrir en una vía de hecho y/o en un prevaricato.

A su turno la sentencia SU 813 de 2007, reitera:

"la exigencia de la reestructuración de los créditos se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, por lo que el desarrollo jurisprudencial lo que hizo fue clarificar y unificar criterios sobre una exigencia legal, que le es aplicable al crédito que se pretendía ejecutar".

Lo que es claro entonces, que dentro del presente proceso y con el fin de no incurrir en una vía de hecho, se hace indispensable la exigencia de la terminación del proceso por carencia de la reestructuración del crédito, la cual como se viene sosteniendo no existe en el plenario y jamás ha sido aportada en ninguno de los dos (2) procesos que se han adelantado en contra del demandado, habiendo tenido que hacerlo antes de iniciar este último que nos ocupa, y lo cual pasaron por alto los jueces de instancia y se negaron a reconocer lo por mi excepcionado.

37

En idéntico sentido ya se había pronunciado la Corte Constitucional en su Sentencia SU 787 del 11 de octubre de 2012 en la que claramente manifestó que **se hacía necesario efectuar la reestructuración del crédito de vivienda a fin de poder iniciar la acción ejecutiva.**

El presente concepto también ha sido ratificado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena mediante el fallo de 16 de junio de 2015 proferido dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el Juzgado Primero Civil de Cartagena siendo demandante el Banco Colpatría contra Henry Sosa radicado con el número 338-2006.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, siendo ponente el Dr. Álvaro Fernando García Restrepo, profirió la sentencia STC5314-2016, Radicación: 11001-02-03-000.2016-00947-00 de fecha 28 de abril de 2016, acción instaurada por Ricardo López Solano y Luz Helena Pumarejo de López, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Cartagena, sentenció:

“4.3. En tal sentido, hasta aquí son tres las conclusiones que se desprenden: la primer, que el derecho a la reestructuración es aplicable a os créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecución anterior o de si la obligación estaba al día o en mora; la segunda, que la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y la tercera, que ésta es una obligación de las entidades financieras, pues esos documentos <<conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecución>> 8CSJ STC2747-2015), sin que importar, como se dijo en líneas anteriores, si la controversia se promovió con posterioridad a la vigencia del mentado estatuto y, con anterioridad de la SU813/2007, PUES <<lo cierto es que la exigencia de <<reestructuración>> estaba vigente desde 1999 con la expedición del artículo 42 de la Ley 546 del 23 de diciembre de ese año. De ahí que la precitada decisión lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Política (CSJ STC4933-2016)”

En obediencia al fallo anterior, el Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena, se pronunció en providencia del 11 de mayo de 2016, con ponencia del Dr. Ramón Alfredo Correa Ospina, dentro del proceso ejecutivo hipotecario radicado 00012-2007, del Banco Davivienda S.A., como apoderado especial de Titularizadora Colombiana S.A. (HITOS), contra Ricardo López Solano y Luz Helena Pumarejo de López, y dice en ella, en su parte pertinente, dicho sea de paso, obligatoria jurisprudencia:

*“5. Se tiene entonces que se debe reestructurar el crédito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir la ejecución, observándose que en el presente caso la obligación exigida por la sociedad ejecutante fue adquirida por los ejecutados bajo el sistema UPAC, esto es el 5 de agosto de 1998 y de la revisión del plenario se destaca una certificación de un alivio otorgado a los deudores, sin que se acreditara la reestructuración del crédito.
“Así las cosas, el título ejecutivo se torna insuficiente para darle legitimidad a la ejecución adelantada y por ende, el título aportado como base de recaudo, no reúne los requisitos indispensables para que la deuda sea exigible, de conformidad con el precedente constitucional.”*

Así mismo en recientes sentencias proferidas por el H Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena, mediante las cuales ha revocado las decisiones de varios

Juzgados de ese Distrito judicial, se había pronunciado en igual sentido, causando extrañeza al suscrito, la decisión adversa, que motivó la acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y su superior, las cuales corresponden a los procesos:

.- Sentencia proferida por el H Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado por el Banco Colpatría S.A contra Roberto Martín Angulo Hernández y Liliana del Socorro Hernández Yepes mediante providencia de fecha 16 de Junio de 2015.

.- Sentencia proferida por el H Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado por Conavi-Bancolombia contra Henio José Figueroa Morales y Dubi Alcazar González mediante providencia de fecha 27 de octubre de 2015.

.- Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil de Cartagena dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado por CGA S.A.S. en liquidación, Juan Camilo Vergara Navarro, Mirtha Omaira Navarro Pérez y Concasa Inversiones S.A.S. contra Liliana Ruth Blanco Blanco, Tatiana de Jesús Blanco Blanco y Enith del Carmen Blanco Agámec mediante providencia de fecha 10 de Mayo de 2016.

En igual sentido, se ha ratificado la exigencia u obligatoriedad de la reestructuración de los créditos de vivienda antes de proceder a iniciar la respectiva demanda ejecutiva, las siguientes Sentencias:

.-Sentencia STC3865-2015, RAD 609-2015

.-Sentencia CSJ STC2747, RAD 00037-2015

.-Sentencia T881 de 2013

.-Sentencia Corte Suprema de Justicia 5 de diciembre de 2014 expediente 2750-2014

.-Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil de Cartagena dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado por el BCH – CISA – CGA- Juan Camilo Vergara Navarro contra Benjamín Semacarit, Ratificada por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena mediante providencia de fecha 1 de diciembre de 2015.

.-Sentencia proferida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena, de fecha 16 de junio de 2015, M.P. Dr. Marcos Román Guío Fonseca, ref: Juzgado: 13001310300520010014902

.- STC 3865-2015 de fecha 7 de abril de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco.

.- Sentencia proferida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena de fecha 23 de abril de 2015, M.P. Dr. Omar Alberto García Santamaría, radicado número 13001-31-03-005-2004-00111-03

Constituye lo anterior, se repite, una clara reiteración de jurisprudencia y por ende un precedente judicial de forzoso cumplimiento, para todos los operadores judiciales, incluida su señoría.

Es totalmente claro, que en todas y cada una de las sentencias esbozadas como precedente judicial, La *ratio decidendi* de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil – Familia de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, tuvo como corolario, la obligatoriedad (DEBER) de la parte Ejecutante de efectuar la reestructuración del crédito de vivienda a fin de poder iniciar la acción ejecutiva.

Si bien en el pasado la Corte Suprema de Justicia, negó terminar procesos en los que hubiere remanentes u obligaciones catastrales, eso ha quedado en el pasado. El concepto cambió. Vemos que el nuevo criterio unificado de la Corte Suprema de Justicia, es la terminación del proceso, así haya una o más obligaciones insolutas, reconocidas o no en el proceso ejecutivo como remanentes, aún si solo se trata de la carga impositiva catastral. Lo anterior ha quedado plasmado en varias sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia.

Como si lo anterior no fuere suficiente, desconozco si su señoría tiene conocimiento de los últimos fallos en acciones de tutela que se han producido, en todo caso, haré mención de uno de los más recientes, que se ha producido en un proceso por mi defendido ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, donde el juez de la causa y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en acatamiento al precedente judicial, pese a existir, varias obligaciones pendientes, determinaron dar por terminado el proceso similar al que nos ocupa; el abogado de la contraparte estando en disconformidad con los operadores judiciales, formuló acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil, quien encontró fundados mis planteamientos con relación al tema de la reestructuración.

Le informo que hay nueva postura en la Corte, Suprema de Justicia, salas Civil y Laboral, en la que se señala que sin importar si hay o no otras obligaciones, con o sin embargo de remanentes; como no los hay y jamás lo ha habido en este proceso; se deben dar por terminados los procesos por la falta de “reestructuración”. Me refiero a las sentencias STC474-2020 Magistrado ponente AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Radicación n° 11001-02-03.000-2019-03992-00 (Aprobado en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinte) Bogotá, D.C, veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020); y 5TL2942-2020 Magistrado ponente FERNANDO CASTILLO CADENA Radicación 88357 Acta 8 Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinte (2020) que aporto y anexo a este escrito.

En uno de sus apartes de negativa de la nulidad, lo cual nos favoreció, dice la sentencia de la sala civil:

“3. Para abundar en razones, la Sala en reciente pronunciamiento precisó la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos como el de autos, no tengan por desvirtuada la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC con la mera existencia de un embargo coactivo que recaiga sobre predio gravado hipotecariamente, pues con el propósito de dar prevalencia al derecho fundamental a la vivienda es de su resorte emprender una actividad proactiva en tal materia, tesis que en esta oportunidad se reitera y que, por ende, implica una nueva postura de esta Corporación, al señalar:

...pese a haberse entendido, como el elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia, per se, no aparea tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enunciado.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus “reales posibilidades financieras”, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación, derecho de rango suprallegal y fin primordial de la Ley 546 de 1.999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores... de acceder a la mencionada “reestructuración”, la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de “vivienda” originado en el extinto sistema Upac, está directamente relacionado con la garantía iusfundamental a la “vivienda”.

No puede bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la “incapacidad económica” del extremo allá demandado por la sola presencia del aludido “embargo coactivo”, pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento en la ley o en la Constitución, donde el hecho base para el “embargo coactivo” para ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores (CSJ, STC14779-2019, 30 de octubre, rad. 2019-03453-00).

4. En suma, para desvirtuar la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC, con el propósito de garantizarles el derecho a invocar la necesidad de la reestructuración de tales deudas, es insuficiente la medida coactiva de embargo que pese sobre el fundo objeto de la garantía real destinado a su lugar de habitación.”

Una serie de nuevos pronunciamientos avalan la terminación pedida en este escrito, me refiero a las recientes sentencias, entre ellas, una de las últimas por mi conocida; de unificación y fijación de criterio; que es la Sentencia STC5248-2021 de fecha doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Radicación: 68001221300020200049201, aprobada en sesión virtual del cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (21) siendo el Magistrado Ponente Francisco Terner Barrios:

Ahora, en el fallo de tutela STC351-2021, la Sala retomó el lineamiento asumido en el 2019, en cuanto resolvió que «el Juzgado terminó resolviendo que en el caso concreto no se imponía la reestructuración de la obligación, por cuanto el ejecutado carecía de la solvencia económica necesaria para sufragarla, circunstancia que extrajo, simplemente, de la existencia del embargo de remanentes, fundamentación que, como lo ha sostenido esta Sala, resulta insuficiente» (CSJ STC351-2021 de 28 ene. 2021).

Empero, lejos de la pasividad y la estabilidad de la tesis, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia, se han emitido, razonadamente, otros variados pronunciamientos, como el contenido en la providencia STC1776-2021, en el cual se decidió que la determinación entonces cuestionada no resultaba subjetiva o caprichosa, al considerar que «la eventual terminación del juicio hipotecario en nada contribuiría a salvaguardar el predio de los ejecutados, dado el embargo de remanentes decretado respecto de ese juicio».

En ese orden de ideas, puesta nuevamente la Sala en la necesidad de examinar el asunto resulta necesario adoptar una única posición en cuanto a si la existencia de procesos coactivos o de embargos de remanentes en contra del demandado impide o no la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, por la falta de reestructuración del crédito. Es decir, a través de estas líneas la Sala procederá a unificar su posición.

Sobre el particular, la Sala considera que lo más razonado es mantener la postura adoptada en la sentencia STC14779-2019, toda vez que, además de lo dicho en esa oportunidad, se advierte que la legislación vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad económica de una persona. Por el contrario, conforme al artículo 176 del Código General del Proceso, el juez deberá apreciar las pruebas *«en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos»*.

Entonces, no basta con advertir la existencia de un trámite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales están en la obligación de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminación del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, según lo expuesto, y en aras de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, cuando éste se vea comprometido.

5. Bajo el anterior contexto, se anticipa la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la determinación cuestionada no tuvo en cuenta la normatividad aplicable ni los precedentes jurisprudenciales atinentes a la obligatoriedad de la reestructuración de los créditos de vivienda adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, como lo es el crédito de vivienda que contrajo el señor Suárez Rangel.

En efecto, tal como quedó reseñado, los estrados judiciales indicaron que la nulidad ya había sido planteada previamente y resuelta desfavorablemente y que, por consiguiente, el convocado no podía volver a revivir etapas procesales ya precluidas o providencias ejecutoriadas y en firme, sin tener en cuenta que lo reclamado es un mandato legal y, por tanto, *«el derecho a la reestructuración es aplicable a los*

créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecución anterior o de si la obligación estaba al día o en mora; (...) es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y (...) ésta es una obligación tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo crédito (...)» (CSJ 11990-2019).

De manera que, en esas condiciones, no era posible alegar que el asunto ya había sido resuelto con anterioridad, pues, en torno a ello, la Sala ha advertido que *«la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (...) es viable resolver de fondo la petición»* (CSJ STC8059-2015).

Así las cosas, se resalta que es deber de los jueces incluidos los de ejecución, revisar si junto con el título base del recaudo la parte demandante ha acreditado la reestructuración del crédito, puesto que, como se ha remarcado insistentemente por esta Corporación, esos documentos conforman *«un título*

ejecutivo complejo» y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecución.

Igualmente, como quiera que la decisión del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga también se sustentó en que *«no era procedente dar aplicación a la referida normativa por cuanto existe embargo de remanentes sobre los bienes de propiedad del demandado hipótesis que impide dar por terminado el proceso...»*, lo cual fue confirmado por el superior, resulta necesario que el asunto sea nuevamente desatado, puesto que, como se advirtió, aquella motivación es **insuficiente**, dado que no puede desvirtuarse la capacidad económica del deudor -*per se*- por la existencia de un embargo de remanentes, todo lo cual debe ser objeto de análisis en la respectiva causa.

En ese sentido, no sobre señalar que *«El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera que tras conocerlas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso»* (STC14779-2019).

6. Desde luego, según lo reseñado, lo resuelto en el trámite debatido compromete los derechos fundamentales alegados por el accionante y abre paso a conceder el resguardo, de modo que la decisión del *a quo* constitucional será revocada y, por consiguiente, se dispondrá que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Bucaramanga deje sin efecto la providencia del 3 de junio de 2020, a fin de que proceda a dictar una nueva en la que se tengan en cuenta las precisiones expuestas, según en derecho corresponda.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para, en su lugar, **CONCEDER** el amparo deprecado.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (*rad.* 2001-01291), deje sin efecto la providencia que emitió en segunda instancia el 03 de junio de 2020, junto con las actuaciones que de ella dependan.

TERCERO: Cumplido lo anterior y, en un término no superior a cinco (5) días, la sede judicial acusada deberá emitir una nueva providencia, en la que resuelva la apelación propuesta contra el proveído dictado el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga, teniendo en cuenta las precisiones plasmadas en esta providencia, según en derecho corresponda. Por Secretaría remitase copia de esta determinación.

CUARTO: Comuníquese telegráficamente lo aquí dispuesto a los interesados y, oportunamente, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE

En la Sentencia C-539 del 2011, la Corte Constitucional se pronunció así:

"Sobre el nivel de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha precisado, que es necesario distinguir entre los tres componentes básicos de los fallos de constitucionalidad: la ratio decidendi, los obiter dictum y el decisum. Siendo estrictamente obligatorios la decisión y la ratio decidendi que la sustenta. Así mismo, ha aclarado que el desconocimiento de un fallo de control de constitucionalidad, por las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, por aplicación de una norma legal que haya sido declarada inexecutable por la Corte, puede implicar la comisión del delito de prevaricato, y que es vinculante tanto la parte resolutoria como las consideraciones que fundamentan de manera directa e inescindible tal decisión"

"Por tanto, la Corte Constitucional ha señalado en múltiple jurisprudencia, la vigencia y validez de la fuerza vinculante del precedente judicial en materia de tutela, señalando que las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los precedentes que fije la jurisprudencia constitucional. Así, precisó que si bien es cierto que la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio decidendi, constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma. Por tanto, las autoridades públicas solo pueden apartarse de la postura de la Corte cuando se "verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso concreto", o que "existan elementos de juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica", en cuyo caso se exige una "debida y suficiente justificación".

En la Sentencia T- 055 del 2012 la Corte reiteró la obligatoriedad del precedente y dijo:

"Por todo lo anterior, es evidente que existió un desconocimiento de regulaciones claras, tanto sobre la procedencia de la acción de tutela, como acerca de la competencia para conocer de la misma, por lo cual es imperioso indicar que al apartarse inmotivadamente de la interpretación sensata de la preceptiva vigente y de precedentes jurisprudenciales ampliamente reafirmados por la Corte Constitucional, resultó transgredida la Constitución Política colombiana y las normas que la desarrollan, en reprochable actitud que ha generado incertidumbre, desigualdad y violación a la seguridad jurídica."

"Al analizar la exequibilidad del artículo 413 de la Ley 599 de 2000, que describe típicamente el delito de prevaricato por acción, en sentencia C-335 de abril 16 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación explicó":

"Existen casos en los cuales un servidor público incurre en el delito de prevaricato por acción, no por desconocer simplemente la jurisprudencia sentada por una Alta Corte, considerada ésta como una fuente autónoma del derecho, sino porque al apartarse de aquélla se comete, a su vez, una infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general."

El delito de prevaricato por acción no se comete por una simple disconformidad que se presente entre una providencia, resolución, dictamen o concepto y la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, a menos que se trate de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general."

"En consecuencia, descartándose el pronunciamiento de nulidad, en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia propios de la acción de tutela, será revocado el fallo adoptado en agosto 2 de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó el proferido en junio 24 del mismo año por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad, concediendo la tutela pedida contra ECOPETROL por el señor Hernando Hernández Pardo, mediante apoderado. En su lugar, será declarada improcedente la acción de tutela incoada."

Además, serán compulsadas copias del presente expediente T-3196343, incluida esta sentencia, con destino a la señora Fiscal General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a esclarecer si en este asunto pudiere existir la consumación de conductas punibles, por parte de los servidores judiciales respectivos y de quienes dolosamente hubieren determinado su comportamiento, o fueron coautores, cómplices o intervinientes."(subrayas y negrillas fuera de texto)

En la Sentencia SU-047 de 1999, la corte se pronunció así:

"El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas¹, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es

39

planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones previas”.

Y la Sentencia C-400 de 1998 dijo:

“En ese orden de ideas, un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho (subrayas no originales).”²

En la Sentencia C-816 del 2011, la discusión sobre si la jurisprudencia hace o no parte de las fuentes primarias del Derecho tuvo su pronunciamiento de constitucionalidad, mediante la Sentencia C-539 del 2011, en la que la Corte Constitucional la elevó a rango de fuente primaria del Derecho, a la par con la ley.

Ahora, mediante la Sentencia C-816 del 2011, el alto tribunal se refirió a cuál de las cuatro altas cortes tiene prelación en el acatamiento de su jurisprudencia.

Dijo la Corte en esta sentencia:

El análisis de la Corte comenzó por precisar que el artículo 230 de la Constitución Política, al señalar que los jueces, en sus decisiones “sólo están sometidos al imperio de la ley”, está disponiendo que en el orden jurídico la ley, en su acepción genérica y más comprensiva, ocupa un lugar preeminente en el sistema de fuentes del Derecho. Este precepto se reitera en el inciso segundo de la misma norma superior, al referirse a la jurisprudencia –y a la doctrina, la equidad y los principios generales del derecho– como criterio auxiliar de la función judicial. Esto es, que por regla general, la jurisprudencia tiene para los mismos jueces que la profieren, un valor de fuente auxiliar en su labor de interpretación de las normas jurídicas, acorde con su autonomía. Siendo la jurisprudencia, en principio, criterio auxiliar de interpretación, la Corte reiteró que ella tiene fuerza vinculante para los funcionarios judiciales cuando se trata de la proferida por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones previstas en la Carta Política. Tal fuerza vinculante deriva de mandatos constitucionales que consagran la supremacía de la Constitución, el deber de sujeción de todas las autoridades públicas a la Constitución y a la ley, el derecho de igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de legalidad y la buena fe a la que deben ceñirse las actuaciones de las autoridades públicas, no siendo contraria sino complementaria del concepto de la

² Sentencia C-400 de 1998 MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico No 57.

jurisprudencia como criterio auxiliar de interpretación. A su vez, las autoridades administrativas son también sujetos de estos mandatos superiores y en consecuencia, de la fuerza vinculante de los fallos emanados de las altas cortes jurisdiccionales. Adicionalmente, frente a ellas, el legislador dispone de una amplia potestad de configuración para establecer parámetros de la actuación administrativa de naturaleza judicial.

Y resolvió

“Declarar **EXEQUIBLES** los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Por último, en la Sentencia 2406 del 2012 emanada del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, mediante la cual sancionó a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar dijo:

“Ahora bien, previo a analizar el material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan”.

De lo expuesto se concluye -sin lugar a dudas- que los funcionarios investigados incurrieron -con el proferimiento de las sentencias de tutela referidas-, desde el punto de vista objetivo, en desconocimiento de las normas jurídicas y los precedentes sobre la materia, con lo que se colma el primer requisito exigido por el legislador para imputar cargos, debiendo la Sala discriminar exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello ocurrió a efectos de concretar la imputación de acuerdo a la participación de cada uno de los Magistrados investigados”. (subrayas y negrillas del suscrito)

“En torno a la situación de la Magistrada inculpada, es del caso anotar que no es posible en el sistema jurídico colombiano desconocer los precedentes y resolver dos situaciones jurídicas iguales en forma disímil, tema ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU 047 DE 1999, en la cual consolidó los pasos para que la misma Corporación pueda cambiar un precedente, providencia en la cual se consideró: (subrayas y negrillas fuera de texto)

“Evaluado el acervo probatorio, se advierte que la modalidad de la conducta fue cometida presuntamente a título de **DOLO**, ya que aparece que en forma consciente y voluntaria los servidores judiciales se apartaron de las normas jurídicas aplicables al caso y especialmente de las decisiones judiciales que sobre el mismo tema habían hecho tránsito a cosa juzgada y los precedentes de su superior funcional cuya ratio decidendi resultaba obligatoria” (negrilla en el texto original)

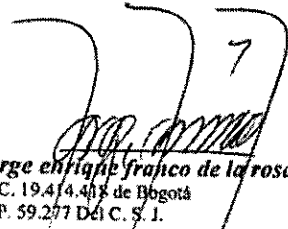
No queda ninguna duda Señoría, que en este caso, existe ley aplicable y precedentes jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento, por lo tanto constituyen en normas vinculantes que deben ser obedecidos, por tanto y cuanto este proceso, se tiene que dar por terminado ya,

al ser totalmente violatorio a la ley y a los precedentes jurisprudenciales existentes en ésta materia, so pena de lesionar derechos fundamentales, entre otros, al debido proceso y derecho de defensa conexos con el derecho a una vivienda digna. Condene en costas y agencias en derecho conforme a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, esto es con un porcentaje del 15% del monto que arrojar la liquidación del crédito a esta fecha, teniendo en cuenta la especialidad, el tiempo transcurrido y demás factores, por aparecer causadas, en desarrollo de la defensa por mi ejercida. Por lo anterior, señoría, es que le insto a cumplir el precedente judicial a que usted está obligado, según los postulados del artículo 7 del CGP, dando por terminado en forma inmediata el presente proceso y condenando en costas

“Artículo 7°. Legalidad.

Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la **jurisprudencia** y la doctrina.”

Atentamente,


jorge enrique franco de la rosa
 C.C. 19.414.403 de Bogotá
 T.P. 59.277 Del C. S. J.

Sentencia T-1240/08

MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFICAZ-Alcance

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Línea jurisprudencial

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios de procedibilidad

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente constitucional

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO DE PROCESOS HIPOTECARIOS-
 Procedencia cuando los jueces de instancia se apartan de forma irrazonada de lo consagrado en la Ley 546 de 1999 y del precedente jurisprudencial aplicable

ACCION DE TUTELA-Extensión de los efectos generales de la SU.813/07 al caso concreto

Referencia: expediente T-1986547

Acción de tutela interpuesta por Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela contra el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Espinal y el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-.

Magistrada Ponente:
 Dra. CLARA INÉS VARGAS
 HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008).

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

SENTENCIA



dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela contra el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Espinal y el Banco Colmena S.A.

I. ANTECEDENTES.

Los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Espinal (Tolima) y el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, con el objeto de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho a la vivienda digna.

1. Hechos.

Para fundamentar su solicitud los accionantes relatan los siguientes hechos:

1. Manifiestan que el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC. S.A.- presentó en su contra demanda ejecutiva hipotecaria, la que por vía de reparto le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal (Tolima).
2. Aseveran que el pagaré que sirvió de base para iniciar la demanda ejecutiva se giró por la suma de \$19.200.000, y se firmó por los accionantes el 21 y 15 de agosto del año 1998, “en intereses UPAC”. Y por lo tanto, aclara, es aplicable el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
3. Señalan que el 2 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal dentro del mencionado proceso hipotecario, libró mandamiento de pago.
4. Indican que fueron notificados legalmente por el Juzgado tanto del mandamiento de pago como de la demanda ejecutiva, la cual contestaron dentro del término legal, el 25 de marzo de 2008, así: (i) interponiendo recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda y libró mandamiento de pago; (ii) oponiéndose a las pretensiones y hechos de la demanda y formulando las excepciones de mérito, estructuradas sobre la base de caducidad de la acción cambiaria por prescripción, prescripción de la hipoteca, extinción de la acción ejecutiva por prescripción y cobro de lo no debido; (iii) presentando excepciones previas de falta de competencia territorial y funcional, cosa juzgada, caducidad de la acción cambiaria por prescripción, prescripción de la hipoteca y extinción de la acción ejecutiva por prescripción, (iv) proponiendo incidente de colisión o conflicto de competencia y, (v) presentando “prejudicialidad civil procedimental”.

5. Relatan que el juez del circuito, mediante autos de fecha 14 de abril de 2008, resolvió dichas peticiones, en la siguiente forma: negó el recurso de reposición, tuvo por contestada la demanda, rechazó de plano las excepciones previas propuestas, negó el incidente de colisión de competencia e indicó que la prejudicialidad civil alegada se resolvería en la sentencia.
6. Estiman que tanto la entidad bancaria como el Juzgado al dictar auto admisorio de la demanda ejecutiva y librar mandamiento de pago, desconocieron caprichosamente: por un lado, “la falta de requisito de procedibilidad señalado por la Corte Constitucional” en la Sentencia SU-813 de 2007, según la cual “la entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito con estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) días contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración”. Y por el otro, lo establecido artículo 42, parágrafo 3º de la Ley 546 de 1999.

Por todo lo expuesto, los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se ordene: (i) al banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con lo establecido en la Ley 546 de 1999 y la Sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieran haberse causado desde dicha fecha, (ii) al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal (Tolima) y al banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia que se profiera, se de por terminado el proceso ejecutivo hipotecario No. 200-00182, con la “advertencia de que no se podrá volver a iniciar el mismo proceso ejecutivo hipotecario hasta tanto se haya surtido el requisito de procedibilidad de la reestructuración del crédito” y, (iii) el archivo del proceso ejecutivo hipotecario.

La Sala advierte que el 12 de marzo de 1999 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot libró mandamiento de pago a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. y en contra de los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela. El 10 de noviembre de 2005 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, en calidad de Juez ad-

hoc, avocó el conocimiento del proceso ejecutivo en mención que le fuera remitido por el Tribunal Judicial de Cundinamarca, ante quien los ejecutados solicitaron la terminación del proceso con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Tanto el Juzgado de familia como el Tribunal Superior de Cundinamarca denegaron esa solicitud.

Los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot por haber negado la terminación del proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la misma entidad, en segunda instancia, negaron el amparo solicitado.

Esta Corte, Sala Octava de Revisión, mediante Sentencia T-894A de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis, revisó las decisiones precitadas concediendo finalmente el amparo a los derechos fundamentales del debido proceso y a la vivienda digna, vulnerados por el Juez accionado y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, y ordenó dar por terminado el mencionado proceso ejecutivo, como en efecto ocurrió. Esas decisiones fueron tomadas con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia C-955 de 2000, entre otras.

2. Trámite Procesal.

Correspondió conocer de la acción de tutela a la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual mediante Auto de abril 29 de 2008, admitió la demanda y ordenó correr traslado, por el término de dos días, a los accionados.

3. Respuesta del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal guardó silencio y se limitó a enviar copia del expediente.

4. Respuesta del Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-

La apoderada general de BCSC S.A. contestó extemporáneamente la acción de amparo oponiéndose a su prosperidad, en los términos siguientes:

Manifiesta que los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela son titulares del crédito de vivienda con garantía hipotecaria No. 0535170034388, al cual, con la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 y de conformidad con la Circular 007 de 2000 de la entonces Superintendencia Bancaria, le fue aplicado un alivio de \$3.441.126 por concepto de reliquidación.

Expone que, debido al incumplimiento en el pago de las cuotas del crédito hipotecario, el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, en su calidad de acreedor hipotecario, inició proceso ejecutivo contra los accionantes, demanda que le correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal.

Señala que, una vez notificado el mandamiento de pago a los ejecutados, ellos hicieron uso del derecho de defensa que les asistía y de las demás prerrogativas que les otorga la ley. Por lo que resulta improcedente que un tema propio de la jurisdicción civil sea debatido mediante el uso de la acción de tutela, más aún si ésta se utiliza para revivir términos procesales que ya concluyeron.

En lo que respecta a la solicitud realizada por los accionantes de dar cumplimiento a la Sentencia SU-813 de 2007 expresa que no es de recibo, pues no cumple con los requisitos exigidos por esa misma providencia (que el proceso ejecutivo se haya iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, que no se haya registrado el auto aprobatorio del remate o adjudicación del inmueble en el folio de matrícula de la vivienda ejecutada y que dentro del proceso ejecutivo el afectado haya sido diligente en su actuación procesal), toda vez que el proceso ejecutivo hipotecario fue iniciado por BCSC el día 29 de octubre de 2007.

Asevera que la interpretación realizada por los accionantes de la Sentencia SU-813 de 2007 es errada, pues en ella se establecieron unos requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para aquellos casos en los cuales un juez se niegue a terminar un proceso ejecutivo iniciado antes de 1999, y no como pretenden los accionantes, para que por vía de tutela se reconozcan como requisitos de procedibilidad para promover un proceso ejecutivo las consecuencias que se derivan de la terminación de los trámites de ejecución por la aplicación de la sentencia precitada, desconociendo que los efectos de las mismas sólo se extienden a procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999.

Indica que no se puede pretender por intermedio de la acción de tutela proteger derechos de índole patrimonial y sobre los cuales existen decisiones en firme. Aclara que la acción de tutela es un amparo constitucional que busca la protección de derechos fundamentales vulnerados cuando no existen otros mecanismos judiciales para hacerlo. Concluye que en ese orden de ideas, las pretensiones de los accionantes no son apropiadas, pues lo que quieren es que se fallen vía tutela temas propios de la jurisdicción ordinaria.

Finalmente sostiene que la acción de tutela es improcedente en los términos del numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, por la existencia de otros medios judiciales.

Por lo expuesto, considera que no se ha generado por parte de Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- ninguna actuación ilegal o injustificada dentro del proceso ejecutivo y en consecuencia solicita declarar improcedente la acción de tutela.

FT

II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.

1. Sentencia de primera instancia.

La Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en providencia del 13 de mayo de 2008, resolvió negar la acción de tutela. Para tal efecto expuso estos argumentos:

Según el despacho, el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Espinal ha brindado a los accionados todas las garantías propias del proceso ejecutivo hipotecario para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, tal y como lo manifiestan ellos mismos en la demanda de tutela. De otro lado, sostiene que de acuerdo con la inspección del proceso que obra como prueba en el expediente, éste hasta ahora se encuentra en el traslado al ejecutante de las excepciones propuestas por la parte demandada, de lo cual se infiere que los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela cuentan con las demás etapas procesales para seguir exponiendo las razones jurídicas necesarias que les permitan hacer valer los derechos presuntamente vulnerados por la entidad bancaria.

En ese orden de ideas, el despacho considera prematuro que se dé aplicación a la jurisprudencia y a la normatividad invocadas, pues ello debe ser producto del análisis que el juez de conocimiento dentro del proceso ejecutivo hipotecario debe efectuar al momento de la elaboración de la sentencia, contra la cual en el evento de ser adversa, podrán interponer los recursos legales establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela, concluye el Tribunal que en el caso bajo estudio la acción interpuesta es improcedente porque, en primer lugar, en el proceso ejecutivo aún no hay sentencia en firme para que ella pueda ser utilizada como un mecanismo transitorio; y en segundo término, tampoco se demostró probatoriamente que se esté frente a la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por lo anterior señala que no corresponde al juez de tutela entrar a establecer qué parte de la deuda le corresponde asumir al accionante y cual a la entidad demandada, pues ello escapa claramente de sus funciones y recae de manera exclusiva en cabeza del juez ordinario.

2. Impugnación.

Los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia con el fin de que fuera revocada en su totalidad y en su lugar se concediera el amparo solicitado, reiterando para ello los argumentos expuestos en su demanda inicial, adicionando los siguientes: que el juez accionado libró mandamiento ejecutivo por la suma de \$41.990.979, desconociendo arbitrariamente el capital consignado originalmente en el pagaré que tuvo por título ejecutivo; que el juez contra quien se dirige la tutela incurrió en la grave extralimitación

de librar mandamiento ejecutivo por intereses de mora a la tasa de 19.05% anual, contrariando lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007, en el sentido de que en esa clase de procesos ejecutivos hipotecarios no se puede cobrar ninguna clase de intereses, ni antes ni después de que se cumpla con el requisito de procedibilidad de la reestructuración de la obligación.

Además, los accionantes ponen de presente que la reliquidación del crédito ya se efectuó y que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-894A de 2006, ordenó la terminación de un proceso ejecutivo hipotecario anterior el cual cursaba en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot entre las mismas partes y por los mismos hechos.

3. Sentencia de segunda instancia.

En sentencia del 27 de junio de 2008 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la de primera instancia.

Sostiene la providencia que la acción de tutela cuando tiene como propósito controvertir actuaciones judiciales sólo procede (i) si ellas constituyen una vía de hecho, y (ii) cuando el interesado no cuenta con otros medios de defensa idóneos para la reparación de sus derechos.

Partiendo de lo anterior, la Sala infiere la improcedencia de la acción interpuesta, porque (i) tal y como lo indicó el Tribunal, al estar el proceso ejecutivo hipotecario en la etapa de traslado de las excepciones de mérito propuestas, y por lo tanto pendiente la decisión final que ha de decidir de fondo sobre las mismas y seguramente sobre los argumentos expuestos en la acción de tutela, los accionantes deben esperar a que el juez de dicho proceso profiera tal decisión; y (ii) porque los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela aún conservan otros medios de defensa que podrían hacer valer dentro de dicho proceso. Señala que ese es el escenario natural para debatir las razones que alegan y no es dable al juez de tutela irrumpir en la relación procesal y usurpar las atribuciones asignadas por la Ley al juez ordinario, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y vulneración de las garantías procesales de los intervinientes en ese trámite.

Finalmente, manifiesta que en tales condiciones, los accionantes disponen de otros medios de defensa judicial para lograr la protección de los derechos que alegan, configurándose la causal de improcedencia de la acción de tutela consagrada en el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución política, en concordancia con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

III. Pruebas.

1. Pruebas relevantes que reposan en el expediente.

- Fotocopia de la escritura pública No. 2389, de fecha 15 de agosto de 1998, suscrita en la Notaría Primera de Girardot entre la Sociedad Grupo Constructor Ingenieros Ltda. y Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela (fls. 11 a 119).
- Fotocopia del pagaré No. 0535909, de fecha 21 de agosto de 1998, firmado por los deudores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela a favor de la Corporación Social de Ahorro y vivienda Colmena por el valor de \$19.200.000 (fls. 121 y 122).
- Fotocopia de la liquidación definitiva de la obligación hipotecaria No. 0535170034388 del titular Jairo Luis Polanía Carrizosa (fls. 123 y 124).
- Fotocopia de los autos de fechas 2 de noviembre de 2007 y 14 de abril de 2008, proferidos por el Juez Segundo Civil del Circuito de Espinal, dentro del expediente No. 2007-182-00 (fls. 125 a 134).
- Fotocopia del expediente del proceso ejecutivo hipotecario radicado en el Juzgado Segundo del Circuito de Espinal bajo el No. 2007-182-00, adelantado por BCSC S.A. contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela. (fls. 1 a 221 c. copias).

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. Competencia.

Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.

2.1. Los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal y el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, al estimar que éstos vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, al dictar auto admisorio de la demanda y librar mandamiento de pago con base en la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta en su contra por el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-. Afirman los accionantes que con dichas actuaciones los demandados desconocieron caprichosamente el requisito de procedibilidad señalado en el parágrafo 3° de la Ley 546 de 1999 y por la Corte Constitucional en Sentencia SU-813 de 2007.

La apoderada general de BCSC S.A. contestó extemporáneamente la acción de amparo oponiéndose a su prosperidad. En lo que respecta a la solicitud realizada por los accionantes de dar cumplimiento a la Sentencia SU-813 de 2007 expresa que no es de recibo, pues no cumple con los requisitos exigidos por esa misma providencia, toda vez que el proceso ejecutivo hipotecario fue iniciado por BCSC el día 29 de octubre de 2007. Sostiene, además, que la

acción de tutela es improcedente en los términos del numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 por la existencia de otros medios judiciales. Por lo anterior considera que no se ha generado por parte de Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- ninguna actuación ilegal o injustificada dentro del proceso ejecutivo y en consecuencia solicita declarar improcedente la acción de tutela.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, concluye que la acción interpuesta es improcedente por considerar que, al encontrarse el proceso ejecutivo hipotecario en traslado al ejecutante de las excepciones propuestas, los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela cuentan con las demás etapas procesales para seguir exponiendo las razones jurídicas necesarias que les permitan hacer valer los derechos presuntamente vulnerados por la entidad bancaria y porque tampoco se demostró que se esté frente a la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia. Señala que la acción es improcedente, ya que al estar el proceso ejecutivo hipotecario en la etapa de traslado de las excepciones propuestas y por lo tanto pendiente la decisión final que ha de decidir de fondo sobre las mismas y seguramente sobre los argumentos expuestos en la acción de tutela, los accionantes deben esperar a que el juez de dicho proceso profiera la respectiva sentencia y adicionalmente porque los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela aún conservan otros medios de defensa que pueden hacer valer. De ello concluye que mal puede el juez de tutela irrumpir en la relación procesal y usurpar las atribuciones asignadas por la ley al juez ordinario.

2.2. Conforme a lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión establecer (i) si resulta procedente la acción de tutela ante la posible existencia de otro medio de defensa judicial, tal y como lo consideraron los jueces de primera y segunda instancia. (ii) En el evento de que se encuentre procedente la acción, la Corte deberá entrar a resolver si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal, al librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo hipotecario, sin examinar el punto relativo a la previa reestructuración de la obligación hipotecaria (Sentencia SU-813 de 2007), vulneró los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna de los accionantes.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes temas: (i) la procedencia de la tutela en el asunto sometido a revisión; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales por desconocimiento de la jurisprudencia constitucional; (iv) el alcance de la ley 546 de 1999 y de la SU-813 de 2007 para el trámite de procesos ejecutivos hipotecarios. Con base en ello (iv) procederá al análisis del caso concreto para determinar si hay lugar o no a conceder la protección invocada.

3. Procedencia de la tutela en el asunto sometido a revisión. Ineficacia de otro medio de defensa judicial.

3.1 Esta Corporación ha venido reiterando que la acción de tutela es de carácter subsidiario, en cuanto sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando existiendo otros mecanismos, éstos no son idóneos ni eficaces para evitar la consumación del perjuicio¹.

El anterior criterio jurisprudencial, trazado desde la Sentencia T-003 de 1992², indica que el otro medio de defensa judicial al que alude el artículo 86 de la Constitución Política, debe ser eficaz y permitir la protección inmediata y real de los derechos fundamentales afectados. De lo contrario, la acción de tutela dejaría de tener ese carácter constitucional preferente que la caracteriza en razón de su objeto, y ya no sería tampoco el mecanismo aplicable para evitar la burla de los preceptos superiores.

Recuérdese que el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, dispone que *"la existencia de dichos medios (de defensa judiciales) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante"*. Esto se traduce en que cada caso en particular corresponde al juez de tutela evaluar si el otro medio de defensa judicial, cuando existe, podría llegar a brindar la protección inmediata que exige el derecho amenazado o vulnerado, o si por el contrario se trata de una vía formal o cuyos objetivos y resultados, dada la prolongación del proceso, resulten tardíos o eventuales para garantizar la idoneidad de la protección judicial y la intangibilidad de los derechos afectados.

Así entonces, un medio judicial para que pueda ser señalado como el procedente, en vez de la tutela, con miras a su protección, debe ser eficaz, conducente y estar dotado de su misma aptitud para producir efectos oportunos, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento teórico, por el sólo hecho de estar previsto en norma legal, si, consideradas las circunstancias del solicitante, no puede traducirse en resolución judicial pronta y cumplida que asegure la vigencia de la Constitución en el caso particular de una probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Tal imposición atentaría contra la eficacia de la administración de justicia y pondría en grave riesgo los postulados del Estado Social de Derecho, haciendo inoperantes no pocas garantías constitucionales.

¹ Ver entre otras, las Sentencias, T-03 de 1992, T-057 de 1999, T-815 de 2000, T-021 de 2005.

² Sentencia T-003 de 1992: "A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medio de defensa judicial, para los fines de excluir la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conduencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado".

De esta manera, la sola existencia formal de otros medios de defensa judicial, no puede tornar automáticamente improcedente la acción de tutela. Así, lo ha sostenido la Corte, puntualizando que:

*"...no es suficiente, para excluir la tutela, la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están siendo violados"*³.

Dicha idoneidad y suficiencia de acuerdo con la Corte, debe ser analizada en cada caso específico, para lo cual es indispensable que los otros medios de defensa judicial, *"proporcionen el mismo grado de protección que se obtendría mediante el empleo [de] la acción de tutela, es decir, que sean tan sencillos, rápidos y efectivos como ésta para lograr la protección de los derechos fundamentales lesionados o amenazados"*⁴.

Habida cuenta de lo anterior, es necesario analizar si en el asunto que ahora es objeto de revisión, los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa judicial para dirimir la controversia surgida, y en caso afirmativo, si ellos son idóneos y eficaces para asegurar la protección de sus derechos. De no serlo, la acción de tutela se proyectará como el camino procesal adecuado.

3.2. Los jueces de primera y segunda instancia, para no acceder a la acción de tutela consideraron que no es posible resolver cuestiones que son propias de la autonomía e independencia de los jueces ordinarios cuando la decisión impugnada es proferida en proceso ejecutivo en curso, en el que los demandados cuentan con otros medios de defensa para la protección de sus derechos fundamentales.

La Sala estima que los argumentos expuestos en las instancias judiciales son insuficientes, pues omiten realizar una valoración integral de esos mecanismos de defensa que tienen los accionantes en el proceso ejecutivo.

Esta Corporación ha venido sosteniendo que la acción de tutela puede, en un momento dado, desplazar el mecanismo ordinario o principal previsto por el ordenamiento jurídico cuando el juez de tutela encuentre que no es idóneo ni eficaz⁵.

En el caso bajo análisis, la Sala observa que los ejecutados interpusieron oportunamente el recurso principal de reposición y el subsidiario de apelación contra el mandamiento de pago, alegando que la obligación no es exigible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y en la

³ Sentencia T-468 de 1999.

⁴ Sentencia T-021 de 2005.

⁵ Sentencia T-916 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Sentencia SU-813 de 2007, sin embargo, el funcionario resolvió negativamente los dos recursos mencionados. Igualmente los demandados interpusieron la excepción previa la falta de competencia derivada de la cuantía, en razón de que se ha omitido realizar la reestructuración de la obligación; pero el funcionario la negó de plano por considerar que la han debido plantear como recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Lo anterior constituye una evidente contradicción, porque, como se ha visto, los ejecutados si plantearon esa circunstancia en el recurso de reposición y el Juez omitió hacer algún análisis al respecto.

Si bien es cierto que el proceso ejecutivo aún esta en curso, también lo es que los mecanismos de defensa allí previstos no son idóneos ni eficaces, puesto que ya se planteó sin éxito el debate en el recurso de reposición contra el mandamiento de pago y en las excepciones previas presentadas por los accionantes. Adicionalmente esta Corporación ya ha señalado que en los procesos ejecutivos hipotecarios es legítimo hacer uso de la acción de tutela cuando lo que se reclama es precisamente la terminación del proceso por controversias relacionadas con la aplicación del artículo 42 de Ley 546 de 1999, en este sentido se destacan las Sentencias T-606 de 2003, T-701 de 2004 y SU-813 de 2007, entre muchas otras.

Con fundamento en las consideraciones expuestas hasta este punto, la Sala considera que la tutela en este caso resulta *procedente*, por lo que se entrará a realizar el análisis de fondo.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – causales de procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia.

4.1. Conforme al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, la Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina acerca de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias dictadas por las autoridades judiciales. En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, dichas disposiciones fueron declaradas inexecutable en la sentencia C-543 de 1992, en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la intangibilidad de las decisiones judiciales.

No obstante lo anterior, en esa misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y que, por tanto, frente a “actuaciones de hecho”, de las autoridades judiciales la acción de tutela sí es procedente con el objeto de proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces:

“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha

acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”⁶. (Subrayado fuera del texto original).

Así las cosas, a partir de la Sentencia T-079 de 1993, al revisar una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial, respetando la *ratio decidendi* de la sentencia C-543 de 1992, paulatinamente se fueron definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la procedencia del amparo con el fin que se protejan los derechos fundamentales de quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la administración de justicia.

Posteriormente, la Corte reemplazó el enunciado dogmático “*vía de hecho*”, previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial anómala, y formuló los “*criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales*”. Éstos constituyen pautas que soportan una plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el trasfondo de las causas que pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.

La nueva enunciación de tal doctrina ha llevado, en últimas, a redefinir el concepto de *vía de hecho*, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario⁷, producto de la carencia de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para concernir al juez constitucional. En su lugar, con la formulación de los *criterios*, se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en la rutina judicial. Al respecto, en la Sentencia T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:

“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (Art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).

Igualmente, en la Sentencia T-462 de 2003, se puntualizó:

⁶ Sentencia C-543 de 1992.

⁷ Sentencia T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-008 de 1998, T-569 de 1998, entre otras.

CP

“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “via de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita “armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucren la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”.

Además, en la Sentencia T-1285 de 2005, esta Sala de Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la siguiente manera:

“La sistematización de los criterios o causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la Constitución⁸. En este punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad los derechos fundamentales que se encuentren en disputa. El principio de eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política⁹ y los derechos fundamentales¹⁰.

Conforme a los anteriores presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente manera¹¹:

- “(i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido¹².*

⁸ Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

⁹ Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió la tutela contra la pérdida de investidura del señor José Jatin Sagar, la Corte estimó los siguientes: “(...) resulta claro que la tutela contra providencias judiciales no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho (en el sentido administrativo del concepto), sino por violación de la Constitución. En sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos argumentos fijando parámetros para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que respondieran a claros criterios constitucionales. Así, se indicó que la tutela procede contra decisiones judiciales cuando se presenta violación directa o indirecta de la Constitución. Es decir, frente a providencias judiciales inconstitucionales. (...)” (cita original de la jurisprudencia trascrita).

¹⁰ Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de Derecho véanse las sentencias C-037 de 2000; C-366 de 2000 y SU-846 de 2000 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

¹¹ Sobre los defectos que se presentan, pueden confrontarse entre otros, las Sentencias T-441 de 2003, T-684 de 2004, T-939 de 2005.

¹² Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).

- “(ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido¹³.*
- “(iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia¹⁴.*
- “(iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos¹⁵.*
- “(v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia.*
- “(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto¹⁶.*

El hecho que se configure una causal de procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial, lleva a concluir que el juez en su decisión ha incurrido en una “actuación defectuosa” que se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales y por lo mismo debe ser reparada.

5. Procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de sentencias de tutela. Reiteración de jurisprudencia.

Esta Corporación, como garante de la Constitución, fija el contenido de ésta a través de su jurisprudencia. Tal contenido puede ser determinado a través de sentencias de constitucionalidad o de tutela. Por medio de las últimas, en virtud del carácter objetivo o de determinación del alcance de los derechos fundamentales que la tutela tiene en sede de revisión.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la

¹³ Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

¹⁴ Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002, T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

¹⁵ Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

¹⁶ Sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).

Constitución; (iii) contrariando la *ratio decidendi* de sentencias de constitucionalidad; y (iv) contrariando el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corporación a través de la *ratio decidendi* de sus sentencias de tutela.

Dado el tema a que remite el asunto *sub judice*, la Sala en esta oportunidad sólo se referirá a la última enunciada, esto es, a la procedibilidad de la tutela contra providencias que desconocen la *ratio decidendi* de sentencias de tutela de la Corte Constitucional.

Pues bien, así como las consideraciones inescindibles de la parte resolutive de sentencias de constitucionalidad atan a los jueces ordinarios en su interpretación, la *ratio decidendi* de las sentencias de tutela de la Corporación también vinculan a los jueces ordinarios en sus providencias judiciales pues, para no desconocer la Constitución en el ámbito de los derechos fundamentales se hace necesario seguir los lineamientos que la Corte Constitucional, como intérprete de la Carta, le ha dado a través del carácter objetivo o unificador de la tutela en sede de revisión.

6. El párrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y alcance de la Sentencia SU-813 de 2007. Evolución jurisprudencial.

6.1. La Ley 546 de 1999 fue promulgada una vez declarada la inexequibilidad de las normas que regulaban el sistema UPAC y las formas de financiamiento de créditos para vivienda, por la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1997, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-747 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en las que se precisó la necesidad de que existiera una regulación del sistema de financiación de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional y que solucionara un grave problema de orden social de grandes dimensiones, surgido como consecuencia del desbordado incremento de las deudas hipotecarias adquiridas por los particulares con entidades financieras, que llegaron a causar graves efectos de orden económico, financiero, político y social, y además un desbordado incremento en la iniciación de procesos ejecutivos hipotecarios.

Según se indicó en el artículo 2° de la mencionada ley, los criterios para el desarrollo de la norma se dirigieron entre otras, a proteger el patrimonio de las familias, fomentar el ahorro destinado a la vivienda y facilitar su acceso en condiciones de equidad y transparencia y abarcar un mayor número de familias necesitadas. Por eso la Ley incluyó disposiciones relativas al periodo de transición para el paso del sistema de financiación UPAC al nuevo UVR, con el fin de permitir que nuevas personas adquirieran viviendas y que las que se vieron afectadas dentro del anterior sistema, pudieran conservarla.

6.2. En los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, el Legislador estableció unas nuevas medidas en materia de otorgamiento de crédito de

financiación para la compra y construcción de vivienda, y generó igualmente un mecanismo excepcional para frenar el creciente número de procesos ejecutivos, en razón a la imposibilidad material de los deudores de cancelar las cuotas de sus créditos hipotecarios pactados a largo plazo. Asimismo, dispuso la aplicación de un abono especial a aquellas obligaciones crediticias vigentes que hubieren sido pactadas con los establecimientos de crédito, y que se hubieren destinado a la financiación de vivienda a largo plazo.

Así, los abonos a los créditos que se encontraran al día, sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo, serían hechos siguiendo las pautas fijadas en el artículo 40¹⁷ de la ley en mención. Los deudores hipotecarios que estuvieran en mora a 31 de diciembre de 1999 (hipótesis regulada por el artículo 42 de la Ley 546), serían beneficiarios de los abonos contemplados en el artículo 40, siempre y cuando manifestaran su pretensión de acogerse a la reliquidación del crédito dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la ley.

Por su parte, el artículo 42 en su párrafo 3°¹⁸, señala los efectos de la conversión del crédito hipotecario, de la reliquidación del crédito y de la

¹⁷ El artículo 40 de la ley 546 de 1999 dispone lo siguiente: "Artículo 40. Inversión social para vivienda. Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en el artículo 46.

"Párrafo 1°. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del crédito originalmente pactado.

"Párrafo 2°. Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciera incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley." (Lo subrayado fue declarado exequible mediante sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

¹⁸ El artículo 42 de la Ley 546 de 1999, dispone —se resaltan las expresiones declaradas inconstitucionales mediante la sentencia C-955 de 2000— lo siguiente: "Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieran en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley.

Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.

A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el párrafo cuarto del mismo artículo 41.

Párrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el párrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciera efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.

f
f

conversión de los documentos contentivos del mismo para los procesos en trámite a 31 de diciembre de 1999.

6.3. En la sentencia C-955 de 2000¹⁹, que estudió la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, respecto del párrafo 3° del citado artículo 42, la Sala Plena de la Corporación precisó que a su juicio no existía quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales a los deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas, pues es evidente que si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por causas atinentes al mismo sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidas a partir de aquellas, debían repercutir en el trámite de los procesos. Agregó la citada Sentencia lo siguiente:

En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preamble y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.). (Subrayado fuera del texto).

A la luz de la jurisprudencia, en los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 546, una vez aportada la reliquidación, el siguiente y único paso a seguir es la terminación de los procesos, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor de iniciar un nuevo proceso ejecutivo, en caso de que el deudor vuelva a constituirse en mora, caso en el cual, deberá iniciarse un nuevo proceso.

6.4. En la Sentencia T-606 de 2003²⁰, la Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había constituido una hipoteca de primer grado. Se partió de la base de que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por

Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los párrafos 1° y 2° del mismo artículo”.

Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriera nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.

¹⁹ M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

²⁰ M.P. Álvaro Tafur Galvis.

el Tribunal de Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la tutela²¹. La Corporación señaló que la norma citada tenía por objeto solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso. Por tal motivo concluyó:

“En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por ministerio de la ley (...)”.

6.5. No obstante los planteamientos expuestos en las sentencias ya citadas, varios operadores jurídicos y las entidades financieras ejecutantes se apartaron de este precedente, asumiendo una posición diversa respecto al procedimiento legal establecido para la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios contemplados en el párrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. En efecto, Juzgados y Tribunales se inclinaron por la tesis de la continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración; esta posición se había fundado en que la sola presentación de la reliquidación de la obligación, no es suficiente para dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios. Consideraron en ese sentido, que la consecuencia jurídica de la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debía ser el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en que se encontrara. Aunado a ello, argumentaron que, si la ley hubiese querido dar por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría consignado expresamente, por lo que no había lugar, entonces, a hacer extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no contempladas por la misma.

6.6. Con la expedición de la Sentencia T-701 de 2004²², la Corte Constitucional resolvió la discusión. En efecto, en dicho pronunciamiento reiteró la posición de esta Corporación asumida en la sentencia C-955 de 2000, consistente en la terminación de los procesos ejecutivos que se

²¹ La persona demandada en el proceso ejecutivo era propietaria de una vivienda adquirida mediante un crédito hipotecario, cuyo monto se expresaba en UPAC. Dada la promulgación de la Ley 546 de 1999, el juez del circuito suspendió el proceso ejecutivo con el fin de que la entidad bancaria reliquidara la deuda en términos de la unidad UVR. Como resultado de esta operación, y luego de descontar el valor del alivio a la deuda, se estableció que subsistía un saldo a favor de la entidad financiera, por lo que el banco solicitó al juez continuar con el proceso ejecutivo. Tras la propuesta de la parte demandada de excepciones de mérito, el Juez consideró mediante auto que en el caso no se presentaban causales de nulidad de lo actuado. En vista de que dicho auto fue apelado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín anuló todo lo actuado, con el argumento según el cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la reliquidación del crédito tenía como efecto la terminación del proceso ejecutivo. La entidad bancaria consideró que la Sala Civil del Tribunal había violado sus derechos al debido proceso y a acceder a la administración de justicia, al hacer una interpretación de la Ley 546 contraria a los principios de economía procesal por cuanto le obligaba a comenzar de nuevo un proceso ejecutivo cuando era evidente que la deudora permanecía en mora a pesar del alivio obtenido en la reliquidación. Indicó además que los argumentos esgrimidos por el Tribunal confundían “la mora en sí misma con la sanción legal que ella produce y que para este caso es el cobro de un interés moratorio.”

²² M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

encontraban vigentes a diciembre 31 de 1999 y afirmó que ese es el verdadero sentido del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, atendiendo a los propósitos perseguidos con la implementación del nuevo sistema de adquisición de vivienda y al ordenamiento constitucional imperante. Desde esa oportunidad se ha entendido que, todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, han debido someterse al trámite de la reliquidación automática del crédito y, seguidamente, declararse terminados o concluidos por parte del juez competente, procediéndose en consecuencia a su archivo definitivo sin consideración adicional alguna. En este orden de ideas, es claro que luego de proferida la sentencia C-955 de 2000, la única tesis admisible respecto al procedimiento de suspensión y terminación de procesos ejecutivos en curso a diciembre 31 de 1999, es la que señala que una vez aportada la reliquidación de los créditos al proceso, éstos deben ser terminados y archivados sin más trámite²³.

6.7. Esta Corporación, por medio de la Sentencia SU-813 de 2007, unificó la jurisprudencia anterior en relación con la terminación anticipada de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, reiterando que los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999 debían declararse terminados por el juez civil competente, siguiendo la interpretación que había hecho inicialmente del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 en la sentencia C-955 de 2000 y en fallos de tutela posteriores.

De esta forma una decisión de un juez que niegue la terminación de esos procesos constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, violatoria del derecho al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, por desconocer el mencionado precedente constitucional²⁴.

La Corte determinó en esa sentencia que cuando los jueces civiles no hubiesen terminado los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, procede la tutela para la protección de los derechos vulnerados, siempre y cuando concurren los siguientes requisitos: (i) que el afectado haya sido diligente en su actuación procesal, de tal manera que se respete el requisito de subsidiariedad, y (ii) que la acción de tutela haya sido presentada de manera oportuna, antes de que se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o adjudicación del inmueble, de tal forma que se respete el requisito de inmediatez.

Igualmente, en la SU-813 de 2007 esta Corporación, para proteger el derecho a la igualdad, decidió extender con carácter general los efectos de ese pronunciamiento a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, que se refieran a créditos de vivienda, y en los

²³ Tesis sostenida en las sentencias T-1243, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-199 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-217 y 472 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto; T-258 y T-357 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-282, T-495 y T-844 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-376 y T-716 de 2005, M.P. Alvaro Tufur Galvis y T-692 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

²⁴ Sentencia 1026 de 2007.

cuales no se haya registrado el auto aprobatorio del remate o adjudicación del inmueble.

En consecuencia, la Corte señaló que con el fin de asegurar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente de conformidad con la Ley 546 de 1999 y con la jurisprudencia el juez civil respectivo debía adoptar las siguientes decisiones:

“(a) Solicitar al deudor que manifieste si está de acuerdo con la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con los términos establecidos en la ley.

(b) Definida la reliquidación, el juez procederá de oficio a dar por terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la misma providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante.

(c) Para los efectos anteriores, el juez también ordenará a la entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la superintendencia financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito en estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) días, contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración.

El hecho de que una tutela se encuentre en trámite o ésta haya sido negada, no obsta para que el juez civil, de oficio, aplique lo establecido en el presente aparte”. (Subrayado fuera de texto original)

En concordancia con ello, en la parte resolutive de la sentencia de unificación la Corte reitera lo anterior, y hace una distinción en la aplicación de los efectos generales frente a los jueces civiles y frente a los jueces de tutela²⁵. Respecto a los jueces civiles indicó:

“Decimosexto.- 16.1 los efectos de esta sentencia se surten a partir de la fecha y se extienden con carácter general a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de vivienda, y en los

²⁵ Sentencia T-1026 de 2007.

GP

cuales no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela.

16.2 En consecuencia, con el fin de asegurar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente, el juez civil respectivo, en estos casos:

a) Procederá a solicitar al deudor que manifieste si está de acuerdo con la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con los términos establecidos en la ley;

b) Definida la reliquidación, sujetándose a las condiciones fijadas en la parte motiva de esta sentencia, el juez procederá de oficio a dar por terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la misma providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante.

c) Para los efectos anteriores, el juez también ordenará a la entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieran haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito con estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) días contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración.

16.3. El hecho de que una tutela se encuentre en trámite o ésta haya sido negada, no obsta para que el juez civil de oficio aplique lo establecido en el presente numeral". (subrayado fuera del texto).

En relación a los jueces de tutela señaló:

"Decimoséptimo.— Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo; b) la acción de tutela se considerará improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobación del remate o de adjudicación del inmueble".

Por lo tanto, según esta jurisprudencia, los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deben seguir el precedente constitucional y verificar los requisitos señalados en la Sentencia SU-813 de 2007²⁶.

Directamente ligado a la ratio decidendi y a la parte resolutive de la misma sentencia también puede afirmarse que, una vez terminado el proceso ejecutivo hipotecario respectivo, en ningún caso la obligación será nuevamente exigible hasta tanto no culmine el proceso de reestructuración. Esto significa que en ningún proceso ejecutivo iniciado con posterioridad, podrá librarse mandamiento de pago hasta que no haya terminado la reestructuración conforme a las exigencias de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007.

7. Análisis del caso concreto.

Corresponde ahora a esta Sala de Revisión establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal, al librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- contra los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, sin haberse reestructurado previamente la obligación hipotecaria, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho a la vivienda digna, o si por el contrario la acción de tutela deviene improcedente, como lo han resuelto las providencias judiciales que se revisan.

7.1. Los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela pretenden con la acción interpuesta que se amparen sus derechos al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, que consideran vulnerados por el mandamiento ejecutivo proferido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Espinal, dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, en cuanto el juez en esa providencia y el Banco accionado desconocieron abiertamente lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007, al ordenarles que paguen la suma de \$41.990.979,63 de capital e intereses de mora a la tasa del 19,05% anual, sin que previamente se hubiese reestructurado el crédito de vivienda.

Se tiene, en primer lugar, que con ocasión de la misma obligación hipotecaria, el 12 de marzo de 1999, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot libró mandamiento de pago a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. y en contra de los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela²⁷. Que el 10 de noviembre de 2005, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, en calidad de Juez ad-hoc, avocó el conocimiento del proceso ejecutivo en mención que le fuera remitido por el

²⁶ Sentencia T-1026 de 2007.

²⁷ Folios. 162 a 178.

Tribunal Judicial de Cundinamarca. Los ejecutados solicitaron la terminación del proceso ejecutivo con fundamento en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Tanto el Juzgado de familia como el Tribunal Superior de Cundinamarca, denegaron esa solicitud.

Como ya fue reseñado, los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot, por haber negado la terminación del proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la misma entidad, en segunda instancia, negaron el amparo solicitado.

Esta Corte, mediante Sentencia T-894A de 2006, concedió finalmente el amparo al debido proceso y a la vivienda digna, vulnerados por el Juez accionado y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, y ordenó al Juez Primero Promiscuo de Familia de Girardot que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación diera por terminado el proceso ejecutivo hipotecario promovido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A., -hoy BCSC S.A.- contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, sin más trámite. De las motivaciones que la Corte tuvo para tomar esas decisiones se extractan las siguientes: “[d]e manera que esta Sala habrá de conceder la protección, porque, una vez reliquidada la obligación suscrita por los accionantes en UPAC para adquirir vivienda, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot tenía que terminar y archivar la actuación sin más trámite, como lo dispone el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sin que para el efecto incida la circunstancia de que la demanda se hubiere presentado antes de que la citada disposición hubiere entrado en vigor, si se considera que la norma se previó precisamente para solucionar la crisis generada por las obligaciones pendientes de pago y el sin número de procesos ejecutivos entonces en curso”.

7.2. Posteriormente, el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, inició nuevamente demanda ejecutiva contra los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela que correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal²⁸. En auto de fecha 2 de noviembre de 2007, por considerar que dicha demanda reunía los requisitos de los artículos 75 a 77 y 488 del Código de Procedimiento Civil, libró mandamiento de pago por la suma de \$41.990.979,63 equivalentes a 249.943,4806 UVR, correspondientes al capital de la obligación adquirida; y por los intereses de mora causados desde la presentación de la demanda²⁹.

Igualmente se constata que los demandados interpusieron recurso principal de reposición y subsidiario de apelación contra el mandamiento de pago de fecha 2 de noviembre de 2007, con el fin de que se rechazara de plano, por

²⁸ Folio 142.

²⁹ Folios. 37 a 38 c. copias.

caducidad de la acción cambiaria, por estar prescrita la hipoteca, por prescripción extintiva de la acción ejecutiva hipotecaria; subsidiariamente pidieron que se rechazara la demanda por falta de “procedibilidad”, en virtud de lo ordenado por la Sentencia SU-813 de 2007, especialmente en cuanto dice que en ningún caso podrán cobrarse intereses de mora antes de definirse la reestructuración del crédito; y que no será exigible la obligación hasta tanto no se termine el proceso de reestructuración.

Se observa también que el juez, en auto del 14 de abril de 2008, resolvió no reponer el mandamiento de pago de fecha 2 de noviembre de 2007, y específicamente en cuanto al requisito de procedibilidad propuesto por los recurrentes manifestó:

“[e]n subsidio, se solicita el rechazo de la demanda por falta del requisito de procedibilidad previsto en la SU-813 de 2007, sin especificar a qué presupuesto se refiere la Corte Constitucional.

Y es que, el fallo de unificación reafirmó la línea jurisprudencial, conforme a la cual todos los procesos ejecutivos hipotecarios de créditos otorgados para vivienda iniciados con antelación al 31 de diciembre de 1999, debían terminarse una vez presentada la reliquidación del crédito por expreso mandato del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, así manifestó: “en conclusión, del desarrollo jurisprudencial antes citado se deduce que, para que el juez civil deba dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC, es necesario que se haya iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y que la entidad acreedora haya aportado a él la reliquidación del crédito”³⁰ negó el recurso de apelación contra la misma providencia³¹, la colisión de competencia propuesta por los ejecutados³² y rechazó de plano las excepciones previas propuestas³³.”

Empero, ni la ley en comento ni las distintas sentencias de constitucionalidad o tutela sobre la materia prescribieron la condonación de las deudas o la imposibilidad de iniciar nuevas acciones, lisa y llanamente establecieron que los créditos debían ser reliquidados y terminados. Luego, si no existió reestructuración de la deuda y persistió la mora del deudor, el acreedor se encontraba facultado para iniciar nuevamente la acción, pues bien dijo la Corte. “En los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma (ley 546 de 1999), una vez aportada la reliquidación, el siguiente y único paso a seguir es la terminación de estos. (...) lo anterior sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor de iniciar un nuevo proceso ejecutivo”³⁴.

Por consiguiente, el requisito de procedibilidad que se echa de menos y que a la postre se podría deducir del fallo en comento, es la reliquidación del crédito, la cual fue adosada con la demanda (fls. 21 y 22), siendo los abonos o pago de intereses un debate que se debe dar en el proceso.

³⁰ Corte Constitucional, Sentencia SU-813 de 2007.

³¹ Folios. 213 a 216 c. copias.

³² Folios. 173 a 182 c. copias.

³³ Folios. 217 y 219 c. copias.

³⁴ Corte Constitucional, Sentencia T-1181 de 2005. Ver igualmente, sentencia C.E., SEC. quinta, 12 dic. -02 citada en sentencia SU-813 de 2007.

46

2. De igual manera debe negarse la alzada conforme lo dispone de manera expresa el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil³⁵ (Subrayado fuera de texto original).

Los ejecutados, en escrito separado, propusieron al Juez Segundo Civil del Circuito de Espinal, entre otras, la excepción de falta de competencia por la cuantía, en virtud de que la entidad financiera acreedora no había realizado la reestructuración del crédito, desobedeciendo en esa forma lo resuelto en la Sentencia SU-813 de 2007³⁶. El Juzgado, en auto de sustanciación del 14 de abril de 2008, rechazó de plano las excepciones previas propuestas por los ejecutados, con fundamento en el numeral 2º del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil³⁷.

Los demandados solicitaron al juez del conocimiento que suspendiera el proceso por prejudicialidad civil, en razón de que existía un proceso ordinario de mayor cuantía en el Juzgado 7º Civil del Circuito de Bogotá entre las mismas partes y por los mismos hechos³⁸; pero el juez aplazó su decisión para cuando el proceso se encuentre para dictar sentencia³⁹.

Los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, en el mismo escrito en que contestaron la demanda propusieron como excepciones de fondo las de caducidad de la acción cambiaria, prescripción de la hipoteca, extinción de la acción ejecutiva hipotecaria por prescripción y cobro de lo no debido⁴⁰. El funcionario ordenó correr traslado de las excepciones a la parte ejecutante por el término de 10 días⁴¹.

7.3. De los elementos de juicio que se acaban de analizar se deduce que el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela se inició el 12 de marzo de 1999 y que estaba vigente el 31 de diciembre del mismo año; que el título ejecutivo en ese proceso consistía en el pagaré No. 0535909, por la suma de \$19.000.000 de capital, pactados en UPAC, destinado a la adquisición de vivienda, siendo acreedora la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. y deudores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela.

Por consiguiente, a ese proceso son aplicables los efectos generales de la Sentencia SU 813 de 2007 en cuanto dice que “[n]o será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración”, pues dichos efectos se surten a partir de la fecha de su expedición y son aplicables a los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, extendiéndose por disposición de la misma a todos los

³⁵ Folios 214-215 c. copias.

³⁶ Folios 2 y 3 c. copias.

³⁷ Folios 217 y 219 c. copias.

³⁸ Folios 183 s 190 c. copias.

³⁹ Folios 219. c. copias.

⁴⁰ Folios 190-202 c. copias.

⁴¹ Folios 221 c. copias.

procesos que estaban en curso en ese momento, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, que se refieran a créditos de vivienda y en los cuales no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble, requisitos y condiciones que se cumplen en este caso respecto del proceso ejecutivo mencionado.

Según la misma sentencia, “La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito con estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) días contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes”.

Como claramente se desprende del texto mismo de la Sentencia SU-813 de 2007, las decisiones tomadas en ella y la ratio decidendi, que se acaban de comentar, vinculan a los jueces ordinarios en sus providencias judiciales y, para no desconocer la Constitución en el ámbito de los derechos fundamentales se hace necesario seguir los lineamientos que la Corte Constitucional, como intérprete de la Carta, le ha dado a través del carácter objetivo o unificador de la tutela en sede de revisión, tal como lo ha reiterado en varias sentencias⁴².

Ahora bien, anteriormente se precisó que en ningún proceso ejecutivo hipotecario puede librarse mandamiento de pago, hasta tanto el juez verifique que se ha culminado la reestructuración del crédito conforme a las exigencias de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007. Ello se explica si se tiene en cuenta que en estos eventos la obligación aún no es exigible.

En esta oportunidad es claro que el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.-, promovió en contra de señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela una nueva demanda ejecutiva hipotecaria con base en la misma obligación. En este proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal decidió librar mandamiento de pago, sin haber examinado previamente si se llevó a cabo el proceso de reestructuración del crédito y si, en esa medida, la obligación era o no exigible. En consecuencia, considera la Sala que esa decisión judicial contradice abiertamente la ratio decidendi y la parte resolutive de la Sentencia SU-813 de 2007.

Además, los ejecutados interpusieron recurso de reposición contra el mandamiento de pago alegando precisamente que la obligación no era exigible por no haber sido reestructurada conforme lo disponen la Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007. Pero el Juez, en auto de fecha 14 de abril de 2008,

⁴² Sentencia T-838 de 2007.

no tuvo en cuenta la reestructuración como condición de exigibilidad de la obligación dentro del nuevo proceso ejecutivo. De suerte que el auto del 14 de abril, que negó la reposición del mandamiento de pago, también desconoce el precedente constitucional contenido en la Sentencia SU-813 de 2007.

7.4. En conclusión, el mandamiento de pago, de fecha 2 de noviembre de 2007, y el auto de fecha 14 de abril de 2008, que negó el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, vulneran los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de vivienda digna de los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, y por lo tanto es viable la acción de tutela para su protección.

Por lo anterior, la Sala revocará las sentencias objeto de revisión, y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos invocados. En consecuencia, se ordenará que el Juez Segundo Civil del Circuito de Espinal, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago (inclusive), dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2007-182-00 adelantado por el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela. Lo anterior, a fin de que proceda a realizar un nuevo análisis del título, según las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 y de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007.

V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, de fecha 13 de abril de 2008, que negó la tutela de los derechos del debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, invocados por los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela; e igualmente la sentencia emitida en el mismo caso por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 27 de junio de 2008, por medio de la cual confirmó el fallo de primera instancia; y, en su lugar **TUTELAR** a favor de los señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, vulnerados en este caso por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Espinal.

SEGUNDO.- ORDENAR al Juzgado Civil de Circuito del Espinal que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de

pago (inclusive), dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2007-182-00 adelantado por el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela. Lo anterior, a fin de que proceda a realizar un nuevo análisis del título, según las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 y de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007.

LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente

JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con aclaración de voto

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaría General

47

ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA T-1240 DE 2008 DEL

MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA

TERMINACION DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Declaración por ministerio de la ley sin necesidad de exigir consentimiento, declaración de voluntad de las partes e intervinientes en el proceso y sin necesidad de declaración alguna por parte del juez que conoce de aquel (Aclaración de voto)

TERMINACION DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Condiciones que se deben presentar (Aclaración de voto)

TERMINACION DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Inaplicabilidad del principio de inmediatez frente a la vulneración efectiva y continuada de los derechos fundamentales (Aclaración de voto)

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia teniendo como fin supremo la justicia y no la seguridad jurídica (Aclaración de voto)

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Justificación (Aclaración de voto)

ACCION DE TUTELA CONTRA CONTRA PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN EL CURSO DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Procedencia cuando los jueces de instancia se apartan de forma irrazonada de lo consagrado en la Ley 546 de 1999 y en la sentencia C-955 de 2000 (Aclaración de voto)

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN EL CURSO DE PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS-Requisitos de procedibilidad (Aclaración de voto)

TERMINACION DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Deber de devolución de la vivienda a todos los deudores de créditos hipotecarios que la han perdido a consecuencia de la violación de la Ley 546 de 1999 y de la Sentencia C-955 de 2000 (Aclaración de voto)

TERMINACION DE PROCESOS HIPOTECARIOS-Protección a terceros adquirentes de buena fe (Aclaración de voto)

Referencia: Expediente T-1.986.547

Acción de Tutela interpuesta por Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal y el Banco Colmena S.A. hoy BCSC S.A.

Magistrado Ponente:

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito aclarar mi voto frente a la presente decisión, por cuanto si bien comparto parcialmente la parte resolutive de la presente decisión, considero necesario plantear los puntos en los que difiero frente a ella y aclarar o reiterar mi posición jurídica respecto de varios asuntos jurídicos.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3º del Art. 42 de la Ley 546 de 1999, "en caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite". (la subraya y la negrilla no forman parte del texto original)

Al examinar la constitucionalidad de dicho enunciado normativo, la Corte Constitucional expresó en la Sentencia C-955 de 2000 (Fundamento 21):

"Dispone el precepto que, en caso de que el deudor acuerde dentro del plazo mencionado la reliquidación de su obligación, el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite.

"(...)

"También contraviene el derecho a la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía.

"En efecto, es evidente que se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.

"(...)

"La parte motiva de esta providencia se encuentra indisolublemente vinculada a la resolutive y, por tanto, es obligatoria".⁴³ (la subraya y la negrilla no hacen parte del texto original)

⁴³ El Art. 48 de la Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia, establece que en las sentencias que dicte la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad de las normas legales "la interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general".

De acuerdo con este texto, los procesos ejecutivos hipotecarios terminaron por ministerio de la ley, esto es, inmediata o directamente en virtud de la ley (*ope legis* o *per ministerium legis*), a partir de la iniciación de su vigencia, que corresponde a la fecha de su promulgación, conforme a lo dispuesto en su Art. 58⁴⁴, o sea, el 23 de Diciembre de 1999 (Diario Oficial No. 43.827), independientemente del conocimiento o la voluntad de las partes e intervinientes en el proceso y sin necesidad de declaración alguna por parte del juez que conoce de aquel⁴⁵.

En estas condiciones, la declaración del juez que conoce del proceso es meramente declarativa de la extinción de la relación jurídico procesal o proceso, y sólo tiene como finalidad comprobar o verificar la producción de dicho efecto jurídico y, por tanto, otorgar certeza respecto de la misma al deudor beneficiario de ella. Así mismo, como efecto complementario, proporciona una base formal para impartir la orden de archivo del expediente respectivo.

Por consiguiente, es claro que la misma declaración no es constitutiva, en cuanto no crea, cambia o extingue una relación o situación jurídica a partir de la emisión de aquella, puesto que en este caso el efecto extintivo de la relación jurídica procesal ya se ha producido, directamente por voluntad del legislador, en la fecha anterior señalada.

Tal fue en este caso la voluntad del legislador, interpretada en forma expresa, clara y obligatoria por la Corte Constitucional en la citada sentencia de control abstracto de constitucionalidad, que en consecuencia, debe ser cumplida, en vez de soslayada.

En este sentido, es oportuno indicar que el legislador, e incluso el reformador constitucional, algunas veces consagra este efecto, como ocurre, por ejemplo:

i) En el caso de la subrogación de un acreedor por un tercero que paga la obligación y que entra a ocupar el lugar de aquel, conforme a lo dispuesto en el Art. 1668 del Código Civil, en virtud del cual *"se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio (...)";*

ii) En materia de compensación de obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el Art. 1715 del Código Civil, en virtud del cual *"la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnan las calidades siguientes (...)";*

⁴⁴ Según el Art. 58 de la Ley 546 de 1999, *"la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias"*.

⁴⁵ Así lo consideró esta corporación en las Sentencias T- 606 de 2003 y T-357 de 2005.

iii) En materia de negocios jurídicos mercantiles, el Art. 897 del Código de Comercio preceptúa que *"cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial"*.

iv) En materia de pensiones, según lo dispuesto en el Art. 1° del Acto Legislativo N° 01 de 2005, en virtud del cual *"(...) se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento"*.

2. Así mismo, la ley 546 de 1999, determina en su artículo 42 párrafo 2 lo siguiente:

"PARAGRAFO 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. **En caso de que el deudor acuerde {dentro del plazo} la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite.** Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía." (lo tachado fue declarado inexecutable mediante sentencia C- 955 de 2000)

Cuando se habla de que una consecuencia jurídica debe darse por **Ministerio de la ley**, lo que implica es que dicha consecuencia debe acaecer forzosamente por cuanto es la ley misma quien lo ordena.

Así las cosas, estando los jueces de la República, sujetos a la Constitución y a la ley, son ellos los llamados esencialmente a hacer valer los dictámenes imperativos de ley. Por consiguiente, cuando por *Ministerio de la ley* se exija una consecuencia jurídica forzosamente el juez debe hacerla **efectiva de oficio, sin ningún otro tipo de consideración, de interpretación, de valoración ó de solicitud**. Sencillamente debe cumplirse lo que la ley ordena. Cuando se habla de Ministerio de la ley se hace referencia a un mandato de la ley. (*Imperio de la ley. Art. 230 constitucional*)

Pues bien, cuando la norma transcrita señala que efectuada **la reliquidación del crédito el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite**; está entonces la ley - por mandato de ella, por ministerio de ella - exigiendo que se dé por terminado el proceso y se archive sin más trámite. No permite la ley en consecuencia, que su mandato sea interpretado, valorado, por cuanto la decisión del legislador es que se dé sin condicionamiento alguno la consecuencia que la ley establece. En otras palabras, que se cumpla lo que

88

la ley dispone⁴⁶, sin tener en cuenta entre otras, *el estado del proceso, ni la cuantía del abono sobre el crédito en mora, ni las gestiones o diligencias que haya realizado el deudor, o sin que sea exigible actividad judicial o diligencia de parte; o si quedó crédito insoluto, o si las partes llegaren o no a un acuerdo respecto de la reestructuración del crédito.*

Por consiguiente, las condiciones para dar por terminado un proceso ejecutivo hipotecario por ministerio de la ley son: 1. que el ejecutivo se haya iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y 2. que se haya efectuado la reliquidación del crédito. 3. *Esta terminación al ser ordenada por ministerio de la ley debe ser declarada oficiosamente por el juez, quien está sometido, según la Constitución (art. 230 constitucional) tanto a ella como a la ley.*

3. De conformidad con lo anterior, y como lo sostuve insistentemente en las sesiones de Sala Plena⁴⁷, lo fundamental en este proceso es definir lo que se entiende por “*ministerio de la ley*”, pues como se ha observado, de eso dependía las demás conclusiones a que se llegara dentro de este proceso.

El que algo se produzca “*por ministerio de la ley*”, significa que no necesita de un acto de voluntad del sujeto, como lo señalan los artículos 1668 y 1715 del Código Civil, según los cuales, la subrogación legal y la compensación se producen aun contra la voluntad, sin el consentimiento del acreedor y aun sin el conocimiento de las partes, pues basta que lo ordene el legislador. Por lo tanto, no exige ningún tipo de actividad del sujeto procesal. Así lo señaló el doctor Fernando Hinestrosa en los casos en que participó como conjuez de la Corte: de *ipso iure*, por virtud de la ley, significa que algo ocurre sin voluntad ni consentimiento de las partes.

Es de advertir que en este caso, si se acepta esta premisa, no se puede después exigir una serie de actividades por parte del deudor, tesis frente a la cual me permito reiterar mi discrepancia. Hay que señalar que la ley ordenó que dadas unas condiciones, esos procesos ejecutivos hipotecarios tenían que terminar, deber que correspondía al juez, sin que se necesitara de nada más. Por ello, si esta terminación no se hizo en su momento, el suscrito magistrado no encuentra la razón por la cual el deudor tendría que asumir la carga de la parte demandante y del juez.

En cuanto a la obligación de la reliquidación del crédito, reitero por tanto que es claro que esa obligación estaba en cabeza de las instituciones financieras. Es de indicar que en todo proceso ejecutivo, hay una primera liquidación que presenta el acreedor la cual puede ser objetada por el deudor y si no se

⁴⁶ Entre varias sentencias encontramos: T- 383 de 1998 (Beltrán), T- 716 de 2005 (Tafur), T- 080 de 2006 (Beltrán), T- 548 de 2006 (Sierra), T- 591 de 2006 (Araújo), T- 903 de 2006 (Córdoba), T- 584 de 2006 (Monroy).

⁴⁷ Ver Acta No. 30 Sesión Plena de agosto 30 de 2007, entre otras.

presenta, puede efectuarla el deudor sin que pueda objetarse. En el presente caso, el deber de reliquidar lo tenían las instituciones financieras que eran las que iban a recibir el dinero del Estado, sin que se requiriera una solicitud del deudor ni otra actividad a este respecto, pues el legislador lo relevó de toda obligación.

Por ello, considero que no es lógica la tesis que se ha planteado, ya que si se acepta el hecho objetivo de la existencia de un proceso ejecutivo iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y reliquidado el respectivo crédito, la consecuencia necesaria y obligatoria es la terminación del proceso por parte del juez. Sentada esta premisa, todos los demás puntos jurídicos respecto de los procesos *sub examine* estarían resueltos.

A este respecto, existe una clara línea de interpretación que ha hecho la jurisprudencia de la expresión “*ministerio de la ley*”, contenida en el artículo 42 de la Ley 546 de 2002. A mi juicio, todos los problemas que se han planteado en torno de estos casos son ficticios, pues basta darle cumplimiento a la Ley 546 de 2006 y a lo dispuesto en la sentencia C-955/00 para que desaparezcan.

4. De conformidad con el concepto expuesto anteriormente sobre *ministerio de la ley* se deduce que cuando se produce una consecuencia o efecto jurídico por ministerio de la ley, esto significa que no se necesita del consentimiento de ninguna de las partes dentro de un proceso, como también que puede darse en contra de la voluntad de las partes procesales, por cuanto el ministerio de la ley implica una consecuencia jurídica por imperativo de lo ordenado o mandado por la disposición legal, la cual no requiere de manifestación de voluntad alguna.

En este sentido, reitero la tesis según la cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y de acuerdo con el fallo C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, se requieren solamente de tres elementos para la terminación del proceso ejecutivo hipotecario:

- a. **Elemento objetivo:** el elemento objetivo viene dado por la ocurrencia de un hecho en el tiempo o la determinación de una fecha, esto es, que se traten de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999.

Y adicionalmente dos tipos de obligaciones: de una parte, la de reliquidar la obligación y, de otra parte, la de dar por terminado el proceso y archivarlo sin más trámites.

- b. **Obligación de las instituciones financieras de reliquidar:** la obligación de reliquidar el crédito la impuso la ley en cabeza del sistema financiero, y por tanto el deudor quedaba liberado de tener que

solicitarla o pedirla o de realizar acción o actividad alguna en dicho sentido, por cuanto constituye una obligación impuesta por la ley a la entidad financiera.

Con esta obligación la ley no estaba imponiendo nada anormal o extraordinario a las entidades financieras, por cuanto cuando se presenta la demanda ejecutiva, la parte demandante tiene que presentar también la liquidación o el valor del crédito. En este sentido, el acreedor está en la obligación de manifestar a cuánto asciende o cuánto es el valor de la obligación crediticia, y posteriormente a la sentencia se tiene que realizar la reliquidación del crédito.

A mi juicio, la ley con buen sentido, impuso la obligación de reliquidar en cabeza de las entidades financieras, por cuanto como era el sistema financiero quien iba a percibir dinero tenían por tanto la obligación de manifestar expresamente a cuánto ascendía el valor de la deuda o el valor del crédito. En este sentido, considero que en cuanto era el sistema financiero el que se iba a beneficiar con el pago de los dineros del Estado, debían ser precisamente estas entidades quienes debían tener la obligación de reliquidar el crédito, como lo dispuso la ley.

Por consiguiente, reitero que en la exigencia de reliquidación por parte de las entidades financieras, no existe nada extraordinario. Por el contrario, en mi criterio la ley les impuso la obligación de reliquidación a las entidades e institutos del sistema financiero, precisamente porque eran estas entidades las que se iban a beneficiar, por tanto la reliquidación era obligación de estas entidades y no se les podía imputar a los acreedores la obligación de llevar actividad alguna en relación con la reliquidación del crédito. De lo contrario, se llegaría al absurdo que las entidades financieras se beneficiarían de su propia culpa, lo cual es inaceptable y contrario a los principios más básicos del derecho.

- c. **Terminación por ministerio de ley en cabeza del juez:** la obligación de dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario, una vez determinado el requisito objetivo y la reliquidación del crédito, la radicó la ley en cabeza del juez, es una obligación que debe cumplir el juez, como quedó expuesto, por ministerio de la ley.

Esta obligación de terminación del proceso ejecutivo por parte del juez, tiene carácter declarativo, más no constitutivo, en donde el juez simplemente declara lo que la ley ha decidido y ha ordenado, por cuanto se entiende que tiene que operar por ministerio de la ley, como ocurre también en los casos mencionados del código civil. Por tanto, el cumplimiento de esta obligación del juez no requería ni consentimiento, ni manifestación de voluntad alguna, ni actividad o diligencia judicial por parte de la parte demandada, sino que por el contrario, debía producirse de manera oficiosa, obligatoria e imperativa, como

consecuencia necesaria de una relación de causa – efecto, en este caso, lo ordenado por la ley y el cumplimiento del deber legal del juez.

De conformidad con lo expuesto, insisto en que la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 –requisito objetivo- y en los cuales se hubiere efectuado la reliquidación del crédito – obligación en cabeza de las entidades financieras- debían darse por terminados de manera automática por ministerio de la ley –obligación en cabeza del juez-, esto es, por cuanto la ley así lo mandaba, y que por tanto no existía necesidad de consentimiento, de manifestación de voluntad, no había necesidad de que la parte demandada lo pidiera o ejerciera actividad judicial alguna, por cuanto la terminación del proceso era una obligación del juez, razón por la cual cualquier incumplimiento de esta obligación no puede imputarse o ser culpa del demandado.

En síntesis, este fallo tiene la particularidad de estar precedido por una sentencia de constitucionalidad con efectos *erga omnes*, y la misma Ley 546 de 1999 es clara en cuanto se refiere a la terminación de esos procesos ejecutivos hipotecarios por ministerio de la ley, cuando se dan los requisitos previstos en la norma, los cuales deben ser acatados por el juez, sin que el ciudadano tenga que realizar actuación o trámite alguno para ello.

5. De otro lado, el Estado Social de Derecho consagra, con una inspiración humanista, como uno de sus pilares, el respeto de la dignidad humana, de la cual emanan los derechos fundamentales, que son, por tanto, inherentes a la persona humana, esto es, unidos inseparablemente a ella, y de carácter universal.

Así lo prevé la Constitución Política colombiana en sus Arts. 1º y 94. Así mismo, establece que en los estados de excepción no podrán suspenderse las libertades fundamentales (Art. 214).

En armonía con tales enunciados normativos, el Art. 5º *ibidem* dispone que "*el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona*".

En estas condiciones, aunque el Art. 58 superior, modificado por el Art. 1º del Acto Legislativo I de 1999, establece que se garantizan la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, es claro que en caso de conflicto entre un derecho fundamental y el derecho de propiedad u otros derechos patrimoniales, sin duda o discusión alguna debe darse primacía a aquel, lo cual obviamente no significa que el derecho patrimonial no merezca protección, sino que ésta se subordina a la protección del derecho fundamental.

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución, la acción de tutela es la institución jurídica consagrada por el

constituyente para la protección de los derechos fundamentales, como un medio de control difuso de constitucionalidad de las acciones y omisiones de las autoridades públicas y, por excepción, de las acciones y omisiones de los particulares, que ejercen los jueces de la República, con revisión de sus fallos por parte de la Corte Constitucional (Art. 241, Num. 9).

En este orden de ideas, dado que en los procesos ejecutivos hipotecarios de que trata esta sentencia se invoca el derecho a la vivienda digna en conexidad con el derecho fundamental al debido proceso, es manifiesto que si de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se configura una vía de hecho, deben tutelarse esos derechos de los deudores respectivos, sin excluir a los deudores de los procesos en los cuales se ha rematado el bien o se ha adjudicado éste por cuenta del crédito al ejecutante, se ha dictado el auto de aprobación respectivo y se ha efectuado la entrega material del bien, como los excluyó la sentencia de la cual me aparto.

En la sentencia se plantea como fundamento de dicha decisión la garantía de los derechos adquiridos y de la seguridad jurídica. Ello carece totalmente de validez, por la prelación señalada, y porque la seguridad de los derechos no fundamentales, de inferior jerarquía, no puede lograrse a costa de la seguridad de los derechos fundamentales, de superior jerarquía, pues así se quebrantan abiertamente tanto las normas constitucionales que consagran el principio del respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales como los fines de la acción de tutela.

Así, se observa con facilidad que en relación con los casos mencionados el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional considera que, no obstante la comprobación de que se ha producido una vulneración del debido proceso de los deudores ejecutados, en lugar de otorgar la tutela, como es lo lógico, lo jurídico y lo habitual ante dicha situación, le dio primacía a la protección del derecho de propiedad afectando de ese modo la protección del derecho fundamental. Así, en forma absurda, la acción de tutela deja de cumplir su objeto y asume una función protectora de derechos no fundamentales, que son ajenos a dicho objeto, y cuya protección corresponde a la jurisdicción ordinaria mediante la aplicación de las normas legales correspondientes, tanto sustantivas como de procedimiento.

A este respecto, cabe indicar que conforme a la doctrina procesal el remate es una compraventa procesal, por lo cual el Código Civil (Art. 741) prevé que *"en las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal"*. A su turno, el Art. 1746 ibídem contempla que la nulidad judicialmente pronunciada de un acto o contrato da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no

hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita⁴⁸.

Adicionalmente, en cuanto hubiere fundamento para ello, el rematante tiene la posibilidad de demandar al Estado por los perjuicios causados en el ejercicio de la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en el Art. 90 de la Constitución y la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia (Capítulo VI, Arts. 65-74).

En el mismo sentido, debo señalar que por efecto de la sentencia de la cual discrepo se atribuye a un hecho, que es la entrega del bien rematado o adjudicado, la extraña virtud de aniquilar la protección del derecho fundamental al debido proceso y del derecho a la vivienda digna, conexo con aquel, con base en un criterio subjetivo y caprichoso y sin ninguna razón jurídica al menos discutible, de modo que se condena al deudor a soportar a perpetuidad la vulneración de tales derechos.

Es pertinente indicar que el argumento de la Sala es similar al que se ha planteado algunas veces ante demandas de tutela por violación de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al acceso al desempeño de cargos públicos, cuando la autoridad nominadora ha designado en un cargo público a una persona distinta de la que ocupa el primer lugar en la lista de elegibles elaborada con base en el concurso de méritos respectivo, y se deniega el amparo aduciendo que deben preservarse el derecho al trabajo y la seguridad jurídica de la persona designada. En dicho caso, también es claro que al denegar la tutela se convalida, sin justificación jurídica, la violación de los derechos fundamentales del demandante en tutela y, en consecuencia, se convalida la ilicitud del ejercicio del derecho que se protege. En otras palabras, se protegen los derechos fundamentales que tienen fuente ilícita y se dejan de proteger los derechos fundamentales que no la tienen. Ello, en forma evidente, es jurídicamente inadmisibles.

En este aspecto no es válida la alegación de la buena fe consagrada en la Constitución (Art. 83), porque la primacía constitucional de los derechos fundamentales (Art. 5° ibídem) debe aplicarse en forma absoluta respecto de los demás derechos, sin tomar en cuenta si estos últimos han sido adquiridos de buena fe o de mala fe.

Así mismo, no es válido el argumento de que se protege el derecho a la vivienda digna del rematante, por ser numerosos los casos en que el bien se adjudica a la entidad financiera ejecutante por cuenta de su crédito o en que los rematantes son otras personas jurídicas o son personas naturales con la condición de rematantes profesionales, que desarrollan actividades comerciales de compra y venta de bienes objeto de remate en los juzgados. Por el contrario, con la decisión se priva al deudor ejecutado, sin fundamento

⁴⁸ Según lo dispuesto en el Art. 1525 del Código Civil, *"no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita u sabiendus"*.

jurídico, no solamente de su vivienda sino también de su patrimonio, por ser la adquisición de aquella para el común de las personas el producto de su trabajo y de sus ahorros durante la mayor parte de su vida.

Por otra parte, la sentencia vulnera el derecho a la igualdad de dichos deudores (Art. 13 C. Pol.), al dispensarles un trato diferenciado sin una justificación objetiva y razonable, esto es, al discriminarlos, ya que su situación es igual a la de los deudores en los procesos en los cuales no se ha hecho la entrega material del bien al rematante o al ejecutante, teniendo en cuenta que en ambas se reúnen los requisitos establecidos en la Ley 546 de 1999 y en la Sentencia C- 955 de 2000 para dar por terminado el proceso, y que esta última tiene efectos *erga omnes*, de suerte que vincula también a los jueces, incluida la Corte Constitucional. En esta forma, se concedió el amparo a unos deudores y se denegó a otros, cuando ha debido concederse a todos, en condiciones de igualdad de trato.

6. Ahora bien, el tema de la inmediatez es un concepto de creación jurisprudencial que ha hecho referencia a la *diligencia* en que debió haber incurrido aquella persona que se haya visto vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales. Específicamente, ésta ha sido utilizada por la Corte Constitucional para denotar la actividad y prontitud con que la persona buscó proteger sus derechos fundamentales. En esencia, la inmediatez radica en actos diligentes por parte de la persona afectada por violación de sus derechos fundamentales.

No obstante, debo afirmar aquí radicalmente que el artículo 86 constitucional, norma que señala la acción de tutela, *no establece término para hacer valer el derecho fundamental amenazado o vulnerado*.

En realidad la Corte Constitucional ha utilizado los términos de intermediación e inmediatez en la acción de tutela por cuestiones eminentemente prácticas o pragmáticas, pero en momento alguno se han esbozado criterios o razonamientos apegados a la ley o a la Constitución que sustenten un término para interponer la acción de tutela.

Aún más, los conceptos de intermediación e inmediatez, utilizados por ésta Corporación son conceptos diferentes. Según el diccionario de la Real Academia Española, *intermediación* es la *proximidad en torno a un lugar*, mientras que *inmediatez* hace referencia a la cualidad de inmediato (contiguo o muy cercano a algo o a alguien).

Ahora bien, el artículo 11 del decreto 2591 de 1991 establecía: “*Caducidad: la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente*”. Respecto de este artículo la Corte Constitucional mediante sentencia C- 543

de 1992 analizó su constitucionalidad, dividiendo la argumentación en dos partes así:

“*a) La limitación en el tiempo de las posibilidades de acudir a la acción de tutela (caducidad); b) El supuesto -del cual parte y al cual se refiere la aludida caducidad- de que es procedente la tutela contra sentencias que pongan fin a un proceso judicial.*”

La Corte se ocupará de estos dos asuntos de manera independiente, tomando en consideración los argumentos de los actores.”

En este orden de ideas, en dicha sentencia y en lo que interesa para este salvamento de voto, es decir el literal a) de dicho análisis, la Corte Constitucional afirmó respecto a la limitación en el tiempo de la posibilidad de acudir a la acción de tutela:

“*a) Inconstitucionalidad de la caducidad*”

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona “tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...) la protección inmediata de sus derechos fundamentales...”.

(...)

Resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse “en todo momento”, razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexecutable el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo y afecta el interés general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico.”

En consecuencia, a través de una sentencia de constitucionalidad se estableció como inconstitucional la existencia de un término que limite la posibilidad de interponer la acción de tutela.

Así las cosas, *no existe ni por vía constitucional, ni por vía legal y menos aún por vía jurisprudencial; un término que limite la posibilidad de interponer la acción de tutela.*

7. Pues bien, en el tema de los procesos ejecutivos hipotecarios y de las tutelas que nos ocupan y que se interpusieron porque no se terminaron dichos

procesos, el argumento para su no procedencia no puede ser el de inmediatez. Lo anterior, por cuanto lo que se debate en estos casos no es la diligencia o no del afectado en su derecho fundamental al debido proceso, sino por el contrario la diligencia o no del juez quien de oficio y por ministerio de la ley debió dar por terminado los procesos ejecutivos hipotecarios.

En consecuencia, si el juez no terminó el proceso hipotecario, esto no constituye culpa del demandado por falta de diligencia, por el contrario, se considera que es atribuible a la negligencia del juez, posición ésta última que he esbozado en reiterados salvamentos de voto ⁴⁹.

En este sentido, debe afirmarse de manera clara y categórica que si el juez no cumplió con su obligación de dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario por ministerio de la ley, esto no es culpa del deudor y no se le puede endilgar falta de acción o negligencia, por cuanto como consecuencia del precepto del ministerio de la ley, le correspondía al juez, de oficio, declarar la terminación del proceso.

Ahora bien, en mi concepto el principio de la inmediatez no es aplicable frente a la vulneración efectiva y continuada de los derechos fundamentales, por cuanto si un derecho ha sido y sigue siendo vulnerado en el transcurso del tiempo, esto es, de manera continuada, no se puede alegar de ninguna manera el mero transcurso del tiempo, por largo que este sea, para evitar administrar justicia y restablecer el derecho. Esto sería además de absurdo, inconstitucional, por cuanto nuestra Constitución da prevalencia al derecho material y sustancial, máxime cuando se trata de derechos fundamentales, frente al derecho formal y a las formalidades procesales –art. 228 CN-. Baste ilustrar esta situación a través de los delitos continuados, como por ejemplo el delito del secuestro, en el cual por más que se lleve 20 o más años secuestrado, no se puede afirmar de ninguna manera que se haya acabado el secuestro, sino que por el contrario lo que hubo fue una perpetuidad del delito y de la vulneración de los derechos.

En este sentido, es necesario recordar que nunca puede un *hecho* vulnerar un *derecho*, es decir, en este caso, nunca puede la continuidad de un hecho violatorio de un derecho fundamental terminar vulnerando derechos fundamentales.

Por tanto, me permito rebatir nuevamente la tesis de la inmediatez que sirve para coadyuvar a la violación de los derechos fundamentales, por cuanto aunque hayan pasado varios o muchos años a partir de la vulneración de un derecho fundamental, su restablecimiento y reparación se puede pedir o solicitar siempre. En forma contraria a lo que se afirma respecto de la inmediatez, considero que en cuanto más tiempo haya transcurrido en la

⁴⁹ Ver Salvamentos de Voto del suscrito Magistrado a las sentencias de tutela T- 541 , T- 633 y T – 1007, todas de 2006.

vulneración continuada de un derecho, mayor daño y mayor gravedad comporta dicha vulneración y por lo tanto hay que reconocerle mayor gravedad a dicha violación, lo cual exige a su vez, un mayor restablecimiento del derecho.

Por consiguiente, reitero lo sostenido en varias oportunidades en Sala Plena⁵⁰, que considero que el requisito de inmediatez es una creación jurisprudencial que se debe apreciar en cada caso, pues en realidad la Constitución no establece ningún límite temporal para la presentación de la tutela, como quiera que la protección de los derechos no tiene plazo para su reclamo y la norma legal que establecía la caducidad de la acción fue declarada inexecutable. Por tanto, la regla general es la admisibilidad de la tutela y la apreciación respecto de la procedencia o no de la acción frente al requisito de inmediatez sólo puede hacerse por el juez constitucional caso por caso. Los derechos no tienen plazo ni término, ésta es la jurisprudencia de la Corte, que no se puede violar en este caso.

En síntesis y de conformidad con el artículo 86 CN, sostengo de manera clara y categórica que en materia de derechos fundamentales no hay intermediación por la naturaleza propia de estos derechos, lo cual es válido respecto de las tutelas que nos ocupan en esta oportunidad, como también en todos los demás procesos de tutela.

8. Respeto a la subsidiariedad de la acción de tutela la jurisprudencia de esta Corte se ha orientado a afirmar que la tutela constituye un mecanismo subsidiario, tesis que considero correcta, pero que sin embargo, con este fallo se abandona y se incurre en una contradicción.

En este sentido, los magistrados de esta Corte han afirmado en este caso, de un lado, que durante los procesos ordinarios de ejecutivos hipotecarios no se podía interponer el mecanismo de la acción de tutela por cuanto dichos procesos judiciales se encontraban todavía en curso; y de otro lado, que luego que estos procesos se fallaron no se podía recurrir a la tutela por cuanto ya había un fallo judicial. Este tipo de argumentación conduce a un absurdo jurídico y representa una argumentación falaz que desvirtúa por completo el requisito de subsidiariedad predicado del amparo constitucional y termina por cohonestar la vulneración de derechos fundamentales.

Por consiguiente, es mi deber develar la argumentación falaz de la Corte, la cual presenta una contradicción insalvable: se afirma de un lado, que para interponer la tutela, en razón de ser un mecanismo subsidiario, hay que esperar a que transcurra y se agote el mecanismo judicial por la vía ordinaria, es decir, en este caso, a que terminaran los procesos ejecutivos hipotecarios. De otro

⁵⁰ Ver por ejemplo el Acta No. 45, Sesión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, noviembre 22 de 2006, respecto del incidente de nulidad frente a la sentencia T-171 del 2006, y el Acta No. 19 Sesión 12 de Julio de 2007, solicitud de nulidad de la sentencia T-171/06.

lado, se afirma que luego que ha terminado el proceso no se puede interponer la tutela ya que existe una sentencia definitiva y la tutela no procede contra las sentencias o providencias judiciales, tesis que no comparto. A mi juicio, con este tipo de argumentación y en los dos escenarios planteados, se termina haciendo nugatorio la efectividad del amparo constitucional y vulnerando los derechos fundamentales.

Por el contrario, a mi juicio, la tutela, si bien tiene un carácter subsidiario, este no puede ser entendido en el sentido de excluir la posibilidad de interponer la tutela cuando existe la vulneración de un derecho fundamental o cuando existe el peligro de un daño irremediable, aún cuando no se haya agotado la vía ordinaria judicial. Así mismo, la tutela tiene que tener el efecto de reabrir el proceso y devolverlo al estado o al momento en el cual se produjo la violación del derecho fundamental. Finalmente, considero que la regla general es la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, como lo expondré a continuación.

9. De otro lado, mi posición jurídica respecto del tema de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, frente a las tentativas de tratar de eliminar este amparo constitucional, bajo el argumento de la preservación de la seguridad jurídica, respecto de lo cual he sostenido que no es la seguridad o el bien común, el fin supremo del derecho, sino la justicia.

En mi concepto, la tentativa de tratar de eliminar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es insostenible, tanto desde el punto de vista iusfilosófico, como desde la teoría constitucional, por la contundente razón de que todas las ramas del poder público –legislativa, ejecutiva o judicial– tienen tanto el deber de respetar los derechos fundamentales, como también pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe proceder la garantía constitucional de la tutela⁵¹.

Considero que el fin primordial y supremo del derecho es la justicia y que la seguridad jurídica debe servir esencialmente para que los ciudadanos conozcan sus derechos. Por tal razón, es esencial que exista una entidad jurisdiccional superior que cumpla la función de órgano de cierre del sistema de derechos, para que los ciudadanos tengan certeza sobre sus derechos⁵².

En este sentido he sostenido que la procedencia de la acción de tutela se basa en que la Constitución es la máxima norma del orden jurídico, con la máxima eficacia jurídica; en que todos los poderes públicos deben respetar los

⁵¹ Ver Araújo Rentería, Jaime, "Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales", en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2005.

⁵² Opus cit.

derechos fundamentales; y en que el supremo interprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional⁵³.

Por consiguiente, la procedencia del amparo constitucional de tutela frente a las providencias judiciales, se justifica porque: "(i) los derechos fundamentales vinculan por igual a todas las ramas del poder público y demás órganos del Estado; (ii) la justicia prevalece sobre los demás fines del derecho, incluida la seguridad jurídica; y (iii) la acción de tutela procede contra todas las autoridades públicas"⁵⁴.

(i) La primera razón de la procedencia de la garantía tutelar contra decisiones judiciales la constituye la fuerza vinculante de los derechos humanos frente a todas las ramas del poder público y órganos o entidades del Estado. La vinculación del Estado a los derechos fundamentales tiene a su vez una doble connotación: la primera es que el Estado, a través de sus órganos y entidades, puede llegar a desconocer tales derechos. Esta es la razón por la cual el liberalismo clásico consideró de la esencia de los derechos humanos el constituir un límite al poder político del Estado y una talanquera al abuso de este poder por quienes lo ejercen, contrarrestando de esta forma la tendencia de la naturaleza humana al abuso del poder. Esta constituye una regla de oro que no debe admitir excepción alguna, por cuanto implicaría admitir la vulneración de derechos por parte de cualquiera de los órganos o entidades del Estado, incluyendo la rama judicial, lo cual a su vez negaría el presupuesto normativo básico del Estado social y constitucional de Derecho, esto es, la garantía de los derechos del individuo en cuanto ser digno, libre e igual⁵⁵.

La segunda connotación de la vinculación de las ramas del poder público, órganos, entidades o funcionarios públicos, por los derechos fundamentales, es que el Estado moderno fue instituido para garantizar y proteger los derechos, y es ésa precisamente su razón de ser y su fundamento último. Por tanto, se puede concluir que la legitimidad de las autoridades públicas, y por ende del Estado, deriva del cumplimiento de estos mandatos y que el respeto, cumplimiento y realización de los derechos fundamentales es un deber no solo del legislador, del gobierno y de los jueces, sino de todas las autoridades⁵⁶.

(ii) La segunda razón expuesta para justificar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es la prevalencia de la justicia como supremo bien del derecho frente a la seguridad jurídica y al bien común.

Si bien el ideal es la convivencia armónica y simultánea entre estos tres valores, en realidad se presentan antinomias y relaciones dialécticas entre ellos, de manera que debe haber un juicio sobre la primacía o prevalencia de alguno de ellos sobre los demás. Ha sido mi tesis, siguiendo en esto al filósofo

⁵³ Opus cit.

⁵⁴ Araújo Rentería, Jaime, "Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales", en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2005, pág. 192.

⁵⁵ Ver opus cit.

⁵⁶ Ver opus cit.

del derecho Gustav Radbruch, que en caso que la justicia se encuentre en conflicto con la seguridad, debe dársele mayor peso y reconocerle primacía a la justicia.

En este sentido, he sostenido que la afectación del principio de la seguridad jurídica o de una de sus expresiones, como lo es la cosa juzgada, se produce en el derecho con el fin de salvaguardar otros valores como la justicia o la paz, como lo ejemplifican el recurso extraordinario de revisión, la favorabilidad en materia penal, así como la existencia de la Corte Penal Internacional, casos en los que se muestra cómo la seguridad jurídica en su manifestación del concepto de cosa juzgada debe ceder ante el valor de la justicia, por lo cual es válido también que ceda cuando se trata de los derechos fundamentales⁵⁷.

He sostenido por tanto que los argumentos contra la tutela frente a providencias judiciales son falaces, por cuanto son razonamientos errados que buscan engañar al contradictor o receptor del mensaje, como ocurre tanto con el argumento de la seguridad jurídica como con el de la jerarquía de los jueces.

(iii) El tercer argumento en favor de la procedencia de la tutela contra las providencias judiciales es el de que la tutela procede contra todas las autoridades públicas, cuando quiera que los derechos fundamentales sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, de conformidad con el artículo 86 Superior.

*“El concepto de “autoridad pública” comprende todas las ramas del poder público y demás órganos que integran el Estado. La Constitución no contempla excepción alguna. De ahí que no sea válido entrar a diferenciar donde no lo hizo el Constituyente. Es más, conforme los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente queda claro que su voluntad estuvo dirigida a que la tutela procediera contra las actuaciones de todas las autoridades públicas”*⁵⁸, incluidos los jueces, y no solo frente a las autoridades administrativas, restricción que fue rechazada por el Constituyente.

Esta postura de nuestra Constitución la encuentro coherente con la finalidad de proteger efectivamente los derechos fundamentales, por cuanto, si todas las autoridades públicas pueden vulnerar derechos fundamentales, entonces es de suyo que la acción de tutela debe proceder contra todas ellas, incluso contra los jueces en sus decisiones judiciales.

Así mismo, esta postura concuerda con el reconocimiento histórico de que no sólo los gobiernos pueden vulnerar los derechos fundamentales sino también los legisladores y los jueces, e incluso los particulares. De este modo, el concepto mismo de derecho fundamental implica que este representa un límite incluso para el propio legislador, en cuanto el núcleo esencial del derecho no puede ser tocado ni siquiera por éste, entendiéndose por núcleo esencial

⁵⁷ Ver opus cit.

⁵⁸ Araújo Rentería, Jaime. “Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales”, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2005, pág. 202.

aquello que lo caracteriza y lo hace tal derecho y sin lo cual deja de serlo o se convierte en otra cosa diferente. Así mismo también los particulares pueden violar un derecho fundamental y es necesario garantizarlo frente a los particulares.

De igual manera, los jueces pueden conculcar los derechos fundamentales y es necesario entonces protegerlos frente a éstos, por cuanto concluir lo contrario sería aceptar que los derechos fundamentales pueden ser conculcados por los jueces, que los derechos de los ciudadanos no valen ante los jueces y que el Estado no está al servicio del individuo sino que éste está sometido a aquel⁵⁹.

Por esta razón, tanto en el sistema constitucional alemán como en el español procede el recurso de amparo contra providencias judiciales, por cuanto tienen claro que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por la autoridad judicial mediante las resoluciones o decisiones judiciales⁶⁰.

Por consiguiente, debe concluirse necesariamente que está plenamente justificado tanto por razones de filosofía del derecho como de teoría constitucional la procedencia del amparo constitucional de los derechos fundamentales a través de la tutela frente al accionar o la omisión de los jueces de la República mediante sus resoluciones o decisiones judiciales que constituyan vulneración de derechos fundamentales.

10. De conformidad con lo anterior, considero que hay que volver a la regla general, hay que invertir la regla aplicada por la Corte, en el sentido que la regla general es que la tutela procede contra providencias judiciales, otorgándole prioridad al valor de la justicia frente al de la seguridad jurídica, en las relaciones dialécticas entre estas últimas dentro del marco del Estado social y constitucional de Derecho.

En los casos de procesos ejecutivos hipotecarios que se revisan se cumplen los requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales pues las providencias judiciales desconocen tanto los criterios legales establecidos por la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia C-955 de 2000, configurándose por tanto una vía de hecho judicial.

Los requisitos básicos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994⁶¹, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental. Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada y desarrollada en numerosa jurisprudencia reciente de esta Corte como por ejemplo en las sentencias T-169/05, T-289/05, T-390/05,

⁵⁹ Ver opus cit.

⁶⁰ Ver art. 19-4 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, y el art. 54-1 y 55 de la Constitución española de 1978

⁶¹ MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.

391/05, T-494/05, T-1203/05, T-1211/05, T-579/06, T-590/06, T-797/06, T-909/06, T-949/06, T-1026/06, T-1078/06, T-1084/06 entre otras.

En este sentido, considero que los jueces no pueden desconocer ni la ley ni el fallo de constitucionalidad de la Corte con efecto *erga omnes* en relación con los dos requisitos establecidos vía jurisprudencial – la reliquidación y la demanda antes del 31 de diciembre de 1999-, cuya consecuencia debe ser la terminación del proceso hipotecario por ministerio de la ley, esto es, entre otras cosas, sin que sea exigible actividad judicial o diligencia de parte. En otras palabras, cumplidos los requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta Corte, debe el juez de conocimiento dar por terminado el proceso hipotecario de oficio. El no hacerlo implica, a la luz de la jurisprudencia de esta Corte, la configuración de una vía de hecho y la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, por todo lo cual resulta procedente la acción de tutela.

Por consiguiente, los jueces no podían sino actuar dentro del marco de la ley y de la sentencia de la Corte y si los jueces no terminaron el proceso hipotecario, esto no constituye culpa del demandado por falta de diligencia, por el contrario, considero que es atribuible plenamente a la negligencia del juez. Reitero por tanto, que la justicia es más importante que la seguridad jurídica y que los jueces que han cumplido con la ley y acatado la sentencia C-955/00 han actuado de manera correcta, por lo que ahora no se puede premiar a los jueces que no lo hicieron, razón por la cual el suscrito magistrado no entiende cómo no se considera la actuación de los jueces en desconocimiento de la ley y desacato de la sentencia de constitucionalidad con efectos *erga omnes* como configuratoria de una vía de hecho y se perpetua así en el tiempo la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, vulneración que no desaparece por el simple paso del mismo.

En síntesis, las sentencias contra las cuales se enerva la tutela en estos casos desconocen tanto la ley como una sentencia de constitucionalidad con efectos *erga omnes*, y constituyen por tanto una **vía de hecho**, razón por la cual considero que en este caso procede la tutela y debe ser concedida por cuanto se constituye vía de hecho judicial, por desconocimiento de la ley 546 de 1999 y desacato de la sentencia de constitucionalidad C-955 de 2000.

11. Pasemos ahora a analizar los requisitos jurídicos de procedibilidad son aquellos requisitos necesarios para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. Por tanto, tienen carácter procesal y coinciden con algunas causales de nulidad.

La falta de alguno de estos requisitos determina la inadmisibilidad del proceso, lo que en la práctica judicial se traduce en una declaración de improcedencia o un rechazo de la demanda por improcedencia, ordinariamente al comienzo de la actuación, por razones de economía procesal.

Según la jurisprudencia civil, los presupuestos procesales son: competencia, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso. En materia contencioso administrativa es notable el presupuesto consistente en el agotamiento previo de la vía gubernativa para la instauración de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 135 C. C. A.)

Cuando faltan tales requisitos, en el curso del proceso puede declararse la nulidad procesal respectiva, conforme a las normas legales. Si no se hace, según la jurisprudencia colombiana de la jurisdicción ordinaria (civil, laboral, contenciosa administrativa) debe dictarse sentencia inhibitoria, que no produce cosa juzgada material (Art. 333 C. P. C.)

En materia constitucional, para el caso del estudio concreto de constitucionalidad vía de amparo o tutela, existen unas causales legales específicas de improcedencia contempladas en el Art. 6° del Decreto 2591 de 1991, a las cuales la Corte Constitucional les ha agregado otras por vía jurisprudencial como, por ejemplo, el principio de inmediación, al cual me referiré más adelante.

Cabe observar que con mucha frecuencia esta Corporación no emplea la expresión de procedibilidad en su sentido propio, al usarla para referirse a condiciones de fondo, esto es, a requisitos de prosperidad o acogimiento de las pretensiones.

12. En relación con los procesos ejecutivos hipotecarios por obligaciones en UPAC para vivienda, con fundamento en la Ley 546 de 1999 y en la decisión sobre exequibilidad de las normas de la Ley 546 de 1999, contenida en la Sentencia C-955 de 2000, decisión que tiene efecto *erga omnes*, y como consecuencia del concepto de *ministerio de ley*, expuesto en apartado anterior, me permito reiterar que existen únicamente dos requisitos de procedibilidad:

- i) Que el proceso se haya iniciado con anterioridad al 31 de Diciembre de 1999;
- ii) Que la institución financiera haya presentado la reliquidación del crédito en el proceso ejecutivo.

Dados estos dos requisitos el juez debía por **ministerio de la ley** declarar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, sin necesidad de exigir consentimiento, declaración de voluntad o diligencia judicial por parte del deudor.

Como se ve con claridad, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad exigidos por la ley no eran exigibles al deudor, porque no atañían directamente a éste en cuanto la ley los estableció como un requisito objetivo –determinación de una fecha en el tiempo- y un requisito en cabeza de las entidades financieras referido a la reliquidación del crédito-, dado los cuales

52

debían conducir necesariamente al cumplimiento de la obligación del juez de declarar la terminación del proceso ejecutivo por mero ministerio de la ley.

Por consiguiente, considero que la imposición de algunos requisitos adicionales, como el de la diligencia judicial o ausencia de culpa de aquél en el proceso, no tienen fundamento jurídico alguno de conformidad con la propia ley y la sentencia C-955 de 2000.

13. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, considero necesario develar aquí, que la estrategia implementada por la Corte ha sido la de exigir e imponer más requisitos para poder hacer efectivos los derechos, lo cual imposibilita y hace en la práctica nugatorio los mismos.

En este caso, la Ley 546 de 1999 y la sentencia de constitucionalidad C-955 de 2000 impone dos requisitos para que proceda la terminación del proceso ejecutivo: un requisito objetivo, referente a la fecha de iniciación de los procesos; y la obligación del demandante, acreedor o entidad financiera de reliquidar el crédito; lo cual debe conducir necesariamente al cumplimiento por parte del juez de su obligación de declarar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario. Con estos requisitos o elementos, es fácil proteger el derecho a la vivienda, pero si se imponen o exigen más y más requisitos, se dificulta también cada vez más la protección efectiva de los derechos fundamentales, en este caso, el de la vivienda digna.

En concordancia, considero necesario recordar aquí que las interpretaciones del derecho no son neutras, y en este caso, los requisitos impuestos para la terminación de los procesos ejecutivos no son neutros, sino que tienen una finalidad determinada. Las interpretaciones en el derecho favorecen o perjudican a alguna de las partes en los procesos judiciales, y en este caso concreto de las interpretaciones respecto de los préstamos hipotecarios, considero que se está beneficiando a los poderosos, es decir, a las entidades financieras. Por tanto, debo decir claramente que las interpretaciones de la Corte en este caso no son neutrales, sino que favorecen a una de las partes, en concreto al sistema financiero, por cuanto el objetivo de establecer más requisitos para la procedencia de la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios está claramente encaminado a favorecer a las instituciones financieras.

Lo anterior obedece a una relación directamente proporcional entre requisitos para la garantía de los derechos y la efectiva protección de los mismos. Así a menor número de requisitos mayor es la protección de los derechos, y de manera inversa, a mayor número de requisitos menor es la protección de los derechos. A modo de ejemplo, si se ponen cien (100) requisitos para la garantía judicial de un derecho y se cumplen noventa y nueve (99) requisitos pero falta un (1) solo requisito, se predica la falta del lleno total de los requisitos impuestos y por falta del cumplimiento de ese solo requisito se deja de proteger el derecho fundamental, lo que en mi concepto es contrario a derecho y a la justicia.

Por lo demás, en estos casos en concreto, insisto en que al deudor no se le exigía el cumplimiento de ningún requisito, por cuanto uno era un requisito objetivo, referente a la determinación de una fecha en el tiempo; el segundo, era un requisito que tenía que ser cumplido por la parte demandante o entidad crediticia, referente a la reliquidación de los créditos hipotecarios; y el tercero, era un requisito que tenía que cumplir el juez al declarar terminado el proceso ejecutivo por mero ministerio de la ley; razón por la cual ninguno de los requisitos impuestos era exigible al deudor.

En este sentido, el deudor no tenía que pedir o solicitar nada dentro del proceso por cuanto estos requisitos se radicaban en cabeza de las otras partes en el proceso, y debían cumplirse por ministerio de la ley, siendo por tanto una consecuencia del **ministerio de la ley**. Por tanto, no se podía exigir, como lo hace la interpretación de la Corte, diligencia de parte, por cuanto la ley suple la diligencia, el consentimiento o la voluntad de parte y ordena un efecto jurídico necesario, razón por la cual la actuación del juez no se trataba de una actuación constitutiva sino meramente declarativa.

Por esta razón, nunca he compartido la tesis de la mayoría en Sala Plena en el sentido que se necesitara actividad de parte o diligencia de parte, ya que como quedó expuesto, la parte demandada quedó liberada de actividad judicial, no había que mirar por tanto en estos casos si había habido actividad de parte o diligencia de parte o no, como en un proceso normal, sino simplemente el cumplimiento del requisito objetivo, referente a la fecha, y el cumplimiento de la obligación por parte de la entidad financiera de reliquidar, para que el juez procediera a cumplir con su obligación de dar por terminado el proceso ejecutivo por ministerio de la ley.

Por estas razones no comparto la tesis de que uno de los requisitos de procedibilidad sea el que el deudor afectado haya sido diligente en el proceso judicial.

14. Respecto del tema de la procedibilidad, el otro argumento expuesto por la mayoría de la Sala Plena era que en estos casos de tutela se trataba de providencias judiciales, frente a las cuales no procede la tutela o procede sólo excepcionalmente, argumento que tampoco comparto. Respecto de este tema he sostenido, como quedó expuesto en apartado anterior, que la regla general es justamente la contraria, esto es, que procede la tutela contra providencias judiciales y sólo excepcionalmente no procede.

15. En síntesis, estos casos de tutela no eran casos cualquiera, primero por cuanto la ley había liberado al deudor de la carga de cualquier actividad judicial dentro del proceso y la terminación del proceso ejecutivo debía darse por ministerio de la ley con el lleno de los dos requisitos mencionados, de los cuales ninguno era imputable al demandado; segundo, porque había un fallo de la Corte que ordenaba la terminación de los procesos ejecutivos

hipotecarios en los que se cumplieran los dos requisitos expuestos, y estas sentencias de constitucionalidad tienen efectos *erga omnes*, por lo cual deben ser cumplidas por todas las autoridades, especialmente por los jueces.

Por tanto, en estos casos lo que sucede es que los jueces, en su mayoría de segunda instancia, o tribunales, están desacatando no sólo lo ordenado por la ley sino también el fallo de constitucionalidad con efectos *erga omnes*. En este sentido, me permito reiterar que en estos procesos ejecutivos se desconoció, en primer lugar, el mandato del ministerio de la ley, y en segundo lugar, una sentencia de constitucionalidad con efectos *erga omnes*, configurándose de este modo una vía de hecho judicial y un escenario de desacato frente a lo ordenado por la misma.

Por consiguiente, lo que esta Corte tenía que ordenar, en mi concepto, era que se terminaran los procesos ejecutivos hipotecarios en los que se cumplían los requisitos exigidos por ministerio de la ley, para hacer valer tanto la ley 546 de 1999 como la sentencia C-955 de 2000, esto es, lo que había que hacer era cotejar cada caso con la ley y el fallo de la Corte y ordenar que todos los casos, en los cuales se cumplieran los dos requisitos mencionados, se dieran por terminados.

Por esta razón, estos casos no constituían casos normales de tutela, y en ellos no sólo debía haberse dado por terminados los procesos por ministerio de la ley, sino que era procedente la tutela contra providencias judiciales e independientemente de lo que se hubieran demorado tenía que haberse declarado la terminación de los mismos y haberse tutelado el derecho fundamental invocado.

16. En el presente caso, como en otros resueltos con base en acciones de tutela, la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario se debe declarar entonces por violación del debido proceso consagrado en el Art. 29 de la Constitución, que es la fuente de todas las nulidades legales.

Según lo dispuesto en el Art. 146 del C. P. C., *"la nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste (...)"*.

En consecuencia, en este caso la Corte debe declarar la nulidad del proceso en forma parcial, a partir de la actuación siguiente a la reliquidación del crédito.

Ello significa que queda en pie la parte anterior del proceso, que no está viciada de nulidad, y, por tanto, en vez de ordenar que se renueve o rehaga la actuación anulada, como ocurre normalmente, debe declararse terminado el proceso y ordenarse el archivo del expediente, con fundamento en la ley y en la jurisprudencia constitucional, como lo he reiterado insistentemente a lo largo de este escrito.

17. En relación con el tema de los bienes ya rematados dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios y los terceros adquirentes de buena fé, sostengo la tesis, contraria a la de la mayoría de la Sala Plena, que la terminación del proceso ejecutivo hipotecario se debe decretar sin importar la etapa procesal en la que se encuentre el respectivo asunto, esto, por cuanto como se ha insistido, la terminación del proceso debe darse por ministerio de la ley, esto es, en cumplimiento estricto de la norma aplicable y la sentencia de constitucionalidad al respecto, que establecen que la terminación de estos procesos debe declararse por el juez, cuando se cumplan los requisitos relativos a que la acción ejecutiva hipotecaria se hubiera iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y que se hubiera aportado la respectiva reliquidación del crédito por parte de la entidad financiera.

Así las cosas, debe responderse afirmativamente al cuestionamiento sugerido en la parte de los problemas jurídicos de esta sentencia que dice: *¿Debe darse por terminado un proceso ejecutivo hipotecario, cuando, a pesar de cumplir con los requisitos de que habla la Ley 546 de 1999, el bien inmueble, objeto de la demanda, ya fue rematado y adjudicado?*⁶². Lo anterior, si se tiene en cuenta que por lo que se propende al dar por terminado un proceso ejecutivo en las condiciones antes expuestas, así el interregno transcurrido entre el inicio de la correspondiente acción civil y la actual acción de tutela sea muy largo, es por proteger unos derechos fundamentales de protección inmediata. Otros son los temas de la responsabilidad por error judicial, la devolución del dinero al adquirente, que se podrán discutir posteriormente, por cuanto estos temas no corresponden a la órbita de la competencia del juez de tutela.

Ya en jurisprudencia reciente se ha advertido en este sentido lo siguiente:

"Considera necesario la Sala hacer una especial referencia al hecho de que, como en los casos resueltos en las sentencias T-080 de 2006⁶³, T-1181⁶⁴ y T-495⁶⁵ de 2005, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se adelantó contra la señora Bedoya Gaviria, los bienes que servían de garantía al crédito adquirido con "Ahorramás" ya fueron rematados, adjudicados y entregados a su adquirente. Ello por cuanto este hecho no modifica la existencia de una vía de hecho violatoria del derecho al debido proceso del que es titular la demandante en sede de tutela. Aunque el tercero adquirente de los bienes los haya adquirido de buena fe, ello no obsta para que la protección y restablecimiento de un derecho de rango fundamental –el del debido proceso– prevalezca sobre un derecho constitucional mas no fundamental.

⁶² Es pertinente anotar en este sentido que la Corte en su jurisprudencia no ha hecho salvedades respecto de la situación actual del proceso. La subregla sólo exige que aportada la reliquidación se decrete la terminación del proceso ejecutivo hipotecario. Sentencias de esta Corporación han decretado la terminación de los ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, en los que se ha aportado la reliquidación del crédito, incluso cuando el bien inmueble objeto de garantía dentro de la respectiva hipoteca ya ha sido rematado y adjudicado. Al respecto ver sentencias: T-449 de 2006 y T-357 de 2005, entre otras.

⁶³ MP: Alfredo Beltrán Sierra

⁶⁴ MP: Clara Inés Vargas Hernández

⁶⁵ MP: Rodrigo Escobar Gil

53

como el de la propiedad del tercero de buena fe, conforme a lo previsto en el artículo 5º superior y a lo expuesto en la doctrina constitucional. Es el deber de esta Sala recordar que en un conflicto entre un derecho fundamental y uno de carácter patrimonial, siempre debe primar el de carácter fundamental. No obstante, como efecto de la decisión que aquí se toma, considera la Sala que el señor Diego Fernando García Medina puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios pertinentes para obtener el reembolso de lo pagado, de acuerdo con la ley⁶⁶. (subrayas y negrilla fuera del texto original).

En este sentido, considero que la terminación de los procesos ejecutivos con el lleno de los requisitos exigidos por la ley y de conformidad con la jurisprudencia constitucional deben darse por terminados independientemente de la etapa procesal en que se encuentren, y en consecuencia devolverle la vivienda al deudor, aún en aquellos casos en los cuales haya habido lugar a remate y existan terceros adquirentes, por cuanto en primer lugar, la terminación debe operar por ministerio de la ley independientemente de la etapa procesal en que se encuentre el proceso; en segundo lugar, tiene prevalencia la protección del derecho fundamental frente al derecho de propiedad; en tercer lugar, la falta de terminación de estos procesos no es imputable al deudor sino a los jueces y a la mala administración de justicia; en cuarto lugar, porque muchas de estas viviendas rematadas se encuentran nuevamente en cabeza de las entidades financieras, o fueron adjudicadas a personas jurídicas o a personas dedicadas al negocio de los remates judiciales, casos en los cuales no considero que sea posible argumentar la protección del derecho a la vivienda digna, como sí lo es en el caso de los deudores de UPAC; y en quinto lugar, por cuanto el tercero adquirente sigue teniendo las vías judiciales ordinarias para reclamar el reembolso de lo pagado de conformidad con la ley.

De esta manera, los terceros de buena fé no quedan desprotegidos, pues tienen derecho a que se les devuelva lo que pagaron por el bien, que siempre es un precio menor al de valor comercial, además de los intereses legales, y de que pueden demandar a los jueces que sean responsables, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución. En mi concepto, no es al deudor, que tenía un derecho que se le vulneró y no se le protegió, a quien le corresponde ahora ir a demandar ante la jurisdicción contenciosa, mucho menos cuando, como lo expuse, no se puede hablar en este caso de un legítimo derecho a la vivienda de los bancos o entidades de crédito.

Por todas estas razones, considero que aún en los procesos en los cuales se hayan rematado los bienes inmuebles, tendría que haberse devuelto la vivienda al deudor y verdadero perjudicado en estos procesos, a quien por lo demás esta sentencia pretende dejar sin mecanismos judiciales para reclamar sus derechos.

⁶⁶ Sentencia T-591 de 2006 MP: Jaime Araújo Rentería. Conjuez: Fabio Morón Díaz.

18. En relación con los efectos jurídicos de la presente sentencia, me permito dejar expresa constancia en este salvamento y aclaración de voto de mi discrepancia respecto de los mismos en los siguientes temas:

En primer lugar, considero que la presente decisión ha debido tener el efecto del restablecimiento de la vivienda a TODOS aquellos deudores de créditos hipotecarios que la han perdido a consecuencia de la violación de la Ley 546 de 1999 y de la sentencia C-955 del 2000. En este sentido, debo dejar constancia de que propuse en su momento en Sala Plena restablecer la vivienda a TODOS los que la habían perdido por causa de una mala administración de justicia, no importando en este caso ni el estado del proceso, ni los terceros adquirentes, en aquellos casos en que hubiera habido remate y adjudicación, por cuanto como quedó expuesto, los terceros tienen las vías judiciales ordinarias pertinentes para exigir y reclamar debidamente sus derechos, vulnerados así también por la mala administración de justicia.

Este efecto que debería tener la presente sentencia se encuentra fundamentado en la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la vivienda digna, frente a la protección del tercero adquirente y el derecho a la propiedad. A este respecto, considero que el argumento de la mayoría de la Corte en cuanto a la protección de los terceros de buena fé a una vivienda digna es falaz por cuanto como lo anoté anteriormente, muchas de las viviendas rematadas y adjudicadas se encuentran de nuevo en poder del sistema financiero o de otras personas jurídicas, casos en los cuales no se puede hablar de protección a la vivienda digna.

El tema de la vivienda digna implica por el contrario, que en razón del principio de dignidad humana nadie puede considerarse digno sin vivienda, por lo cual mi posición jurídica ha sido siempre la de que habría que haberle devuelto la vivienda a TODOS los deudores de créditos hipotecarios sin excepción.

Adicionalmente considero que a aquellos deudores a los que despojaron de su vivienda, en los casos en donde hubo remate y adjudicación de los bienes inmuebles a terceros, se los dejó sin mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos, máxime cuando como lo he expresado anteriormente, la vivienda representa en la mayoría de estos casos todo el patrimonio que tienen estas personas, y no se trataba sólo de la vivienda sino también de las mejoras hechas a las mismas y de todos los ingresos de las personas –salarios, cesantías, primas, etc.- invertidos en el pago de las cuotas del crédito hipotecario y en las mejoras del bien inmueble.

19. En relación con el punto anterior, considero igualmente que a todos aquellos a quienes no se les devolvió la vivienda hay que reconocerles la capacidad y posibilidad jurídica de exigir judicialmente responsabilidad patrimonial y extramatrimonial frente a quienes no cumplieron la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 del 2000 de la Corte. Por tanto, debo afirmar

claramente que los perjudicados tanto por la culpa atribuible al sistema financiero como a los jueces de la República, sí tienen otro camino o vía judicial para hacer valer sus derechos constitucionales y legales.

Por consiguiente, es de señalar que las acusaciones de los ciudadanos por la responsabilidad de los jueces son legítimas y que en cada caso, pueden reclamar ante las instancias nacionales e internacionales. Considero por tanto, que lo que antes era ilegal ahora no se puede convertir en legal por el transcurso del tiempo, sino que esos jueces deben responder judicial y patrimonialmente por vulnerar derechos fundamentales. Así mismo, considero que las entidades financieras no puede alegar ahora que las obligaciones eran del deudor cuando la crisis tuvo origen en sus actuaciones y terminan por beneficiarse de su propia negligencia. En este contexto, las entidades financieras argumentaron que bastaba con que no se presentara la reliquidación para que los procesos ejecutivos hipotecarios no terminaran, tesis frente a la cual discrepo categóricamente, por cuanto válida el incumplimiento y negligencia de estas entidades, y ello en su propio beneficio, lo cual contraría los principios básicos del derecho.

De esta manera reitero que el juez no puede beneficiarse de la omisión en el cumplimiento de la ley, de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional con efectos *erga omnes*, ni el demandante de su incuria. En este sentido, considero que los jueces que han cumplido con la ley y acatado la sentencia C-955/00 han actuado de manera correcta, por lo que ahora no se puede exonerar de responsabilidad a los jueces que no lo hicieron.

20. Respecto del tema sobre el tope máximo de pago por créditos hipotecarios, es necesario recordar aquí, en primer término, que ya la sentencia C-955 de 1999 estableció que la tasa de interés para estos créditos de vivienda tenía que corresponder a la tasa más baja del mercado, esto es, que no podía ser superior a la tasa de interés más baja que operara en el mercado, mandato que no sólo no ha sido cumplido por parte del sistema financiero, sino que continúa vigente y tiene que ser cumplido por las entidades financieras y hecho respetar también por las autoridades administrativas de control y vigilancia y por las autoridades judiciales.

En segundo lugar y más allá de lo ordenado por la sentencia C-955 de 2000, considero que la consecuencia de esta última decisión no ha debido ser sólo la terminación de los procesos ejecutivos sino también el establecimiento de un tope máximo de pago para los deudores de crédito hipotecario, por cuanto en los créditos de vivienda los deudores han terminado pagando una gran cantidad de veces, desproporcionada en la gran mayoría de los casos respecto del crédito otorgado.

Por tanto, me permito dejar constancia, de que en su momento propuse en Sala Plena una **regla de pago máximo**, según la cual el deudor de crédito hipotecario, **en ningún caso**, debería pagar más del doble del crédito otorgado, esto es, del capital prestado, de modo que si una persona recibe un

préstamo por valor de \$20.000.000 de pesos lo MAXIMO que debe pagar sería \$40.000.000 de pesos, suma que estatuiría un máximo, sin perjuicio de que pagara menos.

Con esta regla, se trataba entonces de establecer un criterio máximo de pago de créditos hipotecarios, equivalente al doble de lo prestado, y con ello también un límite a las tasas de interés, lo cual no significaba que los deudores tuvieran que pagar necesariamente el doble del crédito, sino de establecer un tope máximo de pago, sin perjuicio de que el deudor terminara pagando menos de este máximo fijado, y ello precisamente con la finalidad de evitar los abusos del sistema financiero. Esta propuesta no fue acogida por los magistrados de esta Corporación.

21. Con esta nueva decisión de la Corte tenemos ahora en el ámbito jurídico una ley vigente y un fallo de constitucionalidad con efectos *erga omnes*, y una sentencia de unificación que establece más requisitos de los previstos anteriormente por la ley y por el fallo de constitucionalidad.

En este escenario, y dado que una sentencia de tutela no tiene efectos *erga omnes*, y que una sentencia de constitucionalidad tiene mayores efectos de vinculación o mayor fuerza vinculante que una sentencia de unificación, en cuanto son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares —art. 21 Decreto 2067 de 1991—, considero que los jueces de la República pueden y deben seguir fallando en cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad C-955 del 2000 de la Corte, y por tanto siguen estando autorizados y legitimados para seguir acatando lo ordenado por dicha sentencia, que por lo demás, es una sentencia anterior y de mayor jerarquía que la sentencia de unificación que nos ocupa.

De esta manera, considero necesario afirmar claramente que los jueces siguen estando legitimados para continuar aplicando sólo los dos requisitos contemplados por la ley y el fallo anterior de constitucionalidad respecto de la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios.

Por tanto, me permito insistir en que la sentencia de constitucionalidad de la Corte prima sobre el fallo de unificación y de no ser así, los efectos *erga omnes* serían nugatorios; y en que una sentencia de unificación de jurisprudencia en tutela no puede ir contra una sentencia de constitucionalidad que tiene efectos *erga omnes*. Por consiguiente, después de este fallo, los jueces podrán y deberán seguir aplicando la sentencia C-955/00 que prima sobre la de unificación.

22. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido en casos excepcionales la extensión de los efectos de sus sentencias de tutela, proferidas en el trámite de revisión de los fallos de instancia, a personas que no han instaurado la acción respectiva. Ello con el fin de cumplir su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución Política y proteger

CH

los derechos constitucionales fundamentales, en particular el derecho a la igualdad⁶⁷.

En este sentido, el suscrito magistrado no solo comparte la extensión de los efectos de la presente sentencia a todos aquellos casos de procesos ejecutivos hipotecarios de deudores de UPAC que se encuentren en condiciones de igualdad, esto es, que cumplan con los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia, sino que propuse la extensión de los efectos de la presente decisión a los casos que se presenten en el sistema actual de UVR, casos en los cuales considero que se deben seguir los parámetros y criterios jurisprudenciales fijados por la Corte, propuesta que no fue acogida por la mayoría de magistrados en Sala Plena.

Por tanto, discrepo frente a la presente sentencia en relación con los efectos de la misma, por cuanto considero que no solo los efectos de esta sentencia deben extenderse a todos los casos de procesos ejecutivos hipotecarios del sistema UPAC, que cumplan con los requisitos exigidos por la ley y la sentencia de constitucionalidad, sino también que los criterios y parámetros jurisprudenciales planteados por la Corte, así como los efectos de esta decisión, sí se pueden aplicar a los casos de créditos hipotecarios del actual sistema de UVR.

23. De otra parte, considero que la reestructuración del crédito hipotecario, ordenada por esta sentencia, presenta el problema de que hoy en día la situación económica y financiera del deudor de créditos hipotecarios está desmejorada sustancialmente en atención a que ha gastado su capital en el proceso ejecutivo anterior, razón por la cual no posee recursos para seguir pagando la obligación crediticia que se reestructure. En este sentido, considero que el Gobierno debe vigilar que la reestructuración del crédito se haga de forma favorable al deudor y atendiendo a la actual situación económica del deudor y sin el cómputo de los intereses.

Adicionalmente respecto del tema de la reestructuración de los saldos de las obligaciones crediticias sostuve en Sala Plena que para efectos de la reestructuración debía mantenerse un mecanismo ágil y expedito. Consideré además que frente a la alternativa de que fuera una concertación individual era mejor una concertación en grupo, con el Gobierno actuando como árbitro, y con la participación de los representantes de los diferentes sectores, especialmente los representantes de los usuarios del sistema UPAC. Esto fue precisamente lo que no se hizo en el año 2000, con el fin de aplicar alivios y mejorar las condiciones de los créditos hipotecarios para los deudores, adicionado a que la superintendencia financiera ha tergiversado lo dispuesto por la Corte.

⁶⁷ Al respecto, se pueden consultar las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005 (Casos de Retén Social de Telecom), SU-636 de 2003 (Caso de Industrial Hullera) y SU-1023 de 2001 (Caso de la Flota Mercante)

Por ello, me permito reiterar que el mecanismo y forma de reestructuración de las obligaciones hipotecarias vigentes tiene que ser viable, bajo la responsabilidad del Gobierno, y debe acordarse siempre lo más favorable para el deudor en cada caso. Adicionalmente, considero que otra entidad que ha debido quedar obligada por la presente sentencia era el Banco de la República, por cuanto esta entidad bancaria, en cuanto banco nacional, es el encargado de los plazos y tasas de interés. Adicionalmente consideré y presenté la propuesta de que debía determinarse un periodo de gracia de por lo menos un año para los deudores, lo cual además de una injusticia adicional, sería inaudito.

En mi concepto, para la reestructuración de los créditos era esencial la posibilidad de la escogencia por parte del deudor de las diferentes alternativas de reestructuración y líneas de crédito, bajo el supuesto de un procedimiento muy expedito y el control del Gobierno. Para ello, la Superintendencia Financiera tiene que definir tal mecanismo de reestructuración ejercitando sus labores propias definición de las condiciones que deben aplicarse y de vigilancia y control, y ello dentro de un plazo definido. De lo contrario, la reestructuración de los créditos puede llegar a presentarse a favor de los bancos y no de los deudores.

De otra parte, considero que la presente sentencia no tiene en cuenta los casos de personas que se encuentran en la tercera edad, y a quienes no se les puede reestructurar un crédito a mediano o largo plazo, por cuanto tienen pocos años de expectativa de vida. Por estas razones, en mi concepto, lo que debía proceder en todos estos casos, como lo he reiterado insistentemente, era la devolución de la vivienda a todos los afectados sin excepción, y ello con fundamento en el concepto de dignidad humana el cual presupone una vivienda digna, ya que no se puede hablar de dignidad humana sin el reconocimiento y efectiva protección a una vivienda digna.

24. Respecto del periodo para la configuración de mora y en estrecha relación con el tema de la reestructuración del crédito anteriormente tratado, debo dejar constancia de que propuse en su momento un periodo de gracia de un año, luego del cual pueda configurarse nuevamente mora dentro de las obligaciones de créditos hipotecarios, en caso de que llegare a haberla, ya que considero que en la práctica no se lograría nada con este fallo, si de un lado se da por terminado un proceso ejecutivo, pero de otro lado y de manera inmediata, se vuelve a iniciar otro proceso ejecutivo por configuración de mora.

Esta propuesta la presenté consultando la realidad de la situación económica y financiera de los deudores de créditos hipotecarios, la cual, como he mencionado, ha sido afectada grave, larga y continuadamente por el sistema financiero. Esta propuesta fue derrotada por la mayoría de magistrados en Sala Plena.

25. En mi concepto el presente fallo de unificación en casos de tutela, distorsiona el fallo anterior de constitucionalidad de la Corte, ya que crea más requisitos para que proceda la terminación de los procesos ejecutivos

hipotecarios y le termina desconociendo el derecho a la vivienda a aquellos deudores, en los casos en que existen terceros adquirentes.

A mi juicio, este fallo es malo por lo que excluye, por cuanto se excluye a algunos deudores de los beneficios de la terminación del proceso y restablecimiento de la vivienda, esto es, a los deudores en aquellos procesos en los cuales había habido remate y adjudicación, por cuanto no se obliga a devolverle la vivienda a estas personas y a indemnizar a los deudores.

En este sentido, en mi criterio este fallo es malo por todo lo que excluye, y porque deja a salvo al sistema financiero que es la parte poderosa en las relaciones de créditos hipotecarios.

En este caso, en donde se presentaba un dilema entre la seguridad jurídica y la justicia, la Corte le dió prevalencia a la seguridad jurídica a costa de la justicia, cuando en mi concepto debe ser al contrario, debe dársele primacía al valor de la justicia, primera virtud y valor fundamental de toda sociedad bien ordenada, valor que coadyuva y de ninguna manera va en desmedro de la seguridad jurídica, cuya finalidad última es la certeza de los ciudadanos respecto de sus derechos.

En mi concepto, lo que se advierte en este caso, es la contraposición de las sentencias judiciales con la existencia del poder establecido. Debo recordar que, como lo sostuvo Lassalle, toda sociedad tiene una Constitución material conformada por los factores reales en el poder que existen en todo sistema sea esclavista, feudal o capitalista. Así, el texto constitucional puede desaparecer pero esos factores subsistir, como ocurre con los grupos económicos que detentan un factor de poder real. A mi juicio, esos grupos hicieron todo lo posible desde el fallo inicial de la Corte sobre los créditos de vivienda del sistema UPAC, para que se trajeran estos casos a la Sala Plena, y considero necesario observar que los argumentos que en Sala Plena se escucharon son los mismos expuestos en un opúsculo de la Corporación Excelencia por la Justicia de agosto 21 de 2007, que recoge la posición de Asobancaria sobre esta materia. Igualmente, considero necesario observar que un exmagistrado de la Corte manifestó en una conferencia que la Corte iba a recoger su posición en esta materia, lo cual considero contra la ética y el derecho.

De otra parte, en la jurisprudencia de esta Corte se advierten contradicciones como la de aceptar la procedencia de la tutela en algunos casos en los que existe otro mecanismo de defensa –como lo fue en el caso de Bancolombia– y no en otros donde también tiene lugar la vulneración de derechos fundamentales. A mi juicio, la tutela existe precisamente para que el ciudadano que ha reclamado su derecho ante los jueces ordinarios y no se le ha protegido, pueda recurrir al amparo constitucional, *en cualquier tiempo*, máxime cuando la vulneración se extiende y continúa en el tiempo.

En este sentido, debo insistir en la presencia de ese factor de poder real, constituido por los dueños del capital, por quienes comercian con la vivienda de los más pobres de este país, poder que se reflejó en Sala Plena en

posiciones como la que aducían la falta de inmediatez, la existencia de otro medio de defensa, el aumento de los requisitos de procedibilidad, la no procedencia de la tutela frente a providencias judiciales y la inexistencia de vía de hecho, no obstante que en casos con las mismas circunstancias, se aceptó la procedencia de la tutela.

Igualmente, es necesario señalar que este tipo de argumentos tienen la consecuencia de empeorar la situación de los deudores afectados y coadyuvar a la vulneración de sus derechos. A mi juicio, en estos argumentos afloran aspectos que se refieren a los ya enunciados factores reales de poder, los cuales, como ya señalé, subsisten a pesar de la Constitución Política. A este respecto, me parece conveniente mencionar la tesis del Profesor Juan Antonio García Amado, según la cual, existe una jurisprudencia simbólica cuando una corte se muestra rupturista y revolucionaria en asuntos de poca monta o que afectan a muy poca gente, mientras que en los casos en que se tocan directamente los intereses de los gobiernos o de grupos dominantes, le dan la razón a los poderosos en detrimento de los derechos de los más débiles, que en este caso son los deudores de créditos de vivienda, y todo ello a cambio de intereses personales y de poder.

Finalmente, considero que este fallo es malo por cuanto constituye un retroceso en la protección efectiva de los derechos fundamentales, por cuanto termina introduciendo más requisitos para que en el futuro se dificulte aún más la protección del derecho a una vivienda digna y a defender sus derechos frente a los abusos del sistema financiero y de la mala administración de justicia. Por tanto, a mi juicio, la jurisprudencia de la Corte con esta sentencia se ha orientado a perpetuar situaciones de injusticia.

Con fundamento en todas las razones expuestas aclaro mi voto a la presente decisión,

Fecha *ut supra*,

JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado



FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC5363-2021

Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-00630-00

(Aprobado en sesión virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno)

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

La Corte decide la acción de tutela promovida por Francisco Javier Marrugo Zambrano contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma urbe y el Banco Davivienda S.A. Al trámite se vinculó a los intervinientes e interesados en el proceso ejecutivo hipotecario de radicado 2007-00266-00.

I. ANTECEDENTES

1. El promotor, por intermedio de apoderada judicial, reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, información, dignidad humana y vida digna, los cuales estima vulnerados por las autoridades judiciales al proferir las providencias del 17 de mayo de 2019 y 15 de diciembre de 2020, que decidieron la causa referida.

2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situación fáctica:

2.1. El Banco Davivienda S.A promovió demanda ejecutiva hipotecaria contra Francisco Javier Marrugo Zambrano -acá tutelante- pretendiendo el cobro de los pagarés Nos. 057050560000019058 por valor de (\$43.025.299,51) y el 057050560000019066 en cuantía de (\$20.417.001,23)¹. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, el cual, en proveído de 3 de julio de 2007, libró auto de apremio «por la cantidad de 272.892.6964 UVR (...) y por la cantidad de 129.497.0769 UVR²».

2.2. Notificado el ejecutado, presentó reposición frente al mandamiento de pago, en el que adujo que no existía reliquidación del crédito. El planteamiento resultó infructuoso porque la decisión fue mantenida en interlocutorio del 21 de julio de 2009³. Por otro lado, contestó el escrito impulsor y propuso las excepciones denominadas «pago por compensación con lo cobrado en exceso», «capital e intereses inexistentes», «inexigibilidad de la obligación a la fecha del auto de mandamiento de pago» y «falta de título ejecutivo por indebida integración como documento complejo»⁴.

En síntesis, explicó que el pagaré que dio origen al crédito hipotecario fue el No. 05025689 del 2 de diciembre de 1993, «utilizado para la compra de vivienda». Posteriormente, el Banco Davivienda, «aprovechándose de su posición dominante» le

¹ Folios 2-68 del Cuaderno principal No. 1 pdf

² Folio 71 ibidem

³ Folios 105-109 ibidem

⁴ Folios 2-9 cuaderno excepciones

otorgó el crédito premio y le hizo suscribir «un nuevo pagaré No. 05-03327-9 de fecha 19 de marzo de 1996 (...) incluyendo en este pagaré intereses sobre intereses convirtiéndolo en capital proveniente del pagaré número 05025689 (...)». Así mismo, el 29 de julio del 2005, una vez más la mentada entidad «le hace firmar otro pagaré No. 05705056000019058 (...) en el cual se encuentra acumulado de igual manera intereses sobre intereses convirtiéndolo en capital puro sin desembolso alguno para cancelar esta suma en 180 cuotas», lo que ocurre también con el pagaré No. 05705056000019066.

2.3. Agotado el trámite legal pertinente, el operador accionado en providencia de 17 de mayo de 2019 declaró no probados los medios exceptivos incoados y ordenó seguir adelante la ejecución pretendida⁵.

2.4. Inconforme con dicha determinación, el compelido formuló recurso vertical, siendo concedido en el efecto devolutivo⁶. El Tribunal recurrido, al desatar la alzada mediante providencia de 15 de diciembre de 2020, confirmó la sentencia apelada⁷.

El promotor refirió que el Juzgado encartado «mediante auto de fecha 30 de marzo de 2011 decretó el periodo de prueba, designando perito contable en finanza», y «se probó que no se aportó la reestructuración y reliquidación del crédito hipotecario, tal como consta en las certificaciones que adjuntó la entidad bancaria y a las cuales se hace referencia, esto es que los créditos hipotecarios identificados 05705056000019058 y 05705056000019066 son CREDITO(sic) MIGRADO DE 05-03327-9, provienen del sistema UPAC».

Manifestó, además, «que en el expediente existe prueba fehaciente donde consta que el señor JAVIER MARRUGO estuvo pagando

⁵ Folios 141-149 ibidem

⁶ Folio 163-164 del Cuaderno principal No. 1 pdf

⁷ Folio 15-22 cuaderno del Tribunal pdf

al BANCO DAVIENDA S.A., desde antes de 1996 y después de 1996 hasta el 1 febrero de 2006, sin que el BANCO DAVIENDA S.A. Cumpliera con lo ordenado en la ley 546 de 1999, esto es, reestructurar los créditos hipotecarios dentro de los tres primeros meses del año 2000, Régimen de Transición».

Adujo que «los pagares aportados en UVR con la cifra que ya sabemos..., no cumplen con los requisitos del artículo 51 de la Constitución Nacional, 29 de la Constitución, Artículos 38 y ss de la ley 546 de 1999, sentencia 813 de 2013, dichos pagares no fueron reestructurados en el año 2000 y por lo tanto se le incluyeron unos Intereses inexistentes que no se debieron cobrar».

En ese sentido, apuntaló que, en las decisiones de primera y segunda instancia, se incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, puesto que los títulos base de recaudo «provienen de una deuda originada en el año 1996 con el sistema UPAC, tal como lo certifica la entidad bancaria, con las certificaciones de fecha 05 julio 2006 y no existe prueba donde se haya acreditado la información que el Banco Davivienda haya reliquidado y reestructurado los créditos que dieron origen a estos pagares».

En tal sentido, sentenció que «para que el título complejo preste mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 42 ley 546 de 2019 debió aportarse a la presente demanda, LA RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, REDENOMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN los tres primeros meses del año 2.000, lo cual no existe en el proceso, sino unos pagares producto de la posición dominante de la entidad bancaria». Aseveró que «quien tiene que probar que la reliquidación y reestructuración de los créditos hipotecarios que dieron origen a la presente obligación se efectuó de conformidad con la Ley de Vivienda, es el Banco Davivienda, prueba que no existe en el proceso».

3. Solicita, conforme a lo relatado, «se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago proferido en el proceso ejecutivo hipotecario seguido en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de

Cartagena», adicionalmente, se ordene a las autoridades querelladas declarar «...la falta de exigibilidad de la obligación hipotecaria, y en consecuencia decretar el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso».

II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena solicitó denegar el amparo «por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales»⁸.

2. El Secretario de la Sala Civil-Familia del Tribunal accionado remitió el respectivo expediente⁹.

3. La Representante Legal Suplente del Banco Davivienda -Sucursal Cartagena- expresó que «...mal pueden los actores desconocer el principio de cosa juzgada y presunción de acierto que ampara toda providencia. Adicionalmente, el problema no es de interpretación de las normas del procedimiento civil que regulan el sistema probatorio, la realidad es que el actor no acepta la interpretación dada por los accionados al acervo probatorio, pretendiendo que esta acción se «convierta en una tercera instancia» en la que el Juez de Tutela REVOQUE las decisiones proferidas por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta ciudad, aduciendo que se violó el debido proceso»¹⁰.

4. Hermes Javier Echenique Díaz indicó ser el Gerente Regional Caribe Sur de Coosalud -entidad promotora de Salud S.A.-, sin embargo, no acreditó tal calidad. Por tanto, la respuesta no será tenida en cuenta¹¹.

⁸ Respuesta por correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021.

⁹ Respuesta por correo electrónico de fecha 4 de marzo de 2021.

¹⁰ Respuesta por correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021.

¹¹ Respuesta por correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021.

5. Los demás vinculados guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Insistentemente la jurisprudencia ha sostenido que este amparo no es la senda idónea para censurar providencias. Excepcionalmente, puede acudir a esa herramienta en los casos que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure 'vía de hecho', y bajo los supuestos de que el afectado concorra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, citada en CSJ STC6666-2019 May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01).

2. En el asunto *sub examine*, el accionante pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo hipotecario, ante la falta de exigibilidad de la obligación por no haberse efectuado la reliquidación o reestructuración del crédito y se levanten las cautelas. Ello pues estima que las determinaciones de primer y segundo grado lesionan sus garantías al debido proceso, igualdad, información, dignidad humana y vida digna al incurrirse en ellas en un defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

3. Estudiada la inconformidad alegada en el escrito inicial de cara a los elementos demostrativos obrantes al diligenciamiento, la Sala advierte que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar. En efecto, la autoridad judicial enjuiciada incurrió en un proceder que amerita la injerencia de esta jurisdicción, según pasa a verse.

3.1. Cuando se trata de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, se ha puntualizado que, para acceder al resguardo, deben colmarse los siguientes requisitos «(i) que la acción haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una mínima diligencia dentro del asunto censurado, ejerciéndose los mecanismos procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999» (STC10546-2020 Rad.2020-03204 de 26 nov de 2020).

Frente a lo discurrido, en sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional precisó:

«[...] Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo (...).

*En efecto, esta Corporación ha sido enfática en precisar que tratándose del cobro ejecutivo de una **obligación contraída antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalización de intereses**, para la adquisición de vivienda, que no ha sido reestructurada en los términos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligación» (énfasis fuera de texto).*

3.2. Así pues, auscultado el material probatorio obrante en el plenario, se extrae con claridad el cumplimiento de los presupuestos reseñados. Ciertamente, la acción constitucional se formuló el 26 de febrero de 2020, cuando aún no se ha realizado la almoneda -tal como milita en el compulsivo-.

Además, el actor cumplió con la «mínima diligencia» demandada para casos como el confutado, por cuanto interpuso recurso de reposición frente al mandamiento de pago, en el cual objetó que la reliquidación del crédito era inexistente. Además, presentó las excepciones de ausencia de reliquidación e «inexigibilidad de la obligación», pedimentos que suscitaron el pronunciamiento censurado, el que, de paso afecta su derecho a la vivienda digna.

4. Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la colegiatura querellada, para emitir el veredicto atacado, estableció como problema jurídico a desarrollar el siguiente: «determinar si en verdad habría lugar a decretar la terminación del proceso ejecutivo, al no acreditarse la reestructuración del crédito que venía representado en dos pagarés otorgados en UPACs, los pagarés números 05025689 y 05-03327-9 de diciembre de 1993 y marzo de 1996, deuda que en el año 2005 se renegoció y por la cual, se suscribieron los pagarés N° 057050560000019058 y N° 057050560000019066 del 29 de agosto del 2005, que son ahora ejecutados».

Por ese camino, trajo a colación determinaciones de esta Sala, y concluyó, frente al asunto sometido a consideración, que **«en este caso la suscripción de los pagarés en el año 2005, constituyen la renegociación exigida por la ley 546 de 1999 y la jurisprudencia, sin que se hubiere desvirtuado que la misma no alteró realmente las condiciones de la deuda original, pues no hay prueba de los intereses cobrados en exceso durante la vigencia de los pagarés anteriores; lo cual era una carga de la parte ejecutada. Ello, además, en razón a que los intereses cobrados en la presente ejecución no superan el límite de 13.1 puntos porcentuales pagaderos mes vencido adicionales a la UVR, establecido mediante Resolución externa No. 14 del 3 de septiembre de 2000».**

57

5. Ahora bien, es menester recordar lo que esta Corte ha precisado en materia de reestructuración de los créditos de vivienda a la luz de lo contemplado en la Ley 546 de 1999, así:

•[Del] artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los créditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999... cuya recuperación pretendían ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones económicas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitación.

El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obstáculo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con créditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un título ejecutivo complejo cuya acreditación se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacción de éstos con sus actuales ingresos.

Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petición de parte o por vía del examen oficioso de los instrumentos representativos del crédito cobrado, aún en segunda instancia, por tratarse de un tópico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema.

Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepción al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una vía de hecho que es susceptible de protección.

Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminación de los hipotecarios de créditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, sería desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del parágrafo tercero del artículo 42...

Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, sólo constituía un paso para normalizar la situación de los deudores, que se complementaría, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferirían los saldos pendientes...

Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de créditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confirió la ley mediante el cese de la ejecución, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirtúa el propósito que inspiró dicha regulación.

Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudación compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligación en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el título, sino la materialización de la imposibilidad para los demandados de solventar un crédito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad básica de orden superior.» (CSJ STC331-2019 y STC5462- 2020).

En ese entendido, es deber de los jueces revisar si junto con el título base de recaudo el ejecutante adosó los soportes para acreditar eficazmente la reestructuración de la obligación. Esto en atención a que insistentemente se ha decantado que esos documentos «conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecución» (CSJ STC5462-2020). A ese respecto, téngase en cuenta que «no es exigible el título valor tratándose de procesos coercitivos hipotecarios que versen sobre créditos pactados en UPAC, o que aún pactados en pesos lleven implícito el componente DTF, cuando no se acredita la reestructuración plurimencionada» (ver en CSJ STC17824-2017).

5.1. Bajo ese hilo conductor y atendiendo a las consideraciones esgrimidas por el Tribunal accionado en la providencia reseñada, refulge la vulneración alegada al apartarse dicha autoridad de la jurisprudencia sentada por esta Sala en relación con el deber del ejecutante de acreditar la reestructuración del crédito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999 como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo.

Al respecto esta corporación en reciente pronunciamiento indicó:

«Aunado a lo anterior, la Corte ha advertido que «la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (...) e/s/ viable resolver de fondo la petición» (resalta la Sala, CSJ STC-8059-2015), por lo que es deber de los jueces, incluidos los de ejecución, revisar si junto con el título base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuración de la obligación, pues, como lo ha dicho esta Sala, esos documentos «conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecución» (ídem) (CSJ STC, 5462-2020 citado en la CSJSTC8568-2020)

Lo anterior en atención a que los títulos base de recaudo, tienen como acto antecedente la compra de vivienda en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) en el año 1996 por parte del deudor. En consecuencia, la reestructuración del crédito es capital para librar el mandamiento de pago.

5.2 Si bien la colegiatura censurada adujo que dicha operación tuvo ocurrencia -en atención a que los cartulares emitidos en el año 2005 en UVR constituyeron una *renegociación*-, ello no revela, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia, que se haya realizado tal actuación.

Véase que en reciente pronunciamiento esta Corporación manifestó

«Cotejadas las anteriores premisas con los argumentos expuestos por la mentada funcionaria en la providencia transcrita líneas atrás, refulge evidente la vulneración alegada por los gestores, si se tiene en cuenta que las autoridades convocadas al

resolver sobre la petición de terminación del proceso elevadas por éstos, se apartó de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de reestructurar el crédito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, en razón a que las documentales allegadas a este trámite dan cuenta de que la obligación exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores en diciembre de 1996 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), y de manera alguna los pagaré título de recaudo pueden evidenciar que esta fuera reestructurada, pues, si bien la juzgadora censurada adujo que dicha operación sí tuvo ocurrencia, ya que los títulos valores objeto de recaudo fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, en unidades de UVR, tales aspectos no demuestran per se que se haya realizado dicha actuación, pues ello más bien corresponde a una red denominación del crédito en los términos consignados en el artículo 38 de la memorada ley de vivienda⁴, y no a la implementación de la reseñada figura [reestructuración]. (CSJ STC 10546-2020).

Memórese que la Corte Constitucional, en sentencia T-881 de 2013, aseveró que la reestructuración a la que alude la Ley 546 de 1999 no sólo se cumple con la conversión del sistema UPAC al de UVR, sino que además es menester el reconocimiento de los abonos efectuados a 31 de diciembre de 1999. Particularmente señaló:

«Precisamente, en lo pertinente, a partir del capítulo VIII de la aludida ley, se dispone la creación de un régimen de transición, en el que expresamente se señala que: “[los] establecimientos de crédito deberán ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (...)”. Esto significa que más allá de la fecha de iniciación del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuración, es que el crédito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999.

La reestructuración implica tanto la conversión del crédito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el artículo 41 de la ley en mención, conforme al cual: “Los abonos a que se refiere el artículo anterior se harán sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos

de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo (...)"*
(Texto resultante por fuera del original)

Por tanto, tratándose de créditos de vivienda la calificación que opte por librar el mandamiento debe obedecer al estudio fehaciente de la temática en comento.

Sobre la materia se ha puntualizado que:

«[E]n tratándose de créditos de vivienda, el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 consagró la mencionada figura [reestructuración], que se traduce en el **acuerdo jurídico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se dé una nueva estructura crediticia a las operaciones de crédito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos.**

Ahora bien, el mencionado artículo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuración de créditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes términos:

«(...) Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de los que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria.

Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información **los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total**». (Subraya fuera de texto original).

En desarrollo de esta disposición la Superintendencia Bancaria en el capítulo IV, título III, numeral 12 de la Circular Externa 85 de diciembre de 2000, señaló que «La reestructuración de un crédito de conformidad con el numeral 12 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, se define como, el negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio del deudor» (CSJ STC2252-2020).

Con base en lo anotado, es determinante que el Tribunal adelante tal estudio y no cimentar su decisión solamente en los títulos valores.

A propósito, se ha señalado que:

«es labor irrenunciable del fallador escudriñar si quien está en riesgo de perder su vivienda contó con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuración del crédito, pues, sólo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estaría habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, máxime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del título base de recaudo» (STC5971-2019).

De manera que la sola presentación de un pagaré en UVR, tal como ocurrió en el compulsivo reprochado, no releva al juzgador estudiar lo pertinente en relación con la reestructuración del préstamo.

Sobre este tópico la Sala recientemente precisó:

«Por tanto, como la juez **acusada únicamente centró su estudio en los reseñados pagarés, sin parar en mientes si la parte ejecutante allegó con estos los soportes que acreditaran la realización de la tantas veces mencionada reestructuración**, cuando es sabido que para iniciar el proceso judicial el título base de la obligación, por la naturaleza de esta, se torna complejo, siendo necesario adosar tal documentación al legajo, es incontrovertible que dicha funcionaria incurrió en los defectos que se le endilgan, los cuales toman precedente el resguardo implorado.

4. En conclusión, es claro que ante el defectuoso estudio efectuado por parte del Despacho accionado respecto de la solicitud de terminación del proceso presentada por los tutelantes por falta de reestructuración del crédito perseguido en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervención del Juez de tutela en aras de restablecer la garantía superior al debido proceso que le fue conculcada a los aquí interesados...» Destacado propio (STC 10546-2020 Rad.2020-03204 de 26 nov.2020)

Aunado a ello, en sentencia proferida el 13 de julio del 2020, rad. 2020-00271-01, explicó que:

«Ahora, si bien es cierto, el título exhibido para perseguir judicialmente el cobro compulsivo fue acordado en el año 2004, también es cierto que probado está que la obligación original fue pactada el 14 de diciembre de 1998, por lo que conforme a lo aquí previsto, no sólo era necesaria la simple redenominación de obligación hacia el futuro, sino también la comprobación de que, cualquiera que fuese el estado del crédito, los abonos efectuados al 31 de diciembre de 1999 hubieran sido objeto de reliquidación, circunstancia que los juzgadores de instancia no encontraron debidamente acreditado».

6. Así las cosas, ante la labor defectuosa del Tribunal accionado, se concederá la protección suplicada, para que dicha autoridad proceda a resolver nuevamente sobre la temática planteada, teniendo en cuenta el material probatorio acopiado al interior del compulsivo y la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dispone:

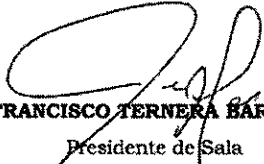
PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Francisco Javier Marrugo Zambrano.

SEGUNDO: Dejar sin valor ni efectos la providencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 15 de diciembre de 2020, así como todas las que de ella dependan, emitidas dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Davivienda S.A. contra el accionante de radicado No. 2007-00266-00.

TERCERO: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de este pronunciamiento, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena el 17 de mayo de 2019, teniendo en cuenta las consideraciones plasmadas en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: Comuníquese a los interesados por el medio más expedito lo resuelto en esta providencia y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

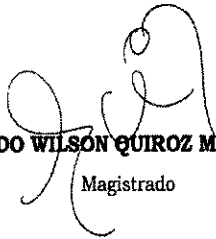
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

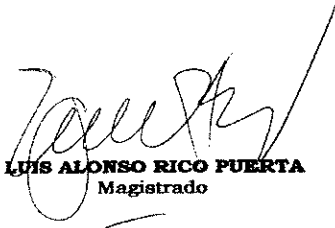

FRANCISCO TERNERÁ BARRIOS
Presidente de Sala

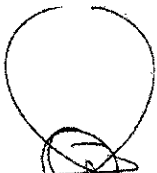

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado

59


HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada


AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado


LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado


OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
MAGISTRADO


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente

STC10546-2020

Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-03204-00

(Aprobado en sesión virtual de veintiséis de noviembre de dos mil veinte)

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020).-

Decide la Corte la acción de tutela promovida por **Rosa Luz Marrugo de la Ossa** y **Jhonny Dunoyer Ballesteros**, contra la **Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena**, el **Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad** y el **Banco Davivienda S.A.**, trámite al que fueron vinculados los demás intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito de tutela.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes reclaman a través de gestora judicial, la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la información, a la dignidad humana y a la vivienda digna, presuntamente conculcados por las autoridades

jurisdiccionales y entidad financiera convocadas, en el marco del proceso ejecutivo con título hipotecario que en su contra promovió el Banco Davivienda S.A. con radicado No. 2004-00449-00.

Exigen, entonces, para la protección de las señaladas prerrogativas, que *«se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago proferido en el proceso [citado]»*, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, *«declarar la FALTA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION HIPOTECARIA, Y EN CONSECUENCIA DECRETAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES»*¹.

2. Como sustento fáctico del reclamo y en cuanto resulta relevante para la definición de este asunto, aduce en lo esencial la apoderada, que el 10 de marzo de 1997 sus mandantes suscribieron a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda, hoy Banco Davivienda S.A., el pagare No. 05-03488-9 por un valor de \$34.000.000,00, pagaderos en 180 cuotas mensuales con un interés efectivo de 14%, obligación que garantizaron con la constitución de una hipoteca abierta sobre la vivienda ubicada en *«el Conjunto Residencial Paraiso Real, Casa 98»*, de la mentada capital.

Asevera que éstos, el 12 de septiembre de 2001 firmaron un nuevo pagaré, identificado con el No. 0570505600000573-5 por la suma de \$35.355.226,

¹ Demanda de tutela remitida vía correo institucional a la Secretaría de la Corporación.

8

equivalentes a 293.810,3354 U.V.R. para cancelar en 343 cuotas mensuales, y, el 16 de diciembre de 2003 otro pagaré, identificado con el No. 05705056000006618 por un valor de \$76.917.868, correspondientes a 626.673,4206 UVR, para pagar en 201 cuotas mensuales.

Refiere que el 16 de febrero de 2004, los deudores incurrieron en mora, por lo que la citada entidad bancaria dio inicio a la ejecución referida en líneas precedentes, la cual fue asignada al estrado judicial accionado, quien libró mandamiento de pago el 8 de noviembre siguiente, decisión frente a la cual se presentó sin suerte recurso de reposición, ya que éste fue despachado desfavorablemente, por lo que una vez se evacuaron las etapas procesales siguientes, dicha autoridad emitió sentencia el 1° de febrero de 2008, ordenando seguir adelante con el cobro coercitivo, determinación que fue confirmada el 5 de septiembre de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad.

Señala que el 26 de abril de 2018, en calidad de apoderada de la señora Marrugo de la Ossa, solicitó la terminación del proceso con fundamento a los artículos 38 y siguientes de la Ley 546 de 1999, por cuanto no hay prueba en el expediente que acredite que el banco demandante haya efectuado la reestructuración de los créditos hipotecarios objeto de cobro, y en consecuencia, dice, no son obligaciones claras, expresas y exigibles, en los términos de la sentencia SU-813 de 2007, petición que fue negada por el Despacho censurado a través de providencia

del 17 de septiembre de esa misma anualidad, tras manifestar que «*si se realizó la [susodicha] reestructuración... con posterioridad a la reliquidación*», decisión que recurrió sin éxito mediante los remedios horizontal y vertical, ya que el juez acusado se mantuvo en su postura y negó la concesión de la alzada, y pese a irse en queja, el 23 de octubre de 2019 la Sala Civil Familia del Tribunal de Cartagena declaró bien adoptada dicha resolución, sin analizar los argumentos expuestos para tal fin.

Finalmente sostiene, que con la decisión de negar la terminación de la ejecución debatida las instancias judiciales convocadas incurrieron en causal de procedencia del amparo por los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, ya que no realizaron una debida valoración probatoria frente a la reestructuración del crédito peticionada, sumado a que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional vinculante sobre dicha materia, razón por la que considera que a sus representados les fueron quebrantadas las garantías superiores invocadas, lo que torna viable la concesión de la salvaguarda instada a su favor².

3. Una vez asumido el trámite, el día 17 de noviembre se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.

² Ejusdem.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se habían efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.

CONSIDERACIONES

1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, en línea de principio, la acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonomía que les otorga la Constitución a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado ha hecho uso de los medios de protección judicial a su alcance y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesión, a lo que se suma, por supuesto, que acuda con prontitud al mecanismo de amparo.

2. En el presente caso, los señores Rosa Luz Marrugo de la Ossa y Jhonny Dunoyer Ballesteros se duelen, en concreto, de las providencias proferidas el 17 de septiembre y 7 de diciembre de 2018, y, 23 de octubre de 2019 por el

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad, respectivamente, por medio de las cuales se resolvió, en su orden, negar la terminación del juicio por falta de reestructuración, confirmar lo decidido y denegar la concesión de la alzada, y, declarar bien tomada esta última decisión, dentro del proceso ejecutivo con garantía real que Davivienda SA promovió frente a ellos, pues en su sentir, no se hizo una debida valoración probatoria y se desconoció el precedente constitucional existente en relación con dicha temática.

3. Pues, bien, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas digitalmente a las presentes diligencias, advierte de entrada la Sala que la protección constitucional reclamada está llamada a prosperar, en la medida en que, por un lado, se encuentran atendidos los requisitos jurisprudenciales para que se admita la intervención del juez de tutela; y por el otro, se aprecia que el juzgado accionado no analizó como correspondía la problemática suscitada, pues el estudio efectuado fue insuficiente para sustentar la determinación que adoptó, tal y como pasa a verse.

3.1. En efecto, esta Corporación ha sido enfática en señalar, que cuando se trate de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, deberán cumplirse los siguientes requisitos para poder acceder al amparo: **(i)** que la acción haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicación

del inmueble hipotecado; **(ii)** que se haya actuado con una mínima diligencia dentro del asunto censurado, ejerciéndose los mecanismos de defensa procedentes; y, **(iii)** que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999.

Lo anterior en aplicación a lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007, donde la Corte Constitucional indicó:

«Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) ésta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo.»

*En efecto, esta Corporación ha sido enfática en precisar que tratándose del cobro ejecutivo de una **obligación contraída antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalización de intereses**, para la adquisición de vivienda, que no ha sido reestructurada en los términos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligación» (énfasis ajeno al texto).*

En el presente caso, se tiene que la demanda de amparo se radicó el pasado 10 de noviembre, cuando aún no se ha

realizado el remate del bien inmueble objeto de hipoteca, pues, de acuerdo con la información que arroja el sistema de consulta de procesos de la página Web de la Rama Judicial, apenas se presentó por el cesionario el avalúo de éste³; además, los accionantes solicitaron la terminación de la ejecución criticada, petición que les fue negada a través de las dos primeras de las decisiones reprochadas, siéndoles denegada la alzada que propusieron frente a dicha negativa y, es obvio que su derecho a la vivienda digna está siendo afectado directamente con tales actuaciones, por lo que es irrefutable que están cumplidos los presupuestos antes mencionados.

3.2. Por otro lado, se tiene que la juez accionada, para llegar a la decisión de desestimar la solicitud de terminación del proceso por ausencia de reestructuración de la obligación perseguida, luego de memorar senda jurisprudencia respecto de la temática particular, puntualizó lo siguiente:

*«De acuerdo con la jurisprudencia citada, y descendiendo al caso que nos ocupa, **reitera el Despacho que el crédito que se ejecuta, de conformidad con los hechos de la demanda, es de aquellos denominados créditos de vivienda, otorgado en un inicio en diciembre del año 1996 (ver Escritura Pública No. 5127 del 30 de diciembre de 1996 de la Notaria Segunda de Cartagena)**, y la Corporación Bancaria dando aplicación a la Ley 546 de 1999, efectuó la reliquidación del crédito objeto de la demanda obteniéndose para el mismo una reducción»*,

³<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/Descargando.aspx?FileName&PDFPath=D:/WebSites/Ciudadano/XXI/ArchivosTemp/13001310300220040044901.ACT.AGREGAR%20MEMORIAL.11-11-2020%209.40.22%20p.m..pdf>

de allí que se encuentre acreditado el cumplimiento del requisito a que se refiere el artículo 41 de la Ley 546 del 1999, dando cuenta ello el BANCO DAVIVIENDA S.A., de que se hizo la reliquidación del crédito y con ocasión a ello el alivio generado, se aplicó El crédito hipotecario otorgado a la ejecutada; y además del mencionado requisito, encuentra el Despacho que también se halla probado las exigencias del artículo 42 de la ley de vivienda, dado que **revisados los títulos valores con los que se pretende el cobro ejecutivo en el presente proceso, se encuentra que sí se realizó la reestructuración del crédito por parte del banco demandante, con posterioridad a la reliquidación, pues los mencionados títulos valores fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, respectivamente, en unidades de UVR, lo que para el parecer del Despacho es prueba fehaciente de la reestructuración celebrada entre el BANCO DAVIVIENDA S.A. y la ejecutada, por lo que podría decirse que existió un acuerdo voluntario entre la entidad financiera con la deudora.**

Colorarlo de lo anterior, es forzoso concluir la exigibilidad de la obligación, por cuanto de acuerdo con la reglamentación legal citada, y los precedentes jurisprudenciales expresados en este proveído, **el demandante probó el cumplimiento del requisito de reestructuración de la obligación demandada, a que se refiere el artículo 41 de la Ley 546 de 1999, con los pagarés suscritos por la ejecutada y otorgado en unidades de UVR, por ello deviene la negativa por parte del Despacho de declarar terminado el presente proceso, por inexistencia de título ejecutivo hipotecario por falta de acreditación de la reestructuración del crédito de vivienda, solicitado por la parte demandada** (resalto intencional).

3.2.1. Para evidenciar la falencia advertida, cabe recordar lo considerado por la Corte de tiempo atrás sobre

el derecho a la reestructuración de los créditos de vivienda bajo el amparo de la Ley 546 de 1999, al señalarse que:

«[Del] artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los créditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 (...) cuya recuperación pretendían ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones económicas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitación.

El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obstáculo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con créditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un título ejecutivo complejo cuya acreditación se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacción de éstos con sus actuales ingresos.

Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petición de parte o por vía del examen oficioso de los instrumentos representativos del crédito cobrado, aún en segunda instancia, por tratarse de un tópico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema.

Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepción al

principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una vía de hecho que es susceptible de protección.

Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminación de los hipotecarios de créditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, sería desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del parágrafo tercero del artículo 42.

Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, sólo constituía un paso para normalizar la situación de los deudores, que se complementaría, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferirían los saldos pendientes.

Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de créditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confirió la ley mediante el cese de la ejecución, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirtúa el propósito que inspiró dicha regulación.

Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudación compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligación en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el título, sino la materialización de la imposibilidad para los demandados de solventar un crédito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad básica de orden superior.

Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudriñar si quien está en riesgo de perder su vivienda contó con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuración

del crédito, pues, sólo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estaría habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, máxime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del título base de recaudo» (CSJ STC331-2019 y STC5462-2020).

Aunado a lo anterior, la Sala ha advertido que «la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (...) e[s] viable resolver de fondo la petición» (CSJ STC8059-2015), por lo que es deber de los jueces, incluidos los de ejecución, revisar si junto con el título base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuración de la obligación, pues, como se ha remarcado con insistencia, esos documentos «conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permít[e] continuar con la ejecución» (CSJ STC5462-2020).

3.2.2. Cotejadas las anteriores premisas con los argumentos expuestos por la mentada funcionaria en la providencia transcrita líneas atrás, refulge evidente la vulneración alegada por los gestores, si se tiene en cuenta que las autoridades convocadas al resolver sobre la petición de terminación del proceso elevadas por éstos, se apartó de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de reestructurar el

crédito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, en razón a que las documentales allegadas a este trámite dan cuenta de que la obligación exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores en diciembre de 1996 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), y de manera alguna los pagaré título de recaudo pueden evidenciar que esta fuera reestructurada, pues, si bien la juzgadora censurada adujo que dicha operación si tuvo ocurrencia, ya que los títulos valores objeto de recaudo fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, en unidades de UVR, tales aspectos no demuestran *per se* que se haya realizado dicha actuación, pues ello más bien corresponde a una redenominación del crédito en los términos consignados en el artículo 38 de la memorada ley de vivienda⁴, y no a la implementación de la reseñada figura.

A ese respecto, téngase en cuenta lo manifestado por esta Colegiatura frente a la naturaleza de dicha operación, al precisar que:

«[E]n tratándose de créditos de vivienda, el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 consagró la mencionada figura [reestructuración], que se traduce en el **acuerdo jurídico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las**

⁴ El cual reza: "Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR. Vencido este término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, por ministerio de la presente ley.

PARAGRAFO. Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en forma anticipada los títulos valores denominados en UPAC."

condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se dé una nueva estructura crediticia a las operaciones de crédito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos.

Ahora bien, el mencionado artículo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuración de créditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes términos:

"(...) Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de los que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo periodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria.

Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información **los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total**". (Subraya fuera de texto original).

En desarrollo de esta disposición la Superintendencia Bancaria en el capítulo IV, título III, numeral 12 de la Circular Externa 85

de diciembre de 2000, señaló que «La reestructuración de un crédito de conformidad con el numeral 12 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, se define como, el negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio del deudor» (CSJ STC2252-2020).

3.2.3. Por tanto, como la juez acusada únicamente centró su estudio en los reseñados pagarés, sin parar en mientes si la parte ejecutante allegó con estos los soportes que acreditaran la realización de la tantas veces mencionada reestructuración, cuando es sabido que para iniciar el proceso judicial el título base de la obligación, por la naturaleza de esta, se torna complejo, siendo necesario adosar tal documentación al legajo, es incontrovertible que dicha funcionaria incurrió en los defectos que se le endilgan, los cuales tornan procedente el resguardo implorado.

4. En conclusión, es claro que ante el defectuoso estudio efectuado por parte del Despacho accionado respecto de la solicitud de terminación del proceso presentada por los tutelantes por falta de reestructuración del crédito perseguido en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervención del Juez de tutela en aras de restablecer la garantía superior al debido proceso que le fue conculcada a los aquí interesados, por lo que se dejará sin valor ni efecto las providencias cuestionadas, para que la citada autoridad se pronuncie nuevamente sobre la misma, teniendo en cuenta todas las pruebas obrantes en el juicio y la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional

y de esta Sala relacionada con la aludida temática.

5. Por todo lo expuesto, se concederá lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporación.

DECISIÓN

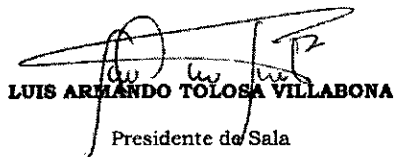
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONCEDE** el amparo incoado por los señores Rosa Luz Marrugo de la Ossa y Jhonny Dunoyer Ballesteros. En consecuencia, se dispone:

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto las providencias proferidas el 17 de septiembre y 7 de diciembre de 2018, y, 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que el Banco Davivienda SA promovió frente a los accionantes, con radicado No. 2004-00449-00.

SEGUNDO: ORDENAR al citado Juzgado del Circuito, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, proceda nuevamente a pronunciarse respecto de la solicitud de terminación del proceso por falta

de reestructuración presentada por los tutelantes, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo.

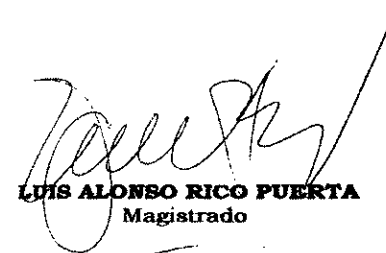
TERCERO: COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, envíese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado


AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado

³ El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la "firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada".


LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado


OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
MAGISTRADO


FRANCISCO TENREIRO BARRIOS
Magistrado



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

FRANCISO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC5248-2021

Radicación n.º. 68001-22-13-000-2020-00492-01

(Aprobado en sesión virtual del cinco de mayo de dos mil veintiuno)

Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Suárez Rangel contra los Juzgados Segundo de Ejecución Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa misma ciudad, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, el Banco Colpatria S.A. y la sociedad ENCORE S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en conexidad con los derechos a la vivienda digna y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas, en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado 2001-01291.

Radicación n.º. 68001-22-13-000-2020-00492-01

2. Como sustento del resguardo adujo, en síntesis, que:

En el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga cursa en su contra un proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Colpatria, en el que «*el Demandante y Cesionarios no han agotado el requisito de procedibilidad de la reestructuración del crédito de vivienda lo que conlleva a que el título ejecutivo que es complejo y la ausencia de la reestructuración no permita continuar con la ejecución al Demandado debido a que no cumple el Título Ejecutivo con los requisitos de ley consagrados en el Art. 422 del Código General del Proceso...*».

Ante la falta de agotamiento de dicho requisito de procedibilidad, su apoderado interpuso un «*INCIDENTE DE NULIDAD CONSTITUCIONAL*», que fue resuelto «*de manera negativa mediante auto de fecha 19 de mayo de 2016*».

En el 2019 presentó un nuevo incidente de nulidad, «*al tenor de lo consagrado en el Art. 133 Numera 12 (sic) Art. 134 inciso uno, Art. 135, Art 136 Parágrafo del Código General del Proceso*», el cual fundamentó en fallos de tutela de la Corte Suprema de Justicia, en los que esta Corporación señaló «*que es improcedente continuar el proceso ejecutivo y que es deber de los Honorables Jueces incluido el de ejecución revisar si junto con el título base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la reestructuración (CSJ-STC 8059-2015)*».

Con auto del 16 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga «*rechaza de plano la nulidad invocada (...) auto en el cual considero que era improcedente, ya había sido objeto de estudio y no se puede alegar una nulidad nuevamente con hechos idénticos que ya fueron resueltos, lo que iría en una contravía de preclusión procesal*».

Contra la decisión anterior, su apoderado interpuso los recursos de ley y, por auto del 3 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga la confirmó y lo condenó en costas.

Reprochó que no se tuvo en cuenta que la nulidad alegada *«es aplicable al no haber sido agotada la vía procedimental de reestructuración del crédito a que están sujetos los créditos de vivienda concedidos inicialmente en UPAC, debieron ser reestructurados de conformidad con lo consagrado en Art. 42 de la Ley 546 de 1999 y sentencia C-955/2000»*.

Señaló que, como la reestructuración del crédito que integra el título ejecutivo no ha sido aportada al proceso ejecutivo, éste no puede continuar, so pena de configurar una violación al debido proceso.

3. Conforme a lo relatado, solicitó *«que se niegue el mandamiento de pago, hasta tanto el Demandante agote el mencionado requisito»* y, además, *«que se declare fundado el INCIDENTE DE NULIDAD (...) por no haber agotado el requisito de procedibilidad de reestructuración del crédito»*.

II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga sostuvo que *«la jurisprudencia constitucional ha decantado que la acción constitucional, no podrá convertirse en una instancia adicional, ni tampoco resolver discusiones propias del proceso, como la interpretación simple de la ley o valoración de pruebas, porque ello no es un problema constitucional de vulneración de derechos fundamentales»*.

Por consiguiente, pidió denegar el amparo, debido a que *«mediante la referida providencia proferida el 03/06/2020, se ofrecieron a la aquí accionante las razones por las cuales se arribó a la decisión allí adoptada»*.

2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga informó que el proceso cuestionado *«se remitió al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución Civiles Municipales de la ciudad el 19 de septiembre de 2014 año, conforme lo previsto en el Acuerdo PSAA13-9984 del cinco (5) de septiembre de 2013 emanado del CSJ»*.

Concluyó que se atiene *«a lo actuado en el proceso, ya que en los hechos relacionados en la tutela no hay alguno que se refiera a actuación de este juzgado, que presuntamente viole derechos fundamentales»*.

3. El Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo y manifestó que *«en la actuación despegada no se ha transgredido ningún derecho fundamental del accionante, ni se ha incurrido en vías de hecho o defectos procedimentales que hagan nugatorias las actuaciones surtidas por esta Agencia Judicial»*.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA

Negó el amparo, por cuanto, en su opinión, ningún actuar caprichoso o arbitrario en la actividad del juzgador atacado se evidenció en este caso.

Expresó que *«las providencias aludidas no parecen descabellados los argumentos vertidos por cada uno de éstos, puesto que examinados los dos incidentes de nulidad promovidos por el ejecutado, esto es, el resuelto el 19 de mayo de 2016 y el 16 de octubre*

de 2019, respectivamente, puede concluirse que si bien el primero se soportó en el artículo 29 de la Constitución Política, mientras que el segundo en lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 133 del C.G.P., lo cierto es que ambos exponen como sustento lo concerniente a la reestructuración del crédito, aspecto que ya había sido definido previamente en el interlocutorio del 16 de mayo de 2016, sin que fuese viable emitir un nuevo estudio sobre aspectos que ya gozan de cosa juzgada material.

IV. LA IMPUGNACIÓN

La formuló el apoderado del accionante, quien insistió en los argumentos expuestos como base fundacional del pedimento. Resaltó que las decisiones rebatidas configuraron una vía de hecho, por defecto sustantivo, en tanto desconocieron el precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia, «fijado sobre la improcedencia de continuar procesos ejecutivos de créditos de vivienda, sin que se haya agotado el requisito de reestructuración del crédito por parte del acreedor».

V. CONSIDERACIONES

1. En el *sub examine*, la queja del promotor se circunscribe a mostrar su disenso frente a las determinaciones proferidas el 16 de octubre de 2019 y el 3 de junio del 2020 por parte de las autoridades convocadas, por vulnerar su derecho al debido proceso y ante una presunta vía de hecho, por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2. Revisado el expediente, se observa que el señor Luis Alberto Suárez Rangel, mediante escritura pública 5771 del 31 de diciembre de 1992, de la Notaría Cuarta de

Bucaramanga, contrajo un crédito hipotecario con el establecimiento bancario Corpavi, hoy Colpatria, hasta por la cantidad de 2077,8762 Unidades de Poder Adquisitivo Constante.

De otro lado, en el trámite de esta instancia, se requirió al Juzgado de conocimiento informar si dentro del proceso existía un embargo de remanentes que se encontrara vigente y si se había realizado diligencia de remate, frente a lo cual se recibió informe del profesional «con funciones secretariales, adscrito a la oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil municipal de Bucaramanga», en el que:

«CERTIFICA...

Que el estado actual del referido proceso es ACTIVO contando con liquidación del crédito aprobada mediante auto de fecha (21) de Junio de 2018...

Que NO reposa en los encuadernamientos, acta en la que se haga constar la práctica de diligencia de remate alguna...

Que reposa en el expediente a folio (67) Cuaderno N° 1, oficio N° 0399/27684 emanado del Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga mediante el cual se comunica el decreto de embargo de remanente que llegare a quedar y/o desembargar dentro del proceso que acá se certifica, sin que se observe en el plenario providencia mediante la cual el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga disponga tomar nota de lo solicitado; no obstante lo anterior, se observa a folio (74) del mismo encuadernamiento, providencia de fecha (20) de Junio de 2005, mediante la cual se dispone negar el embargo de remanente solicitado por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga por cuanto este se encuentra embargado por cuenta del Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, y posteriormente, a folio (143), milita oficio N° 6353 de fecha (15) de Diciembre de 2010, a través del cual el Juzgado Noveno Civil Municipal comunicó al Juzgado Primero Civil Municipal que se tomó nota del embargo de remanente solicitado mediante oficio N° 0399 de fecha 22 de febrero de 2005, con destino al proceso radicado 1997-27684, despacho que a su vez, mediante oficio N° 1444 de fecha (31) de marzo de 2009, informa al Juzgado Noveno Civil Municipal la terminación por desistimiento tácito del proceso radicado 1997/27684, ordenando levantar el embargo de remanente solicitado mediante oficio N° 0399 de fecha 22 de febrero de 2005, quedando a disposición del proceso radicado 1999-0212, medida que se encuentra vigente al momento de expedición de la presente».

En efecto, revisado lo allegado, se advierte que el juzgado de conocimiento, mediante proveído del 4 de febrero de 2011, decidió que «en adelante téngase el remanente y bienes a desembargar dentro de la presente actuación, embargado por cuenta de este mismo Despacho para el que sigue con el demandado radicado al No. 0212-99», determinación que, según la certificación referida, se encuentra vigente.

3. En relación con la reestructuración de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, tratándose de juicios ejecutivos en los que se pretenden cobrar créditos otorgados, para la adquisición de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha indicado que, para acceder al amparo solicitado, por vía constitucional, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acción haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble hipotecado o, aún, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante¹; (ii) que se haya actuado con una mínima diligencia dentro del asunto censurado, ejerciéndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor:

«Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) ésta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del

¹ Ver en este sentido CSJ STC6968-2015.

remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo; b) La acción de tutela se considerará improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobación del remate o de adjudicación del inmueble».

Por su parte, esta Corporación ha sido enfática en precisar que, en relación con el cobro ejecutivo de una obligación contraída antes del 31 de diciembre de 1999 en UPAC e incluso en pesos con capitalización de intereses para la adquisición de vivienda, que no ha sido reestructurada en los términos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor, tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido le resta exigibilidad a la obligación.

Así mismo, se ha señalado que el documento que recoge la reestructuración, junto con el título valor base de ejecución, forma un «título complejo», cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo, sin que para ello resulte relevante verificar la fecha de iniciación del proceso, si este corresponde a la primera ejecución, o si se trata de un crédito al día o en mora para el 31 de diciembre de 1999³.

Sobre el particular, la Sala sostuvo lo siguiente:

«De conformidad con el criterio sentado en sentencia STC8902 de 9 de julio de 2014, la Ley 546 de 1999, que trata exclusivamente el tema de vivienda, concedió a las entidades financieras un plazo de tres meses para redenominar en Unidades de Valor Real (UVR) los créditos concedidos antes del 31 de diciembre de ese año y pactados en UPAC. Así mismo, en los artículos 40 y 41, consagró un beneficio para los deudores de las obligaciones vigentes, contratadas con establecimientos de crédito y destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo, consistente en la reliquidación desde la fecha del respectivo desembolso hasta el 31 de diciembre de 1999, como si siempre hubieran estado pactadas en la forma convertida. Obtenido el resultado y confrontado con la

² Criterio reiterado en CC T- 881/13.

³ STC11990-2019 del 5 de septiembre de 2019.

forma como se venía cuantificando, la diferencia se convertía en un alivio que debía compensar el Gobierno, como paliativo a la responsabilidad oficial en la situación social existente, eso sí, con la restricción de que su aplicación era "para un crédito por persona".

De igual manera, instituyó el derecho a la reestructuración concertada para el pago diferido de los saldos, tomando en cuenta las verdaderas condiciones económicas de los afectados, como una manera de conjurar la crisis social existente y con el ánimo de evitar que las familias siguieran perdiendo sus hogares.

Bajo esos parámetros ningún beneficio reportaba a los ejecutados la terminación de los litigios, sin que existiera la posibilidad de replantear las condiciones para saldar esas deudas hacia futuro. **Ello quiere decir que la reestructuración no era un paso discrecional para los acreedores, ni mucho menos renunciante por los deudores, en vista de su trascendencia constitucional...**

Esta revisión excepcional de la forma como se desarrolla el acuerdo volitivo respecto de los propietarios de los inmuebles que venían cumpliendo a cabalidad los créditos y cesaron en sus pagos, después de que entró a regir la Ley 546 de 1999, **es obligatoria para el acreedor, por los alcances constitucionales que se le han dado a los principios que inspiraron su expedición.** De tal manera que, si la misma tuvo por objeto conjurar la grave situación generalizada preexistente, **también sirve de patrón para situaciones de insatisfacción futura, derivados de otros factores sociales que incidieran en el desarrollo contractual.**

Refuerza lo expuesto, la sentencia de tutela SU-813 del 4 de octubre de 2007 que profirió la Corte Constitucional con alcances generales, en la que precisó que en la Ley de vivienda se incluyeron (...) expresamente normas relativas al periodo de transición para el paso del antiguo sistema de financiación en UPAC al nuevo sistema de UVR. Ciertamente, con esta normatividad, no sólo se permite la adquisición de vivienda a nuevas personas, sino que, además, **se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiación declarado inconstitucional, pudieran conservarla** (CSJ STC3632-2017, 15 mar., reiterado en STC11990-2019).

A partir de esa precisión preliminar, esta Corporación ha establecido que

«(...) el derecho a la reestructuración es aplicable a los créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecución anterior o de si la obligación estaba al día o en mora; (...) la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la

demanda compulsiva; y (...) ésta es una obligación tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo crédito (...).

Al respecto, (...) conviene recordar, que [es] deber de los jueces, incluido el de ejecución, revisar si junto con el título base de recaudo, **la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuración de la obligación**, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos **"conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecución"** (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución haya sido proferida con anterioridad a la expedición de la sentencia SU-813/07, pues "lo cierto es que la exigencia de 'reestructuración' estaba vigente desde 1999 con la expedición del artículo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese año.

De ahí que la precitada decisión lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Política", (Subrayado fuera de texto) (CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. 2015-02294-00, reiterada en CSJ STC 4 feb. 2016, rad. 2015-00242-01 y en STC11990-2019, resaltado extratexto).

Acorde con lo anterior, frente a la existencia de cesionarios del crédito, la Sala ha precisado que:

«En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados, cuestión exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquéllos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito» (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterado en CSJ STC, 20 may. 2013, rad. 00914-00; 22 jun. 2012, rad. 00884-01; 19 sep. 2012, rad. 00294-01; y 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, entre otros).

4. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala venía sostenido que dicha regla no era absoluta, toda vez que, en aquellos procesos ejecutivos hipotecarios con créditos bajo el sistema UPAC y que no hubieran sido reestructurados, pero que contaban con embargos de remanentes o cobros coactivos vigentes, no había lugar a su terminación, pues

dicha cautela demostraba la incapacidad de pago del demandado⁴.

Sin embargo, esta postura fue modificada, pues se determinó que la existencia de algunos de los supuestos anteriores no significa *per se* la incapacidad de pago del deudor. En efecto, véase como la Sala, en 2019, indicó lo siguiente:

«(...) el ente fustigado estimó improcedente finiquitar el decurso analizado, por cuanto, si bien no se realizó la "reestructuración" de la obligación allí reclamada, los deudores eran insolventes, pues mediaba un "embargo coactivo" iniciado por la administración municipal de Cartagena, acorde con la anotación n° 14 del certificado del libertad y tradición del inmueble gravado.

Ahora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no aparea tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enjuiciado.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus "reales posibilidades financieras", para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores (...) de acceder a la mencionada "reestructuración", la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de "vivienda" originado en el extinto sistema Upac, está directamente relacionado con la garantía iusfundamental a la "vivienda".

No puede, bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la "incapacidad económica" del extremo allí demandado por la sola presencia del aludido "embargo coactivo", pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

⁴ Entre otras, STC1551-2017 que reitera lo considerado en las sentencias STC13347-2015, STC11343-2016 y STC17838-2016.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento en la ley o en la Constitución, donde el hecho base pasa a ser el "embargo coactivo" para de ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores.

Ello es inadmisble, por cuanto acarrea la violación del derecho al debido proceso del accionado, consagrado constitucionalmente (art. 29 CN), al permitir la intromisión, en el juicio, de reglas probatorias no previstas ni preestablecidas por el legislador, sino obtenidas de la imaginación del juez, al ubicar a la parte débil en la relación crediticia en un visible estado de indefensión.

El objetivo de la "reestructuración" consiste en la posibilidad de que los deudores concierten con el ente financiero o quien lo represente, la modalidad de pago de la acreencia de acuerdo a su actual capacidad económica» (CSJ STC14779-2019 de 30 oct. 2019, se resalta).

Así mismo, esta Corte insistió en tal postura, mediante el fallo STC474-2020:

«la Sala en reciente pronunciamiento precisó la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos como el de autos, no tenga por desvirtuada la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC con la mera existencia de un embargo coactivo que recaiga sobre el predio gravado hipotecariamente, pues con el propósito de dar prevalencia al derecho fundamental a la vivienda es de su resorte emprender una actividad proactiva en tal materia, tesis que en esta oportunidad se reitera y que, por ende, implica una nueva postura en esta Corporación...

En suma, para desvirtuar la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC, con el propósito de garantizarles el derecho a invocar la necesidad de la reestructuración de tales deudas, es insuficiente la medida coactiva de embargo que pese sobre el fundo objeto de la garantía real destinado a su lugar de habitación» (CSJ STC474-2020 de 29 ene. 2020).

Posición que fue reiterada, en providencia STC3010-2020, en la cual se resolvió que era evidente que «el estrado accionado concluyó que en el caso de marras no se imponía la reestructuración de la obligación, por cuanto el demandado carecía de la solvencia económica necesaria para sufragarla, circunstancia que extractó, simplemente, de la existencia de otro proceso ejecutivo en el que se decretó el embargo de los remanentes que quedaran en el asunto

objeto de censura constitucional, fundamentación que, como lo ha sostenido esta Corporación, resulta insuficiente» (CSJ STC3010-2020 de 18 mar. 2020).

No obstante, posteriormente, la Sala en sentencia STC5663-2020 volvió a sostener la anterior tesis, al afirmar que *«la no ‘terminación’ de la controversia aun cuando faltó demostrar la ‘reestructuración’ de la prestación cuyo recaudo se procura, por cuanto existe otra cautela que pesa sobre la garantía del hipotecario, tiene respaldo en lo sentado de antaño por esta Corte» (CSJ ST5663-2020 de 19 ago. 2020).*

Lo anterior, fue reiterado en sentencia STC11199-2020, en cuya oportunidad, la Sala volvió a considerar que *«la jurisprudencia constitucional también ha considerado que no es posible finiquitar la ejecución hipotecaria cuando en contra del deudor existieren otros cobros judiciales, a saber: ‘[C]uando cumplidas las anteriores condiciones se advierte por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuración, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligación, se exceptúa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuará, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligación’ (Sentencia SU-787 de 2012, Corte Constitucional)» (CSJ STC11199-2020 de 9 dic. 2020).*

Ahora, en el fallo de tutela STC351-2021, la Sala retomó el lineamiento asumido en el 2019, en cuanto resolvió que *«el Juzgado terminó resolviendo que en el caso concreto no se imponía la reestructuración de la obligación, por cuanto el ejecutado carecía de la solvencia económica necesaria para sufragarla, circunstancia que extractó, simplemente, de la existencia del embargo de remanentes, fundamentación que, como lo ha sostenido esta Sala, resulta insuficiente» (CSJ STC351-2021 de 28 ene. 2021).*

Empero, lejos de la pasividad y la estabilidad de la tesis, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia, se han emitido, razonadamente, otros variados pronunciamientos, como el contenido en la providencia STC1776-2021⁵, en el cual se decidió que la determinación entonces cuestionada no resultaba subjetiva o caprichosa, al considerar que *«la eventual terminación del juicio hipotecario en nada contribuiría a salvaguardar el predio de los ejecutados, dado el embargo de remanentes decretado respecto de ese juicio».*

En ese orden de ideas, puesta nuevamente la Sala en la necesidad de examinar el asunto resulta necesario adoptar una única posición en cuanto a si la existencia de procesos coactivos o de embargos de remanentes en contra del demandado impide o no la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, por la falta de reestructuración del crédito. Es decir, a través de estas líneas la Sala procederá a unificar su posición.

Sobre el particular, la Sala considera que lo más razonado es mantener la postura adoptada en la sentencia STC14779-2019, toda vez que, además de lo dicho en esa oportunidad, se advierte que la legislación vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad económica de una persona.

Por el contrario, conforme al artículo 176 del Código General del Proceso, el juez deberá apreciar las pruebas *«en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».*

⁵ De 25 de febrero de 2021.

Entonces, no basta con advertir la existencia de un trámite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales están en la obligación de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminación del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, según lo expuesto, y en aras de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, cuando éste se vea comprometido.

5. Bajo el anterior contexto, se anticipa la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la determinación cuestionada no tuvo en cuenta la normatividad aplicable ni los precedentes jurisprudenciales atinentes a la obligatoriedad de la reestructuración de los créditos de vivienda adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, como lo es el crédito de vivienda que contrajo el señor Suárez Rangel.

En efecto, tal como quedó reseñado, los estrados judiciales indicaron que la nulidad ya había sido planteada previamente y resuelta desfavorablemente y que, por consiguiente, el convocado no podía volver a revivir etapas procesales ya precluidas o providencias ejecutoriadas y en firme, sin tener en cuenta que lo reclamado es un mandato legal y, por tanto, *«el derecho a la reestructuración es aplicable a los créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecución anterior o de si la obligación estaba al día o en mora; (...) es requisito sine qua non*

para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y (...) ésta es una obligación tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo crédito (...).» (CSJ 11990-2019).

De manera que, en esas condiciones, no era posible alegar que el asunto ya había sido resuelto con anterioridad, pues, en torno a ello, la Sala ha advertido que *«la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (...) e[st] viable resolver de fondo la petición»* (CSJ STC8059-2015).

Así las cosas, se resalta que es deber de los jueces, incluidos los de ejecución, revisar si junto con el título base del recaudo la parte demandante ha acreditado la reestructuración del crédito, puesto que, como se ha remarcado insistentemente por esta Corporación, esos documentos conforman *«un título ejecutivo complejo»* y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecución.

Igualmente, como quiera que la decisión del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga también se sustentó en que *«no era procedente dar aplicación a la referida normativa por cuanto existe embargo de remanentes sobre los bienes de propiedad del demandado hipótesis que impide dar por terminado el proceso...»*, lo cual fue confirmado por el superior⁶, resulta necesario que el asunto sea nuevamente desatado, puesto que, como se advirtió, aquella motivación es **insuficiente**, dado que no puede desvirtuarse la capacidad económica del deudor -per se- por la existencia de un embargo de

⁶ Fls. 23, 40 'CARATULA-2020-492-00 copia' pdf.

67

remanentes, todo lo cual debe ser objeto de análisis en la respectiva causa.

En ese sentido, no sobre señalar que *«El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera que tras conocerse las se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso»* (STC14779-2019).

6. Desde luego, según lo reseñado, lo resuelto en el trámite debatido compromete los derechos fundamentales alegados por el accionante y abre paso a conceder el resguardo, de modo que la decisión del *a quo* constitucional será revocada y, por consiguiente, se dispondrá que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Bucaramanga deje sin efecto la providencia del 3 de junio de 2020, a fin de que proceda a dictar una nueva en la que se tengan en cuenta las precisiones expuestas, según en derecho corresponda.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para, en su lugar, **CONCEDER** el amparo deprecado.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (*rad.* 2001-01291), deje sin efecto la providencia que emitió en segunda instancia el 03 de junio de 2020, junto con las actuaciones que de ella dependan.

TERCERO: Cumplido lo anterior y, en un término no superior a cinco (5) días, la sede judicial acusada deberá emitir una nueva providencia, en la que resuelva la apelación propuesta contra el proveído dictado el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga, teniendo en cuenta las precisiones plasmadas en esta providencia, según en derecho corresponda. Por Secretaría remítasele copia de esta determinación.

CUARTO: Comuníquese telegráficamente lo aquí dispuesto a los interesados y, oportunamente, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

STL2942-2020

Radicación 88357

Acta 8

Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinte
(2019)

Decide la Sala la impugnación interpuesta por **EDILZA ROSA AGUAS MUÑOZ** contra la providencia de fecha 29 de enero de 2020 proferida por la Sala de Casación Civil, dentro de la acción de tutela que promovió contra la **SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA**, trámite que se hizo extensivo a todas las partes y terceros intervinientes en el proceso No. 2004-00433.

I. ANTECEDENTES

La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente quebrantados por la autoridad accionada.

69

Indicó que Bancafé S.A. inició demanda ejecutiva en contra de Óscar Darío Villa Martínez, Cecilia Marlen Schortborg Guerrero y en su contra con el fin de obtener el pago de un crédito hipotecario pactado inicialmente en UPAC, asunto que le correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena el cual, mediante decisión de 6 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda y ordenó la terminación del proceso al considerar que frente *«a los créditos de vivienda afectados por el UPAC, se requiere para su ejecución la restructuración del crédito, la que se echa de menos en el asunto, por lo que no está estructurado el respectivo título complejo [...]»*.

En virtud de lo anterior el ejecutante interpuso recurso de apelación y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 5 de noviembre de 2019, confirmó la decisión de primera instancia.

Manifestó que el Tribunal accionado quebrantó sus derechos fundamentales por cuanto no tuvo en cuenta los documentos entregados por la actora *«antes de la fecha fijada por el tribunal, para dictar sentencia de segunda instancia, [pues] aportó en la secretaría [...] el certificado de libertad y tradición del inmueble de propiedad de los demandados [...] donde aparece una nueva anotación de embargo de jurisdicción coactiva proferida por la Tesorería Distrital de Cartagena [...] [y] consta la situación de dicho inmueble»;* asimismo *«las medidas cautelares de jurisdicción coactiva que pesaban sobre el inmueble y que las mismas*

datan desde el año 2009 en adelante, lo cual comprueba el estado de insolvencia de los demandados [...]».

Añadió que la jurisprudencia ha señalado que *«cuando haya demandas en contra del deudor (demandado) hipotecario, embargos de remanente y de jurisdicción coactiva no procede la terminación del proceso, por la presunción del estado de insolvencia del demandado o deudor hipotecario; por tal razón así debió proferirse en las dos instancias; más cuando el mismo juez, ordenó de oficio que le certificaran la situación del inmueble de los demandados por concepto de impuestos»*.

Por lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto la providencia emitida el 5 de noviembre de 2019, por la Sala Civil Familia de Cartagena y la de 6 de marzo proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, y como consecuencia *«se restablezca el debido proceso por haber incurrido en vías de hecho, [...] ya que no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al expediente y la prueba [...] ordenada de manera oficiosa por el [ad quem]»*.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante auto de 29 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Civil admitió la acción de tutela, ordenó la notificación a las autoridades accionadas para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción, vinculó a las partes y terceros intervinientes en el proceso No. 2004-00433.

Un magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Cartagena indicó que la decisión cuestionada se dictó con aplicación de la jurisprudencia aplicable a lo *«referente a la terminación de los procesos ejecutivos por falta de la reestructuración de los créditos otorgados bajo el sistema del extinto UPAC»*; que contrario a lo que el actor señaló en la presente acción de tutela, ese despacho si hizo uso de la prueba de oficio; por lo que solicitó que negara por improcedente.

Óscar Darío Villa Martínez y Cecilia Marlene Schorborgh pidieron que se negaran las pretensiones de la accionante, dado que *«la parte demandante sorprendió con la existencia de un proceso de ejecución coactiva, de igual modo [aportó] unas certificaciones de existencia de otros procesos ejecutivos al momento de la apelación [...] sin que en el expediente reposara solicitud de embargos de remanentes por este [...]»*.

Por fallo de 29 de enero de 2020, la Sala de Casación Civil negó el amparo y luego de citar algunos apartes de la sentencia de segunda instancia, consideró que:

[...]

Así las cosas, la Sala concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.

Y es que, en rigor, lo que aquí planteó la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la interpretación que efectuó el Tribunal accionado sobre los presupuestos necesarios para la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a la luz de lo que ha decantado la jurisprudencia constitucional, concluyendo

que era inviable la continuación de la ejecución, por cuanto no se acreditó la reestructuración del crédito perseguido, sin que se verificara la presencia de alguna de las circunstancias que constituyen una excepción a tal requisito.

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocían normas de orden público y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses». (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).

Para abundar en razones, la Sala en reciente pronunciamiento precisó la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos como el de autos, no tengan por desvirtuada la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC con la mera existencia de un embargo coactivo que recaiga sobre el predio gravado hipotecariamente, pues con el propósito de dar prevalencia al derecho fundamental a la vivienda es de su resorte emprender una actividad proactiva en tal materia, tesis que en esta oportunidad se reitera y que, por ende, implica una nueva postura de esta Corporación, al señalar:

... pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enjuiciado.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus "reales posibilidades financieras", para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores... de acceder a la mencionada "reestructuración", la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de "vivienda" originado en el extinto sistema

20

Upac, está directamente relacionado con la garantía iusfundamental a la "vivienda".

No puede, bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la "incapacidad económica" del extremo allí demandado por la sola presencia del aludido "embargo coactivo", pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento en la ley o en la Constitución, donde el hecho base pasa a ser el "embargo coactivo" para de ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores (CSJ, STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00).

En suma, para desvirtuar la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC, con el propósito de garantizarles el derecho a invocar la necesidad de la reestructuración de tales deudas, es insuficiente la medida coactiva de embargo que pese sobre el fundo objeto de la garantía real destinado a su lugar de habitación.

III. IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó sin hacer ningún reparo.

IV. CONSIDERACIONES

Esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Política es viable frente a decisiones judiciales, pero solo cuando, en casos concretos y excepcionales, las actuaciones u omisiones de los jueces resultan evidentemente violatorias de los derechos constitucionales fundamentales, como cuando la providencia atacada pueda calificarse de caprichosa, arbitraria, absurda o autoritaria por carecer efectivamente de fundamento objetivo y por lo tanto, sea el resultado de

un juicio abiertamente irracional, todo lo cual debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía de los jueces.

En el presente caso, la accionante cuestiona la decisión proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de 5 de noviembre de 2019, que confirmó la de 6 de marzo de 2019, la cual negó las pretensiones de la demanda y ordenó la terminación del proceso al considerar que frente «a los créditos de vivienda afectados por el UPAC, se requiere para su ejecución la reestructuración del crédito, la que se echa de menos en el asunto, por lo que no está estructurado el respectivo título complejo [...]».

Examinada la decisión de 5 de noviembre de 2019, encuentra la Sala que el Tribunal después de citar las normas y la jurisprudencia aplicable al caso, encontró acreditado dentro del plenario que «Concasa otorgó un mutuo a Óscar Darío Villa Martínez, el 21 de febrero de 2009, tal como se desprende del pagaré 560-2-021-09-9, el que precisamente da pábulo a la ejecución igualmente el gravamen hipotecario constituido sobre el inmueble [...]; asimismo prueba de la «conversión y reliquidación realizada sobre la obligación hipotecaria en cuestión, otorgándose un alivio por el valor de \$6.173.005 [...] empero, no fue allegada

junto con el libelo introductor la reestructuración del crédito, y tampoco fue acreditada en el decurso del mismo, siendo precisamente la que se echa de menos y que da al traste con las pretensiones demandadas».

Enfatizó que como la demanda fue presentada en el mes de diciembre de 2004, y se trataba de un crédito otorgado en UPAC, es decir, antes de 31 de diciembre de 1999, *«para ese momento ya debería contar con la reliquidación del crédito, la redenominación en UVR y la reestructuración, en su defecto, frente al desacuerdo, adosar el procedimiento seguido ante la Superintendencia Financiera para dirimir las diferencias; esa incuria hace que la obligación no sea exigible, y en consecuencia, que el título aportado no preste mérito ejecutivo como lo alega la excepcionante, y lo ratifica el juez en la decisión cuestionada»*; que si bien la Corte Constitucional estableció en sentencia SU-787 de 2012, unas excepciones a la regla como *«la existencia de otros procesos contra el deudor en donde el substrato argumentativo, en el fondo tiene que ver con la capacidad económica del deudor y la imposibilidad de pago, [...] en el presente caso no se acreditó ninguna de esas excepciones [...]»*.

También señaló que el juez de instancia al momento de proferir su decisión *«no reflejó la existencia de otros procesos judiciales contra los ejecutados o embargo de remanentes, situación que afloró de manera extemporánea en sede de apelación»*.

En cuanto a la incapacidad de pago del deudor refutada indicó que si bien se allegó una *«consulta en línea de procesos judiciales se desconoce la suerte de dos de ellos, atendiendo que uno de los registrados era una prueba anticipada [...], por otro lado, revisado el cuaderno de medidas cautelares, no se avista embargo de remanente alguno, es más, el magistrado sustanciador oficiosamente solicitó a la TESORERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA -UNIDAD DE JURISDICCIÓN COACTIVA-», que certificara sobre proceso alguno contra el demandado y medida cautelar sobre el inmueble dado en garantía en el presente proceso, respondiendo que el inmueble está inmerso en un proceso de jurisdicción coactiva, pero que está en etapa de notificación por lo cual hasta la fecha no se han decretado medidas cautelares, [...]»*; de igual manera refirió que dicha consulta sería una prueba extemporánea dado que la suscribió al interponer la apelación sin hacer uso de la oportunidad probatoria dispuesta en el artículo 327 del CGP.

Por último, concluyó que *«si no existe reestructuración o prueba de la incapacidad financiera del deudor para asumir la obligación, y menos la existencia de otro proceso que tenga la virtualidad de configurar la aludida falta de capacidad económica del demandado, no es posible que se abra paso la excepción a que alude el recurrente, luego, el cargo está llamado al fracaso»*.

Frente a lo anterior, queda claro que la decisión de segunda instancia no luce abiertamente arbitraria o antojadiza, toda vez que el Tribunal de manera razonada

11

determinó que cuando se trata de créditos de vivienda afectados por el UPAC, se requiere la liquidación y restructuración del crédito para su ejecución, que, si bien la actora alegó la incapacidad de pago y aportó unos documentos, lo hizo por fuera de la oportunidad probatoria otorgada por el artículo 327 del CGP.

Así las cosas, queda claro que la providencia que se pretende atacar por esta vía, no es caprichosa, ni está desprovista de sustento jurídico. Por el contrario, se apoya en un adecuado análisis de la situación fáctica y jurídica sometida al escrutinio del fallador accionado, sin observarse una actuación irregular o una determinación anómala, lo que le impide al juez de tutela interferirla, pues de hacerlo, rebasaría la órbita de su competencia.

De esta manera, no puede el juez de tutela inmiscuirse so pretexto de tener un criterio diferente, en desmedro de los principios de autonomía e independencia judicial, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural, y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes, que como se dejó plasmado, en este caso no acontecen.

En conclusión, como en múltiples ocasiones lo ha precisado esta Sala de la Corte, la acción de tutela no es una instancia adicional en la que se pueda realizar un estudio de fondo del proceso resuelto por las autoridades judiciales competentes, pues su objeto es la protección de

derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados y no una tercera instancia en la que se imponga un criterio jurídico o de valoración probatoria por muy respetables los argumentos en que se soporte.

Es necesario reiterar que esta herramienta de protección de derechos fundamentales no está prevista para suplir las obligaciones y cargas de las partes al interior del respectivo proceso ni sustituir las decisiones que por previsión legal, le corresponden al funcionario judicial que conoce el proceso en las instancias, su intervención es extraordinaria y está supeditada a que pese a haberse agotado todos los recursos y mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, persista una vulneración que sea necesario corregir mediante la tutela.

Así las cosas, las anteriores consideraciones resultan suficientes para negar el amparo, circunstancia que impone confirmar la providencia impugnada.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la tutela impetrada.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.


FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de la Sala


GERARDO BOTERO ZULUAGA


CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
21/03/2020


JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente

STC474-2020

Radicación n.º 11001-02-03-000-2019-03992-00

(Aprobado en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinte)

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020).

Se decide la acción de tutela instaurada por Edilza Rosa Aguas Muñoz contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, trámite al cual se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso que originó la queja.

ANTECEDENTES

1. La promotora del amparo, a través de apoderado judicial, reclamó protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.

Solicitó, entonces, dejar sin efecto la sentencia de 5 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal, en

72

consecuencia, se ordene tener en cuenta *«las pruebas documentales aportadas al expediente, y la prueba adicional allegada al proceso por parte de la secretaria de hacienda distrital de Cartagena, ordenada de manera oficiosa por el ad-quem»*.

2. Son hechos relevantes para la definición de este asunto los siguientes:

2.1. Bancafé S.A. promovió demanda ejecutiva hipotecaria en contra de Óscar Darío Villa Martínez y Cecilia Marlene Schrtborgh, con miras a obtener el pago de un pagaré pactado inicialmente en UPAC, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 5° Civil del Circuito de Cartagena.

2.2. Surtido el trámite de rigor, el 6 de marzo de 2019 el despacho de conocimiento negó las pretensiones y ordenó terminar el proceso, al considerar que la obligación carecía de reestructuración; determinación apelada por la parte ejecutante, argumentando que, pese a no estar reestructurada, lo cierto es que no se tuvo en cuenta los procesos coactivos vigentes, ni la capacidad de pago del deudor, adjuntando *«una consulta de procesos en su contra»*.

2.3. Luego, el Tribunal reconoció la cesión del crédito a favor de Edilza Rosa Aguas Muñoz, y el 5 de noviembre siguiente confirmó la terminación del proceso por ausencia de reestructuración, al considerar que *«para el momento que el juez de instancia profirió la decisión no reflejó la existencia*

de otros procesos judiciales contra los ejecutados o embargo de remanentes, situación que afloró de manera extemporánea en sede de apelación», asimismo, porque *«oficiosamente solicitó a la TESORERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA -UNIDAD DE JURISDICCIÓN COACTIVA-, que certificara sobre proceso alguno contra el demandado..., respondiendo que el inmueble está inmerso en un proceso de jurisdicción coactiva, pero que está en etapa de notificación por lo cual hasta la fecha no se han decretado medidas cautelares»*.

2.4. Por vía de tutela se duele la gestora, en síntesis, de la decisión referida a espacio, pues *«ni el juez de primera..., ni el de segunda instancia tuvieron en cuenta las medidas cautelares de jurisdicción coactiva que pesaban sobre el inmueble, y que las mismas datan desde el año 2009 en adelante, lo cual comprueba el estado de insolvencia de los demandados»*.

2.5. Agregó que, conforme a la jurisprudencia de los altos tribunales, *«cuando haya demandas en contra del deudor (demandado) hipotecario, embargos de remanentes y de jurisdicción coactiva, no procede la terminación del proceso»*, de ahí que proceder de manera contraria configura una vía de hecho; resaltó que el *ad quem* ordenó pruebas de oficio, las que también desconoció, así como el certificado de tradición que la accionante aportó al plenario que daba cuenta de los embargos coactivos que pesan sobre el inmueble.

3. La Corte admitió la demanda de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS

1. La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena instó la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisión censurada no luce arbitraria, habida cuenta que atendió las probanzas allegadas al plenario, incluso las decretadas oficiosamente.

2. Óscar Darío Villa Martínez y Cecilia Marlene Schorborgh Guerrero, a través de apoderado judicial, solicitaron no acceder al amparo suplicado, en la medida en que las decisiones censuradas no son caprichosas y están ajustadas a los precedentes jurisprudenciales; porque la obligación no está reestructurada, de ahí que no pueda seguir la ejecución, al margen de que existan otras obligaciones, toda vez que no fueron puestas en conocimiento oportunamente, ni mucho menos existió una solicitud de embargo de remanentes.

CONSIDERACIONES

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las

autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando *«el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley»* (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n° 11001-22-03-000-2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. En el caso que concita la atención de la Sala, encuentra la Corte que la acción constitucional carece de vocación de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 5 de noviembre de 2019, que confirmó la dictada el 6 de marzo anterior por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Cartagena, expresó los motivos por los cuales resultaba inviable continuar con la ejecución materia de la queja constitucional, respecto de lo cual expresó que:

Adentrándonos ya al caso que ocupa la atención de la Sala, está debidamente acreditado en el plenario que CONCASA otorgó un mutuo a ÓSCAR DARÍO VILLA MARTÍNEZ, el 21 de febrero de 2009, tal como se desprende del pagaré 560-2-021-09-9 (fl.14), el que precisamente da pábulo a la ejecución, e igualmente el gravamen hipotecario constituido sobre el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 060-128235 (fl.33).

23

Reposa también en el plenario, prueba de la conversión y la reliquidación realizada sobre la obligación hipotecaria en cuestión, otorgándose un alivio por valor de \$ 6.173.005 (fl. 19-22), empero, no fue allegada junto con el libelo introductor la reestructuración del crédito, y tampoco fue acreditada en el decurso del mismo, siendo precisamente la que se echa de menos y que da al traste con las pretensiones demandadas.

De manera que, si la demanda fue presentada en diciembre de 2004, repetimos tratándose de un crédito otorgado en UPAC antes de 31 de diciembre de 1999, para ese momento ya debería contar con la reliquidación del crédito, la redenominación en UVR y la reestructuración, en su defecto, frente al desacuerdo, adosar el procedimiento seguido ante la Superintendencia Financiera para dirimir las diferencias; esa incuria hace que la obligación no sea exigible, y en consecuencia, que el título aportado no preste mérito ejecutivo como lo alega la excepcionante, y lo ratifica el juez en la decisión cuestionada.

(...)

Y es cierto, que la Corte Constitucional ha establecido algunas excepciones a la regla, como la existencia de otros procesos contra el deudor, en donde el substrato argumentativo, en el fondo tiene que ver con la capacidad económica del deudor y la imposibilidad de pago, empero, en el presente caso no se acreditó ninguna de esas excepciones establecidas en Sentencia SU-787 de 2012...

(...)

En el asunto que concita la atención de la Sala, para el momento que el Juez de instancia profirió la decisión no reflejó la existencia de otros procesos judiciales contra los ejecutados o embargo de remanentes, situación que afloró de manera extemporánea en sede de apelación.

Y muy a pesar que se alega la incapacidad de pago del deudor, allegando una consulta en línea de procesos judiciales (fl. 458-463 C2), se desconoce la suerte de dos de ellos, atendiendo que uno de los registrados era una prueba anticipada (fl. 460), por otro lado, revisado el cuaderno de medias cautelares, no se avista embargo de remanente alguno, es más, el magistrado sustanciador oficiosamente solicitó a la TESORERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA -UNIDAD DE JURISDICCIÓN COACTIVA-, que certificara sobre proceso alguno contra el demandado y medida cautelar sobre el inmueble dado en garantía en el presente proceso, respondiendo que el inmueble está inmerso en un proceso de jurisdicción coactiva, pero que está en etapa de notificación por lo cual hasta la fecha no se han decretado medidas cautelares, (fl. 70 C. 2ª instancia).

(...)

De todos modos, la consulta de procesos sería una prueba aportada de manera extemporánea e irregular, pues solo se arrimó, al formular la apelación, lo que deja ver que no era un elemento de juicio al alcance del a quo para cuando dictó la sentencia, fuera que el recurrente no hizo uso de la oportunidad probatoria que le otorga el artículo 327 del Código General del Proceso para pedir pruebas en segunda instancia, a efectos de que esta superioridad estudiara su viabilidad conforme al referente normativo.

Fuerza es concluir, que si no existe reestructuración o prueba de la incapacidad financiera del deudor para asumir la obligación, y menos la existencia de otro proceso que tenga la virtualidad de configurar la aludida falta de capacidad económica del demandado, no es posible que se abra paso la excepción a que alude el recurrente, luego, el cargo está llamado al fracaso.

Así las cosas, la Sala concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.

Y es que, en rigor, lo que aquí planteó la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la interpretación que efectuó el Tribunal accionado sobre los presupuestos necesarios para la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a la luz de lo que ha decantado la jurisprudencia constitucional, concluyendo que era inviable la continuación de la ejecución, por cuanto no se acreditó la reestructuración del crédito perseguido, sin que se verificara la presencia de alguna de las circunstancias que constituyen una excepción a tal requisito.

En este orden de ideas, tales inferencias no puede ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, «*máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de*

orden público y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses». (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).

3. Para abundar en razones, la Sala en reciente pronunciamiento precisó la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos como el de autos, no tengan por desvirtuada la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC con la mera existencia de un embargo coactivo que recaiga sobre el predio gravado hipotecariamente, pues con el propósito de dar prevalencia al derecho fundamental a la vivienda es de su resorte emprender una actividad proactiva en tal materia, tesis que en esta oportunidad se reitera y que, por ende, implica una nueva postura de esta Corporación, al señalar:

...pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enjuiciado.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus "reales posibilidades financieras", para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación,

derecho de rango suprallegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores... de acceder a la mencionada "reestructuración", la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de "vivienda" originado en el extinto sistema Upac, está directamente relacionado con la garantía iusfundamental a la "vivienda".

No puede, bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la "incapacidad económica" del extremo allí demandado por la sola presencia del aludido "embargo coactivo", pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento en la ley o en la Constitución, donde el hecho base pasa a ser el "embargo coactivo" para de ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores (CSJ, STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00).

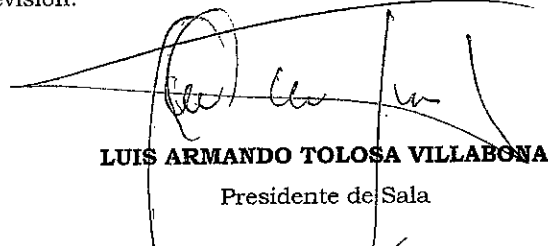
En suma, para desvirtuar la capacidad económica de los deudores de créditos de vivienda otorgados en UPAC, con el propósito de garantizarles el derecho a invocar la necesidad de la reestructuración de tales deudas, es insuficiente la medida coactiva de embargo que pese sobre el fundo objeto de la garantía real destinado a su lugar de habitación.

4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protección pedida.

DECISIÓN

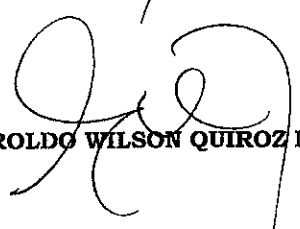
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **deniega** el amparo solicitado.

Comuníquese por el medio más expedito a los interesados y, si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente

STC351-2021

Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-00065-00

(Aprobado en sesión virtual de veintisiete de enero de dos mil veintiuno)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021).

Se decide la acción de tutela instaurada por Luis Alfonso Becerra Valencia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de ese lugar, trámite al cual se vinculó a las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.

ANTECEDENTES

1. El promotor del amparo, a través de apoderado judicial, reclamó la protección de sus garantías esenciales al debido proceso, defensa y petición, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al no acceder a su solicitud de terminación de la ejecución que se le sigue, a pesar de la ausencia de la restructuración del

Radicación n.º 11001-02-03-000-2019-03992-00

[Firma]
LUIS ALONSO RICO PUERTA *[Firma]* voto

[Firma]
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

[Firma]
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

CLC

crédito exigido.

Solicitó, entonces, «orden[ar] a l[o/s] accionad[o/s], principalmente al Juzgado..., se realice un control de legalidad con el propósito de determinar si... se liquidó y reestructuró el crédito, pues en caso negativo, se deben pronunciar de manera clara, integra y razonada analizando los efectos de la Ley 546 de 1999, y los lineamientos jurisprudenciales que la desarrollan con las correspondientes excepciones por falta de capacidad de pago»; y cumplido ello, «dar por terminado el proceso..., por falta de reliquidación y reestructuración».

2. Son hechos relevantes para la definición del presente caso, los siguientes:

2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario que desde el año 2003 cursa contra el accionante, edificado en un pagaré a favor del Banco Central Hipotecario, pactado en UPAC's en el año 1995, el 8 de febrero de 2019 el Juzgado adjudicó el inmueble gravado a favor de los cesionarios del crédito, Yuraima Blanquicet Gómez y Mauricio Velásquez, decisión que mantuvo el 27 de agosto siguiente, a la vez que denegó la concesión de la alzada propuesta frente a la misma, por improcedente, y allí mismo resolvió no acceder al control de legalidad que aduciendo la ausencia de la reestructuración del crédito propuso el tutelante.

Por otro lado, el 16 de julio de 2020 el Tribunal convocado declaró bien denegada la concesión del recurso

de apelación que propuso el quejoso frente al mentado proveído del 8 de febrero de 2019.

2.2. En sede de tutela el promotor adujo que las sedes judiciales convocadas vulneraron sus derechos de primer orden al no acceder a la solicitud de terminación del juicio que postuló anunciando la ausencia de la reestructuración del crédito.

Aseguró que la existencia del embargo de remanentes era motivo insuficiente para desechar su petición, en tanto que ello no demuestra que esté insolvente, como lo ha concluido esta Corte en casos análogos (CSJ STC474-2020).

Destacó que desde el año 2000 ha exigido la aludida reestructuración al acreedor (comenzando por el Banco Granahorrar -quien inició el ejecutivo- y siguiendo por cada uno de los múltiples cesionarios del crédito que han existido) sin recibir alguna respuesta de fondo al respecto, pues ninguno asume la responsabilidad legal que les asiste.

3. La Corte admitió el libelo de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991.

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS

1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena indicó que «la actuación que por esta vía se cuestiona aparece soportada en las pruebas

oportunamente recaudas y en los argumentos razonables y atendibles que allí se consignaron».

2. El abogado Hemelth Castillo Camargo, quien dijo actuar como *«apoderado de... Mauricio Velásquez Castelblanco y Yuraima Blanquicet Gómez»*, se pronunció frente a la solicitud de protección sin allegar el poder especial conferido por éstos para intervenir en su nombre en este trámite constitucional, por lo cual su manifestación no se tiene en cuenta.

3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena pidió el despacho adverso de la protección rogada porque *«no ha incurrido en violación de derechos fundamentales..., como quiera que el trámite surtido... se sujetó a las normas procedimentales establecidas para el caso».*

CONSIDERACIONES

1. Al tenor del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional

y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando *«el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley»* (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

Por esa línea, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

Al respecto, la Sala ha sostenido que:

...el Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si 'se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisibles resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado... (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.).

En ese orden, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada *«vía de hecho»*.

96

2. Descendiendo al *sub judice*, advierte la Corte que el Juzgado accionado cometió un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción, habida cuenta que omitió motivar, adecuadamente, la decisión criticada, esto es, aquella en la que no accedió a efectuar el control de legalidad exigido por el inconforme, según pasa a exponerse.

2.1. En efecto, revisada la providencia atacada, esto es, la dictada el 27 de agosto de 2019, se halla que el *a-quo* convocado advirtió que *«el crédito cobrado... fue para la compra de vivienda, siendo aplicable sobre el mismo la legislación y la jurisprudencia de adquisición de vivienda, tan es así que la entidad financiera primigenia dio aplicación a los (sic) dispuesto en la ley 546 de 1999, en cuanto a la reliquidación de la obligación, pero en efecto no se encontró la reestructuración del crédito, aspecto que obligaría...[,] de acuerdo a la... jurisprudencia...[,] a declarar la terminación del proceso por falta del requisito de reestructuración...»*; sin embargo, a reglón seguido, para no acceder al mentado control de legalidad, anotó que:

Pero, por otro lado se observa que... se materializa una de las excepciones establecida por la jurisprudencia para terminar un compulsivo por falta de[] requisito de reestructuración del crédito, esto es, la existencia de remanentes en contra del ejecutado. En efecto, de una revisión del expediente se advierte que se encuentra vigente un embargo de remanentes dentro de un proceso ejecutivo seguido por LA COPROPIEDAD EL REFUGIO en contra [d]el aquí demandado y que fue aceptado por esta judicatura mediante proveído del 19 de enero de 2009..., igualmente, existe[n] dos embargos provenientes de los Juzgados Octavo Civil Municipal y Segundo de Ejecución Civil Municipal de

Cartagena, que estarían en turno de aplicación de acuerdo a las resultas del productos (sic) embargado, aspecto que hace ineficaz la protección de los derechos del ejecutado, dado que el bien que se pretende liberar una vez se dicte terminación al interior del proceso, pasaría a las agencias judiciales solicitantes.

Con apoyo en lo cual, seguidamente, concluyó que era inviable *«decretar las (sic) terminación del proceso por ausencia del requisito de reestructuración, dado que existe embargo de remanentes en contra del ejecutado»*.

2.2. Así las cosas, evidente es que, en últimas, el Juzgado terminó resolviendo que en el caso concreto no se imponía la reestructuración de la obligación, por cuanto el ejecutado carecía de la solvencia económica necesaria para sufragarla, circunstancia que extractó, simplemente, de la existencia del embargo de remanentes, fundamentación que, como lo ha sostenido esta Sala, resulta insuficiente.

En un caso con alguna simetría al aquí auscultado, que *mutatis mutandis* resulta aplicable al presente, se dejó dicho:

Oteado en su contexto el pronunciamiento debatido, se observa la prosperidad del ruego, por avizorarse la insuficiencia de la motivación del fallo de segunda instancia proferido por la sala enjuiciada, como pasa a explicarse.

Según se acotó con antelación, el ente fustigado estimó improcedente finiquitar el decurso analizado, por cuanto, si bien no se realizó la “reestructuración” de la obligación allí reclamada, los deudores eran insolventes, pues mediaba un “embargo coactivo” iniciado por la administración municipal de Cartagena...

Ahora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enjuiciado.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus "reales posibilidades financieras", para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación, derecho de rango suprallegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores... Hoyos Anaya y... Mesa Gómez de acceder a la mencionada "reestructuración", la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de "vivienda" originado en el extinto sistema Upac, está directamente relacionado con la garantía iusfundamental a la "vivienda".

No puede, bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la "incapacidad económica" del extremo allá demandado por la sola presencia del aludido "embargo coactivo", pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento en la ley o en la Constitución, donde el hecho base pasa a ser el "embargo coactivo" para de ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores.

Ello es inadmisibile, por cuanto acarrea la violación del derecho al debido proceso del accionado, consagrado constitucionalmente (art. 29 CN), al permitir la intromisión, en el juicio, de reglas probatorias no previstas ni preestablecidas por el legislador, sino obtenidas de la imaginación del juez, al ubicar a la parte débil en la relación crediticia en un visible estado de indefensión.

El objetivo de la "reestructuración" consiste en la posibilidad de que los deudores concierten con el ente financiero o quien lo represente, la modalidad de pago de la acreencia de acuerdo a su actual capacidad económica...

En ese contexto, como se anunció, la motivación del proveído de 12 de agosto de 2019, es insuficiente, toda vez que pretermitió efectuar un análisis concienzudo de la real situación financiera de los entonces enjuiciados, aspecto nodal para la resolución del conflicto sometido a su consideración (CSJ STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00; criterio reiterado, entre otras decisiones, en STC474-2020, 29 en., rad. 2019-03992-00; y STC3010-2020, 18 mar., rad. 2020-00757-00).

2.3. En suma, la decisión objeto de la petición de amparo carece de la debida fundamentación, omisión que, sin duda, trasgrede las garantías fundamentales del gestor, comoquiera que «la motivación de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garantía del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jurídico frente al caso materia de juzgamiento» (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00).

3. Finalmente, respecto al Tribunal convocado, se denegará la concesión del resguardo, para lo cual basta señalar que no se advierte que esa autoridad haya conculcado los derechos invocados por el gestor, en tanto que sólo le correspondió resolver lo concerniente al recurso de queja propuesto frente a la negativa del *a-quo* en cuanto a la concesión de la apelación incoada contra el auto que

45

accedió a la solicitud de adjudicación del inmueble que efectuaron los cesionarios del crédito, de donde esa Corporación no se ocupó del fondo del control de legalidad rogado por el deudor.

4. Lo dicho impone conceder, con alcance parcial, el amparo rogado, por lo cual se ordenará al Juzgado accionado que, tras dejar sin efecto la determinación censurada, proceda a dictar la que en derecho corresponda, con observancia de las consideraciones aquí vertidas.

DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **concede**, con alcance parcial, la protección del derecho al debido proceso del accionante Luis Alfonso Becerra Valencia. En consecuencia, **dispone**:

Primero. Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, tras dejar sin efecto el proveído de 27 de agosto de 2019, exclusivamente en cuanto al aparte en el cual dispuso «*NEGAR el control de legalidad propuesto por el demandado (sic)*», y la actuación que de él dependa; proceda a adoptar la determinación que en derecho corresponda, observando las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo y los precedentes jurisprudenciales vigentes al

respecto.

Dicha sede judicial informará a esta Corporación sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel término.

Segundo. En lo demás, **se deniega** la salvaguarda propuesta.

Tercero. Comunicar lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remitanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no impugnarse este fallo.

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

LUIS ALONSO RICO PUERTA

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

STC14779-2019

Radicación n.º 11001-02-03-000-2019-03453-00

(Aprobado en sesión del treinta de octubre de dos mil diecinueve)

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Se decide la salvaguarda impetrada por Élide Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa Gómez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, concretamente el magistrado John Freddy Saza Pineda, con ocasión del juicio ejecutivo n.º 2011-00076, incoado por la Compañía de Gerenciamiento de Activos en liquidación a los quejosos.

1. ANTECEDENTES

1. Los censores reclaman la protección de las prerrogativas al debido proceso, vivienda digna e igualdad, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada.

28

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisión de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la presente salvaguarda los descritos a continuación:

La Compañía de Gerenciamiento de Activos en liquidación, solicitó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, librar orden de pago en contra de Élica Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa Gómez, con base en el pagaré n.º 560-2-1617-2 por valor \$95.000.000.00, equivalente a 20.549,6490 Upac.

Emitido el mandato de apremio, los allí encartados se opusieron a la prosperidad de las pretensiones del libelo, formulando la excepción de *“inexigibilidad de la obligación por falta de reestructuración”*.

El 31 de octubre de 2017, el citado despacho puso fin al comentado litigio, por cuanto, halló que la aludida acreencia no había sido objeto de *“reestructuración”*; determinación revocada por el tribunal confutado el 12 de agosto de 2019, en sede de apelación, pues, en su criterio, pese al anterior defecto, la señalada consecuencia no se abría paso al existir un trámite coactivo vigente, iniciado por la administración municipal de Cartagena a los deudores.

Los promotores critican que el *ad quem* decidiera en contravía de sus intereses, porque i) para la época en la cual

se profirió la providencia discutida, es decir, 12 de agosto pasado, *“la parte demandada no soportaba ningún embargo de remanentes, todos estaban cancelados”*; y ii) aun cuando esas cautelas subsistieran, resultaba imperiosa la aludida *“reestructuración”* de la prestación.

3. Exigen, en concreto, dejar sin efectos la decisión de segundo grado y, en su lugar, conminar a la colegiatura confutada a convalidar la postura del *a quo* y finiquitar el decurso objetado.

1.1. Respuesta del accionado

El ente judicial cuestionado se ratificó en los raciocinios, báculo de la tesis acogida en el asunto auscultado.

2. CONSIDERACIONES

1. Liminarmente, debe recordarse, tratándose de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que para acceder al resguardo debe revisarse: (i) que la acción haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble hipotecado, siempre que el predio no se asigne al acreedor o a su cesionario; (ii) que se haya procedido con diligencia dentro del compulsivo censurado, ejerciéndose

los mecanismos procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, gobernado por la Ley 546 de 1999¹.

En torno a lo aludido, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional razonó:

“(…) Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) ésta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo (…)”².

Esa Corporación indicó, además:

“(…) En tratándose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporación ha especificado que el principio de inmediación se cumple –para efectos de proteger a terceros adquirentes de buena fe– si la acción de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en pública subasta sea registrado (…)”³.

2. De acuerdo con lo discurrido y examinadas las pruebas obrantes, se extrae la observancia de los presupuestos reseñados porque, de una parte, los censores cumplieron con la “mínima diligencia” demandada para casos como el rebatido, pues cuestionaron,

¹ CSJ. Civil. Sentencias de 10 de julio de 2014, exp. 25000-22-13-000-2014-00174-01; 17 de julio de 2014, exp. 11001-22-03-000-2014-00919-01; 25 de agosto de 2014, exp. 52001-22-13-000-2014-00139-01 27 de marzo de 2015, exp. 73001-22-13-000-2015-00060-01; y 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00

² Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08.

³ Sentencia T-881-2013.

tempestivamente, la ausencia de reestructuración del crédito y solicitaron la culminación del juicio, conllevando al pronunciamiento reprochado, y dado que aún no se ha efectuado el remate del predio hipotecado.

3. Para sustentar la tesis ahora contradicha, la sala cuestionada inició por aclarar que aun cuando el crédito perseguido fue cedido a una persona natural, esto es, Jorge Luis Mejía González, ello no era óbice para exculpar al extremo actor de “reestructurar” la acreencia cuyo pago se reclama judicialmente, pues “*aquél reemplaza al cedente, tanto en sus obligaciones como en sus derechos*”, afirmación que apoyó en la sentencia CSJ STC de 17 de julio de 2019, exp. 2019-00164.

Seguidamente, la sede jurisdiccional encartada memoró que los acreedores hipotecarios de créditos otorgados para la adquisición de vivienda, tenían la carga de “reestructurar” el aludido mutuo, una vez agotada la reliquidación mandada por el legislador, so pena de poner fin al ejecutivo.

Sin embargo, indicó la colegiatura fustigada, el fallo SU-787 de 2012⁴, estableció como excepción a la orden de clausurar el cobro forzado, la incapacidad económica de los deudores para asumir la obligación, la cual se presumía, según la jurisprudencia de esta Sala, por

⁴ Corte Constitucional

20

*"(...) la existencia de otros procesos ejecutivos en contra de los obligados, embargos fiscales, particulares o de remanente, siempre y cuando, en el litigio se tenga noticia de ello, los deudores hubiesen aceptado estar en alguno de los eventos descritos en líneas anteriores o en su defecto, la parte ejecutante, adose las pruebas pertinentes y conducente para acreditar las circunstancias precedentes, lo que de contera daría al traste con el pretendido finiquito procesal (...) "*⁵.

Bajo los anteriores lineamientos, halló el juzgador querrellado, que pese a la ausencia de la "reestructuración" del crédito reclamado ante la jurisdicción, resultaba improcedente cesar el coercitivo, como equivocadamente lo estimó el *a quo*, porque

"(...) no se puede desconocer que el certificado de tradición del inmueble identificado con folio de matrícula n.º 060-959699, refleja en la anotación n.º 17 el embargo decretado en el presente juicio y en la anotación n.º 14, una medida cautelar similar ordenada por la Tesorería Distrital de Cartagena, sin que la existencia y actualidad de esas inscripciones haya sido desvirtuada por la parte demandada (...) ".

Para reforzar esa intelección, la entidad tutelada trasuntó un proveído de esta Corte, destacando:

"(...) [I]ndependientemente de los argumentos que esgrimió dicha autoridad como sustento de lo resuelto, lo pedido por la inconforme resulta jurídicamente inviable, toda vez que aunque en el plenario no hay evidencia que dé fe que el cesionario demandante reestructuró la obligación, tal procedimiento no es procedente por existir un proceso de cobro coactivo sobre los [accionados], circunstancia que a luz de la sentencia SU-787 de

⁵ CSJ STC de 7 de febrero de 2018, exp. 2018-00126, STC de 21 de noviembre de 2018, rad. 2018-03594 y STC de 14 de diciembre de 2017, fol. 2017-03454.

*2012, proferida por la Corte Constitucional, [configura] una excepción para su procedencia (incapacidad de pago) (...) "*⁶.

Por lo anterior, revocó la determinación del sentenciador de primer grado y, en su lugar, dispuso la continuidad del compulsivo censurado.

4. Oteado en su contexto el pronunciamiento debatido, se observa la prosperidad del ruego, por avizorarse la insuficiencia de la motivación del fallo de segunda instancia proferido por la sala enjuiciada, como pasa a explicarse.

Según se acotó con antelación, el ente fustigado estimó improcedente finiquitar el decurso analizado, por cuanto, si bien no se realizó la "reestructuración" de la obligación allí reclamada, los deudores eran insolventes, pues mediaba un "embargo coactivo" iniciado por la administración municipal de Cartagena, acorde con la anotación n.º 14 del certificado del libertad y tradición del inmueble gravado.

Ahora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, *per se*, no apareja tal conclusión, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva implícita la incapacidad de pago del enjuiciado.

⁶ CSJ STC de 14 de mayo de 2019, exp. 2019-00551.

Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su crédito hipotecario atendiendo a sus *"reales posibilidades financieras"*, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitación, derecho de rango suprallegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.

En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoció la potestad de los promotores Élide Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa Gómez de acceder a la mencionada *"reestructuración"*, la cual, como viene diciéndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un crédito destinado para la adquisición de *"vivienda"* originado en el extinto sistema Upac, está directamente relacionado con la garantía *iusfundamental* a la *"vivienda"*.

No puede, bajo ningún derrotero, estimarse demostrada la *"incapacidad económica"* del extremo allá demandado por la sola presencia del aludido *"embargo coactivo"*, pues, como se anotó en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto.

Avalar ese proceder aparejaría el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunción de carácter judicial sin sustento

en la ley o en la Constitución, donde el hecho base pasa a ser el *"embargo coactivo"* para de ahí deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores.

Ello es inadmisibile, por cuanto acarrea la violación del derecho al debido proceso del accionado, consagrado constitucionalmente (art. 29 CN), al permitir la intromisión, en el juicio, de reglas probatorias no previstas ni preestablecidas por el legislador, sino obtenidas de la imaginación del juez, al ubicar a la parte débil en la relación crediticia en un visible estado de indefensión.

El objetivo de la *"reestructuración"* consiste en la posibilidad de que los deudores concierten con el ente financiero o quien lo represente, la modalidad de pago de la acreencia de acuerdo a su actual capacidad económica.

No puede truncarse tal prerrogativa sin mediar pleno convencimiento de la imposibilidad de éstos de hacer frente al mutuo, luego de su renegociación, que deberá ser apreciada conforme lo establece el canon 176 Código General del Proceso, cuyo tenor literal estatuye:

"(...) Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos (...)".

"(...) El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba (...)".

Además, los créditos diseñados para la adquisición de vivienda, celebrados con entidades financieras, no están abandonados totalmente a la autonomía de la voluntad, pues encuentran límites de orden legal, constitucional y convencional, explicables si se tiene en cuenta el marcado carácter social y de servicio público ostentado por la actividad bancaria y bursátil, y la finalidad que tales negocios persiguen.

En ese contexto, como se anunció, la motivación del proveído de 12 de agosto de 2019, es insuficiente, toda vez que pretermitió efectuar un análisis concienzudo de la real situación financiera de los entonces enjuiciados, aspecto nodal para la resolución del conflicto sometido a su consideración.

Sobre el particular, esta Corporación ha indicado:

“[...] [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Así, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increpó al Tribunal por no ‘fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jurídicas que con rotundidad y precisión [...]’ [resolvieran el caso bajo su conocimiento], “[...] lo propio ocurrió en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recriminó al ad quem por no expresar las ‘razones puntuales’ equivalentes a una falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-

00137, se describe como desatención de ‘la exigencia de motivar con precisión la providencia’ [...]”.

Varios principios y derechos en los regímenes democráticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicción del fallo y muestra la transparencia con que actúan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisión no habrá motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas válidamente recaudadas; los de seguridad jurídica y confianza legítima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional.

El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto *sine qua non*, que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera que tras conocerlas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso.

⁷ CSJ. STC 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; véanse igualmente el fallo de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros.

Frente a la temática planteada, memoró esta Sala:

"(...) [Es] menester dejar sentado que la motivación de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual ésta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir "la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración (...).

*"(...) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (...)"*⁸.

5. Lo discurrido impone conceder el auxilio deprecado, por la patente vulneración del debido proceso de los tutelantes Élide Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa Gómez; por tanto, se ordenará a la sala accionada que invalide el anunciado proveído de 12 de agosto de 2019, para que, en su lugar, resuelva, nuevamente, la antelada alzada auscultando las actuales condiciones económicas de aquéllos, como se precisó en el numeral anterior.

6. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos;

⁸ CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad 00168-02

en los eventos donde la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo, de la jurisprudencia o de los hechos debidamente comprobados, como acontece en el presente asunto, es necesaria la intervención de esta particular jurisdicción.

7. En consecuencia, la Corte hará el control constitucional inherente a la acción de resguardo, así como también el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, según lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos⁹, que exige a los países suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro.

Así se consignó en sus preceptos primero y segundo:

"(...) Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

"2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano".

"Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones

⁹ Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.

21

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (...)."

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como éste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideración las prerrogativas a las "garantías judiciales" y a la "protección judicial", según las cuales, una persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios.

En el presente caso, como se dijo, la sala atacada omitió pronunciarse frente a algunos argumentos centrales del conflicto sometido a su conocimiento. En esa forma, contravino el canon 25 de ese tratado:

"(...) Art. 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

"2. Los Estados Partes se comprometen: "a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; "b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y "c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (...).".

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:

"(...) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (...)".

La regla 93 *ejúsdem*, señala:

"(...) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno".

"Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...)".

El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969¹⁰, debidamente ratificada por Colombia, según el cual: *"(...) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (...)"*¹¹, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo.

7.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho

¹⁰ Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

¹¹ Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas *iusfundamentales*, así su protección resulte procedente o no.

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino *ex officio*¹².

No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados –incluido

¹² Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330

Colombia¹³, a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales¹⁴; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías¹⁵.

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas.

Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las garantías fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.

¹³ Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323.

¹⁴ Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274.

¹⁵ Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 308.

82

8. Por las razones mencionadas, se impone acceder al auxilio invocado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el amparo promovido por Élide Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa Gómez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, concretamente el magistrado John Freddy Saza Pineda, con ocasión del juicio ejecutivo n.º 2011-00076, incoado por la Compañía de Gerenciamiento de Activos en liquidación a los quejosos.

SEGUNDO: Por consiguiente, se ordena a la sala enjuiciada, que en el término de diez (10) días, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisión, deje sin efecto el fallo reprochado por esta vía -12 de agosto de 2019-, y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo y, en su lugar, provea de nuevo sobre la viabilidad o no de finiquitar el compulsivo analizado, por la ausencia de reestructuración del crédito, siguiendo para ello los parámetros fijados en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: Notifíquese lo así resuelto, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados. Por secretaría remítase copia de esta sentencia al despacho tutelado.

CUARTO: Si esta determinación no fuere impugnada envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con ausencia justificada)

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO

ACLARACIÓN DE VOTO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Con aclaración de voto

(Con ausencia justificada)

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Aunque comparto la decisión adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivación, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo propósito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y automática una mención sobre el empleo del denominado «control de convencionalidad».

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar *ex officio*, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.

De esta manera, el «control de convencionalidad» comporta una actitud de consideración continua que deberá acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado «el efecto útil de la Convención»¹⁶, lo cual acontecerá en los eventos donde pueda verse «*mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional*».

¹⁶ CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128.

de protección de los derechos humanos¹⁷; todo lo cual resulta ajeno al presente caso.

En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto por la Honorable Sala de Casación Civil.

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado

¹⁷ CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, párrafo 180.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado ponente

STC15892-2019

Radicación n.º 13001-22-13-000-2019-00174-02

(Aprobado en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve)

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el diez de octubre de dos mil diecinueve por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acción de tutela promovida por Germán Enrique Pérez Berthel contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal, Tercero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de esa ciudad; trámite al que se ordenó vincular a las partes e intervinientes al interior del proceso objeto de la queja constitucional y al señor Héctor Manuel Lobelo Romero.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión

El accionante solicitó el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, buena fe y vivienda digna que considera vulnerados por los accionados al interior de proceso ejecutivo seguido en su contra por cuanto se negó su solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito con total desconocimiento a los innumerables precedentes de la Corte Constitucional y esta Corporación, pese a que en su caso no se ha efectuado la inscripción del auto aprobatorio de la diligencia de remate que adjudicó el bien al cesionario del crédito Héctor Manuel Lobelo Romero.

Por tal motivo, pretende que se declare la ilegalidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago y se *«declare la falta de exigibilidad de la obligación hipotecaria y en consecuencia decretar el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso acatando la ley de vivienda 546 de 1999 y las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia»*. [Folio 2, c.1]

B. Los hechos

1. El Banco Granahorrar S.A. hoy BBVA formuló demanda ejecutiva con título hipotecario contra el accionante para que con el producto del remate del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-158764 le sea cancelada la cantidad de 191.387.45 UVR, liquidados en moneda legal, por el valor que tenga a la fecha de pago, que para la presentación de la demanda equivalían a la suma de \$29.054.969 más los intereses de plazo y moratorios y, primas de seguros.

2. Como soporte de sus pretensiones señaló que el obligado suscribió con el Banco Central Hipotecario B.C.H. un contrato de mutuo comercial representado en el pagaré No. 1303175-0 con fecha de suscripción 23 de septiembre de 1997 y con día de vencimiento 23 de septiembre de 2017, obligación que fue garantizada mediante hipoteca contenida en la Escritura Pública No. 3472 del 2 de agosto de 1997 de la Notaría Tercera de Cartagena, crédito que la entidad bancaria endosó en legal forma a su favor.

2.1. Que el deudor se obligó a pagar el capital mutuado en cuotas mensuales sucesivas y en el pagaré se pactó que en caso de mora daría derecho al tenedor del título a hacer efectivo el saldo total e insoluto, tomando el título como plazo vencido y exigir judicialmente la cancelación del valor del crédito con los intereses corrientes y moratorios a la tasa fijada por el Gobierno Nacional junto con los seguros correspondientes.

2.2. Que se ha hecho exigible la totalidad de la obligación contenida en el pagaré por la mora del obligado, registrándose actualmente un saldo pendiente a capital de 191.387.45 UVR equivalentes al 22 de agosto de 2005 a \$29.054.969 por capital.

2.3. Que la obligación contenida en el citado pagaré está garantizada con una hipoteca, recayente sobre el apartamento No. 301 de la Torre 3 MZ B del Conjunto Residencial Mirador de Zaragocilla Etapa 1° P.H. de

Cartagena, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-158764.

3. La demanda le correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena, autoridad que el 10 de octubre de 2005 libró mandamiento ejecutivo y ordenó la notificación del accionante, así mismo decretó el embargo y secuestro del bien hipotecado. [Folio 57, c.1]

4. Dentro de la oportunidad legal, el actor no presentó excepciones de mérito, posteriormente el 7 de junio de 2006 instauró incidente de excepción de pago en los términos del artículo 43 de la Ley 546 de 1999 a fin de que se decrete la terminación del proceso por cuanto a su juicio la obligación se encuentra cancelada en su totalidad y en caso de existir un saldo a su favor *«se ordene el restablecimiento del plazo acelerado indebidamente»*.

5. El 9 de noviembre de 2010, se corrió traslado del incidente propuesto, momento en que la parte demandante, manifestó que el tutelante pretende presentar una excepciones de fondo cuanto la oportunidad procesal para ello precluyó.

6. El 9 de mayo de 2011 se abrió el proceso a pruebas teniéndose como tales las aportadas por las partes y se ordenó la práctica de un dictamen pericial con el fin de determinar si la vivienda gravada con hipoteca es o fue de interés social a la hora de la construcción.

7. El 24 de abril de 2012 se cerró el debate probatorio y se dio traslado a las partes para alegatos de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por los intervinientes.

8. El 4 de marzo de 2013 se revocó el mandamiento de pago y se ordenó no seguir adelante con el asunto tras considerarse que el título base para la ejecución no presta mérito ejecutivo por no cumplir con el requisito de claridad, pues no es viable que *«una obligación que fue pactada entre las partes en pesos, sea reclamada ejecutivamente en términos de UVR»*. [Folios 58-65, c.1]

9. En desacuerdo la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 8 de abril de ese año.

10. El trámite le correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, despacho que el 11 de diciembre siguiente, revocó la decisión del *a quo* para en su lugar ordenar seguir adelante la ejecución y por tanto la venta en pública subasta del inmueble al señalar que *«los documentos que instrumentalizaron los créditos de vivienda – incluidos los de vivienda de interés social, se entendieron red denominados en UVR por ministerio de la ley, en virtud de lo dispuesto por la ley 546 de 1999, razón por la cual, no había lugar a entender que tales títulos perdieran mérito ejecutivo»*. [Folios 66-94, c.1]

11. Posteriormente la actuación fue enviada al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Cartagena, autoridad que el 25 de julio de 2016 resolvió la cadena de

cesiones del crédito teniendo como último cesionario al señor Héctor Manuel Lobelo Romero.

12. El 4 de octubre de ese año el accionante solicitó se declare la ilegalidad de todo lo actuado por cuanto *«el título valor base de la ejecución fue suscrito en UPAC garantizándose dicha obligación con el inmueble de su propiedad pero el despacho al momento de proferir mandamiento de pago no se percató que la entidad demandante no había reestructurado el crédito tal como lo había ordenado la Ley 546 de 1999 en su artículo 42, normatividad desarrollada jurisprudencialmente, por lo que a su juicio el título valor carece de eficacia»*.

13. El 23 de marzo de 2017 el despacho se abstuvo de terminar el proceso por falta de reestructuración del crédito al indicar que tal censura fue objeto de debate ante el fallador de segunda instancia quien consideró que debía continuarse con la ejecución. [Folios 103-104,c.1]

14. Inconforme el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

15. El 26 de septiembre de ese año no se repuso la decisión y se concedió el recurso de apelación. [Folio 109-111,c.1]

16. El 26 de febrero de 2018 el despacho dejó sin efecto la decisión que concedió el recurso de apelación al considerar que el auto que *«resuelve sobre la ilegalidad de todo lo actuado, no se enlista dentro de los apelables consagrados en el Código General del Proceso»* y ordenó compulsar copias ante el

Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria contra el apoderado del actor tras considerar que ha actuado contra los principios de la buena fe y la lealtad profesional por reiterar solicitudes que han ya sido resueltas. [Folios 116-117, c.1]

17. El 7 de marzo de 2019 se procedió a llevar a cabo la diligencia de remate adjudicándose el inmueble al cesionario Lobelo Romero.

18. Una vez el adjudicatario allegó constancia del pago de impuesto del remate, el mismo fue aprobado el 26 de abril siguiente.

19. En criterio del promotor del amparo se vulneraron sus derechos fundamentales al interior del proceso reseñado por cuanto se negó su solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito y pese a interponer los recursos pertinentes, se mantuvo la decisión con total desconocimiento de los fallos de la Corte Constitucional y esta Corporación, precedentes que son obligatorios para el juez. [Folios 2-18,c.1]

C. El trámite de la primera instancia

1. El 21 de junio de 2019 se admitió el trámite de tutela y se ordenó el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa. [Folio 159,c.1]

2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cartagena se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realizó una reseña de las actuaciones adelantadas al interior del proceso cuestionado y expresó que el 7 de marzo de 2019 se adelantó la diligencia de remate, adjudicándose el inmueble hipotecado al señor Héctor Manuel Lobelo Romero y el 26 de abril siguiente se aprobó la subasta, elaborándose los correspondientes oficios por parte de la secretaria de apoyo de esos despachos por lo que considera que las providencias proferidas han sido adoptadas conforme a derecho y de acuerdo a la normatividad que rige el caso. [Folios 172-173, c. 1]

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad manifestó que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, *«teniendo en cuenta que el promotor de la causa se duele del desconocimiento de la ley 546 de 1999 en la sentencia de primera instancia proferida en el proceso en cuestión en fecha 4 de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena, así como en la sentencia de segunda instancia proferida por este Despacho el 11 de diciembre de 2013, providencias judiciales que se encuentran debidamente ejecutoriadas hace más de 6 años, por lo que no se vislumbra la urgencia que caracteriza la acción de amparo»*. [Folio 175, c.1]

El Asesor de la Alcaldía Mayor de esa urbe y la apoderada de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitaron su desvinculación por cuanto no han vulnerado derecho fundamental alguno al actor. [Folios 180-183 y 235-237, c.1]

Por su parte, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa localidad, expresó que emitió sentencia de primera instancia en el año 2013 en la que se abstuvo de continuar con la ejecución, sin embargo dicha decisión fue revocada por el superior, por lo que tuvo que obedecer lo dispuesto, por tanto considera *«que no se vislumbra vulneración alguna por parte de ese despacho»*. [Folio 232, c.1]

3. Superada la irregularidad que dio lugar a que esta Corporación declarara la nulidad de la actuación el pasado 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Cartagena el 10 de octubre siguiente denegó el amparo tras considerar que si bien los juzgados demandados no realizaron dentro del proceso la reestructuración del crédito conforme lo establece la jurisprudencia, el hoy accionante interpuso la acción de tutela después de haberse emitido el auto de aprobación del remate que tuvo lugar el 26 de abril de 2019, lo que la torna improcedente. [Folios 250-260, c.1]

4. Inconforme con esta determinación, el accionante la impugnó con los mismos argumentos de su escrito inicial y señaló que se desconoció el precedente de esta Corporación que ha mencionado que la terminación del proceso por falta de reestructuración procede incluso cuando se ha realizado la adjudicación del bien y no se ha inscrito el auto de aprobación del remate en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena como acontece en el presente caso. [Folios 267-270, c.1]

II. CONSIDERACIONES

1. Ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que los principios esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.

En relación a los presupuestos en mención, cuando se trata de terminación de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, se ha hecho énfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el Juez debe revisar para conceder la protección que: (i) la acción haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso con una mínima diligencia.

Así, que en sentencia de unificación, se estableció:

Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo. (CC SU-813/07, reiterada en CC T-1240/08, citada en CSJ STC, 6 mar. 2014, rad. 00052-01). (Subrayado fuera del texto).

2. En cuanto al primer presupuesto -el de la inmediatez-, esta Corporación encuentra que el argumento

central en el que ha soportado el alto Tribunal Constitucional, la tesis de que el punto límite para la procedencia del amparo es el registro del remate o de la adjudicación, es la necesidad de proteger los derechos e intereses de los terceros adquirentes de buena fe; así lo ha sostenido esa Corporación:

(...) para determinar si el actor ha cumplido o no con el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto¹, aspectos tales como: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, como la absoluta incapacidad para ejercer la defensa de sus derechos; (ii) si la procedencia de la acción, luego de la inactividad injustificada, podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros o de bienes constitucionalmente protegidos y, (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de esos terceros de buena fe o de los bienes que la Constitución ordena proteger.²

En el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un término razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesión posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela sólo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisión judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradición del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constitución ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su

¹ Sentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

² Sentencia T-1086 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. "El desconocimiento del concepto de plazo razonable por parte del actor en sede de tutela, en atención a los hechos relevantes de cada caso, implica a saber: i) que la inactividad del peticionario no se encuentre válidamente justificada; ii) que se vulneren derechos de terceros o se desnaturalice el amparo solicitado; y iii) que se configure un nexo causal suficiente entre los dos requisitos anteriores." (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería).

casa por violación del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acción pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a través del registro público del auto que aprueba el remate del bien. (CC SU-813/07). (Subrayado fuera del texto).

3. En este asunto, la Sala estima que la parte accionante satisfizo el requisito que viene de comentarse, en la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garantía hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo.

En efecto, de la reseña procesal realizada en acápite que antecede, se extrae que en este asunto quien remató y obtuvo la propiedad del bien adquirido por el extremo accionante, como mejor postor en la subasta, fue Héctor Manuel Lobelo Romero en calidad de cesionario del demandante Banco Granahorrar S.A., entidad financiera que otorgó al quejoso el crédito para la compra e inició el proceso ejecutivo por mora en los pagos.

De manera que, si bien ya se aprobó la diligencia de remate mediante auto fechado 26 de abril de 2019, la cual no ha sido aún registrada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, esta Corte estima necesario, en este puntual escenario, dar prevalencia a los derechos fundamentales del deudor sobre los del acreedor, dado que no se trata de un tercero adquirente de buena fe cuyas garantías deban protegerse por encima de las de sus clientes, máxime

cuando el cesionario del crédito de la entidad bancaria incurrió en la vulneración de derechos fundamentales de su deudor, como más adelante se expondrá.

En este orden, en el caso que se analiza, queda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protección constitucional hasta antes «del registro del remate o de la adjudicación», pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condición de un tercero.

Así las cosas, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez y se abre paso el estudio de los demás factores de procedencia de la acción tutelar.

4. Ahora bien, en lo que hace referencia al requisito de la subsidiariedad, considera la Sala que también fue atendido, pues de la reseña de los antecedentes anteriormente efectuada se observa que el quejoso solicitó la nulidad de todo actuado y la terminación del proceso, con fundamento en que no se habían cumplido los requisitos exigidos en la Ley 546 de 1999 para promover esa acción ejecutiva, sin que sus súplicas tuvieran eco en la sede judicial cuestionada, autoridad que debió acometer el análisis acerca de la reestructuración del crédito, de manera oficiosa, como lo ha decantado la jurisprudencia en esta materia.

87

Lo anterior demuestra que el deudor sí actuó con un mínimo de diligencia, tal como lo requiere la tutela, en especial cuando la controversia no ha trascendido a terceros, como se explicó anteriormente.

De tal suerte, que el extremo ejecutado no ha sido negligente ni descuidado, a efectos de alegar la falta de reestructuración del crédito, sino que ha actuado de manera diligente en busca de la protección de sus derechos dentro del proceso ejecutivo.

5. Establecido entonces que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que tratándose de la reestructuración de créditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del título, de modo que no consumir esa premisa impide la ejecución, así se trate de un nuevo acreedor.

En tal sentido, ha expresado la Sala que:

En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados (...). Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00)

Este mismo criterio se expresó en sentencias de 20 de mayo de 2013, rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, rad.

00884-01, 19 de septiembre de 2012, rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, rad. 2013-0645-01.

De ahí, que la falta de la realización del procedimiento mencionado, se convierte en una limitación insuperable para que se presente una demanda y se continúe con la ejecución del juicio hipotecario en el que específicamente se cobran créditos de vivienda.

6. En estricta sujeción a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecución adelantada inicialmente por el Banco Granahorrar S.A., y con posterioridad por el cesionario Héctor Manuel Lobelo Romero, contra el accionante no podía llevarse a cabo, porque no se atendió el presupuesto de la reestructuración, circunstancia que torna la obligación en inexigible por desconocer la expresa condición impuesta por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que previó que aplicada la reliquidación, la entidad financiera debía proceder en la forma explicada.

Destáquese que el ejecutante en momento alguno manifestó que hubiese agotado dicho procedimiento ineludible con posterioridad a la aplicación del alivio estatal y reliquidación de las obligaciones, y mucho menos allegó prueba que así lo demostrara.

Al respecto, debe recordar la Sala que la Corte Constitucional previó inclusive la posibilidad de que deudor y acreedor no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificación de las condiciones del crédito, y en atención a

ello, indicó varias alternativas en la Sentencia SU-787 de 2012, dentro de las que se encuentran:

(...) reconstituir las condiciones del crédito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicaría que una vez reliquidado el crédito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligación por lo que restase del tiempo inicialmente pactado. Así por ejemplo, en un crédito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 años, a partir del 7 de julio de ese año, si el deudor entró en mora en marzo 7 de 1999 y se le inició un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese año, que por virtud de la ley debía darse por terminado en el año 2000, para normalizar su situación, una vez reliquidada la obligación y realizados los abonos correspondientes, el deudor tendría que pagar la cuotas vencidas, que serían al menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes once años.

La anterior solución, sin embargo, resulta insuficiente para el propósito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidación de los créditos.

Una segunda posibilidad, entonces, sería reestructurar la obligación, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurrió en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aquí cabría, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuración, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurrió en mora.

Una tercera posibilidad sería aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuración se hiciese tomando para ello el plazo máximo previsto en la ley, que es de quince años, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuración. Las demás condiciones serían las del crédito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte más beneficioso para el deudor.

7. En ese orden, es claro que el juzgado accionado

transgredió el derecho al debido proceso del extremo pasivo del juicio ejecutivo, pues continuó con el trámite del cobro compulsivo, sin que se reunieran los requisitos indispensables para que las deudas fueran exigibles, de conformidad con la legislación y la jurisprudencia, a pesar de que como lo ha referido esta Corte, el juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encontraban presentes –artículo 430 del Código General del Proceso –, y así verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al título base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuación procesal, para optar por no continuar con la misma, si fuera el caso. (CSJ STC, 8 ago. 2012, rad. 00134-01).

Al respecto esta Corporación, en un caso de similares características precisó que:

Del contenido de la enunciación anterior se deduce la procedencia de la protección extraordinaria demandada en este caso, por cuanto del repaso de la sentencia aquí cuestionada se establece, que ciertamente la Corporación acusada incurrió en un proceder opuesto al ordenamiento jurídico, puesto que la interpretación del Tribunal se aparta de los pronunciamientos que la Corte ha emitido sobre la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio terminado en virtud del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar la nueva ejecución. (CSJ STC 13 feb. 2013, Rad. 02956-00).

8. Con fundamento en lo expuesto, se impone revocar el fallo que por vía de impugnación se ha revisado, y en su lugar, conceder la tutela incoada, cuestión que atribuye

8

impartir las ordenes necesarias para que dentro de las cuarenta y horas siguientes a la notificación de esta providencia, el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena deje sin valor y efecto los proveídos 23 de marzo, 26 de septiembre de 2017 y, 26 de febrero de 2018 que negaron la solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito presentada por el accionante con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio, como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte una nueva decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley **REVOCA**, la sentencia impugnada y en su lugar, **CONCEDE** el amparo constitucional invocado. En consecuencia, dispone:

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia deje sin valor y efecto los proveídos 23 de marzo, 26 de septiembre de 2017 y, 26 de febrero de 2018 que negaron la solicitud de terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito presentada por el accionante con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito

cobrado en un juicio, como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte una nueva decisión.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE telegráficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, remítase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLD WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2006-00017-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2006-00017-00
Demandante	BANCOLOMBIA S.A
Demandado	ARNOLDO VELAZQUEZ
Asunto	Corre traslado solicitud de ilegalidad

Haciendo una revisión del expediente se encuentra escrito presentado por el apoderado judicial de la parte demandada en el que solicita la ilegalidad de TODO lo actuado dentro del proceso, por lo que esta autoridad corre traslado del mismo a fin de que se pronuncie el demandante. El Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: De la solicitud de ilegalidad de fecha 14 de Julio de 2021, impetrada por la parte demandada, CORRASE TRASLADO a la parte demandada, por el término de tres (3) días.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2006-00258-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2006-00258-00
Demandante	BANITSMO
Demandado	TERESA PAOLA ESPITALETA
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 7 de noviembre de 2006 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea lo sociedad, en los diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 07 de noviembre de 2006 dirigido al BANCO SANTANDER.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 07 de noviembre to de 2006 dirigido al BANCO SANTANDER.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

J03-63

31

RV: RAD: 13001400300420110074100

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 18/05/2021 12:10 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (59 KB)

RAD 13001400300420110074100.pdf;

De: Manuel Arrieta Navarro <arrieta.navarro@gmail.com>

Enviado: martes, 18 de mayo de 2021 12:03

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RAD: 13001400300420110074100

Buenos días,

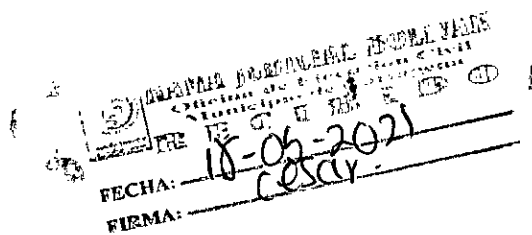
Adjuntamos documento para radicado 13001400300420110074100

Gracias

MANUEL ANTONIO ARRIETA NAVARRO

Ingeniero de Sistemas

Administrador Financiera - Unicartagena



CARTAGENA, 18 de mayo 2021

Señor

Juez 3o civil de ejecución Municipal.

E. S. D

Rad:13001400300420110074100

FELIX MERINO SUAREZ, abogado conocido en el proceso de la referencia, en mi condición de apoderado judicial del señor MANUEL A ARRIETA, respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de solicitarle se sirva ordenar a mis costas la expedición de copias de todo lo actuado y enviarlas al correo de mi cliente

Así mismo le reitero. En caso no se halla hecho se sirva ordenar.

1o. El desarchivo del proceso

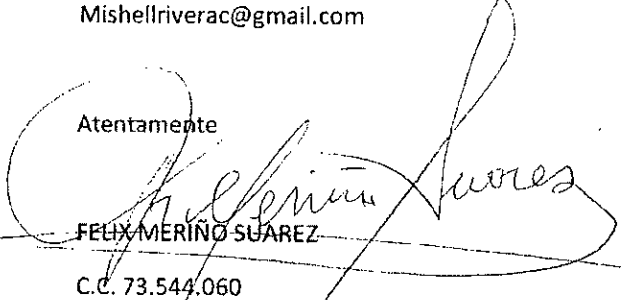
2o. Ordenar el Desembargo de la cuenta de ahorro de mi cliente, BANCO DAVIVIENDA cuyo No. Fue aportado en memorial anterior

3o. En caso que haya algún título valor a disposición de su despacho se ordene la entrega a mi cliente.

Cualquier notificación se me puede enviar al correo

Mishellriverac@gmail.com

Atentamente


FELIX MERINO SUAREZ

C.C. 73.544.060

T. P. 78.547. C. S de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2011-00741-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2011-00741-00
Demandante	GUSTAVO ADOLFO OCHOA
Demandado	MANUEL ANTONIO ARRIETA NAVARRO

Se vislumbra memorial presentado por la parte demandada solicitando el desembargo de la cuenta de ahorro del BANCO DAVIVIENDA, sin embargo realizando una revisión dentro del presente libelo, no se encuentra auto de terminación por lo que no se accede al levantamiento de medidas cautelares hasta que el presente proceso termine.

En consecuencia,

RESUELVE:

CUESTION PRIMERA: NO SE ACCEDE al levantamiento de las medias cautelares toda vez que el presente no se encuentra terminado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2c361b94683b0c94e14e84b9f07c92e6c62c04aeaf3294cb51c9c108da260395
Documento generado en 02/08/2021 08:01:04 AM

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2011-00741-00

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

M.D
Zeb.

DEPOSITOS JUDICIALES - 13001400300420120030700

Departamento Juridico Colgracol <juridicacolgracol20@gmail.com>

Jue 1/07/2021 4:49 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (484 KB)

OFICIO - DEPOSITOS JUDICIALES.pdf; comprobante.pdf; ComprobantePSE20210701100206.pdf;

Cartagena, 1 DE JULIO 2021

Señor:

JUZGADO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E.S.D

Rad. 13001400300420120030700

REF. DEPÓSITOS JUDICIALES- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE SALARIO

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito aportar comprobante de depósitos judiciales, realizados en el Banco Agrario de Cartagena a disposición de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, siendo el número de radicación del proceso 13001400300420120030700.

La suma de dinero depositada es de Tres Millones Trescientos veinte mil Cuatrocientos Sesenta pesos mcte (3.320.460), correspondientes a los descuentos sobre el salario, realizados a la señora ALEYDA JURADO, desde el mes de diciembre del 2019 a la fecha, como consecuencia a la ejecución de la medida cautelar de embargo.

Anexo comprobante de depósitos judiciales. (2 Folios)

Agradezco su atención,

Mercedes Romero Vargas
Representante Legal
Corporación Educativa Colegio Gran Colombia

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA 06-07-2021
MEMORIAL EXPEDIENTE
JUZGADO DE EJECUCION 1° 2° 3°
SECRETARIA

PROCESO 13001400300420120030700
FECHA 01-07-2021
NORMA



Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co

[/m/bancoagrario](#)

[/m/bancoagrario](#)

Depósitos Judiciales

01/07/2021 10:02:23 AM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	130012041800
Nombre del Juzgado	OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PAGOS POR CUOTA DE EMBARGO
Numero de Proceso	13001400300420120030700
Tipo Identificación del Demandante	NIT Persona Jurídica
Identificación Demandante	8020130464
Razón Social / Nombres Demandante	COOPERATIVA
Apellidos Demandante	COOMECE
Tipo Identificación del Demandado	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandado	45763388
Razón Social / Nombres Demandado	ALEIDA
Apellidos Demandado	JURADO CARILLO
Valor de la Operación	\$3,312,460.00
Costo Transacción	\$6.723,00
Iva Transacción	\$1.277,00
Valor total Pago	\$3.320.460,00
No. Trazabilidad (CUS)	1043435772
Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA
Estado	APROBADA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 3.320.460,00
Número de aprobación 00435772	Motivo Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Fecha del pago 01/07/2021	Referencia 1 186.99.108.49
Hora del pago 10:02 AM	Referencia 2 N
Número de producto origen *****3749	Referencia 3 8060148666
Destino del pago BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	Código único CUS 1043435772

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2012-00307-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2012-00307-00
Demandante	COOMECA
Demandado	ALBERTO PARDO ANGULO Y OTROS

Visto memorial por la parte demandante solicitando la digitalización del presente expediente, por tanto se le ordena a la Secretaria de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil de Cartagena, para que proceda con la digitalización del presente expediente y cargarlo es la plataforma oficial TYBA.

Por otro lado, solicita se decrete el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier forma de captación legal tenga o llegare a tener el demandado ALFREDO MELENDEZ HERNANDEZ Y ALBERTO ANTONIO PARDO AGUDELO, como empleado y/o contratista de SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA "SEPECOL LTDA". Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada

Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR a la Secretaria de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil de Cartagena, para que proceda con la digitalización del presente expediente y cargarlo es la plataforma oficial TYBA

SEGUNDO: Decretar el embargo y secuestro del 30% parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciba el demandado R ALFREDO MELENDEZ HERNANDEZ Y ALBERTO ANTONIO PARDO AGUDELO, identificada con C.C. No.73.109.378 y 73.580.499, como empleado y/o contratista del SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA "SEPECOL LTDA"..

Limítese la cuantía en la suma de \$5.000.000 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria librense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2012-00307-00

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a849b9784ce474a23588122ba6f23af942c3506f39792b12aaf65abbb95aefd1**
Documento generado en 02/08/2021 08:01:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Corporación Educativa Colegio Gran Colombia

Nit 806014866

Cartagena, 1 DE JULIO 2021

Señor:

JUZGADO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E.S.D

Rad. 13001400300420120030700.

REF. DEPOSITOS JUDICIALES- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE SALARIO

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito aportar comprobante de depósitos judiciales, realizados en el Banco Agrario de Cartagena a disposición de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, siendo el número de radicación del proceso 13001400300420120030700.

La suma de dinero depositada es de Tres Millones Trescientos veinte mil Cuatrocientos Sesenta pesos mcte (3.320.460), correspondientes a los descuentos sobre el salario, realizados a la señora ALEYDA JURADO, desde el mes de diciembre del 2019 a la fecha, como consecuencia a la ejecución de la medida cautelar de embargo.

Anexo comprobante de depósitos Judiciales. (2 Folios)

Agradezco su atención,

Mercedes Romero Vargas
Representante Legal

Corporación Educativa Colegio Gran Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-004-2013-00924-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-004-2013-00924-00
Demandante	MARIA SAMPAYO
Demandado	MIRLENE RUEDA
Asunto	Da traslado del avalúo.

El apoderado judicial de la parte demandante mediante escrito que antecede aporta avalúo catastral a fin que se dé traslado del avalúo del inmueble embargado y secuestrado dentro del presente proceso, y para tales efectos allega avalúo **catastral** del inmueble embargado dentro del sub exámine.

El artículo 444 del C.G.P. establece: “(...) *Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo (...)*”

Ahora bien, revisado el expediente se considera que se ha cumplido con los requisitos contemplados por la normatividad en cita, para que sea procedente ordenar dar traslado del avalúo CATASTRAL, tal como se observa en la siguiente tabla:

Requisitos	Si	No	Folio
Auto decreta embargo.	X		65 C.P
Medida inscrita	X		78-79 C.P
Auto decreta secuestro.	X		24 C.P
Despacho comisorio diligenciado.	X		15 C.E
Aporta avalúo catastral/impuesto rodamiento.	X		35C.E
Aporta avalúo comercial		X	
Queda pendiente por resolver nulidad, recurso, etc?		X	
Hay acreedor prendario/hipotecario?			
Fue citado acreedor hipotecario/prendario?			

De conformidad con lo anterior, considera el despacho procedente ordenar que se de traslado del avalúo presentado para efectos de que pueda ser objetado, modificado o aclarado. En mérito de lo expuesto el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: El avalúo Catastral del inmueble de Matrícula Inmobiliaria con F.M.I 060-107786embargado y secuestrado dentro del proceso de la referencia, es el siguiente:



AVALUO CATASTRAL-----	\$84.068.000
INCREMENTO DEL 50%-----	\$42.034.000
TOTAL AVALÚO-----	\$126.102.000

SEGUNDO: Córrase traslado del avalúo a las partes por un término de tres (03) días.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

30
EXPEDIENTE No (...) 2014 00 772

004-2014-772

M.D

3EJE

DEBANCOFI ABOGADOS <debancofi@gmail.com>

Jue 22/07/2021 12:26 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
j03ejecmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co <j03ejecmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

7 archivos adjuntos (7 MB)

EXP (...) 2014 00772-00 CARTAGENA.pdf; C.C. GUSTAVO ARIZA.pdf; ACTA DEFUNCIÓN GUSTAVO ARIZA.pdf; PODER ESPECIAL GUSTAVO ARIZA.pdf; PETICIONES JUZGADO 9 C MPAL CTGENA.pdf; CERTIFICADO DE EXISTENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES.pdf; CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEBANCOFI S.A..pdf;

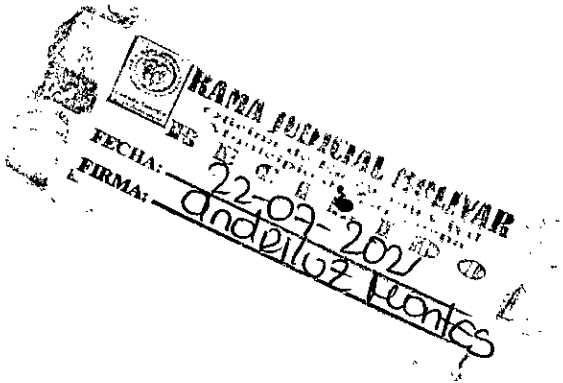
22 DE JULIO DE 2021

BUENA TARDE

ADJUNTO ESCRITO PETICIÓN

QUEDAMOS ATENTOS

DEBANCOFI S.A.

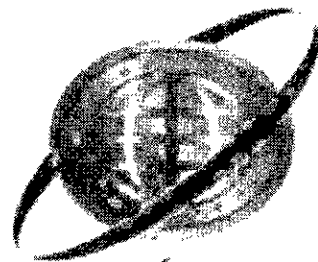


OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
PASA AL DESPACHO FECHA 26-07-2021
MEMORIAL ☒ EXPEDIENTE _____
JUZGADO DE EJECUCION 1° _____ 2° _____ 3° ☒

SECRETARIA

DEBANCOFI S.A.

DEFENSORES BANCARIOS, COMERCIALES Y FINANCIEROS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS ESTATALES A CARGOS DE LA NACIÓN S.A.



¡ Eficiencia y Eficacia en el Derecho !

Bogotá D.C., 13 de Julio de 2.021

Señor(a):

JUEZ (A) NOVENO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA BOLIVAR
E.S.H.D.

Ref: Ejecución No. (...) 2014-00772 -00

Respetados(as) Señores(as)

DEBANCOFI S.A. quien se identifica para los efectos legales a que haya lugar ante las autoridades de todo orden de la República de Colombia, con el Nit No. 900 240 678-7, - DIAN SECCIONAL BOGOTÀ D.C.- y -M.M. No. 01836783 de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÀ D.C.-, Representada Legalmente por la Sociedad Mercantil Privada ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S.A.S. Sigla Comercial, GRUPO EMPRESARIAL DEBANCOFI, APODERADOS JUDICIALES ESPECIALES del Señor GUSTAVO RAFAEL ARIZA ESPINOZA C.C. No. 8.747.834 (Q.E.P.D.), con el mas ponderado sentimiento de consideración y respeto, ante el Honorable Despacho Judicial y Señoría que le Preside, **SOLICITAMOS** que se estudie la viabilidad judicial de hacer lo siguiente:

1.-) Que se reconozca y acepte que el pasado 26 DE JUNIO DE 2.021, el poderdante Señor GUSTAVO RAFAEL ARIZA ESPINOZA C.C. No. 8.747.834, (Q.E.P.D.), falleció en la Ciudad de Cartagena Bolívar. (adjunto copia original del registro civil de defunción del poderdante),

2.-) Que se **DÉ POR TERMINADO** el proceso judicial asunto relacionado con el Señor GUSTAVO RAFAEL ARIZA ESPINOZA C.C. No. 8.747.834, (Q.E.P.D.), habida cuenta y consideración que **NO** se dan LAS CONDICIONES JURÍDICAS PROCESALES del ARTÍCULO 68 DEL C.G. DEL P., para que se **CONTINUE CON ESTE CONTENCIOSO CIVIL**, es decir, **NO EXISTE**, cónyuge supérstite y descendencia sanguínea **por ello**, es procedente y pertinente de cara con el derecho vigente lo solicitado **y, por contera**, se orden **EL ARCHIVO DEFINITIVO** del expediente respectivo.

3.-) Que se ordene **CANCELAR- LEVANTAR CUALQUIER MEDIDA CAUTELAR DECRETADA Y EXISTENTE** dentro del proceso judicial citado en referencia y, contra el vehículo automotor **DE PLACAS GNR 794** y, se comuniqué la misma, a las mismas autoridades a las que le fueran notificadas las mismas.

4.-) Que se expida **PAZ y SALVO** por todo concepto (**TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO JUDICIAL**) a nombre del Señor GUSTAVO RAFAEL ARIZA ESPINOZA C.C. No. 8.747.834, (Q.E.P.D.), por causa de fallecimiento y se remitan copias de las decisiones jurisdiccionales a los correos electrónicos de debancofi@gmail.com / debancofi@hotmail.com

Sin otro particular, con todo respeto.

Atentamente,



DEBANCOFI S.A.
NIT. 900.240.678-7
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO EMPRESARIAL DEBANCOFI
NIT. 901.113.083-5
REPRESENTANTE LEGAL

DEBANCOFI S.A.
Nit No. 900.240.678-7



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: DEFENSORES LEGALES DEL USUARIO BANCARIO,
COMERCIAL Y FINANCIERO Y DE LOS SERVICIOS
ESTATALES A CARGO DE LA NACIÓN S.A
Sigla: DEBANCOFI
Nit: 900.240.678-7 Administración : Dirección
Seccional De Impuestos De Bogotá
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01836783
Fecha de matrícula: 15 de septiembre de 2008
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 26 de mayo de 2020
Grupo NIFF: GRUPO III. Microempresas

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2020.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 28 A N° 18 - 39 Piso N° 2
Oficina N° 001
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: debancofi@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3514173
Teléfono comercial 2: 4769111
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Calle 18 No 28-45, Interior
No. (1)
Loc # (1)

Página 1 de 17



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@debancofi.com
Teléfono para notificación 1: 3214945866
Teléfono para notificación 2: 5603851
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. 0000000 del 5 de mayo de 2008 de Empresario, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2008, con el No. 01242194 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS, CONTABLES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS E IMPORTACIONES E U SIGLA ERBRAGALAZ E U.

REFORMAS ESPECIALES

Se aclara el cambio de nombre inscrito el 5 de julio de 2018, bajo el No. 02354680 del libro IX, en el sentido de indicar que se adiciona la sigla: DEBANCOFI.

Por Documento Privado No. 0000004 del 20 de octubre de 2008 de Empresario, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de octubre de 2008, con el No. 01251914 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS, CONTABLES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS E IMPORTACIONES E U SIGLA ERBRAGALAZ E U a UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS, CONTABLES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS E IMPORTACIONES E U SIGLA DEBANCOFI.

Por Acta No. 01 del 31 de agosto de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2009, con el No. 01328522 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón

Página 2 de 17



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

social de UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS, CONTABLES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS E IMPORTACIONES E U SIGLA DEBANCOFI a UNIDAD LEGAL DE ASESORES Y DEFENSORES DEL CLIENTE BANCARIO COMERCIAL Y FINANCIERO Y EL USUARIO DE LOS SERVICIOS ESTATALES S.A..

Por Acta No. 001 del 29 de junio de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2018, con el No. 02354680 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de UNIDAD LEGAL DE ASESORES Y DEFENSORES DEL CLIENTE BANCARIO COMERCIAL Y FINANCIERO Y EL USUARIO DE LOS SERVICIOS ESTATALES S.A. a DEFENSORES LEGALES DEL USUARIO BANCARIO, COMERCIAL Y FINANCIERO Y DE LOS SERVICIOS ESTATALES A CARGO DE LA NACIÓN S.A.

Que por documento privado del empresario, del 31 de agosto de 2009, inscrita el 22 de septiembre de 2009 bajo el número 1328522 del libro IX, la empresa de la referencia se convirtió de empresa unipersonal a sociedad anónima bajo el nombre de: unidad legal de asesores y defensores del cliente bancario, comercial y financiero y el usuario de los servicios estatales s a en todo caso comercialmente la empresa podrá usar la sigla DEBANCOFI S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La empresa mercantil privada, tendrá como objeto social, cualquiera de las actividades comerciales permitidas por las normas legales comerciales, el uso social y las costumbres mercantiles nacionales e internacionales, empero, en particular, tendrá los siguientes objetos sociales. 1.-) principal.: la promoción, la divulgación, la colocación, la prestación y la representación de servicios profesionales de expertos (as) abogados(as) en las diferentes y distintas especialidades del derecho, titulados(as) e inscritos(as) ante el honorable consejo superior de la judicatura y especializados(as) en derecho público interno - constitucional, civil, penal, laboral, familia, administrativo, policivo,



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

penitenciario, ambiental, notarial, electoral y derecho público internacional. 2.-) la promoción, la divulgación y la prestación del servicio social de consultorio jurídico general de servicios profesionales de abogados(as) titulados(as) e inscritos(as) ante el honorable consejo superior de la judicatura, expertos(a) especializados(as) en las diferentes y distintas especialidades del derecho; esto es; derecho público interno - constitucional, civil, penal, laboral, familia, administrativo, policivo, penitenciario, ambiental, notarial, electoral y derecho público internacional. 3.-) la promoción, la divulgación y la prestación del servicio social de centro de conciliación pre-judicial general a través de profesionales universitarios(as) de abogados(as) titulados(as) e inscritos(as) ante el honorable consejo superior de la judicatura, expertos(a) especializados(as) en las diferentes y distintas especialidades del derecho; siempre que la disciplina jurídica lo permita y previo el cumplimiento absoluto de los requisitos de ley. 4.-) secundario: la promoción, la divulgación, la colocación, la prestación y la representación de servicios profesionales de contadores(as) públicos(as) y economistas inscritos(as) y registrados ante el la junta central de contadores públicos y consejo nacional de economía 5-) la promoción, la divulgación, la colocación, la prestación y la representación de servicios técnicos y especializados de administración de bienes inmobiliarios urbanos y rurales, arrendamientos, compra, venta, permutas, administración general e hipotecas. 6.-) la promoción, la divulgación, la colocación, la prestación y la representación de servicios técnicos y especializados de administración de bienes rodantes-vehículos automotores y velocípedos, arrendamientos, compra, venta, permutas, administración general y pignoraciones. 7.-) la promoción, la divulgación, la colocación y la prestación de servicios técnicos y especializados de seguros generales.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: \$300.000.000.000,00
No. de acciones	: 3.000.000,00
Valor nominal	: \$100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$3.000.000,00
No. de acciones : 30,00
Valor nominal : \$100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$3.000.000,00
No. de acciones : 30,00
Valor nominal : \$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal principal de la sociedad mercantil privada estará a cargo de una persona natural y/o jurídica designada por la junta directiva. Asimismo, el representante legal principal, tendrá un suplente bajo el cargo y encargo laboral de VICE-PRESIDENTE(A) que en todo caso será una persona humana que le reemplazará solo en faltas momentáneas, por razón de enfermedad-incapacidad médica o por ausencia del encargo laboral de manera temporal y que tendrá las mismas facultades, deberes y obligaciones del representante legal principal, empero, nunca podrá actuar simultáneamente en el ejercicio de la función y deberes laborales del representante legal principal. Este representante legal, actuará siempre, bajo ordenen estrictas del representante legal principal. La representación legal suplente del Representante Legal Principal de la sociedad mercantil privada estar determinada de la siguiente manera: Por la VICE-PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, por los CENTROS DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD, JUSTICIA Y DERECHO POPULARES, por los DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, por los CENTROS DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD; JUSTICIA Y DERECHO POPULARES DE BOGOTÁ D.C (PALOQUEMAO) y por las DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE DERECHO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO CIVIL, DERECHO PENAL, DERECHO LABORAL, DERECHO DE FAMILIA, DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO POLICIVO, DERECHO PENITENCIARIO DERECHO AMBIENTAL, DERECHO NOTARIAL, DERECHO ELECTORAL Y DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL. ASÍGNESE al representante legal PRINCIPAL, la FACULTAD de DESIGNAR Y NOMBRAR LIBREMENTE según sus criterios administrativos los siguientes cargos de representación legal suplente de la sociedad mercantil privada, a PROFESIONALES DEL DERECHO IDÓNEOS Y CAPACITADOS PROFESIONALMENTE COMO TITULARES de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la VICE-PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE CONSULTORIOS JURÍDICOS Y CENTROS DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD, JUSTICIA Y DERECHO POPULARES, los DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, CENTROS DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD, Y JUSTICIA Y DERECHO POPULARES DE BOGOTÁ D.C.. (PALOQUEMAO) Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE DERECHO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO CIVIL, DERECHO PENAL, DERECHO LABORAL, DERECHO DE FAMILIA, DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO POLICIVO, DERECHO PENITENCIARIO, DERECHO AMBIENTAL, DERECHO NOTARIAL, DERECHO ELECTORAL Y DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por cada uno y todos los representantes legales (principales y suplentes), quienes no tendrán restricciones de ninguna clase más allá de las que les impone el ejercicio de sus funciones laborales. El representante legal principal de no tendrá restricciones de ninguna clase en contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal principal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal principal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos orgánicos internos, se hubieren reservado a la asamblea general de accionistas y la junta directiva. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal principal la representación legal principal de la sociedad mercantil, privado tendrá las siguientes funciones y facultades:.-acatar integralmente las decisiones de la junta directiva. -ejercer la representación legal absoluta de la sociedad mercantil privada.-dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la empresa mercantil, con amplias e ilimitadas facultades y poderes. -ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales de la empresa mercantil privada. -revisar las actuaciones y actos de las vicepresidencias. -designar a los empleados que se requieran para ejecutar el objeto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

social integral de la sociedad mercantil privada. .-emitir acto administrativos para designar profesionales del derecho que se requieran que estén inscritos (as) y registrados(as) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad mercantil y para los fines determinados en los artículos 74,75, 77 y 82 del C.G.P. .-crear el reglamento interno de la sociedad mercantil privado y ejecutarlo si lo aprueba la junta directiva -establecer y desarrollar políticas administrativas internas para desarrollar y ejecutar el objeto social general e integral de la sociedad mercantil. .-tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva. .-vigilar y controlar en todo tiempo los actos administrativos de cada uno (a) de los miembros(as) que integran el consejo administrativo. -cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal principal convocará a reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.-organizar administrativamente los departamentos de derecho especializado y técnicos, designar libremente a sus directores y darles reglamento interno.

Que por documento privado no. 001 de la asamblea de accionistas, del 29 de junio de 2018, registrado el 5 de julio de 2018, bajo el número 02354682 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre: luz cecilia villamizar ortega
Identificación: c.C. 41.371.115

CERTIFICA:

Que por Acta No. 001 de la Junta Directiva, del 23 de septiembre de 2020, registrado el 29 de Septiembre de 2020 bajo el número 02620199 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre: Abdo Piscioti Bianca Duverlis
Identificación: C.C. 000052902066

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 007 del 16 de julio de 2015, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2015 con el No. 02003691 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Director Del Departamento De Derecho De Familia	Del Toro Guerra Luis Carlos	C.C. No. 000000085487233
Director Del Departamento De Derecho Civil Y Derecho Comercial	Bonilla Olaya Joaquin	C.C. No. 000000079755672

Mediante Acta No. 003 del 27 de junio de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2016 con el No. 02117635 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente Administrativo Senior	Gutierrez Thomas Omeris Maria	C.C. No. 000000057414919

Mediante Acta No. 03 del 2 de agosto de 2016, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2016 con el No. 02129976 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente De Inversion Y Administracion De Activos Especiales	Hernandez Garrido Celis Patricia	C.C. No. 000000052963766

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Documento Privado No. 4 del 18 de octubre de 2016, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2016 con el No. 02150672 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Directora Del Departamento De Derecho Penal Y Directora Del Departamento De Derecho Procesal Penal	Abdo Piscioti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066
Director Del Departamento De Derecho Administrativo Y Director Del Departamento De Derecho Electoral	Alvarez Castro Jose Francisco	C.C. No. 000000012625892

Mediante Acta No. 001 del 10 de marzo de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 2017 con el No. 02197926 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente Ejecutivo Senior	Garrido Deaza Brayan Andres	C.C. No. 000001015478847

Mediante Acta No. 001 del 5 de julio de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de enero de 2019 con el No. 02410909 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente Administrativa	Gutierrez Thomas Omeris Maria	C.C. No. 000000057414919

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Y Financiera

Vicepresidente De Desarrollo Y Ejecucion De Planes Estrategicos	Orozco Gutierrez Angelis Carolina	C.C. No. 000001221967783
Vicepresidente Administrativo De Activos Especiales	Pardo Gutierrez Kelvin Layton	C.C. No. 000001018457045
Vicepresidente De Desarrollo Administracion Y Talento Humano	Bohorquez Caamaño Alexander	C.C. No. 000000072242512
Vicepresidente Administrativo De Unidades De Negocio	Triana Patiño Orris Asdrubal	C.C. No. 000001032413757

Mediante Acta No. 002 del 7 de julio de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2019 con el No. 02412715 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente Proyectos Especiales	Thomas Garrido Enith Vanessa	C.C. No. 000001082400934
Vicepresidente Operativo	Hernandez Garrido Diana Cecilia	C.C. No. 000000026719883
Director Del Departamento De Derecho Laboral	Villamizar Ortega Luz Cecilia	C.C. No. 000000041371115



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 001 del 23 de septiembre de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de octubre de 2020 con el No. 02621180 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S A S	N.I.T. No. 000009011130835

Representante Legal Suplente	Barreto De Gomez Rubiela Esther	C.C. No. 000000039033223

Vicepresidente Jurídica	Abdo Pisciotti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066

Mediante Acta No. 001 del 30 de septiembre de 2020, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de 2020 con el No. 02623681 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente Administrativa De Consultorios Jurídicos	Abdo Pisciotti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066

Directora Del Departamento De Derecho Constitucional Y Derecho Internacional	Abdo Pisciotti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066

Directora Del Departamento De Derecho Notarial Y Derecho Tributario	Abdo Pisciotti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Directora Del Centro De Conciliación De Equidad, Justicia Y Derecho Popular De Paloquemao-Bogotá.	Abdo Pisciotti Bianca Duverlis	C.C. No. 000000052902066

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Gomez Barreto Maryuris	C.C. No. 000000052116985
Segundo Renglon	Gutierrez Thomas Omeris Maria	C.C. No. 000000057414919
Tercer Renglon	Hernandez Garrido Celis Patricia	C.C. No. 000000052963766
Cuarto Renglon	Bohorquez Caamaño Alexander	C.C. No. 000000072242512
Quinto Renglon	Pardo Gutierrez Kelvin Layton	C.C. No. 000001018457045
Sexto Renglon	Eguis Cardenas Jorge Luis	C.C. No. 000000012631904
Septimo Renglon	Hernandez Garrido Caleb Jeset	C.C. No. 000001221979656

Mediante Acta No. 001 del 29 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2018 con el No. 02354681 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Gutierrez Thomas Omeris Maria	C.C. No. 000000057414919



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Renglon	Hernandez Garrido Celis Patricia	C.C. No. 000000052963766
Cuarto Renglon	Bohorquez Caamaño Alexander	C.C. No. 000000072242512
Quinto Renglon	Pardo Gutierrez Kelvin Layton	C.C. No. 000001018457045
Sexto Renglon	Eguis Cardenas Jorge Luis	C.C. No. 000000012631904

Mediante Acta No. 001 del 23 de septiembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de septiembre de 2020 con el No. 02620198 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Gomez Barreto Maryuris	C.C. No. 000000052116985
Septimo Renglon	Hernandez Garrido Caleb Jeset	C.C. No. 000001221979656

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 001 del 13 de enero de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de junio de 2015 con el No. 01945517 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Orozco Carrillo Gustavo Rafael	C.C. No. 000000077031453

PODERES

Que por Acta No. 1 del 15 de enero de 2015, inscrito el 16 de junio



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA21805210
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2015 bajo el no. 00031307 del libro v, la junta directiva, por medio del presente documento, se designa en el cargo de apoderada judicial general de la sociedad anónima a la profesional del derecho, abogada titulada e inscrita doctora Doladaly Pasmiño paredes identificada con cedula ciudadanía No. 31.374.123 y tarjeta profesional de abogada no. 31207 expedida por el honorable consejo superior de la judicatura quien deberá representar con poderes plenos y absolutos a la sociedad anónima en cualquier clase de proceso administrativo y-o judicial en que la sociedad anónima resulte demandada y-o denunciada por terceros que se consideren afectados y-o lesionados en sus derechos. La apoderada judicial general actuara en esa clase de procesos buscando siempre el bienestar de los intereses económicos, patrimoniales, comerciales y civiles la sociedad anónima y de sus socios accionistas, la apoderada judicial general podrá, con las mismas facultades que se le otorgan a ella, designar bajo su dirección y coordinación abogados(as) especializados en la rama del derecho respectiva según el proceso que nos concite para que represente a la sociedad anónima cualquier clase de proceso judicial y-o administrativo en el que la sociedad anónima tenga interés afectados. La apoderada judicial general de la sociedad anónima actuara en tal calidad cuando las necesidades del caso lo ameriten en desarrollo de los objetivos sociales, comerciales y jurídicos de la misma por designación escrita que para ello haga exclusivamente el representante legal - principal - y dependerá administrativamente exclusivamente del representante legal -principal -. La apoderada judicial general además de las funciones y deberes generales asignadas por razón del encargo, podrá ser asignada como abogada litigante en cualquier clase de proceso judicial y-o administrativo en asuntos que la sociedad anónima haya recibido poder para actuar en desarrollo del objeto social y comercial, igualmente, la referida profesional del derecho, coordinará a los(as) abogados(as) de contratación directa y por contratación por prestación de servicios que actúen en representación judicial litigiosa de la sociedad anónima en el desarrollo del objeto social y comercial y en cumplimiento estricto de lo dispuesto por el artículo 75 del código general del proceso.

Que por Acta No. 003 de la junta directiva del 27 de julio de 2016, inscrita el 27 de septiembre de 2016 bajo el no. 00035660 del libro v, por medio del presente documento, designa como apoderada judicial general a: Luz Cecilia Villamizar Ortega identificada con cedula



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA2180521G
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ciudadanía no. 41.371.115 y tarjeta profesional de abogada No. 32116.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Doc. Priv. No. 0000004 del 20 de octubre de 2008 de la Empresario	01251914 del 27 de octubre de 2008 del Libro IX
Acta No. 1 del 15 de enero de 2009 de la Empresario	01270235 del 23 de enero de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de mayo de 2009 de la Empresario	01305848 del 17 de junio de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de mayo de 2009 de la Empresario	01305849 del 17 de junio de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de mayo de 2009 de la Empresario	01305850 del 17 de junio de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de mayo de 2009 de la Empresario	01305851 del 17 de junio de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de mayo de 2009 de la Empresario	01328522 del 22 de septiembre de 2009 del Libro IX
Acta No. 01 del 31 de agosto de 2009 de la Junta de Socios	01945519 del 4 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 001 del 13 de enero de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01946168 del 5 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 001 del 13 de enero de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02009540 del 10 de agosto de 2015 del Libro IX
Acta No. 005 del 27 de junio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01953020 del 1 de julio de 2015 del Libro IX
Acta No. 003 del 30 de junio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02003689 del 17 de julio de 2015 del Libro IX
Acta No. 004 del 16 de julio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02017021 del 7 de septiembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 005 del 2 de septiembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02129191 del 4 de agosto de 2016 del Libro IX
Acta No. 01 del 15 de julio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02354680 del 5 de julio de 2018 del Libro IX
Acta No. 001 del 29 de junio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02623682 del 8 de octubre de 2020 del Libro IX
Acta No. 002 del 30 de septiembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28
Recibo No. AA2180521G
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910
Actividad secundaria Código CIIU: 4921
Otras actividades Código CIIU: 6511

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 50.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6910



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de mayo de 2021 Hora: 09:30:28

Recibo No. AA21805210

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2180521085222

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 8 de octubre de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21805204A738D

12 DE MAYO DE 2021 HORA 09:30:27

AA21805204

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S A S

SIGLA : GRUPO EMPRESARIAL DEBANCOFI

N.I.T. : 901.113.083-5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02865505 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :15 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 200,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 28 A NO. 18 39 P 2

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GRUPOEMPRESARIALDEBANCOFI@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 28 A NO. 18 39 P 2

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : GRUPOEMPRESARIALDEBANCOFI@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02257593 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S A S.

CERTIFICA:

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: (1) LA SOCIEDAD MERCANTIL, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR, REALIZARÁ COMO ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL PRINCIPAL LA DE ADMINISTRAR EN TÉRMINOS GENERALES, EMPRESAS MERCANTILES DE CARÁCTER PRIVADO DE CUALQUIER DENOMINACIÓN JURÍDICA, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIOS, AGENCIAS DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL Y FRANQUICIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL, (2) LA SOCIEDAD MERCANTIL, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR, REALIZARÁ COMO ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL SECUNDARIA LA DE ADMINISTRAR EN TÉRMINOS GENERALES, BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL-CENTRO DE CONVENCIONES, SALONES DE REUNIONES SOCIALES, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE Y (3) LA SOCIEDAD MERCANTIL, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR, REALIZARÁ COMO ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL TERCIARIA LA DE CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

8299 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7010 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL)

OTRAS ACTIVIDADES:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

6820 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$2,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$2,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EN TODO CASO SERÁN ILIMITADAS EN TODO ASPECTO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NUMERO 02428066 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

GARRIDO LOPEZ SIERRA ALTAMIRANO ERADIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21805204A738D

12 DE MAYO DE 2021 HORA 09:30:27

AA21805204

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

BRAYAM
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
PARDO GUTIERREZ KELVIN LAYTON

C.C. 000000012624207

C.C. 000001018457045

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE DE MANERA CONJUNTA E INDIVIDUALMENTE PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE MARZO DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$50,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 8299

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DEBANCOFI S.A.

DEFENSORES BANCARIOS, CONTABLES Y FINANCIEROS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS ESTATALES A CARGOS DE LA NACIÓN S.A.

¡ Eficiencia y Eficacia en el Derecho !

Cartagena, Bolivar 24 de Mayo de 2.021

Señores(as):

BANCO FINANDINA S.A.

Nit No. 860.051.894-6

EXPERIAN COLOMBIA S.A. = DATACREDITO S.A.

TRANSUNIÓN=CIFIN=ASOBANCARIA

JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA BOLIVAR

E.S.H.D.

Respetados(as) Señores(as)

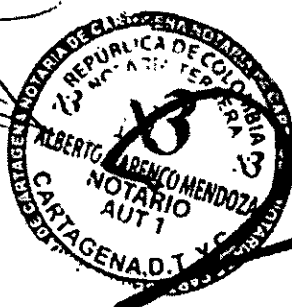
Yo, GUSTAVO ARIZA ESPINOSA varón, Mayor de Edad, Vecino Residente y Domiciliado en CARTAGENA DISTRITO TURISTICO Capital del Departamento de BOLIVAR Identificado Civilmente EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL como firmo y suscribo el presente documento privado, con el más ponderado sentimiento de consideración y respeto para con cada uno de ustedes, **COMUNICO-INFORMO-NOTIFICO -HAGO SABER-**, que por este instrumento documental privado, confiero **PODER AMPLIO, ESPECIAL Y SUFICIENTE** en cuanto a **DERECHOS PERSONALES Y LEGALES** se refiere a la Sociedad Mercantil de Derecho Privado, DEBANCOFI S.A. - quien se identifica para los efectos legales a que haya lugar ante las autoridades de todo orden de la República de Colombia, con el Nit No. 900 240 678-7, - DIAN SECCIONAL BOGOTÁ D.C.- y -M.M. No. 01836783 de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.C.-, Representada Legalmente por la Sociedad Mercantil Privada ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S.A.S. Sigla Comercial, **GRUPO EMPRESARIAL DEBANCOFI = ERADIO BRAYAM GARRIDO LÓPEZ-SIERRA ALTAMIRANO** Varón, Mayor de Edad, Vecino Residente y Domiciliado en ésta Ciudad Capital del Departamento de Cundinamarca y de la República de Colombia, Identificado Civilmente EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL como firma y suscribe el presente documento privado, para que en mi Nombre, Representación Personal y Legal ante cada una de ustedes y-o ante quien las represente o ejerza las funciones por ustedes ejercidas que le hayan sido conferidas y-o delegadas, **DIRECTAMENTE y-o A TRAVÉS DE CUALESQUIERA** de los (as) abogados (as) registrados(as) e inscritos (as) en el certificado de existencia y-o representación legal de la Sociedad Mercantil Privada DEBANCOFI S.A. y-o al(a) abogado (a) que ellos deleguen para el asunto, **PETICIONE (N), SOLICITE(N), GESTIONE(N) Y OBTENGA(N)**, ante cada una de ustedes, (1) **INFORMACIÓN ESCRITA, DETALLADA CLARA Y PRECISA SOBRE INFORMACIONES DE ORDEN PERSONAL -COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO - y JUDICIAL QUE USTEDES almacenen, procesen, circulen e intercambien con terceros y (2) ante cada una de ustedes, NEGOCIE(N) CUALQUIER ASUNTO QUE ME RELACIONE EN CUALQUIER ACTIVIDAD DE LAS MENCIONADAS CON USTEDES**, en los términos de los mandatos legales determinados en los ARTICULOS 1505 DEL C.C. y ARTICULOS 74 y 75 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO COLOMBIANO, DEBANCOFI S.A., ADMINISTRADORA GENERAL DE EMPRESAS MERCANTILES S.A.S. Sigla Comercial, **GRUPO EMPRESARIAL DEBANCOFI y ERADIO BRAYAM GARRIDO LÓPEZ-SIERRA ALTAMIRANO QUEDAN ESPECIAL Y AMPLIAMENTE FACULTADOS (SIN LIMITACIÓN PERSONAL Y LEGAL ALGUNA PARA ACTUAR EN ESTE ASUNTO CONCRETO ANTE CADA UNA DE USTEDES)** según las facultades legales determinada sen las leyes sobre derechos personales, legales y constitucionales.

Simotro particular, con todo respeto.

Atentamente

GUSTAVO ARIZA ESPINOSA
C.C. No. 8.747.834

DEBANCOFI S.A.
Nit No. 900.240.678-7
R.L. Principal
E.B.G.L.A.
C.C. No. 12.624.207



Notaría Tercera

Del Círculo de Cartagena

N3

649422

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



2905470

En la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Tercera (3) del Círculo de Cartagena, compareció: GUSTAVO RAFAEL ARIZA ESPINOSA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 8747834 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



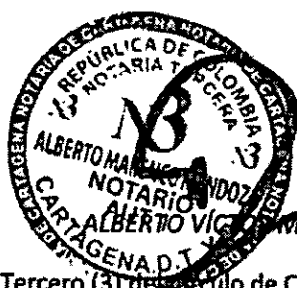
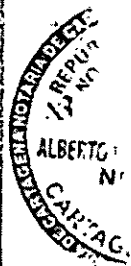
23z7k3d82mx9
24/05/2021 - 13:34:33



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

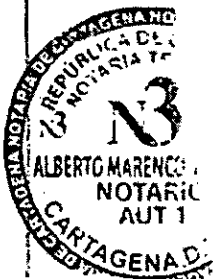
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de PODER signado por el compareciente.



Notario Tercero (3) del Círculo de Cartagena, Departamento de Bolívar

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 23z7k3d82mx9



Acta 1

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DE LA NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA. NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Escaneado con CamScanner



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Indicativo
Serial

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

10279637

Datos de la oficina de registro							
Clase de oficina:	Registraduría	Notaría	☒ Consulado	Corregimiento	Insp. de Policía	Código	01X
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía							
COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA - NOTARIA 2 CARTAGENA * * * * *							

Datos del inscrito	
Apellidos y nombres completos	
ARIZA ESPINOSA GUSTAVO RAFAEL * * * * *	
Documento de identificación (Clase y número)	Sexo (en Letras)
CC No. 8747834 * * * * *	MASCULINO * * * * *

Datos de la defunción	
Lugar de la Defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía	
COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA * * * * *	
Fecha de la defunción	Hora
Año 2021 Mes JUN Día 26 14:04	Número de certificado de defunción 728342098 * * * * *
Presunción de muerte	
Juzgado que profiere la sentencia	Fecha de la sentencia
* * * * *	Año Mes Día
Documento presentado	Nombre y cargo del funcionario
Autorización judicial ☐ Certificado Médico ☒	PATRICIA MEDINA AHUMADA * * * * *
	- MEDICO * * * * *

Datos del denunciante	
Apellidos y nombres completos	
LORDUY JULIO DAGOBERTO * * * * *	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
CC No. 9289401 * * * * *	<i>[Firma]</i>

Primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
* * * * *	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
* * * * *	* * * * *

Segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	
* * * * *	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
* * * * *	* * * * *

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2021 Mes JUN Día 30	<i>[Firma]</i> EUGENIO CASAS BERTEL

ESPACIO PARA NOTAS	

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGENA
CERTIFICA

QUE LA PRESENTE ES FIEL Y EXACTA FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL TOMADA DEL REGISTRO CIVIL
QUE REPOSA EN ESTA NOTARIA QUE SE EXPIDE
A SOLICITUD DEL INTERESADO

C.C. No. 13.05.6032
ESTE REGISTRO CIVIL TIENE VALIDEZ PERMANENTE
Cartagena

02 JUL 2021





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1965
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O-

Q S. RH

M

SEXO

20-ABR-1983 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alvarado

REGISTRADORA NACIONAL
ALVARADO NEREIDO LOPEZ



A-0500108-32145581-M-0008747834-20080511

0186708131A 02 185289785

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

8.747.834

NUMERO

ARIZA ESPINOSA

APELLIDOS

GUSTAVO RAFAEL

NOMBRE



Gustavo Ariza Espinosa
FIRMA

Ultima Acta



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias, 29 de Noviembre de 2019.
OFICIO No OECD-9269

Señor Director:
POLICIA AUTOMOTORES-SIJIN
La Ciudad.

ACCION	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE	BANCO FINANADINA NIT 860.051.894-6
DEMANDADO	GUSTAVO ARIZA ESPINOSA CC 8.747.834
RADICADO:	13-001-40-03-004-2014-00772-00

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informarle que el:

Juzgado	Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena
Fecha del auto: Trece (13) de Febrero de 2019	
Asunto:	CUESTION UNICA: DECRETAR la inmovilización del automotor de Marca CHEVROLET AVEO de placas GNR-794 de propiedad del demandado GUSTAVO ARIZA ESPINOSA identificada con CC. 8.747.834, para tal efecto COMISIONESE a la SIJIN para que efectué la captura e inmovilización del citado automotor. Por secretaría LIBRESE el respectivo oficio.

Sobre el vehículo identificado así:

PLACA	GNR-794
MARCA	CHEVROLET
LINEA	AVEO 164DRSCA
MODELO	2010
COLOR	NEGRO TITAN
CLASE	AUTOMOVIL
CHASIS	9GATJ5164AB205430
SERVICIO	PARTICULAR
MOTOR	F16D34900361
PROPIETARIO	GUSTAVO ARIZA ESPINOSA CC 8.747.834
EMBRAGO DE REMANENTE	SI () NO (X)
PARQUEADERO	Nombre de parqueadero: N/A
SECUESTRE	Nombre de secuestre N/A

Es importante informarle que el presente oficio no contiene ni tachaduras ni enmendaduras. Una vez que se presente en sus oficinas este oficio en original, el mismo no requiere confirmación toda vez que goza de autenticidad.

Así mismo nos permitimos informarle que El Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena asumió el conocimiento del mismo en virtud del Acuerdo PSAA13-9984 de 2013, PCSJA17-10678 de 2017 y PCSJA18-11032 de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura.

Atentamente,

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismo se le recuerda que OECD no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2014-00772-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-004-2014-00772-00
Demandante	BANCO FINANDINA
Demandado	GUSTAVO ARIZA ESPINOZA
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el Apoderado judicial de la parte demandante que cuenta con facultad para recibir tal como consta a folio 04 del C.E. Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría librense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello.



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

RV: RAD: 2016-206 DTE: BANCAMIA DDO: INGRIS JOHANA PEÑA SUAREZ- SOLICITUD DE OFICIAR A LA SIJIN & A LA POLICIA DE CARRETERAS

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena

<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 22/06/2021 7:46 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (63 KB)

memorial - 2021-06-21T093850.865.pdf;

03-58

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Enviado: lunes, 21 de junio de 2021 9:39

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena

<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RAD: 2016-206 DTE: BANCAMIA DDO: INGRIS JOHANA PEÑA SUAREZ- SOLICITUD DE OFICIAR A LA SIJIN & A LA POLICIA DE CARRETERAS

Cordial saludo,

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que obre dentro del expediente, de conformidad con su valiosa y acostumbrada colaboración.

ANEXOS: 1

Agradezco **ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.**

Atentamente,

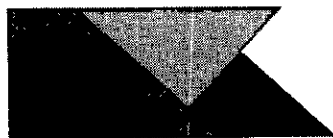
ABOGADO: JUAN CAMILO SALDARRIAGA

ENVÍOS Y PRESENTACIONES

ÁREA LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL

PBX (57) 4 3225201

Calle 40a # 81 A-177 Medellín - Colom



Recibido
Cesar Cerón
22-06-2021

SEÑOR

JUEZ 3 EJECUCION CARTAGENA BOLIVAR

DEMANDANTE: BANCAMIA

DEMANDADO: INGRIS JOHANA PEÑA SUAREZ

RADICADO: 13001400300420160020600

ASUNTO: SOLICITUD DE OFICIAR A LA SIJIN & A LA POLICIA DE CARRETERAS

JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandante; por medio del presente escrito me permito solicitar al Despacho se elabore oficio dirigido a la SIJIN & A LA POLICIA DE CARRETERAS a fin de que se materialice la inmovilización del vehículo de placa SLE762

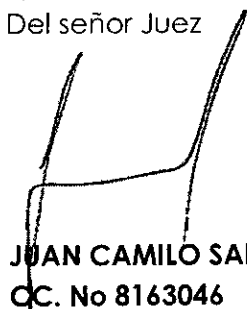
Frente al cuestionamiento donde rueda el vehículo, esto por presunción legal se entiende en el domicilio del demandado, siendo el municipio de su competencia.

Oficio que al ser dirigido a una autoridad nacional tiene efectos en todo el territorio donde sea que se encuentre el vehículo, aunque se presuma que tenga como lugar de rodamiento el lugar de domicilio del demandado.

Respecto de a que parqueadero se debe dejar a disposición una vez retenido el vehículo, solicito su señoría se disponga de alguno de los parqueaderos autorizados por con consejo superior de la judicatura del lugar donde se efectué la retención.

Ruego su señoría se actúe en consecuencia y se expida lo aquí peticionado. Máxime que ya hay respuesta positiva de embargo sobre los vehículos aquí relacionados.

Del señor Juez



JUAN CAMILO SALDARRIAGA CANO

CC. No 8163046

T.P 157745 DEL CSJ

ID 1339

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2016-00206-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2016-00206-00
Demandante	NAMCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA
Demandado	INGRIS JOHANA PEÑA Y OTRO
Asunto	Medida Cautelar

Visto el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita se inmovilice el vehículo, ordenado embargo dentro del proceso. Sin embargo, se realizó una revisión al proceso y no se encontró certificado por la Secretaria de Transito y de Transporte de Arjona, manifestando que la medida de embargo sobre el vehículo se haya inscrito, por tanto no se accede a lo solicitado por la parte demandante.

Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: NO ACCEDE a lo solicitado por el apoderado de la parte demandante hasta tanto se allegue certificado de la Secretaria de Transito y de Transporte de Arjona sobre la inscripción de la medida cautelar sobre el vehículo de placas SLE 762.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

303-198
7

13001400300420160083300 - RELIQUIDACIÓN DE INTERESES.

sandra milena aldana rodriguez <sandraldana1990@gmail.com>

Lun 12/07/2021 4:27 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: luisgwattsp <luisgwattsp@gmail.com>

1 archivos adjuntos (79 KB)
RELIQ 833-16.pdf;

Cordial saludo, adjunto memorial con las siguientes referencias:

Radicación: 13001400300420160083300

Juzgado de Origen: CUARTO CIVIL MUNICIPAL

Juzgado actual: Tercero de ejecución

Demandante: PACKAGING SUPPLIERS S.A.S.

Demandado: EULICES IRIARTE ESCOBAR (SERVIMMER LTDA).

Solicitud: RELIQUIDACIÓN DE INTERESES.

Cordialmente

RECIBIDO
CENTRO SERVICIO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL - BOLIVAR
FECHA: 12-07-2021
FIRMA: lucia arellano

SANDRA ALDANA RODRIGUEZ
ABOGADA

Señor
JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

Proceso: EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA
Demandante: PACKAGING SUPPLIERS S.A.S.
Demandado: EULICES IRIARTE ESCOBAR (SERVIMMER LTDA).
Radicación: 13001-4003-004-2016-00833-00
Origen: JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

SANDRA MILENA ALDANA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, Abogada titulada y en ejercicio profesional, de condiciones procesales conocidas en el proceso de la referencia, comedidamente acudo ante Usted a fin de presentar al proceso RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO, pendiente en este asunto:

RELIQUIDACIÓN DEL CREDITO

Table with 12 columns: RESOLUCION, FECHA, VIGENCIA (DESDE, HASTA), INTERES ANUAL EFECTIVO CREDITOS DE CONSUMO Y ORDINARIOS, TASA DE INTERES DE MORA, TASA DE INTERES DE MORA MENSUAL, MES, DIA INICIAL, DIA FINAL, DIAS LIQUIDADOS, INTERESES DE MORA. The table contains 20 rows of data detailing credit liquidation periods and interest calculations.

Centro calle de la Universidad N° 36-97 Edif. Salomon Ganem of. N° 415. Tel. 0 5 6601356
Cel. 03-3103510535. E-mail. sandraldana1990@gmail.com. Cartagena de Indias D. T y C. - Colombia.

SANDRA ALDANA RODRIGUEZ

ABOGADA

111	31-ene-19	1-feb-19	28-feb-19	19,70%	29,55%	2,46%	feb-19	0	28	28	\$11.653
263	28-feb-19	1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%	2,42%	mar-19	0	31	31	\$12.685
389	29-mar-19	1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,98%	2,42%	abr-19	0	30	30	\$12.244
574	30-abr-19	1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%	2,42%	may-19	0	31	31	\$12.665
697	30-may-19	1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,95%	2,41%	jun-19	0	30	30	\$12.231
829	28-jun-19	1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,92%	2,41%	jul-19	0	31	31	\$12.626
1018	31-jul-19	1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%	2,42%	ago-19	0	31	31	\$12.652
1145	30-ago-19	1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%	2,42%	sep-19	0	30	30	\$12.244
1293	30-sep-19	1-oct-19	31-oct-19	19,10%	28,65%	2,39%	oct-19	0	31	31	\$12.508
1474	30-oct-19	1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%	2,38%	nov-19	0	30	30	\$12.060
1603	29-nov-19	1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%	2,36%	dic-19	0	31	31	\$12.384
1768	27-dic-19	1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%	2,35%	ene-20	0	31	31	\$12.292
94	30-ene-20	1-feb-20	28-feb-20	19,06%	28,59%	2,38%	feb-20	0	28	28	\$11.274
205	27-feb-20	1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%	2,37%	mar-20	0	31	31	\$12.410
351	27-mar-20	1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%	2,34%	abr-20	0	30	30	\$11.845
437	30-abr-20	1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%	2,27%	may-20	0	31	31	\$11.912
505	29-may-20	1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%	2,27%	jun-20	0	30	30	\$11.484
605	30-jun-20	1-jul-20	31-jul-20	18,17%	27,18%	2,27%	jul-20	0	31	31	\$11.866
685	31-jul-20	1-ago-20	31-ago-20	18,29%	27,44%	2,29%	ago-20	0	31	31	\$11.978
769	28-ago-20	1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%	2,29%	sep-20	0	30	30	\$11.629
869	30-sep-20	1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%	2,26%	oct-20	0	31	31	\$11.847
947	29-oct-20	1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%	2,23%	nov-20	0	30	30	\$11.306
1034	26-nov-20	1-dic-20	31-dic-20	17,46%	26,19%	2,18%	dic-20	0	31	31	\$11.434
1215	30-dic-20	1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,98%	2,17%	ene-21	0	31	31	\$11.342
64	29-ene-21	1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%	2,19%	feb-21	0	28	28	\$10.375
161	26-feb-21	1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%	2,18%	mar-21	0	31	31	\$11.401
305	31-mar-21	1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,97%	2,16%	abr-21	0	30	30	\$10.970
407	30-abr-21	1-may-21	31-may-21	17,22%	25,83%	2,15%	may-21	0	31	31	\$11.277
509	28-may-21	1-jun-21	30-jun-21	17,21%	25,82%	2,15%	jun-21	0	30	30	\$10.907
622	30-jun-21	1-jul-21	31-jul-21	17,18%	25,77%	2,15%	jul-21	0	12	12	\$4.355

FECHA DE VENCIMIENTO

19-oct-17

CAPITAL

\$507.001

FECHA DE LIQUIDACION

12-jul-21

INTERESES

\$548.030

TOTAL RELIQUIDACION DE INTERESES

\$548.030

Centro calle de la Universidad N° 36-97 Edif. Salomon Canem of. N° 415. Tel. 0 5 6601356
Cel. 03-3103510535. E-mail. sandraaldana1990@gmail.com. Cartagena de Indias D. T y C. -
Colombia.

7

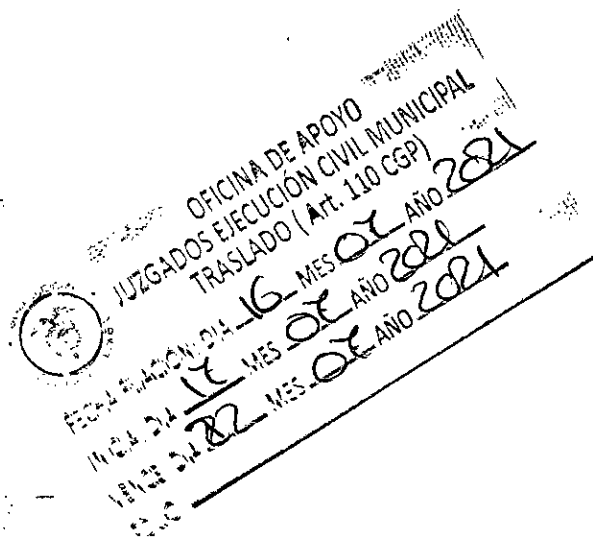
SANDRA ALDANA RODRIGUEZ
ABOGADA

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MONEDA LEGAL.
(\$548.030.00)

Sírvase, señor Juez, proceder de conformidad.

De Usted, atentamente;


SANDRA ALDANA RODRIGUEZ
CC N° 1.047.417.283 de Cartagena
T.P de A. N° 213.304 del C.S de la J



Centro calle de la Universidad N° 36-97 Edif. Salomon Ganem of. N° 415. Tel. 0_5 6601356
Cel. 03-3103510535. E-mail. sandraldana1990@gmail.com. Cartagena de Indias D. T y C. -
Colombia.



Ramo Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Oficina de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, FECHA 26 Julio del DE 2021

Señor (a), paso al despacho el proceso identificado bajo el radicado 13001-40-03-04-2016-0833 00-00, para dar trámite a las siguientes actuaciones y/o información:

VENCIDO EL TRASLADO DEL CREDITO	FL. <u>01-04</u> CUADER. <u>CC</u>	VENCIDO EL TRASLADO DEL ESCRITO TERMINACION DEL PROCESO POR LAS PRETENCIONES	FL. _____ CUADER. _____
VENCIDO EL TRASLADO DEL ESCRITO DE NULIDAD	FL. _____ CUADER. _____	VENCIDO EL TRASLADO DE TERMINACION POR DISISTIMIENTO TACITO	FL. _____ CUADER. _____
VENCIDO EL TRASLADO DEL ESCRITO RECURSO DE REPOSICION	FL. _____ CUADER. _____	VENCIDO EL TRASLADO DEL ESCRITO DE TERMINACION DEL PROCESO	FL. _____ CUADER. _____

OTROS

EL EXPEDIENTE ESTA COMPUESTO POR 3 CUADERNOS (S) CERRADOS Y 30.12.05 FOLIOS UTILES.

ERICK SIERRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 5

CAJA _____

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2016-00833-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-004-2016-00833-00
DEMANDANTE	PACKAGING SUPPLERS S.A.S
DEMANDADO	SERVIMMER LTDA
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación ADICIONAL del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **veintitrés millones ciento sesenta y un mil trescientos treinta pesos con 15/100 (\$23.161.330,15)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$871.818	Folio 29 CP
Liquidación adicional 1	\$545.030	Folio 6 CE
Liquidación de costas	\$54.000	Folio 25 CP

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00054-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2017-00054-00
Demandante	BANCO PICHINCHA
Demandado	JOSE ANTONIO VELASCO PEREZ EDI LUZ MEJIA DE ARCO
Asunto	PONER EN CONOCIMIENTO

Estando al Despacho el proceso de la referencia, contestacion por parte del auxiliar de la justicia CAMILO TORRES PERIÑAN visto a folio 24 del C.E por lo que se ponen conocimiento a la parte interesada.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTION UNICA: PONER EN CONOCIMIENTO a las partes de lo allegado por CAMILO TORRES PERIÑAN auxiliar de la justicia visto a folio 24 c.e

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00054-00

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9bf9b262c160e7cff66db08c1f419f9463f593f4397435447d0361d8f4680f44

Documento generado en 02/08/2021 08:01:09 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00433-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2017-00433-00
Demandante	DISEÑOS Y SOLUCIONES CREATIVAS SAS
Demandado	DAVID ROMERO QUIJADA Y OTRO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando se actualice los oficios de embargo de cuentas en los diferentes bancos de la ciudad.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 23 de mayo del 2017 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTS y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea el demandado, en los diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 23 de mayo del 2017, visto a folio 02 del cuaderno de medidas.

Adicional se solicita decretar el embargo de los dineros que se encuentren o se llegaren a recibir en las diferentes fiducias en el país, por tanto accede a lo anterior.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 23 de mayo del 2017, visto a folio 02 del cuaderno de medidas.

TERCERO: DECRETAR el embargo y secuestro de los dineros, dividendos y/o ingresos que tenga o reciban legalmente embargables que posea los demandados DAVID ARMANDO ROMERO QUIJADA CE N° 481.802 Y JOSE GREGORIO TRIVIÑO MENDEZ identificados con CC N° 73.181.939 respectivamente, en la diferentes fiducias del país.

Limitese la cuantía en la suma de \$ 25.000.000 pesos.

CUARTO: Por secretaria librense los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00433-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2a3f43015d58f6e493ed89507bb5ff76fe731d1309d6ed32042e9f010c4c2b20

Documento generado en 02/08/2021 08:01:11 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00844-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2017-00844-00
Demandante	INVERSIONES & NEGOCIOS
Demandado	LUIS GUILLERMO CABEZA Y OTROS
Asunto	Fijar en lista liquidación del crédito

Revisado el presente proceso se observa memorial de fecha 09 de abril de 2021, a través del cual el apoderado judicial de la parte demandante presenta liquidación adicional del crédito.

Advierte el Despacho que previamente proseguir el trámite, se debe fijar en lista la liquidación del crédito solicitada por la parte demandante a través de memorial de fecha 09 de abril de 2021, visible a folio 41 C.E.

Por otro lado, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 17 de noviembre de 2017 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en las diferentes entidades bancarias. Considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libere nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 17 de noviembre de 2017.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar a la Secretaria de Ejecución Civil Municipal, realice la fijación en lista de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante el día fecha 09 de abril de 2021, visible a folio 41 C.E de conformidad con lo establecido en el Art. 446, numeral 2 del C. G. del P.

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libere nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 17 de noviembre de 2017.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2017-00844-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f406c3af0f0f63eb31e7e143e273b67e7e94f3c927b186ca31d452305d5da2f**
Documento generado en 02/08/2021 08:01:14 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2018-00407-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2018-00407-00
Demandante	RAUL ENRIQUE PARDO PADILLA
Demandado	REMODELAR SAS

Se advierte memorial por parte del apoderado de la parte demandante solicitando la corrección del auto de fecha 07 de julio de 2021, toda vez que se encuentra un error en la parte resolutive sobre el nombre del demandante y la cuantía total de la medida cautelar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra auto de fecha 07 de julio de 2021, donde se vislumbra el error en mención. En consecuencia se procede a corregir teniendo en cuenta el artículo 268 del C.G.P el cual manifiesta se podrá corregir el auto en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, mencionando que la parte demandante es ETEX COLOMBIA SA y el total de la cuantía es de \$60.134.229.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a corregir el auto de fecha 07 de julio de 2021 en la parte resolutive, proferido por esta autoridad judicial.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: Corregir el auto de fecha 07 de julio de 2021, de la siguiente manera:

“**PRIMERO:** Decretar el embargo y secuestro de remanente que por cualquier causa llegare a desembargarse dentro del proceso ejecutivo adelantando por la sociedad ETEX COLOMBIA SA contra REMODELAR SAS dentro del proceso con radicado N°006-2019-817 ante el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA. Limitar la cuantía en la suma de \$60.134.229.”

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2018-00407-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

4cdceb6de8327f50df72897c3961bec37c95866f45439b46dd9568ccf7f84105

Documento generado en 02/08/2021 08:01:16 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2019-00423-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2019-00423-00
Demandante	TITULARIZADORA COLOMBIANA SA HOTO – BANCO DAVIVIENDA
Demandado	JAIME ISAAC CABALLERO HERRERA
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Se advierte memorial presentado por la parte demandante solicitando el secuestro el bien inmueble distinguido con F.M I N° 060-239706, de la Oficina de Instrumentos públicos de Cartagena, el cual se encuentra embargado.

En consecuencia, se decretará el secuestro de dicho inmueble y se nombrará como secuestre GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. Asimismo, se comisionará al Alcalde la localidad respectiva.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: Decrétese el secuestro del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. **060-239706** de propiedad del demandado JAIME CABALLERO HERRERA Ubicado el sector CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA PLAZUELA ETAPA II APARTAMENTO 06-703, esto es, la *Localidad 2, “de la virgen y turistica”*

SEGUNDO: Nómbrase como secuestre de la lista de auxiliares de la justicia a GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, el cual puede ser ubicado en Zaragocilla, conjunto residencial Las Acacias Torre 1 apto 402, teléfono: 3174301257, grupomultigraficas@gmail.com. Por secretaría elaborar los oficios respectivos.

TERCERO: Requerir a GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS para que rinda informe mensual y detallado de las gestiones realizadas dentro del proceso de la referencia como auxiliar de la justicia.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-004-2019-00423-00

CUARTO: Por secretaria líbrese el respectivo despacho comisorio con los insertos del caso.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7a06f89fce1e486495e1734c449cc58e4db23b9379b7d168d97f25cb8220ca02

Documento generado en 02/08/2021 07:59:56 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-04-2012-00628-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-004-2012-00628-00
Demandante	GNB SUDAMERIS S.A
Demandado	LUPE MARIA ORTEGA VASQUEZ
Asunto	DIGITALIZAR

Teniendo en cuenta la solicitud de desarchivo del proceso, ésta autoridad a través de la secretaría de apoyo área de sistemas remite expediente digitalizado a la parte interesada.

. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: ORDENAR a la secretaría de apoyo área de sistemas remite expediente digitalizado a la parte interesada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ



41

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias, Mayo 26 de 2020
OFICIO OECM COVID-19 No -2960

SEÑORES
CAJERO PAGADOR
HAMA TEMPO SAS

La ciudad

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR
Radicado	13001-40-03-005-2014-00196-00
Demandante	NESTOR MERCADO VASQUEZ C.C 73.290.015
Demandado	LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO C.C 70.068.306

Cordial saludo,

Comunico a Usted que mediante auto de fecha Veinte (20) de Mayo de dos mil Veintiuno (2021), el Juzgado Tercero De Ejecución Civil Municipal de Cartagena resolvió:

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciban el demandado LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO identificado con C.C 70.068.306 como empleado de HAMA TEMPO SAS Límitese la cuantía en la suma de \$8.757.900 pesos.

En razón a lo ordenado en la anterior providencia los dineros deben ser convertidos en:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA DE LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA	130012041800
Código de Identificación	130014303000
NUMERO DE PROCESO	13001-40-03-005-2014-00196-00
DEMANDANTE	NESTOR MERCADO VASQUEZ
DEMANDADO	LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO

Importante digitar los 23 dígitos del radicado del proceso; señalado en el cuadro anterior

La inobservancia a esta orden, lo hará acreedor de la imposición de multas sucesivas de 2 a 5 S.M.L.M.V

Al contestar sírvase citar la referencia del proceso.

Atentamente,

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismos se le recuerda que OECM no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente.

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda - piso 2 oficina 212
cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 035-6602070
Cartagena -Colombia

PROYECTO – SDA

30/5/2021

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena - Outlook

ENVIO DE CORRESPONDENCIA RAD: 005-2014-00196 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 806 DE 2004.

Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Dom 30/05/2021 12:26 PM

Para: recepcion@grupohama.com <recepcion@grupohama.com>
CC: hb0984@yahoo.com <hb0984@yahoo.com>

📎 1 archivos adjuntos (457 KB)
005-2014-00196 EMBARGO.pdf;

Cartagena, 30 de Mayo de 2021

**Estimado,
HAMA TEMPO SAS**

**OFICIO No.2960 OECM-COVID19-
ESM**

Cordial saludo,

Por medio de la presente se le hace envío de la presente comunicación en cumplimiento del Decreto 806 de del 4 de junio del 2020, en concordancia con lo ordenado en Artículo 11, que señala: *"Comunicaciones, oficios y despachos. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso. Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad pública, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial"*

Atentamente,

**SHARON PAOLA DIAZ ARRIETA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 5**

MEMORIAL

HUMBERTO BEJARANO <hb0984@yahoo.com>

Vie 9/07/2021 10:56 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (88 KB)

REQUERIMIENTO CAJERO PAGADOR LUIS ALBERTO.pdf;

SEÑORES:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE JECUCION DE CARTAGENA

E.S.D

RAD: 13001400300520140019600

DEMANDANTE; NESTOR MERCADO VASQUEZ

DEMANDADO: LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO

ORIGEN: JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL

PRESENTO MEMORIAL AL PROCESO DE REFERENCIA

Att

HUMBERTO BEJARANO AMELL

CC N° 9299715

T.PN° 169371 del C.S.J

Recibido
Auditoria
09-07-2021

103-302
43

SEÑORES:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE JECUCION DE CARTAGENA

E.S.D

RAD: 13001400300520140019600

DEMANDANTE; NESTOR MERCADO VASQUEZ

DEMANDADO: LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO

ORIGEN: JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL

HUMBERTO BEJARANO AMELL, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la parte demandante en el proceso de la referencia mediante la presente solicito que se requiera al cajero pagador de la demandada HAMA TEMPO SAS, ya que hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la orden de embargo, la cual se le fue notificada por el centro de servicio de apoyo de los juzgado de ejecución a través de correo electrónico de fecha 30 de abril de 2021, oficio que se encuentra en el expediente como su constancia de envió electrónico.

Att

HUMBERTO BEJARANO AMELL

CC N° 9299715

T.PN° 169371 del C.S.J

44

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2014-00196-00

Cartagena de Indias D. T. y C., 03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-004-2014-00196-00
Demandante	NESTOR MERCADO VASQUEZ
Demandado	LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO
Asunto	Medida cautelar

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el que solicita requerir al cajero pagador de la empresa HAMA TEMPO SAS, para que explique las razones por las cuáles no ha cumplido la orden de embargo de lo que devengue el demandado LUIS ALBERTO GONZALEZ como empleado de HAMA TEMPO SAS.

Revisado el expediente, observa el Despacho que a través de auto de fecha 20 de mayo de 2021 proferido por el suscrito Juzgado, se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende el demandado LUIS ALBERTO GONZALEZ, identificada con C.C N° 70.068.306 como empleado de HAMA TEMPO SAS, asimismo, se observa que dicha medida fue comunicada mediante Oficio, sin pronunciamiento alguno por parte del requerido.

Teniendo en cuenta lo antecedido, se ordenará requerir al cajero pagador de las empresas en mencion , a fin de que informe las razones por las cuales no ha seguido efectuando los descuentos ordenados en auto de fecha 20 de mayo de 2021.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar.

SEGUNDO: Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador, de la empresa HAMA TEMPO SAS, a fin de que explique las razones por las cuales no ha realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 20 de mayo de 2021 por medio del cual se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende la demandada LUIS ALBERTO GONZALEZ, identificada con C.C N° 70.068.306 como empleada de HAMA TEMPO SAS.

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2014-00196-00

CUARTO: Prevengase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2017-00483-00

03 ACO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-005-2017-00483-00
DEMANDANTE	COOPERATIVA COOBC
DEMANDADO	SARA SANCHEZ MANRIQUE Y OTROS
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación ADICIONAL del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **un millón ochocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos (\$1.857.763)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$4.868.774	Folio 6 CE
Liquidación adicional 1	\$1.857.763	Folio 23 CE
Liquidación de costas	\$168.701	Folio 32 CP

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2017-00877-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-005-2017-00877-00
Demandante	BANCO DAVIVIENDA
Demandado	INVERSIONES MERCOT EU OMAR MERLANO

Se advierte informe secretarial manifestando un error en el auto de fecha 07 de julio de 2021 en la parte motiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra auto de fecha 07 de julio de 2021, donde se vislumbra el error en mención. En consecuencia se procede a corregir teniendo en cuenta el artículo 268 del C.G.P el cual manifiesta se podrá corregir el auto en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, mencionado lo anterior se procede a corregir la parte motiva del auto de fecha 07 de julio de 2021.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: Corregir el auto de fecha 07 de julio de 2021, siendo la parte motiva del auto la siguiente:

“ se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita se decrete el embargo y secuestro del inmueble con FMI N° 347.8982 de propiedad del demandado OMAR MERLANO IRIARTE identificado con CC N° 92.028.693. “

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2017-00877-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9db38ed63e1fe2cdad45226183cd88c2149ff5912c0d9d7f79df2c36b99f017c

Documento generado en 02/08/2021 07:59:59 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2017-00958-00

Cartagena de Indias D. T. y C.

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-005-2017-00958-00
DEMANDANTE	BANCO DAVIVIENDA
DEMANDADO	AGENCIA DE SEGUROS ASESORAMOS 1203 LTDA
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Observa el Despacho, que mediante memorial anexo al expediente a folio 26 cuaderno de ejecución, en la que se aporta liquidación ADICIONAL del crédito correspondiente al asunto de referencia, tasándose en la suma de **\$88.956.844** por concepto de capital más intereses corrientes y moratorios desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2021; se comprueba que ha vencido el término del traslado sin hallarse objeción de la misma por la parte demandada, de igual forma, el cálculo contenido dentro del escrito liquidatorio, cuenta con el lleno de los requisitos contemplados en la ley, conforme lo dispone el artículo 446 del C.G.P. Empero, como quiera que en el asunto ya se encuentra aprobada la liquidación del crédito desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 29 de junio de 2018, solo se aprobaran en esta oportunidad los intereses que se causaron desde esta última hasta la fecha.

Por lo anterior el **JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,**

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito, en la suma de **treinta y tres millones setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintinueve pesos con 32/100 (\$33.762.429,32)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$ 55.194.414,68	Folio 7 CE
Liquidación adicional 1	\$33.762.429,32	Folio 29 CE
Liquidación de costas	\$3.354.929	Folio 42 CP

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-005-2017-00958-00

del crédito y costas. Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

TERCERO: Aténgase a lo resuelto en auto de fecha de fecha 02 de marzo de 2018, proferido por esta autoridad judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2001-00456-00

Cartagena de Indias D. T. y C., 03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2001-00456-00
Demandante	ARACELY CASTELLANOS OSPINO
Demandado	AIDA VICTORIA RODRIGUEZ PERNETT

A folio 66 del cuaderno de ejecución, se advierte memorial presentado por el Dr. JOSE ANTONIO VIZCAINO REDONDO solicitando que se le reconozca como apoderado de la parte demandante, ARACELY CASTELLANOS OSPINO toda vez que la mencionada aparte concede poder al Dr. JOSE ANTONIO VIZCAINO REDONDO identificado con C.C. No. 73.201.637 y T.P. 274.750 del C.S. de la J.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: RECONOCER al Dr. JOSE ANTONIO VIZCAINO REDONDO identificado con C.C. No. 73.201.637 y T.P. 274.750 del C.S. de la J., como apoderado judicial de la parte demandante ARACELY CASTELLANOS OSPINO, de conformidad con el memorial poder conferido.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

30

006-2001-4538

M.D.
(9)

62

derecho de petición.

estrella zarante rodriguez <estrella1delmar@hotmail.com>

Jue 17/06/2021 4:37 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
wrc72fish@yahoo.com <wrc72fish@yahoo.com>; documentosregistrocaucasia@Supernotariado.gov.co
<documentosregistrocaucasia@Supernotariado.gov.co>; estrella1delmar@hotmail.com <estrella1delmar@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (37 KB)
pdf-peticion william rodriguez..pdf;

dar

estr

DRA: ESTRELLA ZARANTE RODRIGUEZ
Especialista en Derecho Comercial y derecho procesal.
Abogada Universidad libre
3168461084

dar

estr

DR

DR

DR

DR

dar

estr

DR

DR

DR

DR

dar

estr

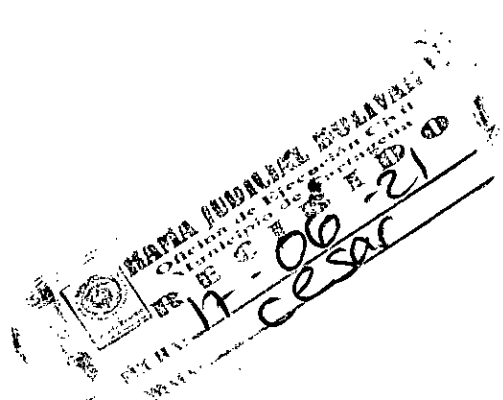
DR

DR

DR

DR

DR



63

ESTRELLA ZARANTE RODRIGUEZ
BOCAGRANDE AV SAN MARTIN EDIFICIO EL CONDOR NO.903.
3162274170.
Estrella1delmarhotmail.com

Señores

SECRETARIA DE APOYO DE LA OFICINA JUDICIAL DE CARTAGENA.

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

RADICADO: 13-001-40-03-006-2001-04538-00.

REF: DERECHO DE PETICIÓN

ESTRELLA ZARANTE RODRIGUEZ, abogada, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación del Señor **WILLIAM RODRÍGUEZ CUBIDES**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía NO. 79.393.999 de Bogotá, quien actúa en calidad de rematante adjudicatario del inmueble de Matrícula Inmobiliaria No. 060. 114458, en el remate dentro del proceso del Juzgado Sexto Civil Municipal Radicado 4538-2001, por medio del presente amparándome en el Art 23 CN, le solicito lo siguiente:

HECHOS

PRIMERO: mi representado es adjudicatario del remate del Inmueble de Referencia Catastral No. 060. 114458, desde el día 28 de marzo del año 2014, este despacho dispuso:

1. Aprobar la liquidación adicional del crédito que no fue objetada por las partes, y en consecuencia aprobar todas sus partes el remate del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-114458.

2. Inscribirse el remate y este auto en el folio de matrícula No. 060-114458.

3. Decretese el desembargo y levantamiento del secuestro del inmueble rematado, oficiarse al registrador para la cancelación del embargo, y el secuestro **NICOLÁS EDUARDO RODRÍGUEZ TUÑÓN**, para que entregue inmueble al rematante **WILLIAM RODRÍGUEZ CUBIDES**.

4. decretese la cancelación de la hipoteca y medidas cautelares.

64

Segundo: por auto hace 7 años se ordenó registrar el remate a nombre de mi representado **WILLIAM RODRÍGUEZ CUBIDES**, quien cancelo sus impuestos en la gobernación de bolívar e instrumentos públicos, siendo devuelto por falta de requisitos de su juzgado, de tal modo que ha sido devuelto más de 10 veces, por falta de requisitos formales en el auto, la oficina de instrumentos públicos le ha indicado el error con la nota de devolución, los recibos originales de pagos y oficios originales, ocasionándole a mi representado un perjuicio muy grande, ya que al día de hoy todavía no he registrado el inmueble a su nombre, pero si se cancelaron las medidas cautelares y la hipoteca lo que pone en peligro inmueble, esta es la segunda vez que lo manifiesto.

Tercero: teniendo en cuenta que, la última vez que se devolvió fue en el año 2019, fue enviado al juzgado por la oficina de instrumentos públicos, quien tiene los recibos de pagos originales, escrituras etc, por tal motivo el día 19 de enero de 2021, vía correo electrónico dirigido a la Dra. **ROXANA FADUL** Abogada con funciones secretariales le solicite lo siguiente:

ESTRELLA ZARANTE RODRIGUEZ, abogada del sr **WILLIAM RODRIGUEZ CUBIDES**, quien fuera el rematante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente con mucha preocupación, teniendo en cuenta que no ha sido posible que el oficio que ordena registrar el remate a nombre de mi cliente **WILLIAM RODRIGUEZ CUBIDES**, haya sido admitido por la oficina de instrumentos públicos, quien ha cancelado la hipoteca y los embargos, pero continua a nombre de ISABEL CRISTINA CERVANTES ORTIZ, lo que pone en peligro el patrimonio de mi cliente, de llegar a entrar un embargo en contra de la ex propietaria, debido al error en el documento que elabora esa oficina, mismo que no cumple con las condiciones exigidas por la oficina de instrumentos públicos, como es: deberán señalarse las medidas y linderos con las indicaciones que exige oficina de instrumentos públicos. Ha ocasionado un grave perjuicio al ser devuelto varias veces, dicha devolución fue dirigida al juzgado y nunca se me ha entregado.

le solicito hacerme llegar el oficio que registra el remate a nombre de mi cliente **WILLIAM RODRIGUEZ CUBIDES**, y los recibos de pago que fueron revuelto por la oficina de instrumentos públicos al juzgado, que cumpla por fin con lo exigido por esa oficina, para que quede registrado, de una buena vez, como debió pasar hace muchos años.

Le indico mi celular para que se contacte conmigo al 3162264170, y mi correo electrónico es: estrella1delmarhotmail.com, con el ánimo de que resolvamos esta situación.

Quedo atenta, muchas gracias.

Cuarto, le indique mi celular para que me contactara haciendo caso omiso, a mi solicitud, la que solo hasta el día 27 de enero de 2021, vía correo electrónico me envió copia de un correo dirigido a instrumentos públicos:

El día 27 de enero de 2021, la **OFICINA DE APOYO** de los de Juzgados **DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**, envió supuestamente vía correo electrónico **CORRESPONDENCIA RAD 006-2001-04538 EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 806/2020** a la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS**, para que se inscribiera el remate que había sido adjudicado a mi cliente **WILLIAM RODRÍGUEZ CUBIDES**, dentro del **PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE MARGARITA CARRILLO ALVARADO CC 4.45.257 DEMANDADO ISABEL CRISTINA CERVANTES ORTIZ C.C. No. 45.438.502 con RADICADO: 13001-40-03-006-2001-04538-00**, y Solicitó **INSCRIBIR EN EL F.M.I No 060-114458 LA ADJUDICACION REALIZADA ADJUDICADO A FAVOR DE WILLIAM RODRIGUEZ CUBIDES C.C. No. 79.393.999** El bien Inmueble con F.M.I No 060-114458; se encuentra ubicado en el barrio Albornoz, carretera Mamonal de la ciudad de Cartagena está identificado con los siguientes linderos y medidas: por el **FRENTE**: que es el **OESTE**, con la carretera Mamonal y mide 9 metros **POR LA DERECHA**. Entrando que corresponde al **SUR**, con terrenos que son o fueron de **ANIBAL MARTINEZ** y mide 20 metros: **POR LA IZQUIERDA** entrando con propiedad de **JOSEFINA ORTIZ R.** y mide 20 metros **POR EL FONDO: o ESTE** con terrenos de **JOSEFINA ORTIZ R.** y mide 20 metros. **POR EL FONDO: o ESTE** con terrenos de **JOSEFINA ORTIZ** y mide 6.85 metros. El Inmueble fue adquirido por **ISABEL CERVANTES ORTIZ**, según los por menores de la escritura Publica No 5281 de fecha 29 de noviembre de 1991 de la Notaria Tercera de Cartagena, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. (Se adjunta copia de la diligencia de remate, del auto aprobatorio de este remate y constancia de ejecutoria.) Es importante comunicar que este despacho conoce de este proceso en razón a las facultades conferidas mediante Acuerdo No PSSA13-9984 de 2013; Acuerdo No 0032 de febrero 4 de 2015; Acuerdo No 0038 de febrero 13 de 2015; y demás Acuerdos concordantes;

66
quinto. Al día de hoy han pasado 6 meses, y en la oficina de instrumentos públicos no nos dan información sobre la solicitud, como tampoco acerca del correo, o actuación, como tampoco nos informan si ha sido devuelto al juzgado, por lo que se hace indispensable presentar esta petición, teniendo en cuenta que, han pasado 7 años y no ha sido posible el registro por falta de requisitos en el auto.

Quinto: por lo que se hace necesario elevar las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES

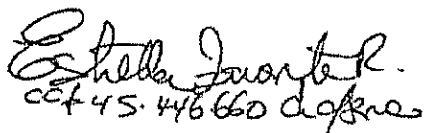
1. solicito cita presencial buscando solucionar esta situación de manera ágil y efectiva entre las partes.
2. me haga saber si ha sido devuelto el documento que envió hace seis meses a la oficina de instrumentos públicos.
3. me indique el turno que le dieron.
4. me indique en qué estado se encuentra el documento.
5. me haga entrega de los documentos originales para poder definir este asunto de fondo.
6. solicito sea subsanado el auto tal y como lo requiere instrumentos públicos, para que por fin sea registrado el remate de manera urgente a nombre de mi cliente William Rodríguez.
7. Me indique el fundamento jurídico que ha tenido usted, para no dar cabal cumplimiento a la legalización del remate a nombre de mi representado, y ha omitido por 7 años su deber.

NOTIFICACIONES

A la apoderada en el correo electrónico estrella1delmarotmail.com.

Celular 3162274170.

Quedo atenta, muchas gracias.


C.C. 45.446.660 de Cartago

ESTRELLA ZARANTE RODRIGUEZ.
C.C. No. 45.446.660 de Cartagena.
T. P. No.133221 C.S. de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2001-004538-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-006-2001-04538-00
Demandante	MARGARITA CARRILLO ALVARADO
Demandado	ISABEL CERVANTES ORTIZ
Asunto	Aclaración

Haciendo una revisión del expediente se tiene que ante derecho de petición presentado por la parte demandante, la secretaría de apoyo de los Juzgados de Ejecución respondió a la parte argumentando que ha hecho lo concerniente, y que el Despacho se limitó a poner en conocimiento lo manifestado.

Se encuentra en el expediente que los oficios a Instrumentos Públicos han sido elaborados pero a la fecha no ha indicado o informado las razones de la No inscripción del remate, como quiera que lo inicialmente solicitado fue aportado y enviado por la Oficina de apoyo de los Juzgados de ejecución.

Por lo expuesto, ésta autoridad ordena oficiar a Instrumentos Públicos para que en el término de 05 días contados a partir de la recepción informen las razones por la cuales no ha inscrito el remate teniendo en cuenta que fue subsanado lo indicado en la ley 1579 de 2012. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: OFICIAR a Instrumentos Públicos para que en el término de 05 días contados a partir de la recepción informen las razones por la cuales no ha inscrito el remate teniendo en cuenta que fue subsanado lo indicado en la ley 1579 de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

Juez

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-006-2003-00268-00

Cartagena de Indias D. T. y C., 03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-006-2003-00268-00
Demandante	LLODYS BANK
Demandado	RODRIGO BELEÑO CORRALES
Asunto	ORDENAR

En memorial presentado el apoderado judicial interesado en el embargo de remanentes solicita que se tenga en cuenta el mismo, como quiera se dio la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Por lo expuesto, ésta autoridad ordena a la secretaría de apoyo de los Juzgados de Ejecución verificar y poner a disposición del proceso el embargo del mismo de ser procedente. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN ÚNICA: ORDENAR a la secretaría de apoyo de los Juzgados de ejecución verificar y poner a disposición del proceso el embargo del mismo de ser procedente, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2005-00805-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2005-00805-00
Demandante	INMOBILIARIA CASTELLANA 2000
Demandado	EDISON DE ORO GUZMAN Y OTROS
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando se actualice los oficios de embargo de cuentas y fiducias en los diferentes bancos de la ciudad.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 24 de octubre del 2005 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTS y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea el demandado, en los diferentes entidades bancarias y el auto de fecha 25 de octubre de 2019 ordenando embargo y secuestro9 de los dineros en fiducias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 24 de octubre del 2005, y auto de fecha 25 de octubre de 2019.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 24 de octubre del 2005 y 25 de octubre de 2019 en su numeral tercero.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2005-00805-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

58606d71aef5ba01e188fde1dd7b50a3e87b4500aa4240af9a8788ea4209c3ae

Documento generado en 02/08/2021 08:00:01 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Memorial solicitando una medida cautelar Banitsmo - Jose Villero Ramos 426-2007

Impulso Procesal <impulsoprocesal.litigamos@gmail.com>

Lun 12/07/2021 11:18 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; henry.litigamos@gmail.com <henry.litigamos@gmail.com>

1 archivos adjuntos (56 KB)

Memorial solicitando una medida cautelar Banitsmo - Jose Villero Ramos 426-2007.pdf

BUEN DIA

CARLOS SANCHEZ ALVAREZ actuando como apoderado judicial de la parte demandante por medio del presente y en atención a los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura adjunto memorial solicitando una medida cautelar dentro del proceso que relación a continuación:

Juzgado: 03 Civil Municipal de Ejecucion de Cartagena
Origen: 06 Civil Municipal
Radicado: 426-2007
Demandante: Banitsmo
Demandado: Jose Villero Ramos
favor acusar recibido

ALAYA JORDANA DOLIVAN
Oficina de Ejecución Civil
Municipalidad de Cartagena
E C J D
FECHA: 12-07-2021
FIRMA: Lucia Arellano

LITIGAMOS S.A.S.
ABOGADOS ASOCIADOS.

Señor:

JUEZ 03 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CARTAGENA
ORIGEN: 06 CIVIL MUNICIPAL

REF: PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR BANITSMO CONTRA
JOSE VILLERO RAMOS.
RAD: 426-2007

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALVAREZ. De condiciones civiles ya conocidas dentro del proceso de la referencia, Teniendo en cuenta las consecuencias establecidas en el artículo 317 (Desistimiento Tácito) del Código General del Proceso, y muy a pesar de que en el presente proceso cuenta con Sentencia (o auto de seguir adelante la ejecución) debidamente ejecutoriada, lo cual hace a tránsito de cosa juzgada y además cuenta con liquidación de crédito y costas debidamente aprobada y ejecutoriada. Habiendo cumplido el suscrito con todos los requerimientos efectuados anteriormente por parte del despacho y en la presente Litis todas las medidas cautelares previas decretadas y practicadas resultaron infructuosas y no existe ningún bien trabado hasta el momento, NO existiendo por consiguiente Actuación o Carga Procesal Pendiente correspondiente a cargo del ejecutante en el cuaderno de las medidas cautelares, a sabiendas todos que el proceso ejecutivo termina con el pago y en ocasiones a través o por medio de estas (medidas), y a pesar de nuestra actitud diligente siempre por medio de las solicitudes e impulsos anteriores y de la posible inactividad pasiva por falta de actuación procesal correspondiente y sin querer tocar el ámbito del Código Disciplinario del Abogado, a través de estas solicitudes. Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente y teniendo en cuenta todo lo anterior, se sirva decretar el Embargo y Secuestro de los dineros que posea el demandado **JOSE VILLERO RAMOS** en las Cuentas Corrientes, Ahorro, Fiducia, CDT y demás que estén a su nombre en el **BANCO SANTANDER.**

Del señor juez.

Atentamente.

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALVAREZ
CC. 72.136.956 de Barranquilla
T.P. 68.166 del C. S. de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2007-00426-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2007-00426-00
Demandante	SUDAMERIS
Demandado	JOSE VILLEROS RAMOS
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 22 de agosto de 2007 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en las diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 22 de agosto de 2007 dirigido al BANCO SANTANDER.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 22 de agosto de 2007 en el segundo inciso dirigido al BANCO SANTANDER.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2009-01142-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR 03 AGO 2021
Radicado	13001-40-03-006-2009-01142-00
Demandante	LADY DE ARCO DE GONZALEZ
Demandado	SERGIO VEGA SALCEDO

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita el embargo y secuestro del bien inmueble de propiedad de NELYS BASTIDAS DIAZ. Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho accederá a ello.

Nº F.M.I.	UBICACIÓN	PROPIETARIO
060-199195	Cartagena	Nelys Bastidas Diaz

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTION UNICA: ORDENAR embargo del inmueble de propiedad del demandado NELYS BASTIDAS DIAZ identificado con CC Nº 33.204.339, el cual se encuentra registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Oficiese a la autoridad competente..

Nº F.M.I.	UBICACIÓN	PROPIETARIO
060-199195	Cartagena	Nelys Bastidas Diaz

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

RV: SOLICITUD DE EMBARGO DE UN INMUEBLE

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena

<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 14/07/2021 7:39 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

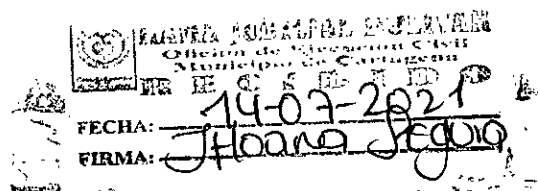
1 archivos adjuntos (3 MB)

12 SOLICITUD DE EMBARGO-fusionado (1).pdf;

area oficinas

De: Oscar Enrique Llanos Buelvas <oscarellanosbuelvas@hotmail.com>**Enviado:** martes, 13 de julio de 2021 23:19**Para:** Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena

<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DE EMBARGO DE UN INMUEBLEEnviado desde Correo para Windows 10

OSCAR E LLANOS BUELVAS

ABOGADO

TELEFONO MOVIL 310 7051552

oscarellanosbuelvas@hotmail.com

CARTAGENA DE INDIAS

CARTAGENA 14 JULIO DE 2021

SEÑOR JUEZ

TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGENA

CIUDAD

REFERENCIA PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE
LADY DE ARCO Vs. SERGIO VEGA Y NELLY BASTIDAS

RADICACION 13001400300620090114200

OSCAR E LLANOS BUELVAS, ABOGADO YA CONOCIDO
DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA A USTED
SOLICITO SOLICITO EL EMBARGO Y SECUESTRO DEL
BIEN INMUEBLE DE MATRICULA

060-199195

DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA NELYS BASTIDAS
DIAZ, TAL Y COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION QUE ANEXO.

LA ANTERIOR SOLICITUD TIENE ASIDERO, EN QUE EL
BIEN YA EMBARGADO, SECUESTRADO Y AVALUADO
DENTRO DEL PROCESO ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR
LA LIQUIDACION DEL CREDITO YA QUE QUE EL AVALUO
ES DE \$150.000.00, MUY POR DEBAJO DE ESTA.

P.D. SIRVASE SEÑOR JUEZ ACUSAR NOTA CON EL RESPECTIVO RECIBO DE LA PRESENTE
SOLICITUD, PARA QUE LA DEMANDANTE PUEDA TENER LA CERTEZA NO SOLO DE QUE EL
MISMO FUE ENVIADO, SINO DE QUE FUE RECIBIDO POR EL DESPACHO, Y ASI EVITAR SU
ENVIO NUEVAMENTE, Y DE PÁSO SE EVITARIA CONGESTIONAR LA RED CON PETICIONES
REPETITIVAS QUE NO SE RESUELVEN POR NO HABER SIDO RECIBIDAS.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Llanos Buevas', written over a horizontal line.

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210408975041526583

Nro Matrícula: 060-199195

Página 1 TURNO: 2021-060-1-53761

Impreso el 8 de Abril de 2021 a las 09:08:26 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 060 - CARTAGENA DEPTO: BOLIVAR MUNICIPIO: CARTAGENA VEREDA: CARTAGENA

FECHA APERTURA: 12-03-2003 RADICACIÓN: 2003-4610 CON: ESCRITURA DE: 05-03-2003

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 412 de fecha 28-02-2003 en NOTARIA 2 de CARTAGENA LOTE #4 con area de 84.00 MT2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS METROS : CENTIMETROS :

AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : AREA CONSTRUIDA - METROS : CENTIMETROS :

COEFICIENTE : %

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

& REGISTRO

Logotipo de la fe pública

COMPLEMENTACION:

MARIA ELENA SUCCAR CHEDIAC, ADQUIRIO EL LOTE 7B, POR ADJUDICACION QUE SE LE HIZO EN LA LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD FORMADA CON MARINA YIDIOS DE PLATA, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 813 DE FECHA 06-05-99 DE LA NOTARIA # 2A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 05-03-2003, FOLIO DE MATRICULA # 060-0198132.- DIVIDIDO EL LOTE 7B, EN (23) MANZANAS DE LA 23 A LA 45, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 2613 DE FECHA 12-10-99 DE LA NOTARIA 2A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 05-03-2003, FOLIO DE MATRICULA # 060-0198132, 060-0198134 AL 060-0198156.- MARINA ISABEL YIDIOS DE PLATA Y MARIA ELENA SUCCAR CHEDIAC, ADQUIRIERON POR COMPRA HECHA A EFRAIN CASTRO PE/A, ALVARO GAVINO PE/A CASTRO, CALIXTO CASTRO PE/A, ISMAEL CASTRO PE/A, LUZ ROSALBA CASTRO CASTELLON, ANA MODESTA ELLES CASTRO, LERIS DEL CARMEN CASTRO MONTERROSA, ANA MODESTA CASTRO PE/A Y LUIS RAFAEL CASTRO ALCALA, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 132 DE FECHA 02-04-98 DE LA NOTARIA UNICA DE TURBACO, REGISTRADA EL 04-05-98, FOLIO DE MATRICULA # 060-0134814.- ACLARADA LA ESCRITURA 132 EN CUANTO A QUE SE ACTUALIZA EL AREA (16 HECT MAS 8.592M2) LINDEROS Y MEDIDAS, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 1038 DE FECHA 30-04-98 DE LA NOTARIA 1A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 04-05-98, FOLIO DE MATRICULA # 060-0134814.- DIVIDIDO MATERIALMENTE EL INMUEBLE EN (7) SECCIONES, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 1013 DE 13-04-98 DE LA NOTARIA 2A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 07-05-98, FOLIO DE MATRICULA # 060-0124814, 060-0169478 - SECCION #1, 060-0169479 - SECCION #2, 060-0169480 - SECCION #3, 060-0169481 - SECCION #4, 060-0169482 - SECCION #5, 060-0169483 - SECCION #6, 060-0169484 - SECCION 7.- ACLARADA LA ESCRITURA # 1013 EN CUANTO A LA FECHA CORRECTA DE OTORGAMIENTO, LINDEROS, MEDIDAS DE LOS LOTES SECCION #3, 4 Y 5, AREA CORRECTA (11.000M2)- LOTE SECCION # 5, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 1192 DE 23-04-98 DE LA NOTARIA 2A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 12-05-98, FOLIO DE MATRICULA # 060-00169484.- DIVIDIDO EL LOTE - SECCION #7, EN (3) LOTES, CON LICENCIA PARA DIVIDIR SEGUN RESOLUCION # 115, PROVENIENTE DE PLANEACION MUNICIPAL DE TURBACO, SEGUN CONSTA EN LA CITADA ESCRITURA # 813 DE 06-05-99 DE LA NOTARIA 2A. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 05-03-2003, FOLIOS DE MATRICULA #S 060-0169484, 060-0198131 - LOTE 7A, 060-0198132 - LOTE 7B, 060-0198133 - LOTE 7C.- EFRAIN CASTRO PE/A, ALVARO GAVINO CASTRO PE/A, CALIXTO CASTRO PE/A, ISMAEL CASTRO PE/A, LUZ ROSALBA CASTRO DE CASTELLON, ANA MODESTA ELLES CASTRO, LERIS DEL CARMEN CASTRO MONTERROSA, ANA MODESTA CASTRO PE/A, Y LUIS RAFAEL CASTRO ALCALA, ADQUIRIERON POR ADJUDICACION QUE SE LES HIZO EN LA SUCESION DE ISIDORA CASTRO PUELLO, LIQUIDADA SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA # 566 DE FECHA 29-12-95, DE LA NOTARIA UNICA DE TURBACO, REGISTRADA EL 16-12-97, FOLIO DE MATRICULA # 060-0134814.- ISIDORO CASTRO PUELLO, ADQUIRIO POR HABERSE DECRETADO EN SU FAVOR LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, SEGUN SENTENCIA DE FECHA 22-01-49, TRAMITADA POR EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 10-02-50, FOLIO DE MATRICULA # 060-0134814.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

URBANIZACION MONTE CARMELO SECTOR COLONCITO EN TURBACO MANZANA 34 LOTE #4.



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210408975041526583

Nro Matrícula: 060-199195

Pagina 2 TURNO: 2021-060-1-53761

Impreso el 8 de Abril de 2021 a las 09:08:26 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de Integración y otros)

060 - 198145

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-03-2003 Radicación: 2003-4610

Doc: ESCRITURA 412 DEL 26-02-2003 NOTARIA 2 DE CARTAGENA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: OTRO: 0920 LOTE0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SUCCAR CHEDIAC MARIA ELENA

CC# 45422756

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 05-09-2005 Radicación: 2005-16086

Doc: ESCRITURA 0725 DEL 29-03-2004 NOTARIA SEGUNDA DE CARTAGENA

VALOR ACTO: \$2.000.000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SUCCAR CHEDIAC MARIA ELENA

CC# 45422756

A: FREYLE PAZA DIDO MARIA

CC# 40924850 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-01-2006 Radicación: 2006-1139

Doc: ESCRITURA 78 DEL 17-01-2006 NOTARIA 2 DE CARTAGENA

VALOR ACTO: \$800.000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA ESTEY OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FREYLE PAZA DIDO MARIA

CC# 40924850

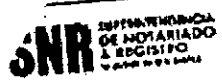
A: BASTIDAS DIAZ NELYS

CC# 33204339 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbovondapago.gov.co/verificador/



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 060-199195

Certificado generado con el Pin No: 210408975041526583
Pagina 3 TURNO: 2021-060-1-53761

Impreso el 8 de Abril de 2021 a las 09:08:26 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2021-060-1-53761

FECHA: 03-04-2021

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: MAYDINAYIBER MAYRAN URUEÑA ANTURI

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

INSTRUMENTO PUBLICO

Estado
14-07-2021
- 938

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2013-00616-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2013-00616-00
Demandante	COOPERATIVA COOMEC
Demandado	MARIA GOMEZ PINTO FABIAN NUÑEZ MONTENEGRO

Advierte el despacho a folio 39 del cuaderno de ejecución, memorial presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante, a través del cual solicita se decrete el embargo del 50% de las cesantías y demás emolumentos legalmente embargables que tenga consignados los demandados FABIAN NUÑEZ MONTENEGRO con CC N°3.811.559 en calidad de titular de las cesantías que tiene consignadas en la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION SA. Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro del 30% de las cesantías y demás emolumentos legalmente embargables que tenga consignados los demandados FABIAN NUÑEZ MONTENEGRO con CC N°3.811.559 en calidad de titular de las cesantías que tiene consignadas en la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION SA.

Limitese la cuantía en la suma de \$4.703.837 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria librense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2013-00616-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

de7dd00866f21e0a57220a2049a4056f34c5f40d26fd7847648419d20a4df72c

Documento generado en 02/08/2021 08:00:08 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

RV: Escrito de terminación caso Elba Esperanza Navarro Zúñiga RADICADO 289 - 2014
ORIGEN SEXTO CIVIL MUNICIPAL

luis antonio bernal orozco <lubers_11@hotmail.com>

Mar 6/07/2021 1:31 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (154 KB)

CAMARA DE COMERCIO CRECOOP NOVIEMBRE 19 DE 2020.pdf; terminacion elba esperanza zuñiga.pdf;

señores

OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS

E. S. D.

SOLICITUD DE TRAMITE AL ESCRITO DE TERMINACION DEL PROCESO JUDICIAL

el dia 14 de diciembre de 2020 radique en su correo el escrito de terminacion por pago total de la obligacion tal como consta en el reenvio que hago de este correo ,a la fecha al memorial no se le ha impartido tramite ante el juez del caso por tal motivo solicito se de traslado al juez del caso informando que el suscrito presento el memorial en su momento y no le ha dado tramite

atte

LUIS ANTONIO BERNAL OROZCO

CC:73.202.280 DE CARTAGENA

T.P:239.185 H.C.S.J.

De: luis antonio bernal orozco <lubers_11@hotmail.com>

Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 3:51 p. m.

Para: cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Escrito de terminación caso Elba Esperanza Navarro Zúñiga RADICADO 289 - 2014 ORIGEN SEXTO CIVIL MUNICIPAL

SEÑOR

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS

E. S. D.

DEMANDANTE: CRECOOP

DEMANDADOS: ELBA ESPERANZA NAVARRO ZUÑIGA

RAD: 289 / 2014.

ORIGEN: SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

SOLICITUD DE TERMINACION DEL PROCESO

Por medio de la presente nos dirigimos a su despacho para solicitar la terminación del proceso judicial por pago total de la obligación demandada. Con la terminación ordene el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas y sean remitidas al pagador de la secretaria de educación departamental de bolívar nominasedbolivar@hotmail.com

Renunciamos a los términos de ejecutoria del auto favorable.

Atte.

APODERADO JUDICIAL CRECOOP

REP.LEGAL DE CRECOOP EN LIQUIDACION

LUIS ANTONIO BERNAL OROZCO

MARIANA GUILLEN VALDEZ

CC: 73.202.280 DE CARTAGENA

CC:

T.P:239.185 H.C.S.J.

De: Info Crecoop <infocrecoop@gmail.com>

Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 2:14 p. m.

Para: luis antonio bernal orozco <lubers_11@hotmail.com>

Asunto: Escrito de terminación caso Elba Esperanza Navarro Zúñiga

Buenas tardes Dr. Bernal,

Le hago devolución del escrito de terminación del caso 289 - 2014 seguido a la señora Elba Esperanza Navarro Zúñiga, debidamente firmado por la suscrita.

Asimismo, le envié Cámara de Comercio vigente de Crecoop en Liquidación.

Atentamente,

MARIANA GUILLEN VALDEZ

Representante Legal Liquidadora

CRECOOP EN LIQUIDACIÓN.

Tel: 3117362233 - 3093387

Dirección: calle 77b #59-61. oficina 812. Barranquilla

SEÑOR

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS

E. S. D.

DEMANDANTE: CRECOOP

DEMANDADOS: ELBA ESPERANZA NAVARRO ZUÑIGA

RAD: 289 / 2014.

ORIGEN: SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

SOLICITUD DE TERMINACION DEL PROCESO

Por medio de la presente nos dirigimos a su despacho para solicitar la terminación del proceso *judicial por pago* total de la obligación demandada. Con la terminación ordene el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas y sean remitidas al pagador de la secretaria de educación departamental de bolívar nominasedbolivar@hotmail.com

Renunciamos a los términos de ejecutoria del auto favorable.

Atte.

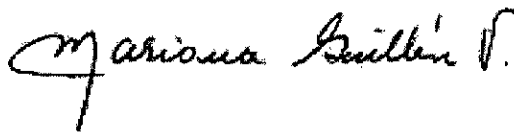


APODERADO JUDICIAL CRECOOP

LUIS ANTONIO BERNAL OROZCO

CC: 73.202.280 DE CARTAGENA

T.P:239.185 H.C.S.J.



REP.LEGAL DE CRECOOP EN LIQUIDACION

MARIANA GUILLEN VALDEZ

CC: 32.658.996 de Barranquilla



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Fecha de expedición: 19/11/2020 - 15:01:44

Recibo No. 8367168, Valor: 6,100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: TP3C2CE7FF

149

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:

COOPERATIVA DE SERVICIOS Y CREDITOS EN LIQUIDACION

Sigla: CRECOOP

Nit: 830.510.138 - 7

Domicilio Principal: Barranquilla

Registro No.: 17.534

Fecha de registro: 19/09/2019

Último año renovado: 2020

Fecha de renovación del registro: 03/07/2020

Activos totales: \$2.910.436.855,00

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

*LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIÓ EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, CIRCULAR 019 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CL 77 B No 59 - 61 OF 812

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico: infocrecoop@gmail.com

Teléfono comercial 1: 3117718

Dirección para notificación judicial: CL 77 B No 59 - 61 OF 812

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: infocrecoop@gmail.com

Teléfono para notificación 1: 3117718

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Acta del 23/10/2004, del Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/08/2005 bajo el número 14.313 del libro I, y por Acta del 23/10/2004, del Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/08/2005 bajo el número 14.313 del libro I, y por Acta del 23/10/2004, del Asamblea de Asociados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 19/09/2019 bajo el número 8.248 del libro III, se constituyó la entidad: ENTIDAD DE NATURALEZA COOPERATIVA denominada COOPERATIVA DE SERVICIO S Y CREDITOS LTDA. CRECOOP LTDA.



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 19/11/2020 - 15:01:44
Recibo No. 8367168, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: TP3C2CE7FF

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta del 20/05/2005, otorgado(a) en Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/08/2005 bajo el número 14.314 del libro I, la entidad cambio de razon social, por la denominacion COOPERATIVA DE COMERCIAL IZACION Y CREDITO CRECOOP

Por Acta del 15/06/2005, otorgado(a) en Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/08/2005 bajo el número 14.315 del libro I, la entidad cambio de razon social, por la denominacion COOPERATIVA DE SERVICIOS Y CREDITOS SIGLA CRECOOP

Por Acta del 07/07/2005, otorgado(a) en Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/08/2005 bajo el número 14.316 del libro I, la entidad cambio de domicilio a la ciudad de BARRANQUILLA.

Por Acta número 19 del 30/03/2017, otorgado(a) en Asamblea de Asociados en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/04/2017 bajo el número 6.779 del libro III, la entidad cambio su domicilio a la ciudad de Cartagena

Por Acta número 22 del 17/06/2019, otorgado(a) en Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 19/09/2019 bajo el número 8.248 del libro III, la entidad

REFORMAS DE ESTATUTOS

La entidad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta		20/05/2005	Asamblea de Cooperados	14.314	08/08/2005	I
Acta		15/06/2005	Asamblea de Cooperados	14.315	08/08/2005	I
Acta	6	31/03/2007	Asamblea de Cooperados	18.719	05/06/2007	I
Acta	12	23/03/2013	Asamblea de Cooperados	1.423	05/09/2013	III
Acta	14	16/12/2013	Asamblea de Cooperados	1.626	19/12/2013	III

yfhhdghd

DISOLUCIÓN

Que , la entidad se encuentra disuelta y en estado de liquidación según consta en el Acta número 24 del 08/08/2020, otorgado(a) en Asamblea de Cooperados en Barranquilla inscrito(a), en esta Cámara de Comercio el 25/08/2020 bajo el número 8.556 del libro III.

OBJETO SOCIAL

La entidad tiene por objeto: desarrollar actividades de producción, consumo, previsión social a sus Asociados. Desarrollar servicios de producción, consumo, previsión social a sus Asociados. Promover el desarrollo social y económico dentro de un marco comunitario y sobre la base del esfuerzo propio, la ayuda mutua y la solidaridad de sus Asociados. Fomentar la producción de sus Asociados y comercializar sus productos elaborados. Establecer por su cuenta o mediante



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
Fecha de expedición: 19/11/2020 - 15:01:44
Recibo No. 8367168, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: TP3C2CE7FF

convenios con entidades preferiblemente del Sector solidario, el suministro de bienes y servicios a sus Asociados mediante sistemas de crédito personales o de libranzas. Fomentar y promover entre sus Asociados el suministro de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de los Asociados; Desarrollar cualquier otra actividad económica lícita y conveniente para el desarrollo del objetivo social.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: K649200 ACTIVIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE EMPLEADOS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR SOLIDARIO
PATRIMONIO

VALOR DEL PATRIMONIO: \$10.000.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Gerente será el Representante Legal de la Cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, será nombrado por este último y sus funciones estarán acordes con lo que establecen los presentes Estatutos. El Gerente tendrá un suplente, quien reemplazará al titular en sus faltas temporales o definitivas y tendrá sus mismas funciones en tales circunstancias. El Gerente y su suplente serán nombrados por el Consejo de Administración para período de dos(2) años pudiendo ser reelegido o removido libremente por el Consejo y empezará a ejercer sus funciones una vez sea reconocido o registrado debidamente en la entidad correspondiente, previa prelación de la Póliza de manejo. Facultades del Representante Legal: Son funciones del Gerente: -Tener bajo dependencia a los empleados y vigilar las disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. -Suspender de sus funciones a los empleados de la Cooperativa por faltas comprobadas, dando cuenta inmediata al Consejo de administración. -Organizar y dirigir de acuerdo a las instrucciones del Consejo de Administración. -Elaborar y someter a la aprobación del Consejo, los diferentes reglamentos de la Cooperativa. -Proyectar para la aprobación del Consejo, los contratos en que tenga interés la Cooperativa. -Ordenar los pagos de los gastos de la cooperativa, firmando los cheques que se giren contra la cuenta bancaria de la Cooperativa, en asocio con el Tesorero y realizar operaciones en cuantía hasta cinco mil (5.000) salarios mínimos legal vigente mensual. El Gerente podrá cambiar los cheques que se giren a nombre de la Cooperativa. -Vigilar diariamente el estado de caja y cuidar que se mantenga en seguridad los bienes valores de la Cooperativa. Organizar la contabilidad de acuerdo a las normas contables de la Superintendencia de la Economía Solidaria. -Enviar a la Superintendencia de la Economía Solidaria los informes de contabilidad y los datos estadísticos que este organismo requiera. -Prescribir el proyecto de distribución de excedentes Cooperativos que el Consejo deberá someter a la aprobación de la Asamblea General. -Recibir o dar en mutuo o préstamo o celebrar los contratos que autorice el Consejo de administración. -Enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades competentes. -Todas las demás funciones que le correspondan como representante legal.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 24 del 08/08/2020, correspondiente a la Asamblea de Cooperados en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 25/08/2020 bajo el número 8.557 del libro III.



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Fecha de expedición: 19/11/2020 - 15:01:44

Recibo No. 8367168, Valor: 6,100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: TP3C2CE7FF

Cargo/Nombre	Identificación
Liquidador Principal	
Gillen Valdez Mariana del Carmen	CC 32658996
Liquidador Suplente	
Suarez Ordoñez Grisela	CC 32732154

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 21 del 06/06/2019, correspondiente a la Asamblea de Cooperados en Cartagena, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 19/09/2019 bajo el número 8.248 del libro III:

Nombre	Identificación
Miembro principal de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Malkun Suarez Fermin Amin	CC 1.140.884.553
Miembro principal de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Malkun Suarez Nicole	CC 1.140.899.358
Miembro principal de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Suarez Royero Jhon Jairo	CC 1.129.579.625
Miembro suplente de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Suarez Ordoñez Adelia	CC 32.696.000
Miembro suplente de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Soto Suarez Shadia Valentina	CC 1.001.939.220
Miembro suplente de CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Azar Di'domenico Habib Durgaham	CC 1.140.871.364

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 24 del 08/08/2020, correspondiente a la Asamblea de Cooperados en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 25/08/2020 bajo el número 8.558 del libro III:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Principal	
De Marchena Barrios Oscar David	CC 72173600
Revisor Fiscal Suplente	
Rueda Rosso Denys	CC 22463363

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica de la entidad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Fecha de expedición: 19/11/2020 - 15:01:44

Recibo No. 8367168, Valor: 6,100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: TP3C2CE7FF

las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2014-00289-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,



03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2014-00289-00
Demandante	COOPERATIVA DE SERVICIO Y CRÉDITO CRECOOP
Demandado	ESPERANZA NAVARRO ZUÑIGA
Asunto	Pone en conocimiento.

En memorial presentado el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta que en fecha 14 de Diciembre de 2020 presentó terminación del proceso por pago sin que a la fecha se le haya dado el trámite pertinente.

Si se hace una revisión del expediente, del sistema nueva consulta de Justicia XXI ésta autoridad no encuentra memorial presentado, y en el correo del Juzgado tampoco, por ende, se requiere al apoderado judicial a fin de que indique o allegue el memorial al que hace mención. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

CUESTIÓN UNICA: REQUERIR al apoderado judicial a fin de que allegue el memorial de fecha 14 de Diciembre de 2020 al que hace mención, por lo expresado en la parte motiva.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2016-00963-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2016-00963-00
Demandante	BANCO DE OCCIDENTE
Demandado	ALBERTO MERCADO VIVERO Y OTRO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Se vislumbra memorial por parte del apoderado del demandante solicitando requerir al organismo de Transito de Turbaco - Bolívar a fin de que dé respuesta a la orden de embargo emitida en auto de fecha 18 de noviembre de 2016.

En relación con lo anterior, se observa auto de fecha 18/ de noviembre de 2016, por medio del cual se decreta el embargo y secuestro del vehículo con placas BPU 928, de propiedad del demandado MARGARITA MARIA PETANO JIMENEZ, oficiando al Secretaria de Tránsito y Transporte de Turbaco - Bolívar proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, y a folio 2 (C.M) no se evidencia comunicación allegada a dicha dependencia, igualmente no se localiza respuesta por parte de la SECRETARIA DE TRANSITO DE TURBACO - BOLÍVAR, informado el cumplimiento de lo ordenado. En consecuencia se oficia nuevamente a la SECRETARIA DE TRANSITO DE TURBACO - BOLÍVAR, a fin de que informe y certifique al suscrito Juzgado, si se encuentra actualmente inscrita la medida de embargo frente al vehículo de placas BPU 928 de propiedad de MARGARITA PETANO JIMENEZ, decretada en auto de fecha 18 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: OFICIAR a la SECRETARIA DE TRANSITO DE TURBACO-BOLÍVAR, a fin de que informe y certifique al suscrito Juzgado, si se encuentra actualmente inscrita la medida de embargo frente al vehículo de placas BPU 928 de propiedad de MARGARITA MARIA PETANO JIMENEZ, decretada en auto de fecha 18 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cámara Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2017-00775-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2017-00775-00
Demandante	EDUARDO ARTEAGA
Demandado	ROMAN MERCADO CHICA
Asunto	Medida Cautelar

Se observa a folio 19 del cuaderno de ejecución, el apoderado de la parte ejecutante solicita el embargo del remanente, de los dineros o bienes y títulos que figuren a nombre del demandado ROMAN MERCADO CHICA, dentro del proceso de radicación 1036-201 de origen 11 Civil Municipal, sin embargo se observa que se encuentra incompleto el radicado por lo que se requiere a la parte demandante para que aclare el radicado a donde va dirigido la orden de remanente.

Por otro lado, se observa solicitud de conversión de los depósitos que se encuentran en el juzgado de origen, por tanto se oficia al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena que informe si actualmente en esa dependencia se encuentra consignados depósitos judiciales a favor del proceso con radicado N° 006-2017-775 promovido por EDUARDO ARTEAGA contra ROMAN MERCADO en caso de existir poner a disposición de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, toda vez que actualmente asumimos el conocimiento del proceso.

En consecuencia,

RESUELVE:

PRIMERO: REQUERIR a la parte de demandante aclarar el radicado a la cual va dirigida la solicitud del remanente toda vez que se encuentra incompleta.

SEGUNDO: OFICIAR al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena que informe si actualmente en esa dependencia se encuentra consignados depósitos judiciales a favor del proceso con radicado N° 006-2017-775 promovido por EDUARDO ARTEAGA contra ROMAN MERCADO en caso de existir poner a disposición de la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, toda vez que actualmente asumimos el conocimiento del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

9/7/2021

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena - Outlook

30
103-121

Rv: MEMORIAL IMPARTIR TRÁMITE 2009-445 MANUEL SANTIAGO FLOREZ RINCON

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 19/07/2021 12:45 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (73 KB)

SOLICITUD DE IMPARTIR TRÁMITE MANUEL SANTIAGO FLOREZ RINCON.pdf:

De: adriana.hernandez@contactosolutions.com <adriana.hernandez@contactosolutions.com>

Enviado: lunes, 19 de julio de 2021 7:59

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena <j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL IMPARTIR TRÁMITE 2009-445 MANUEL SANTIAGO FLOREZ RINCON

SEÑOR:

JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CARTAGENA

E. S. D.

Demandante: Banco Popular // Contacto Solutions SAS

Demandado: MANUEL SANTIAGO FLOREZ RINCON

Proceso: 13001400300620090044500

Por medio del presente, me dirijo a su honorable Despacho Judicial, con el fin de solicitar impartir trámite, al proceso en mención.

Anexo memorial.

Cordialmente,

Adriana Hernández Acevedo

Coordinadora Jurídica

Teléfono: 742 58 18 Ext. 949

Celular: 313 281 11 57

adriana.hernandez@contactosolutions.com

Carrera 65 No. 81 - 28 Centro Empresarial Entre Ríos

Bogotá - Colombia

RECIBIDO
19-07-21
cesar

AVISO LEGAL:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de CONTACTO SOLUTIONS SAS. Si usted no es el destinatario final por favor eliminelos e informenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Proteccion de Datos y normas concordantes, le informamos que CONTACTO SOLUTIONS SAS cuenta con politica para el tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: www.contactosolutions.com
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre sus datos, mediante escrito dirigido a CONTACTO SOLUTIONS SAS a la direccion de correo electronico protecciondedatos@contactosolutions.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Cra. 65 # 81-28, BOGOTÁ Colombia.

Bogotá D.C., 16 de julio de 2021

SEÑOR:

JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CARTAGENA
E. S. D.

Proceso: 13001400300620090044500

Demandante: Banco Popular // Contacto Solutions SAS

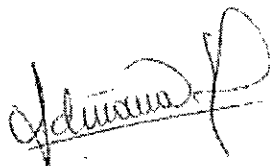
Demandado: MANUEL SANTIAGO FLOREZ RINCON

ASUNTO: Solicitud impartir trámite.

ADRIANA PAOLA HERNÁNDEZ ACEVEDO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogada en ejercicio, obrando en nombre y representación de la sociedad **CONTACTO SOLUTIONS SAS** identificada con el Nit. 900.097.543-9, en mi calidad de apoderada judicial, teniendo en cuenta que ante su Despacho se había presentado memorial con solicitud de medidas cautelares, pero dicha solicitud no ha sido resuelta, solicito ante su Despacho que se le imparta trámite a la solicitud anteriormente radicada, y que se nos notifique cualquier actuación.

Solicito de igual forma que cualquier asunto sobre el particular y con el fin de dar la mayor celeridad posible se me notifique al correo electrónico: adriana.hernandez@contactosolutions.com, también recibiré notificaciones en la Secretaría del Despacho o en Carrera 65 No. 81 – 28.

Del Señor Juez,



ADRIANA PAOLA HERNÁNDEZ ACEVEDO
C.C. No. 1.022.371.176 de Bogotá D.C.
T.P. No. 248.374 del C.S. de la J.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2009-00445-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-006-2009-00445-00
Demandante	BANCO POPULAR
Demandado	MANUEL SANTIAGO FLOREZ

Se advierte memorial presentado por la parte demandante solicitandodar tramite a medidas anexadas, sin embargo luego de una revision del presente proceso no se visualiza memoriales sin tramitar, por lo que se requiere a la parte demandante para que allegue memoriales que se pretenda resolver, para dar el tramite pretinente de manera inmediata.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTION UNICA: REQUERIR a la parte demandante para que allegue al despacho, memoriales que pretende sean resueltos, para dar el tramite de manera inmediata.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-006-2009-00445-00

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f66d06e75cbd1d06a87112d7917c496ee23caa4e2b85b1e586e2a828d1e475ad

Documento generado en 02/08/2021 08:00:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-007-2016-00968-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-007-2016-00968-00
Demandante	CIELO DOLORES ESCOBER SARMIENTO
Demandado	JAIME DIAZ OLARTE Y OTROS

Se advierte memorial por parte del apoderado de la parte demandante solicitando la corrección del auto de fecha 09 de marzo de 2021, toda vez que se encuentra un error en la parte resolutive sobre el número de placa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra auto de fecha 09 de marzo de 2021, donde se vislumbra el error en mención. En consecuencia se procede a corregir teniendo en cuenta el artículo 268 del C.G.P el cual manifiesta se podrá corregir el auto en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, mencionando el numero de placa correcta es BPW384.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a corregir el auto de fecha 09 de marzo de 2021 en la parte resolutive, proferido por esta autoridad judicial.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: Corregir el auto de fecha 09 de marzo de 2021, siendo el numero correcto de placas es **BPW 384**.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-007-2016-00968-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

aad39dd8b7f51d0fdb5716f64e784e4ba282bc1e08509c209ef3623d8362d8af

Documento generado en 02/08/2021 08:00:10 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Apea de 41
entrada
22/07/21
3 eje**Re: BANCO PICHINCHA CONTRA JOSE VALDELAMAR RAD: 2016-00969-IMPULSO
TERMINACION PAGO TOTAL**

07cm

Julio Romero <abogadojulioromero@gmail.com>

Vie 23/07/2021 8:26 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (525 KB)

IMPULSO PROCESO PICHINCHA CONTRA JOSE VALDELAMAR.pdf; JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA - TERMINACION (1).pdf; Correo de Asesorias Juridicas JJ Ltda - BANCO PICHINCHA S.A CONTRA JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA RAD_13001400300720160096900 - SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.pdf; PODER JOSE VALDELAMAR (1).pdf;

Buenos días Dres., cordial saludo.

Por medio de presente me permito reiterar correo que antecede teniendo en cuenta que hasta la fecha aún no se le ha dado trámite al memorial anexo y el proceso se encuentra sin movimiento habiendo transcurrido tiempo suficiente para el mismo.

Sírvase impartir el trámite correspondiente**Atentamente,** Resultado de imagen para balanza derecho fondo blanco**DR. JULIO ROMERO CACERES**

Abogado.

Celular: 301-747-1638

Dirección: Carrera 51 b No. 80 – 58.

Oficina 1206, Smart Office Center.

Barranquilla, Atlántico.

23/07/2021
Juana Arellano Mailtrack Remitente notificado con
Mailtrack

El mié, 21 de jul. de 2021 a la(s) 10:48, Julio Romero (abogadojulioromero@gmail.com) escribió:
Buenos Días Dres., cordial saludo.

Por medio de presente me permito remitir memorial para que se le dé el tramite pertinente, dentro del proceso de la referencia, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos expedidos por el consejo superior de la judicatura.

Sírvase impartir el trámite correspondiente**Atentamente,** Resultado de imagen para balanza derecho fondo blanco**DR. JULIO ROMERO CACERES**

Abogado.

Handwritten signature

Celular: 301-747-1638

Dirección: Carrera 51 b No. 80 – 58.

Oficina 1206, Smart Office Center.

Barranquilla, Atlántico.

 Mailtrack Remitente notificado con Mailtrack

JULIO STEVEN ROMERO CACERES
ABOGADO

23

SEÑOR
JUEZ (03) TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: (7) SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

REF: PROCESO EJECUTIVO DE MIXTO DE **BANCO PICHINCHA S.A. CONTRA JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA.**

RAD: 13001400300720160096900

JULIO STEVEN ROMERO CACERES, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.045.700.400 de Barranquilla, abogado titulado e inscrito con Tarjeta Profesional No.258.751 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial del señor **JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA** mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Cartagena e identificado con cédula de ciudadanía número 73.575.473 expedida en la Ciudad de Cartagena (Bolívar), por medio del presente escrito a usted muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva **IMPULSAR** el proceso de la referencia en el sentido de **DARLE TRAMITE A LA TERMINACION POR PAGO TOTAL**, aportada a su despacho el día 21 de Julio del año en curso.

Lo anterior teniendo en cuenta que el vehículo de placas MUL-811 se encuentra inmovilizado desde el día 14 de Abril del año en curso, es decir, más de **3 MESES**, generando así cuantiosos gastos de parqueadero y a su vez deteriorándose por las condiciones climáticas actuales, así mismo mi poderdante por medio de escrito que anexo me otorgo poder para realizar todas las acciones tendientes para el impulso de la terminación del proceso y solicitud de oficios de desembargo, cancelación de orden de inmovilización y orden de entrega del vehículo trabado en la presente Litis.

A su vez me permito aportar la respectiva documentación que soportan el presente escrito.

1. MEMORIAL DE TERMINACION POR PAGO TOTAL PRESENTADO POR LA DRA. AMPARO CONDE RODRIGUEZ CON EL RESPECTIVO SOPORTE DEL ENVIO A SU CORREO INSTITUCIONAL.
2. PODER OTORGADO PARA ACTUAR EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA.

Del Señor Juez,

Atentamente,

JULIO STEVEN ROMERO CACERES
C. C. 1.045.700.400 DE BARRANQUILLA.
T. P. No. 258.751 del C. S. de la J.

4x

SEÑOR
JUEZ (3) TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: (7) SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

REF: PROCESO EJECUTIVO MIXTO DE BANCO PICHINCHA S.A CONTRA JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA

RAD: 13001400300720160096900

AMPARO CONDE RODRIGUEZ, de condiciones civiles ya conocidas dentro del proceso de la referencia, en mi calidad de apoderada judicial demandante, por medio del presente escrito me permito solicitar muy comedidamente, se sirva:

- Decretar la terminación del proceso de la referencia por **PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION** sin lugar a condena en costas.
- Decretar el levantamiento de las medidas cautelares decretas, librando los oficios correspondientes.

Cualquier otro título que repose en el Juzgado debe ser devuelto a la parte demandada.

Renuncio a los términos de notificación y ejecutoria del auto que admite la presente solicitud.

Del Señor Juez,

Atentamente,

AMPARO CONDE RODRÍGUEZ
C. C. 51.550.414 de Bogotá
T. P. No. 52.633 del C. S. de la J.
R.J 08-06-2021

**BANCO PICHINCHA S.A CONTRA JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA RAD:
13001400300720160096900 - SOLICITUD DE TERMINACION POR PAGO TOTAL DE
LA OBLIGACION**

1 mensaje

Amparo Conde <aconde@asesoriasjuridicasjj.com>

21 de julio de 2021, 8:45

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos Días Dres., cordial saludo.

Por medio de presente me permito remitir memorial para que se le dé el tramite pertinente, dentro del proceso de la referencia, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos expedidos por el consejo superior de la judicatura.

Sírvase impartir el trámite correspondiente

Atentamente,

Amparo Conde Rodríguez

Abogada

Asesorías Jurídicas J.J Ltda.

Cra 51B No. 80-58, Oficina: 1206

Edificio Smart Office Center

Teléfono: 3852200

Celulares: 3008169954-3017471638

 JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA - TERMINACION.pdf
86K

26

JULIO STEVEN ROMERO CACERES
ABOGADO

Señor
JUEZ (03) TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: (7) SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

REF: PROCESO EJECUTIVO MIXTO DE BANCO PICHINCHA S.A. CONTRA JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA.

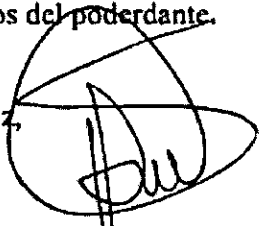
RAD: 13001400300320160096900

JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Cartagena e identificado con cédula de ciudadanía número 73.575.473 expedida en la ciudad de Cartagena (Bolívar), en mi calidad de DEMANDADO dentro del proceso de la referencia, A usted Señor Juez, manifiesto que confiero Poder Especial, Amplio y Suficiente al doctor **JULIO STEVEN ROMERO CACERES** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.045.700.400 de la ciudad de Barranquilla abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 258.751 del C.S.J para que me represente en el proceso referido, actualmente tramitado en este juzgado y tramite todo lo concerniente a la **TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL Y LOS DESEMBARGOS PERTINENTES.**

Así mismo mi apoderado(a) queda facultado(a) para retirar oficios con destino al Banco Agrario o entidad que haga sus veces para el pago de depósitos judiciales relacionados con el proceso ejecutivo, desistir, conciliar, renunciar, reasumir, terminar el proceso por cualquier causa en especial por pago de la obligación y demás facultades contempladas en el artículo 77 del C.G.P., incluyendo la facultad para suspender el proceso conforme lo establece el Artículo 161 del C.G.P.

Sírvase Señor Juez reconocerle personería en los términos aquí señalados para la protección de los derechos del poderdante.

Del Señor Juez,



JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA
C. C. No. 73.575.473 de Cartagena, Bolívar.

Acepto,

JULIO STEVEN ROMERO CACERES
C.C. 1.045.700.400 de Barranquilla.
TP. 258.751 del C.S. de la J.

Celular: 3017471638
CORREO ELECTRONICO: abogadojulioromero@gmail.com

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



3928952

En la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021), en la Notaria Primera (1) del Círculo de Cartagena, compareció: JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 73575473, presentó el documento dirigido a JUEZ 3 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

----- Firma autógrafa -----



4qmwge0x6zg6
13/07/2021 - 08:37:46

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



MARGARITA ROSA JIMÉNEZ NÁJERA

Notario Primero (1) del Círculo de Cartagena, Departamento de Bolívar

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 4qmwge0x6zg6

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-07-2016-00969-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-007-2016-00969-00
Demandante	BANCO PICHINCHA S.A
Demandado	JOSE ANTONIO VALDELAMAR VILLA
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante su apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

***“Artículo 461. Terminación del proceso por pago.** Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.*

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el apoderado judicial de la parte demandante con facultad para recibir tal como consta a folio 04 del c.p . Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello.



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

SOLICITUD REQUERIR BANCO COLPATRIA CONTRA ROBERTO LASPRILLA BARRAZA Y OTRO

Impulso Procesal <impulsoprocesal.litigamos@gmail.com>

Lun 12/07/2021 4:45 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; henry.litigamos@gmail.com <henry.litigamos@gmail.com>

1 archivos adjuntos (137 KB)
BANCO COLPATRIA CONTRA ROBERTO LASPRILLA BARRAZA Y OTRO.pdf;

SEÑOR:

JUZGADO 03 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

ORÍGEN 07: CIVIL MUNICIPAL

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR BANCO COLPATRIA CONTRA ROBERTO LASPRILLA BARRAZA Y OTRO

RAD: 130014003007-201700-356-00

JOSE LUIS BAUTE ARENAS, de condiciones civil ya conocidas dentro del proceso de la referencia, por medio del presente me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva REQUERIR a la entidad CI SERVIEXPRESS MAYOR LTDA nombrada como secuestre para llevar a cabo la diligencia de secuestro del vehículo de placas UGK-196 para que rinda informe sobre dicha comisión.

Del señor Juez,

RECEIVED
Oficina de Ejecución Civil Municipal
FECHA: 12-07-2021
FIRMA: Lucra Arbelano

LITIGAMOS

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.

SEÑOR:

JUZGADO 03 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

ORIGEN 07 CIVIL MUNICIPAL

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR BANCO COLPATRIA
CONTRA ROBERTO LASPRILLA BARRAZA Y OTRO

RAD: 130014003007-201700-356-00

JOSE LUIS BAUTE ARENAS, de condiciones civil ya conocidas dentro del proceso de la referencia, por medio del presente me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva REQUERIR a la entidad CI SERVIEXPRESS MAYOR LTDA nombrada como secuestre para llevar a cabo la diligencia de secuestro del vehículo de placas UGK-196 para que rinda informe sobre dicha comisión.

Del señor Juez,

Atentamente,

JOSE LUIS BAUTE ARENAS
C.C. 3.746.303 de Pto Colombia
T.P. 68.306 del C.S de la J.

Elaborado por Maria Rivera

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-007-2017-00356-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-007-2017-00356-00
Demandante	BANCO COLPATRIA
Demandado	ROBERTO CARLOS LASPRILLA BARRAZA DIEGO FERNANDO LASPRILLA TORRES

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante visible a folio 63 del cuaderno de ejecución, en el cual solicita se requiera al secuestre a CI SERVIEXPRESS MAYOR LTDA para que informe al Despacho sobre la gestión delegada como secuestre.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en auto de fecha 03 de noviembre de 2020, se ordena en el numeral 2 de la parte resolutive que se secuestre vehículo de placas UGK 196, se capture, y se secuestre razón por la cual se ordena nombrar secuestre de las lista de auxiliares de la justicias, por lo que se requiere al auxiliar de la justicia CI SERVIEXPRESS MAYOR LTDA para rinda informe de lo delegado en auto de fecha 03 de noviembre de 2020.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTION UNICA: REQUERIR al auxiliar de la justicia CI SERVIEXPRESS MAYOR LTDA, para que informe de lo delegado en auto de fecha 03 de noviembre de 2020.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-007-2018-00157-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-007-2018-00157-00
DEMANDANTE	BANCO DE BOGOTÁ
DEMANDADO	SECOTEC S.A.S Y OTROS
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación ADICIONAL del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **siete millones ciento tres mil trescientos dieciocho pesos con 64/100 (\$7.103.318,64)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$16.369.954,62	Folio 36 CE
Liquidación adicional 1	7.103.318,64	Folio 53 CE
Liquidación de costas	\$3.558.173	Folio 46 CP

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2013-00952-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2013-00952-00
Demandante	INVERSIONES WELMEN
Demandado	JULIO CESAR TORRES MONTEGRO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 07 de marzo de 2018 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en los diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 07 de marzo de 2018.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 07 de marzo de 2018.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2014-00581-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2014-00581-00
Demandante	COOPERATIVA COASMEDAS
Demandado	ALVARO MORALES MERCADO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 10 de abril de 2018 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTs y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en las diferentes entidades bancarias. Considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 10 de abril de 2018 dirigido al BANCOLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 10 de abril de 2018 dirigido al BANCOLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2016-00266-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2016-00266-00
Demandante	BANCO DE OCCIDENTE
Demandado	SATURNINA CANTILLO DE RODRIGUEZ

Visto el memorial presentado por la parte demandante, a través del cual solicita el embargo del vehículo identificado con la placa BPZ 698 denunciado como propiedad del demandado SATURNINA CANTILLO, registrado en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Turbaco. En relación con lo anterior este Despacho accede a lo solicitado.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decrétese el embargo del vehículo de BPZ 698 denunciado como propiedad del demandado SATURNINA CANTILLO identificado con la CC No. 45.440.502.

SEGUNDO: Líbrese el oficio respectivo para la inscripción del embargo, dirigido a DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO, de conformidad a lo establecido en el # 1 del artículo 593 del C.G.P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2017-00158-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2017-00158-00
Demandante	BANCO PICHINCHA S.A
Demandado	GUSTAVO OSORIO Y OTRO
Asunto	Corrección de auto.

Se observa solicitud de corrección del auto que aprobó avalúo del inmueble toda vez que se señaló como valor la suma de \$12.393.653 siendo lo correcto la suma de \$28.870.000.00

Haciendo una revisión del precitado auto se encuentra que efectivamente le asiste razón a la togada judicial por lo que de conformidad al artículo 286 del C.G.P que señaló:

"Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (...) Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella."

De conformidad a lo anterior ésta Judicatura corregirá el auto de fecha 02 de Febrero de 2021 entendiendo que se aprueba el avalúo del vehículo en la suma de \$28.870.000 .
En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: CORREGIR el de fecha 02 de Febrero de 2021 entendiendo que se aprueba el avalúo del vehículo en la suma de \$28.870.000 por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

22/7/2021

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena - Outlook

RV: proceso ejecutivo de mínima cuantía radicado 1300-140-03-008-2018-00443-00 en caso de no resolverse este asunto debere pedir una vigilancia administrativa. adjunto alguno de los escritos que tengo

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 22/07/2021 8:55 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

area oficinas:

Estado 14-07-2021.
3EJE

6 archivos adjuntos (664 KB)

juzgado 3 de ejecuciones julio 20-21.doc; Requerimiento JAIRO JUZGADO 8.pdf; Requerimiento JAIRO JUZGADO 8.pdf; Requerimiento juzgado 8 JAIRO.pdf; REQUERIMIENTO AL CAJERO PAGADOR JAIRO 0.pdf; REQUERIMIENTO AL PAGADOR EMGESA 2.pdf;

De: yojaira fuentes guerrero <yojairafuentes@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 21 de julio de 2021 21:27

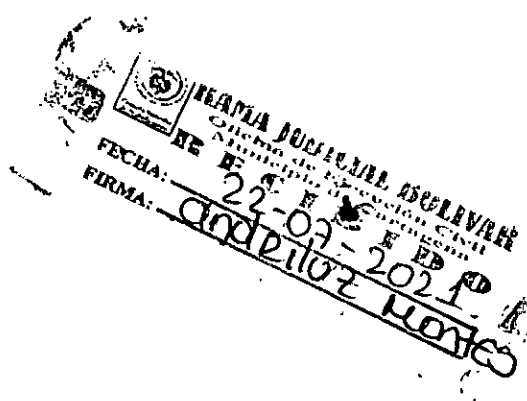
Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena

<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: proceso ejecutivo de mínima cuantía radicado 1300-140-03-008-2018-00443-00 en caso de no resolverse este asunto debere pedir una vigilancia administrativa. adjunto alguno de los escritos que tengo



Libre de virus. www.avast.com



71

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias D.T. y C., 09 diciembre de 2020

Oficio No. _____

Señores
JUZGADO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Ciudad

Ref. Rad. 130014003-008-2018-00443-00

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informarles que el día 26 de noviembre del 2020 recibimos solicitud de conversión de títulos judiciales, revisando el portal del Banco Agrario, existen depósitos judiciales para convertir pertenecientes al demandado **JAIRO LUIS SARMIENTO**, pero éstos no registran número de proceso 000000000000000000001951, Radicado diferente al cual nos piden conversión, por lo cual nos es difícil realizar tal operación dado que la solicitud para el proceso es diferente al año que registra en el portal.

Tipo Identificación		CEDULA DE CIUDADANIA		Número Identificación		9096372	
Nombres		JAIRO LUIS		Apellido		SARMIENTO MARRUGO	
Número Registros 26							
	Número Título	Documento Demandante	Nombres	Apellidos	Estado del Título	Fecha Emisión	Fecha Pago
VER DETALLE	412070002354183	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/05/2020	NO APLICA
VER DETALLE	412070002369225	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/07/2020	NO APLICA
VER DETALLE	412070002372765	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/07/2020	NO APLICA
VER DETALLE	412070002379813	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	28/08/2020	NO APLICA
VER DETALLE	412070002388543	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/09/2020	NO APLICA
VER DETALLE	412070002398175	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	04/11/2020	NO APLICA
Total Valor \$ 11.926.503,00							

Detalle del Título
NÚMERO TÍTULO
NÚMERO PROCESO
FECHA ELABORACIÓN
FECHA PAGO
CUENTA JUDICIAL
CONCEPTO
VALOR
ESTADO DEL TÍTULO
OFICINA PAGADORA
NÚMERO TÍTULO ANTERIOR
CUENTA JUDICIAL TÍTULO ANTERIOR

412070002388175
000000000000000000001951
04/11/2020
NO APLICA
130012941608
DEPÓSITOS JUDICIALES
\$ 1.239.503,00
IMPRESO ENTREGADO
SIN INFORMACIÓN
SIN INFORMACIÓN
SIN INFORMACIÓN

Por lo anterior y dado que actualmente el proceso se encuentra bajo el conocimiento los Juzgados de Ejecución Civil Municipal, solicitamos su valiosa colaboración a fin requieran al cajero pagador que se encarga de hacer los descuentos en cumplimiento de la medida de embargo, para que se sirva

suministrar la información de forma completa, incluyendo el No del radicado del proceso y de todos los descuentos realizados al demandado por cuenta de este proceso, toda vez que esto constituye un dato valioso, para la seguridad en la entrega de tales títulos, ya que un demandado pudiere tener uno o más procesos, solicitamos además informarles la manera correcta de consignar los descuentos realizados al demandado y de esta manera evitar futuros requerimientos.

Una vez sea suministrada la información completa que incluya el No del Radicado del proceso y los descuentos hechos al demandado, procederemos a su conversión.

Atentamente,

MIRIAM C. ESCORCIA ROCA
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias D.T. y C., 09 diciembre de 2020

Oficio No. _____

Señores
JUZGADO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Ciudad

Ref. Rad. 130014003-008-2018-00443-00

Cordial saludo
Por medio del presente me permito informarles que el día 26 de noviembre del 2020 recibimos solicitud de conversión de títulos judiciales, revisando el portal del Banco Agrario, existen depósitos judiciales para convertir pertenecientes al demandado **JAIRO LUIS SARMIENTO** , pero éstos no registran número de proceso 000000000000000000001951, Radicado diferente al cual nos piden conversión, por lo cual nos es difícil realizar tal operación dado que la solicitud para el proceso es diferente al año que registra en el portal .

Tipo Identificación Nombre		CEDULA DE CIUDADANIA JAIR LUIS		Número Identificación Apellido		9096372 SARMIENTO MAURUGO		Número Registros 26	
	Número Título	Documento Demandante	Nombre	Apellidos	Estado del Título	Fecha Emisión	Fecha Pago	Valor	
VER DETALLE	412070002354180	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/06/2020	NO APLICA	\$ 369.219,00	
VER DETALLE	412070002363225	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/07/2020	NO APLICA	\$ 304.597,00	
VER DETALLE	412070002371766	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/07/2020	NO APLICA	\$ 789.386,00	
VER DETALLE	412070002379813	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	28/08/2020	NO APLICA	\$ 859.551,00	
VER DETALLE	412070002389543	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/09/2020	NO APLICA	\$ 1.109.241,00	
VER DETALLE	412070002398175	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	04/11/2020	NO APLICA	\$ 1.239.595,00	
Total Valor \$ 11.926.503,00									

Detalle del Título	
NÚMERO TÍTULO	412070002398175
NÚMERO PROCESO	000000000000000000001951
FECHA ELABORACIÓN	04/11/2020
FECHA PAGO	NO APLICA
CUENTA JUDICIAL	130012041008
CONCEPTO	DEPÓSITOS JUDICIALES
VALOR	\$ 1.239.595,00
ESTADO DEL TÍTULO	IMPRESO ENTREGADO
OFICINA PAGADORA	SIN INFORMACIÓN
NÚMERO TÍTULO ANTERIOR	SIN INFORMACIÓN
CUENTA JUDICIAL TÍTULO ANTERIOR	

Por lo anterior y dado que actualmente el proceso se encuentra bajo el conocimiento los Juzgados de Ejecución Civil Municipal, solicitamos su valiosa colaboración a fin requieran al cajero pagador que se encarga de hacer los descuentos en cumplimiento de la medida de embargo, para que se sirva

suministrar la información de forma completa, incluyendo el No del radicado del proceso y de todos los descuentos realizados al demandado por cuenta de este proceso, toda vez que esto constituye un dato valioso, para la seguridad en la entrega de tales títulos, ya que un demandado pudiere tener uno o más procesos, solicitamos además informarles la manera correcta de consignar los descuentos realizados al demandado y de esta manera evitar futuros requerimientos.

Una vez sea suministrada la información completa que incluya el No del Radicado del proceso y los descuentos hechos al demandado, procederemos a su conversión.

Atentamente,

MIRIAM C. ESCORCIA ROCA
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias D.T. y C., 09 diciembre de 2020

Oficio No. _____

Señores
JUZGADO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Ciudad

Ref. Rad. 130014003-008-2018-00443-00

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informarles que el día 26 de noviembre del 2020 recibimos solicitud de conversión de títulos judiciales, revisando el portal del Banco Agrario, existen depósitos judiciales para convertir pertenecientes al demandado **JAIRO LUIS SARMIENTO** , pero éstos no registran número de proceso 000000000000000000001951, Radicado diferente al cual nos piden conversión, por lo cual nos es difícil realizar tal operación dado que la solicitud para el proceso es diferente al año que registra en el portal .

Tipo Identificación		Cedula de Ciudadanía		Número Identificación		Número Registros 25		
Nombre		JAIRO LUIS		Apellido		SARMIENTO MARRUGO		
		Número Título	Documento Demandante	Nombres	Apellidos	Estado del Título	Fecha Emisión	Fecha Pago
VER DETALLE		412070032354183	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/06/2020	NO APLICA
VER DETALLE		412070032363225	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	01/07/2020	NO APLICA
VER DETALLE		412070032371795	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/07/2020	NO APLICA
VER DETALLE		412070032379813	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	26/08/2020	NO APLICA
VER DETALLE		412070032388543	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	30/09/2020	NO APLICA
VER DETALLE		412070032398175	73208408	XAVIER	MARSIGLIA FUENTES	IMPRESO ENTREGADO	04/11/2020	NO APLICA
123.								
						Total Valor \$ 11.926.503,00		

Imprimir

Detalle del Título	
NÚMERO TÍTULO	412070032398175
NÚMERO PROCESO	000032000000000000001951
FECHA ELABORACIÓN	04/11/2020
FECHA PAGO	NO APLICA
CUENTA JUDICIAL	170012041658
CONCEPTO	DEPÓSITOS JUDICIALES
VALOR	\$ 1.239.503,00
ESTADO DEL TÍTULO	IMPRESO ENTREGADO
OFICINA PAGADORA	SIN INFORMACIÓN
NÚMERO TÍTULO ANTERIOR	SIN INFORMACIÓN
CUENTA JUDICIAL TÍTULO ANTERIOR	SIN INFORMACIÓN

Por lo anterior y dado que actualmente el proceso se encuentra bajo el conocimiento los Juzgados de Ejecución Civil Municipal, solicitamos su valiosa colaboración a fin requieran al cajero pagador que se encarga de hacer los descuentos en cumplimiento de la medida de embargo, para que se sirva

suministrar la información de forma completa, incluyendo el No del radicado del proceso y de todos los descuentos realizados al demandado por cuenta de este proceso, toda vez que esto constituye un dato valioso, para la seguridad en la entrega de tales títulos, ya que un demandado pudiere tener uno o más procesos, solicitamos además informarles la manera correcta de consignar los descuentos realizados al demandado y de esta manera evitar futuros requerimientos.

Una vez sea suministrada la información completa que incluya el No del Radicado del proceso y los descuentos hechos al demandado, procederemos a su conversión.

Atentamente,

MIRIAM C. ESCORCIA ROCA
Secretaria

74
3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA - BOLÍVAR

RADICACIÓN: No. 13001-40-03-008-2018-00443-00

Informe Secretarial: veintisiete (27) de julio del 2018, ingresa al Despacho con la solicitud de medidas cautelares visto a folio anterior.

MIRIAM ESCORCIA ROCA
SECRETARIA.

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.
y C. Treinta (30) de Julio del dos mil dieciocho (2018)

Vista la solicitud elevada por la parte ejecutante el juzgado dispone:

Decrétese el embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y demás sumas de dinero legalmente embargable que devengue el demandado **JAIRO LUIS SARMIENTO MARRUGO** identificado con C.C. No. 9.098.372 como empleado de EMGESA S.A Oficiése al pagador de dicha empresa, informando lo pertinente.

Decretase el embargo y retención de las sumas de dinero legalmente embargable, que posea el demandado **JAIRO LUIS SARMIENTO MARRUGO**, identificado con C.C. # 9.098.372, en las cuentas corrientes, de ahorro, CDT y demás modalidades financieras, en los diferentes bancos y corporaciones de esta ciudad. Librase oficio.

Sírvase poner a disposición del juzgado, por intermedio del Banco Agrario de Colombia, las sumas retenidas, con destino al presente proceso.

Limítese la cuantía provisionalmente en \$ 12.000.000.00

NOTIFÍQUESE

CLAUDIA CECILIA CASTILLO CASTILLO
JUEZ

AAL

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGENA

Notificado el auto anterior por notación en estado
de la fecha: 29 de julio 2018

No. de Estado: 1119

MYRIAM ESCORCIA ROCA
Secretaria



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias, 02 de Marzo de 2021
OFICIO No OECM-COVID19-1102

SEÑOR:
EMGESA S.A.
La ciudad

ACCION	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE	XAVIER MARSIGLIA FUENTES C.C. 73.208.408
DEMANDADO	JAIRO LUIS SARMIENTO MARRUGO C.C. 9.098.372
RADICADO	13-001-40-03-008-2018-00443-00

Cordial saludo,

Comunico a usted, que mediante auto de fecha Dieciséis (16) de Febrero de dos mil Veintiuno (2021), el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena, Resolvió:

CUESTIÓN ÚNICA: REQUERIR al cajero/pagador de EMGESA S.A. para que informe al despacho todas las consignaciones realizadas, y el número de radicado a donde ha estado realizando las mismas, toda vez que los títulos consignados al parecer tienen un numero de radicado 1951 diferentes a lo que debería.

Al contestar sírvase citar la referencia del proceso.

Atentamente,



SECRETARIO

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADO CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismo se le recuerda que OECMC no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente. La presente comunicación se publica con firma digital, atendiendo a la necesidad de nuevas estrategias de trabajo, en razón a las contingencias causadas por la pandemia mundial del COVID 19, se deja constancia que la información consignada en esta comunicación fue extraída del expediente judicial, y las identificaciones de la suministrada en la demanda. Así mismo que en cumplimiento del artículo 11 del decreto 806 de 4 de junio del 2020, la oficina realizara la notificación de la comunicación, siempre que la dirección electrónica sea de dominio público, o se encuentre suministrada en el expediente. En caso de solicitar alguna corrección de la comunicación, la solicitud deberá ser enviada al correo cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co indicando en el asunto CORRECCION DE OFICIO identificando el numero de la comunicación ejemplo CORRECCION DE OFICIO N° COVID- 01 y adjuntarlo, el cual se estudiará y será corregido en el turno correspondiente. Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismo se le recuerda que OECMC no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente.

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda – piso 2 oficina 212
cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 035-6602070
Cartagena -Colombia

Proyecto: SDA

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2018-0-0443-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2018-00443-00
Demandante	XAVIER MARSIGLIA FUENTES
Demandado	JAIRO SARMIENTO MARRUGO
Asunto	Requerir al cajero pagador.

Teniendo en cuenta lo informado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena esta autoridad oficiará al cajero pagador del sub examine a fin de que suministre la información de forma completa, incluyendo el radicado del proceso y de todos los descuentos realizados al demandado, en el término de 05 días contados a partir de la recepción, previniéndole en el sentido que, de hacer caso omiso a este requerimiento responderá por dichos valores e incurrirá en multa de 2 a 5 SMLMV, conforme al artículo 593 del CGP. En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar

SEGUNDO: Requerir al cajero pagador a fin de que suministre la información de forma completa, incluyendo el radicado del proceso y de todos los descuentos realizados al demandado, en el término de 05 días contados a partir de la recepción.

TERCERO: Prevéngase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P. y además, podrá hacerse acreedor de una compulsa de copias dirigida a la Procuraduría General de la Nación

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2018-00660-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-008-2018-00660-00
Demandante	COOPERATIVA JAYGLOCOOP
Demandado	EMILSA CASTILLO
Asunto	Medida cautelar

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el que solicita requerir al cajero pagador de la empresa SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA, para que explique las razones por las cuáles no ha cumplido la orden de embargo de lo que devengue el demandado EMILSA CASTILLO CARDONA como empleado de SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA.

Revisado el expediente, observa el Despacho que a través de auto de fecha 06 de septiembre de 2018 proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal Cartagena, se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende el demandado EMILSA CASTILLO CARDONA, identificada con C.C N° 30.770.650.499 como empleado de SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA, asimismo, se observa que dicha medida fue comunicada mediante Oficio, sin pronunciamiento alguno por parte del requerido.

Teniendo en cuenta lo antecedido, se ordenará requerir al cajero pagador de las empresas en mencion , a fin de que informe las razones por las cuales no ha seguido efectuando los descuentos ordenados en auto de fecha 06 de septiembre de 2018.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar.

SEGUNDO: Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador, de la empresa SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA, a fin de que explique las razones por las cuales no ha realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 06 de septiembre de 2018 por medio del cual se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende la demandada EMILSA

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-008-2018-00660-00

CASTILLO CARDONA identificada con C.C N° 30.770.650.499 como empleada de SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA.

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.

CUARTO: Prevéngase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2949cdb2794f1a41ac7c4bcc9658a26aa871ae312d5fad36ecf8e898705d4063**
Documento generado en 02/08/2021 08:00:12 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-009-2018-00160-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-009-2018-00160-00
DEMANDANTE	BANCO DE BOGOTÁ
DEMANDADO	MARIANITA GUETTE FERNANDEZ
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación ADICIONAL del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación ADICIONAL del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **veintitrés millones ciento sesenta y un mil trescientos treinta pesos con 15/100 (\$23.161.330,15)**

SEGUNDO: Ejecutoriado este auto y de no existir embargo de crédito, se ORDENA a la SECRETARÍA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA hacer entrega a la parte demandante, cesionario (s) y/o quien tenga facultad expresa para recibir en nombre de este y/o estos, de los títulos judiciales que se encuentren a favor de este proceso descontados a la parte demandada y pendientes de pago, de acuerdo a la información que arroje el sistema, hasta la concurrencia del crédito y de las costas, así:

Liquidación inicial	\$49.583.919,07	Folio 8 CE
Liquidación adicional 1	\$23.161.330,15	Folio 35 CE
Liquidación de costas	\$1.584.484	Folio 49 CP

ADVERTIR a la Secretaría, que los pagos deberán efectuarse previa revisión del sistema y del expediente, a fin de no cancelarse sumas superiores a la liquidación del crédito y costas, Asimismo, que las constancias de entrega de depósitos judiciales deberán allegarse con destino al presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-009-2018-00548-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-009-2018-00548-00
Demandante	BANCO DAVIVIENDA
Demandado	YOVANNA KARINA PALENCIA GUERRERO

Se observa que a través de memorial allegado al Despacho, la Dra. GLORIA MARIA ROMERO SALCEDO apoderado judicial de BANCO DAVIVIENDA, manifiesta que renuncia al poder otorgado por el representado, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, aportando constancia de la comunicación a su poderdante, con la confirmación de recibido, visible a folio 16 del cuaderno de ejecución.

Pues bien, por encontrarse ajustada tal actuación a los preceptos de ley el despacho accederá a la renuncia de poder planteada por el citado abogado de conformidad a lo preceptuado el inciso 4º del artículo 76 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE

CUESTION UNICA: ACCEDER a la renuncia de poder presentada por la Dra. GLORIA MARIA ROMERO SALCEDO, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-009-2018-00548-00

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7c09e734f584b01d01e0136260f4428818ba5475c38e6d87bf2f8e6127da2510

Documento generado en 02/08/2021 08:00:15 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Proceso Ejecutivo N°. 130014003009-2019-00323-00 Demandante: Banco Agrario de Colombia S.A. Demandado: Seguridad, Protección & Soldadura S.A.S. y Oscar Bermúdez Murillo. Juzgado de Origen: Noveno Civil Municipal de Cartagena – Bolívar.

procesos@tecnijuridica.com.co <procesos@tecnijuridica.com.co>

203-309

Vie 9/07/2021 11:58 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (218 KB)

SEGURIDAD, PROTECCIÓN & SOLDADURA S.A.S. Y OSCAR BERMÚDEZ MURILLO - J3ECMCARTAGENA.pdf;

Señor(a)

Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cartagena

– Bolívar.

cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

Ref.: Proceso Ejecutivo N°. 130014003009-2019-00323-00

Demandante: Banco Agrario de Colombia S.A.

Demandado: Seguridad, Protección & Soldadura S.A.S. y Oscar Bermúdez Murillo.

Juzgado de Origen: Noveno Civil Municipal de Cartagena – Bolívar.

Antonio Luis Atencia Pallares, actuando como apoderado especial del Banco Agrario de Colombia S.A., respetuosamente concurre ante usted, con la finalidad de solicitar se sirva decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro de los siguientes bienes propiedad de los demandados Seguridad, Protección & Soldadura S.A.S. y Oscar Bermúdez Murillo.

1. Cualquier suma de dinero que mantengan depositada o llegaren a depositar los demandados en cuentas corrientes, de ahorros y/o calidad de títulos Bancarios como C.D.T. o cualquier otro, en los siguientes Bancos:

- Banco W. S.A.
- Banco Finandina S.A.

Líbrese los oficios respectivos.

Recibo notificaciones en los siguientes canales digitales y/o tecnológicos:

Correos electrónicos: procesos@tecnijuridica.com.co

Celulares: 300-8369124 y 301-7065375.

Dirección física: Carrera 60 No. 64 - 49 Barranquilla - Atlántico.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, esta actuación no requiere firma manuscrita o digital.

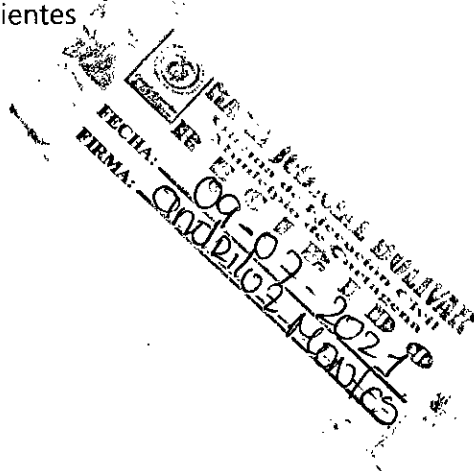
Señor Juez,

Antonio Luis Atencia Pallares.

C.C. 8.672.659 de Barranquilla.

T.P. 34.593 del C.S.J.

Apoderado especial del Banco Agrario de Colombia S.A.



Señor(a)

Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cartagena – Bolívar.
cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

Ref.: Proceso Ejecutivo N°. 130014003009-2019-00323-00

Demandante: Banco Agrario de Colombia S.A.

Demandado: **Seguridad, Protección & Soldadura S.A.S. y Oscar Bermúdez Murillo.**

Juzgado de Origen: Noveno Civil Municipal de Cartagena – Bolívar.

Antonio Luis Atencia Pallares, actuando como apoderado especial del Banco Agrario de Colombia S.A., respetuosamente concurre ante usted, con la finalidad de solicitar se sirva decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro de los siguientes bienes propiedad de los demandados Seguridad, Protección & Soldadura S.A.S. y Oscar Bermúdez Murillo.

1. Cualquier suma de dinero que mantengan depositada o llegaren a depositar los demandados en cuentas corrientes, de ahorros y/o calidad de títulos Bancarios como C.D.T. o cualquier otro, en los siguientes Bancos:

- Banco W. S.A.
- Banco Finandina S.A.

Librese los oficios respectivos.

Recibo notificaciones en los siguientes canales digitales y/o tecnológicos:

Correos electrónicos: procesos@tecnijuridica.com.co

Celulares: 300-8369124 y 301-7065375.

Dirección física: Carrera 60 No. 64 - 49 Barranquilla - Atlántico.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, esta actuación no requiere firma manuscrita o digital.

Señor Juez,

Antonio Luis Atencia Pallares.

C.C. 8.672.659 de Barranquilla.

T.P. 34.593 del C.S.J.

Apoderado especial del Banco Agrario de Colombia S.A.

Carrera 60 No. 64 – 49 Tels. 3605296/97/99

Cels. 3008369124 - 3017065375

E-mail: procesos@tecnijuridica.com.co

Barranquilla – Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-009-2019-00323-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-009-2019-00323-00
Demandante	BANCO AGRARIO
Demandado	SEGURIDAD, PROTECCION & SOLDADURA SAS OSCAR BERMUDEZ MURILLO
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado de la parte ejecutante solicitando que proceda a embargar las cuentas y dineros que se encuentren en las diferentes entidades bancarias a nombre del demandado.

Realizando una búsqueda en el expediente, se observa auto de fecha 13 de mayo de 2019 el cual ordena el embargo y retención de las sumas de dineros, CDTS y demás emolumentos que el demandado tenga depositados en cuenta corriente, ahorros o cualquier otro título bancario o financiero posea la sociedad, en las diferentes entidades bancarias. considera este Despacho ordenar a la secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 13 de mayo de 2019 dirigido al BANCO W Y BANCO FINANDINA SA.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la actualización de la medida cautelar

SEGUNDO: ORDENAR Secretaria de la Oficina de Apoyo a los Juzgado de Ejecución que libre nuevos oficios de conformidad con lo ordenado en el proveído de fecha 13 de mayo de 2019 dirigido al BANCO W Y BANCO FINANDINA SA.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

RV: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BANCOOMEVA CONTRA LUBIS OJEDA ROMERO-
TERMINACION POR PAGO TOTAL

MANUEL DE JESUS CARDOZO PATERNINA <manueldejcardozop@hotmail.com>

Lun 19/07/2021 12:52 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (466 KB)

TERMINACION PAGO TOTAL LUBIS OJEDA.pdf:

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

REF: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BANCOOMEVA CONTRA LUBIS OJEDA ROMERO.

RAD: 00884-2008

MANUEL DE J. CARDOZO P; mayor, domiciliado y residenciado en esta ciudad, identificado con CC. No. 92.505.650 de Sincelejo, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. N° 92.505.650 con T. P. No. 85.641 del C. S. de la J., conocido en autos, como apoderado judicial de la parte ejecutante, respetuosamente me permito solicitar se sirva decretar la terminación del proceso de la referencia por pago total de la obligación demandada.

En consecuencia, señor juez, ordene sin lugar a costas, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas ya que no existe en el expediente orden judicial proveniente de otros despachos judiciales que solicite el embargo de remanente.

Es de anotar en caso de que existan depósitos judiciales producto de los embargos efectuados estos deben ser entregados al demandado.

Recibo notificaciones en las siguientes direcciones de correo electrónico:

manueldejcardozop@hotmail.com

macapate@yahoo.com

manueldejcardozop2@gmail.com

Celular: 300-6009072

Cordialmente,

MANUEL DE J. CARDOZO P.

Abogado

Universidad de Cartagena

Especialista en Derecho Procesal UNILIBRE

Dirección: Centro. Av. Daniel Lemaitre No 9-45

Edificio Banco del Estado Oficina 305

Teléfonos: (5) 6648817 -Cel.: 3006009072

Cartagena de Indias

29 2

Señor.
JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

REF: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BANCOOMEVA
CONTRA LUBIS OJEDA ROMERO.

RAD: 00884-2008

MANUEL DE J. CARDOZO P; mayor, domiciliado y residenciado en esta ciudad, identificado con CC. No. 92.505.650 de Sincelejo, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. N° 92.505.650 con T. P. No. 85.641 del C. S. de la J., conocido en autos, como apoderado judicial de la parte ejecutante, respetuosamente me permito solicitar se sirva decretar la terminación del proceso de la referencia por pago total de la obligación demandada.

En consecuencia, señor juez, ordene sin lugar a costas, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas ya que no existe en el expediente orden judicial proveniente de otros despachos judiciales que solicite el embargo de remanente.

Es de anotar en caso de que existan depósitos judiciales producto de los embargos efectuados estos deben ser entregados al demandado.

Recibo notificaciones en las siguientes direcciones de correo electrónico:

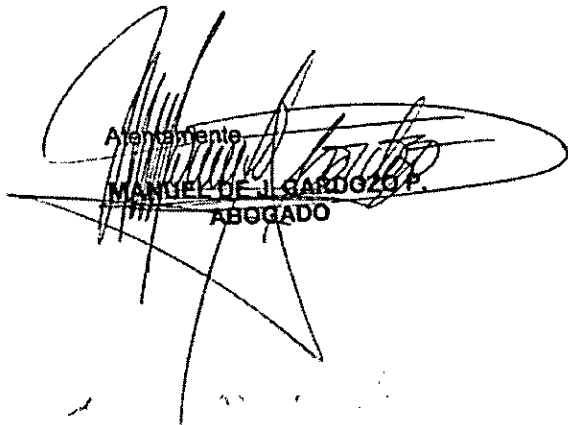
manueldejcardozop@hotmail.com

macapate@yahoo.com

manueldejcardozop2@gmail.com

Celular: 300-6009072

Atentamente,

Atentamente,

MANUEL DE J. CARDOZO P.
ABOGADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

803-132

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-010-2008-00884-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-010-2008-00884-00
Demandante	BANCOOMEVA
Demandado	LUBIS OJEDA
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante su apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el apoderado judicial de la parte demandante con facultad para recibir tal como consta a folio 05 del c.p . Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello.



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO

Juez

43
Muelle
Bolivar
J03

Re: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

gilberto luis perez <glpt1286@hotmail.com>

Mié 21/07/2021 8:36 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día,

Señores centro de servicio de ejecución

Lo solicitado es por medio de Poder y memorial aportado, para el desarchivo y reconocimiento de personería jurídica y posterior entrega de títulos, por lo tanto insisto en que se siga adelante el procedimiento interno, para que sea resuelta mi solicitud

Get [Outlook para Android](#)

From: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sent: Wednesday, July 21, 2021 8:33:29 AM

To: gilberto luis perez <glpt1286@hotmail.com>

Subject: RE: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

Cartagena Distrito Turístico y Cultural 21-07-2021

Sr Usuario

Cordial Saludo

Las solicitudes para entrega de títulos debe presentarlas mediante el siguiente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiww_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVTQVQwME1GVIIISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u

Lo anterior, para que sean resueltas en el orden debido.

El horario en que se encuentra habilitado el link es de 8:00am a 12:00m y de 1:00pm - 5:00pm , no obstante obedeciendo a su solicitud el proceso se pasara al despacho

Att:

Norma Perez Cerpa

Auxiliar Administrativo Grado 5.

De: gilberto luis perez <glpt1286@hotmail.com>

Enviado: lunes, 19 de julio de 2021 5:09 p. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

De: gilberto luis perez

Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 11:53 p. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

SEÑOR:

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION CIVIL DE CARTAGENA

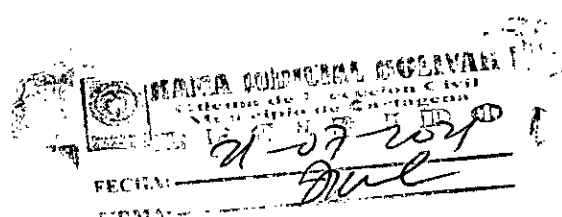
E. S. D.

DEMANDANTE: CUMULTINAGRO

DEMANDADO: CARMEN TULIA GAVIRIA DE ALVAREZ

RAD: 13001-40-03-010-2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

EJECUTIVO SINGULA



ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES



RE: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 21/07/2021 8:33 AM

Para: gilberto luis perez <glpt1286@hotmail.com>

Cartagena Distrito Turístico y Cultural 21-07-2021

Sr Usuario

Cordial Saludo

Las solicitudes para entrega de títulos debe presentarlas mediante el siguiente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiwv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVT0VQwME1GVlISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u

Lo anterior, para que sean resueltas en el orden debido.

El horario en que se encuentra habilitado el link es de 8:00am a 12:00m y de 1:00pm - 5:00pm , no obstante obedeciendo a su solicitud el proceso se pasara al despacho

Att:

Norma Perez Cerpa

Auxiliar Administrativo Grado 5.

De: gilberto luis perez <glpt1286@hotmail.com>

Enviado: lunes, 19 de julio de 2021 5:09 p. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

De: gilberto luis perez

Enviado: jueves, 15 de julio de 2021 11:53 p. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SOLICITUD DAR TRAMITE RAD 2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

SEÑOR:

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION CIVIL DE CARTAGENA

E. S. D.

DEMANDANTE: CUMULTINAGRO

DEMANDADO: CARMEN TULIA GAVIRIA DE ALVAREZ

RAD: 13001-40-03-010-2012-00565-00 ORIGEN 10 CIVIL MUNICIPAL

EJECUTIVO SINGULA

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-010-2012-00565-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-010-2012-00565-00
Demandante	COOMULTINAGRO
Demandado	CARMEN GAVIRIA DE ALVAAREZ
Asunto	Estar a lo resuelto

Se observa memorial presentado por la parte demandada solicita la entrega de títulos judiciales.

Si se hace una revisión del expediente se tiene que en auto de fecha 26 de Julio de 2017 se ordenó la entrega de títulos judiciales a la parte ejecutada y o quien tenga facultad para recibir, por lo tanto, debe estar a lo allí resuelto. En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: ESTARSE a lo resuelto en auto de fecha 26 de Julio de 2017 , por lo expresado en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-010-2013-00910-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-010-2013-00910-00
Demandante	NEYLA MARGARITO FLOREZ DE VOZ
Demandado	MAGALIS ACEVEDO MARZAN
Asunto	MEDIDA CAUTELAR

Estando al Despacho el proceso de la referencia, se advierte memorial allegado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el cual solicita decretar el embargo de fiducias, cuentas corrientes, ahorro, CDT, y demás, que posea el demandado MAGALIS ACEVEDO MARZAN, en los diferentes bancos y entidades financiera del país.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR el embargo y secuestro de los dineros legalmente embargables de fiducia, CDT, cuentas de ahorro, corrientes y demás que posea el demandado MAGALIS ACEVEDO MARZAN con CC N° 45.439.934 en los diferentes bancos del país.

Limitese la cuantía en la suma de \$ 14.250.000 pesos.

SEGUNDO: Por secretaría librense los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-010-2013-00910-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7c71a5dbfaac264a54c21d73f9d2d860084afc57e89251e45b8f3604f25da1e7

Documento generado en 02/08/2021 08:00:19 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-010-2017-00965-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-010-2017-00965-00
Demandante	BANCO DE BOGOTA
Demandado	MARGARET EDILMA RIOS SILVA
Asunto	Medida Cautelar

Se advierte en el expediente, oficio S-2021 – 00213/ DITRA-SETRA-UNIR 29.25 de 12 de mayo de 2021, manifestando que deja a disposición el vehículo de placas IRL 474, de propiedad de JAIME ANDRES ORLANDO CANO, el cual se deja en el parqueadero SINU YA dirección calle 28N° 8-58 en la ciudad de Montería.

En relación a lo anterior se comisiona al Juzgado Civil Municipal de Montería a fin de que practique la diligencia de secuestro del vehículo de placas IRL 474 de propiedad de JAIME ANDRES ORLANDO CANO, que se encuentra en el parqueadero SINU YA con facultades para nombrar al secuestre encargado para dicha diligencia, el cual deberá rendir un informe mensual detallado respecto de las gestiones realizadas como auxiliar de las justicia dentro del proceso de la referencia

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETESE el SECUESTRO del vehículo de placas IRL 474 de propiedad del demandado JAIME ANDRES ORLANDO CANO.

SEGUNDO: Comisionar al Juzgado Civil Municipal de Montería a fin de que practique la diligencia de secuestro del vehículo de placas IRL 474 de propiedad de JAIME ANDRES ORLANDO CANO, que se encuentra en el parqueadero SINU YA dirección calle 28N° 8-58 en la ciudad de Montería, con facultades para nombrar al secuestre encargado para dicha diligencia, el cual deberá rendir un informe mensual detallado respecto de las gestiones realizadas como auxiliar de las justicia dentro del proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:
Luis Alfredo Junieles Dorado

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-010-2017-00965-00

Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e634c403328d92bb81cad5c924357a1ec58f67bd4cf3c4a2d14fea9727d776ac**
Documento generado en 02/08/2021 08:00:21 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-011-2014-00388-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-011-2014-00388-00
Demandante	BANCOOMEVA
Demandado	ANIBAL SANTIAGO LARA BOSSA

Advierte el despacho a folio 14 del cuaderno de ejecución, memorial presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante, a través del cual solicita se decrete el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier forma de captación legal tenga o llegare a tener el demandado ANIBAL SANTIAGO LARA BOSSA, como empleado de INVERSIONES LINCOND ROAD LTDA. Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciba el demandado ANIBAL SANTIAGO LARA BOSSA, identificada con C.C. No. 9.290.204, como empleado del INVERSIONES LINCOND ROAD LTDA.

Limítese la cuantía en la suma de \$27.974.025 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-011-2014-00388-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

c6a3de2bfe0fdf992e87cf2dccd0b5c1f18032fb4d8f6c4acab92d5ba0a4e25a

Documento generado en 02/08/2021 08:00:23 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

16/6/2021

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena - Outlook

Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Vie 4/6/2021 9:12 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>; IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Buen día

Señor Juez

Cordial saludo

Me dirijo nuevamente con el fin de conocer cómo va mi caso correspondiente a la devolución de los depósitos judiciales a mi nombre, ya que Ingreso a la página de la rama judicial y desde el 1 de junio de 2021 se actualizo la página un comentario de memorial al despacho y respuesta de solicitud, pero hasta el momento no me han notificado nada, quisiera por favor pedirle me ayude con mi caso para que se me pueda hacer la devolución del dinero ya que me encuentra a paz y salvo con banco de Bogotá gracias a un acierto extrajudicial que hicimos en el trascurso del embargo, está información la pueden corroborar en toda la documentación que he venido enviado en los correos

Relaciono número de radicado
13001400301120160084200

Muchas gracias y estaré atento a su amable respuesta

El lun., 31 de mayo de 2021 12:09 p. m., IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co> escribió:
Buen Día Señor Juez

Por medio del presente me dirijo a ustedes nuevamente con el fin de conocer cómo se encuentra el estado de proceso correspondiente a la devolución de unos depósitos judiciales a mi nombre, teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, he ingresado en varias ocasiones a la página de la rama judicial, donde la información de arroja es que desde el día 24 de mayo de 2021 el proceso no se mueve de RECEPCIÓN DE MEMORIAL - SOLICITUD DE TÍTULOS -DIANA, como lo he manifestado en correos anteriores he estado enviado y recibiendo información durante 6 meses para poder recibir esos títulos, pero nunca es claro que más se necesita para poder terminar con este proceso, ya que desde hace 6 meses me encuentro a paz y salvo con el banco de bogotá, por este motivo adjunto toda la documentación que certifica lo que estoy nombrando.

Agradezco mucho su colaboración y estare atento a su respuesta

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

El lun, 24 de may. de 2021 a la(s) 12:55, IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ (ivillamil396@uan.edu.co) escribió:
Buen Día Señor Juez

Cordial saludo

Nuevamente me dirijo a su despacho con el fin de pedirle muy amablemente me oriente diciéndome como va mi proceso de devolucion de depositos judiciales a mi nombre, por más de 6 meses vengo con este proceso, enviando y recibiendo correos e información que me solicitan una y otra y otra vez y pues en este momento como lo informé en el memorial yo ya me encuentro a paz y salvo con el banco de bogota quien ere el demandante, vuelvo a enviar nuevamente toda la información junto con un derecho de petición, donde ustedes puede corroborar que no tengo ninguna deuda con el banco de bogota gracias a un acuerdo de pago extrajudicial que hicimos en medio del embargo.

Escribo insistentemente ya que me encuentro en un momento difícil y este es el único dinero con el que puedo contar para cubrir otras obligaciones.

Número de Radicado: 13001400301120160084200

Relacióno nuevamente número de radicado de mi caso

Le agradezco mucho su ayuda

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

----- Forwarded message -----

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Date: vie, 21 de may. de 2021 a la(s) 10:06

Subject: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

To: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día

011-2016-842

3

Memorial al
despacho 3/
Urgente pasar
al Jefe de
Ejecución 3.

OFICINA JUDICIAL DE APOYO
JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

PASA AL DESPACHO FECHA 21-06-2021

MEMORIAL X EXPEDIENTE

JUZGADOS DE EJECUCION 1° 2° 3° X

SECRETARIA

04-06-2021
recepcionado

Teniendo en cuando el requerimiento que ha realizado respecto a la devolución de los depósitos judiciales a mi nombre y además con toda la información que he adjuntado, es posible por favor indicarme para cuando quería programada la devolución de estado depósitos judiciales a mi nombre??

Y'que mas información necesitan de mi parte???

13001400301120160084200

Relacióno nuevamente número de radicado de mi caso

Estaré atento a su amable respuesta

El jue., 20 de mayo de 2021 4:01 p. m., IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co> escribió:

Muchas gracias

Por favor me puede indicar con el recibo del número de radicado y toda la documentación que he enviado, cuanto tiempo más debo esperar para la devolución de los depósitos judiciales

Yo entiendo que esto es un trámite demorado pero por favor la verdad necesito poder resolver este tema y recuperar mi dinero

Gracias

El jue., 20 de mayo de 2021 3:54 p. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena

<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

RECIBIDO.

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 3:52 p. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>; daniel ariza <servicio.cliente@bancoagrario.gov.co>

Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día

Solicito muy amablemente por favor me confirmen si recibieron el número de radicado de mi caso para la devolución de los depósitos judiciales a mi nombre por favor

Relacióno número radicado

13001400301120160084200

Me confirma recibido

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

El jue, 20 de may. de 2021 a la(s) 10:10, IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ (ivillamil396@uan.edu.co) escribió:

Buen día

Relacióno número radicado

13001400301120160084200

Me confirma recibido

El jue., 20 de mayo de 2021 10:03 a. m., IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co> escribió:

Buen día

Relaciono número de radicado:

13001400301120160084200

Me confirma recibo de la información

El jue., 20 de mayo de 2021 10:01 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena

<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

Cartagena, 20-05-2021

Apreciado **usuario (a)**

Reciba un cordial saludo,

El memorial enviado por usted, no contiene el radicado completo el cual contiene 23 dígitos y las partes del proceso las cuales garantizan la identificación certera de su proceso, agradecemos nos suministre la información, para proceder con el trámite correspondiente.

Atentamente,

ANDRILUZ MONTES
Auxiliar Administrativo Grado 5

Apoya: LJSP

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 9:17 a. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día

Envío en correo con el fin de que me den información de mi caso correspondiente a la devolución de unos depósitos judiciales a mi nombre
Por favor son tan amables de indicarmen si recibieron la información que envíe anoche por correo electrónico dónde manifiesto mi inconformidad con la decisión de mi caso

----- Forwarded message -----

De: Juzgado 11 Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: jue., 20 de mayo de 2021 9:13 a. m.
Subject: RE: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556
To: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Tal como se indicó en correo anterior, el pantallazo adjunto, evidencia que los títulos judiciales ya no se encuentran a órdenes de este Despacho, sino que a la fecha se encuentran a órdenes de la Oficina de Ejecución Civil, ante la cual debe hacer las solicitudes pertinentes.

Cordialmente,

AURA CRISTINA AGUILAR PEÑA
SECRETARIA

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 9:10
Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Agradezco mucho si información y pido disculpas si soy reiterativo con los correos, pero por favor me puede explicar esto que aparece en el pantallazo que significa??
Esto quiere decir que ya me puede acercar al banco a reclamar los depósitos??
Ya esta autorizado la entrega de los depósitos a mi nombre??
Por favor me ayudan con esa información porque la verdad aunque está ahí la información no es claro para mi

El jue., 20 de mayo de 2021 9:00 a. m., Juzgado 11 Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Se remite adjunto.

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 8:58
Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena <depjudofecmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>; daniel ariza <servicio.cliente@bancoagrario.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Gracias por su respuesta

Por favor me envía nuevamente el pantallazo ya que no llego adjunto en este correo

El jue., 20 de mayo de 2021 8:56 a. m., IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co> escribió:
Buen día

Gracias por su respuesta

Por favor me envía nuevamente el pantallazo ya que no llego adjunto a este correo que estoy respondiendo

El jue., 20 de mayo de 2021 8:53 a. m., Juzgado 11 Civil Municipal - Bolivar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Buenos días,

De conformidad con su solicitud, se informa en primer lugar, que el proceso de la referencia se encuentra en conocimiento de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal, razón por la cual, son los facultados para resolver cualquier solicitud que se eleve respecto del mismo.

En igual sentido, en caso de requerir conversión de depósitos judiciales, deberán ser solicitados por el Juzgado de conocimiento.

De igual forma, se adjunta pantallazo en el que constan los depósitos judiciales que ya han sido convertidos en su oportunidad.

Atentos sobre el particular.

Cordialmente,

AURA CRISTINA AGUILAR PEÑA
SECRETARIA

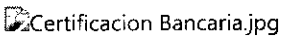
De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Enviado: miércoles, 19 de mayo de 2021 22:37

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <j11cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena <depjudofecmcgna@cendoj.ramajudicial.gov.co>; IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Cc: daniel ariza <servicio.cliente@bancoagrario.gov.co>

Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

 Certificacion Bancaria.jpg
Buen Dia Cesar y Señor Juez

Cordial

Teniendo en cuenta el documento que me envía adjunto como respuesta del cesar Juez, veo que existe un error o ese documento no corresponde a mi caso, ya que en mi caso el demandante es el banco de bogotá, no bancolombia y el número de radicado que aparece allí no corresponde al número de radicado que tengo asignado a mi caso, le pido por favor muy amablemente que corrobore la información que me está enviando, adicional a este envío adjunto un memoria y todos los documentos soporte para que por favor se evalúe nuevamente mi caso, ya que actualmente se encuentra al día, a paz y salvo con el banco de bogotá gracias a un acuerdo de pago extrajudicial que hice con esta entidad donde cancele la suma acordada para sanar la deuda
Pido muy amablemente claridad en mi caso ya que esta información que vuelvo a enviar ustedes la tienen en su poder hace mucho tiempo
Reitero, envío toda la documentación soporte que corresponde a acuerdo de pago, consignaciones, paz y salvo etc, ademas envio certificación bancaria a mi nombre y memorial de reclamación

Gracias por su pronta respuesta

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

El mar, 18 de may. de 2021 a la(s) 12:59, Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
SE ADJUNTA AUTO EL CUAL NO DECRETAR LA TERMINACION DEL PROCESO POR LO QUE NO ES POSIBLE PAGAR LOS TITULOS A LA PARTE DEMANDADA.

CESAR CERON
ASISTENTE, ADMINISTRA., GRADO 5

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Enviado: martes, 18 de mayo de 2021 11:31 a. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Entiendo, pero si en la página dice que la fecha de finalización del termino es el 10 de mayo, porque a hoy 18 de mayo no tengo ninguna respuesta??
En última lo que me gustaría saber es para cuando está la autorización para poder reclamar eso depositos judiciales a mi nombre

El mar, 11 de mayo de 2021 9:47 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Buen día,

Debe esperar el turno para que su solicitud sea resuelta.

Gracias

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Enviado: martes, 11 de mayo de 2021 9:43 a. m.

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día

Entiendo eso, pero ingreso a link y realizó toda la ruta que me indica y no aparece por ningún lado

El mar., 11 de mayo de 2021 9:38 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
SEÑOR USUARIO.

TODAS LAS SOLICITUDES DE TITULOS, SON RESUELTAS A TRAVES DEL LINK QUE SE LE ENVIÓ.

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: martes, 11 de mayo de 2021 9:19 a. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Sra Diana Castillo

Buen día

Y este correo que me envía que quiere decir??
Que ya puedo diligenciar el formulario para que me hagan la devolución de los títulos???

El mar., 11 de mayo de 2021 9:17 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

Cartagena, 11-05-2021

Apreciado **usuario (a)**

1. AREA DE TITULOS

- 1. La Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecución **no** está entregando o enviando pantallazo o consolidados, de descuentos, por lo que, le informamos que el Banco Agrario de Colombia habilitó canales para realizar consultas a través de su página web y la línea gratuita 018000915000.
- 2. El agendamiento y solicitud de entrega de depósitos/Títulos Judiciales, se realizarán exclusivamente mediante el siguiente vinculo, nosotros les responderemos con las instrucciones a seguir:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiWv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVT0VQwME1GVlISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u

Tenga en cuenta que este formulario se encuentra disponible en la página de la Rama judicial www.ramajudicial.gov.co, opción JUZGADO DE EJECUCION, opción JUZGADO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL, opción BOLIVAR, opción Cartagena, opción AVISOS A LA COMUNIDAD, allí encontrara el link para agendamiento de fecha para entrega de título, y código QR, para celulares y tabletas.

DIANA CASTILLO C
Auxiliar Administrativo Grado 5

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: martes, 11 de mayo de 2021 9:01 a. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buenos días

Señor Juez

Cordial saludo

Cómo me indico en la parte inferior del correo he venido revisando la página de la rama judicial donde dice que el proceso Tiene como fecha de terminación del termino para el 10 de mayo, sin embargo al momento de consultar el proceso no se mueve desde el 06 de mayo

Muy amablemente solicito por favor de diga cuando podré tener la devolución de mi dinero la verdad como lo he hecho saber en correos anteriores lo necesito.

Muchas gracias, adjunto pantallazo de la rama judicial

El mar., 4 de mayo de 2021 9:58 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Cartagena, 04-05-2021

Apreciado Usuario (a)

El proceso sale en estado el día de mañana, mañana es que puede consultarlo en la página de la Rama Judicial.

Atentamente,

JHOANA SEGURA
Auxiliar Administrativo Grado 5

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMÉNEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 9:28 a. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día

Teniendo en cuenta que hoy se actualizo la página La página de la rama judicial, serían tan amables por favor de explicarme esto que aparece nuevo con fecha de hoy a que se refiere??

Gracias

El jue., 29 de abril de 2021 7:09 a. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Cartagena, 29-04-2021

Apreciado Usuario (a)

Le informamos que revisada la base de datos se encuentra que el proceso de la referencia se encuentra actualmente en el Despacho (Esta información la puede consultar a través de la opción consulta de proceso que se encuentra en la página de la Rama Judicial), de igual forma se le envía el formulario que debe diligenciar para cuando el proceso salga de esta área, lo diligencia y programe la entrega de títulos.

AREA DE TITULOS

1. La Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecución **no** está entregando o enviando pantallazo o consolidados, de descuentos. por lo que, le informamos que el Banco Agrario de Colombia habilitó canales para realizar consultas a través de su página web y la línea gratuita 018000915000.
2. El agendamiento y solicitud de entrega de depósitos/Títulos Judiciales, se realizarán exclusivamente mediante el siguiente vinculo, nosotros les responderemos con las instrucciones a seguir:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiWv_JrZnHpNMrTnU-vMGI3BURVVTOVQwME1GVlISRFpQUzFOM0ZBODE2WS4u

Tenga en cuenta que este formulario se encuentra disponible en la página de la Rama judicial www.ramajudicial.gov.co, opción JUZGADO DE EJECUCION, opción JUZGADO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL, opción BOLIVAR, opción Cartagena, opción AVISOS A LA COMUNIDAD, allí encontrara el link para agendamiento de fecha para entrega de título, y código QR, para celulares y tabletas.

Atentamente,

ANDRILUZ MONTES
Auxiliar Administrativo Grado 5

Apoya: LJSP

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 5:04 p. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día

Relación nuevamente número de radicado, el cual también aparece en el pantallazo que envíe, el cual ustedes tienen conociendo porque fue el que me asignaron, el cual sobre ese me han respondido varias veces y en ocasiones con la misma respuesta que me está entregando que le falta un dígito, sin embargo lo relacionado de nuevo con el fin de que por favor me ayuden con mi caso:

13001400301120160084200

Gracias

El mié., 28 de abril de 2021 4:59 p. m., Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Cartagena, 28-04-2021.

Apreciado **usuario (a)**

Reciba un cordial saludo,

El memorial enviado por usted, no contiene el radicado completo el cual contiene 23 dígitos que garantizan la identificación certera de su proceso, agradecemos nos suministre la información, para proceder con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Cesar ceron
Auxiliar Administrativo Grado 5

Apoya:

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 11:22 a. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>; IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Asunto: Fwd: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen Dia Señor Juez

Cordial Saludo

De la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de querer conocer que a pasado con mi caso correspondiente a la devolución de unos depósitos judiciales a ni nombre, segun la pagina de la rama judicial el proceso pasó al despacho con informe secretarial desde el día 19 de abril de 2021 y hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta, yo entiendo que estos procesos tardan y que son de mucha paciencia, sin embargo desde el mes de enero estoy con esto y además es que necesito el dinero.

Adjunto pantallazo del proceso y agradezco mucho su pronta respuesta

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

----- Forwarded message -----
De: **Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena**
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: mié, 28 de abr. de 2021 a la(s) 10:57
Subject: RE: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556
To: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>

Sr
Usuario
Cordial Saludo

Esta es la oficina de depósitos, si necesita comunicarse con el señor Juez lo puede hacer mediante memorial al correo de la secretaria cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

Att:

María Luisa Rueda
Auxiliar administrativo grado 5

De: IVAN DAVID VILLAMIL JIMENEZ <ivillamil396@uan.edu.co>
Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 9:42
Para: Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena
<depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No. 4556

Buen día Señores
Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena

De la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de querer conocer que a pasado con mi caso correspondiente a la devolución de unos depósitos judiciales a ni nombre, segun la pagina de la rama judicial el proceso pasó al despacho con informe secretarial desde el día 19 de abril de 2021 y hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta, yo entiendo que estos procesos tardan y que son de mucha paciencia, sin embargo desde el mes de enero estoy con esto y además es que necesito el dinero.

Adjunto pantallazo del proceso y agradezco mucho su pronta respuesta

Ivan David Villamil
Ing. Industrial
Movil. 313-8068680

El mié, 7 de abr. de 2021 a la(s) 14:17, Depositos Judiciales - Oficina Ejecucion Civil Municipal - Cartagena (depjudofecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:
Cartagena de Indias, D. T. y C., 7 de abril de 2021.

Estimado
Usuario
ESM

Ref.:	
Respuesta a la solicitud de entrega de depósitos No.	4556
Fecha de presentación de la solicitud	17-03-2021
Radicado	13001400301120160084200

Cordial saludo,

De conformidad con la solicitud que viene presentada por usted en el cual pide se elaboren depósitos judiciales, nos permitimos informarle que verificado el sistema, su proceso se encuentra ingresado al **despacho** desde el día **23 de marzo de 2021** razón por la cual la Oficina de Títulos/Depósitos Judiciales, no podrá darle tramite a su solicitud, al no tener acceso al expediente, solicitamos realice el seguimiento del proceso a través de la página de la Rama judicial, opción consulta de procesos <https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=ay0OhZ9rbxiOP8LGg3vygCJx4%3d>, y una vez verifique que el proceso ha salido del despacho y su providencia se encuentra ejecutoriada, diligencie nuevamente el link para el agendamiento de su fecha.

Atentamente,

LUZ MERY PELUFFO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 5

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-011-2016-00842-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-011-2016-00842-00
Demandante	BANCOLOMBIA S.A
Demandado	IVAN VILLAMIL JIMENEZ
Asunto	No accede a la terminación del proceso.

Se observa memorial presentado por la parte demandada en el que manifiesta que a la fecha no se le ha dado trámite al memorial de terminación del proceso por pago total de la obligación.

Si se hace una revisión del expediente se observa que se aprobó la liquidación del crédito por valor de \$17.242.766 y las costas aprobadas por la suma de \$428.000 es decir, la suma de \$17.670.766.00.

Mediante constancia secretarial se allega relación de depósitos judiciales pero los mismos ascienden a la suma de \$3.152.956 es decir, no cumple con el monto total de la obligación por ende, no es procedente acceder a ello.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. (...) Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

Por lo expuesto, y al no constatarse la existencia de títulos judiciales a favor de la parte demandante, aún en el sub lite NO se colman las exigencias anotadas; y no es dable acceder a la terminación del proceso por pago total de la obligación. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: No acceder a la solicitud de terminación de terminación del proceso por pago total de la obligación por lo expresado en la parte motiva.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-011-2016-00842-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2009--00662-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-012-2009-00662-00
Demandante	NORMA DE LEÓN HERRERA
Demandado	BANCO POPULAR S.A
Asunto	Terminación por pago.

En el proceso de la referencia se aprobó la liquidación del crédito (folio 60 del C.P) por la suma de \$5.714.937, y las costas por la suma de \$781.242.00. (Folio 54 C.E), para un monto total de la obligación por \$6.496.179.

Mediante constancia secretarial, visible a folio 133 del C.E, de fecha se informa a ésta autoridad que la totalidad de lo establecido por el crédito y costas del proceso ha sido entregada a la parte ejecutante hasta el monto total de la obligación.

Se observan formatos DJ04 visibles a folio 67, 47 y folio 60 del C.E, en el expediente que dan cuenta de los depósitos judiciales. entregados a la parte demandante en la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución, por la totalidad del monto total de la obligación esto es la suma de \$6.496.179.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. (...) Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. Por lo precedente el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Una vez ejecutoriado el auto se archive el proceso”. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: Dese por terminado el proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la ejecutada. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**



TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los ejecutados, o por intermedio de sus apoderados con facultades para recibir, si hay lugar a ello previa verificación de los Antecedentes Disciplinarios.

CUARTO: Sin condena en costas

QUINTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

27

13001-40-03-012-2015-00678-00

Manuel cabrales solano <cabralesabog@hotmail.com>

J03-308.

Vie 9/07/2021 4:42 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

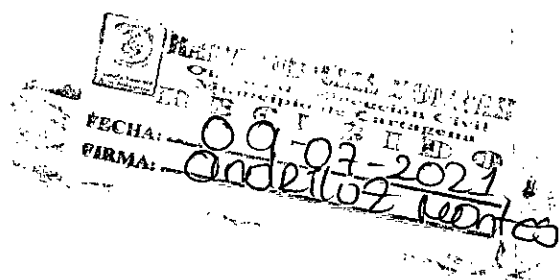
1 archivos adjuntos (89 KB)

SOLICITUD DE ENVIO DE RESPUESTA DEL CAJERO PAGADOR EN EL PROCESO EJECUTIVO DE BANCOOMEVA S.A VS. JUAN CARLOS POSSO LORA.pdf;

Cordial saludo

Adjunto solicitud de envío de respuesta del cajero pagador en el proceso ejecutivo de Bancoomeva contra Juan Carlos Posso.

Atentamente,

MANUEL CABRALES SOLANO**Abogado****Centro, Avenida Daniel Lemaitre No. 9-45****Edificio Banco del Estado Oficina 906****Teléfono: 6551638****Cel: 310-3668053****Cartagena de Indias D. T. y C.**

28

MANUEL CABRALES SOLANO
ABOGADO

Señor

JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

RAD: 678-2015

REF: PROCESO EJECUTIVO DE BANCOOMEVA S.A. CONTRA JUAN CARLOS POSSO LORA.

MANUEL CABRALES SOLANO, abogado titulado con T.P.No.30.118 del C.S. de la J., actuando como apoderado de **BANCOOMEVA S.A.**, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito solicitar se sirva enviar a mi correo electrónico cabralesabog@hotmail.com la **RESPUESTA** que hubiese dado el **CAJERO PAGADOR DE MEDICINA INTEGRAL I.P.S S.A.S.**, frente a la medida cautelar oficiada por su despacho mediante el **OFICIO OECM COVID-19 No. 1560** de fecha 3 de mayo de 2021, el cual fue enviado a la mencionada empresa por correo electrónico el 2 de mayo de 2021.

En caso de no haberse recibido respuesta alguna por parte de dicha entidad, solicito se sirva **REQUERIRLA** a fin de que informe si procedió a inscribir o registrar la medida cautelar de embargo que le fue oficiada por el despacho.

Atentamente,



MANUEL CABRALES SOLANO

T.P.No.30.118 del C.S. de la J.

C.C.No.73.082.028 de C/gena.

Centro, Av. Daniel Lemaitre #9-45 Edificio Banco de Estado Oficina 906
Teléfono: 6551638- 3137102484
Cartagena de Indias D. T. y C

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2015-00678-00

Cartagena de Indias D. T. y C.; **03 AGO 2021**

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-012-2015-00678-00
Demandante	BANCOOMEVA SA
Demandado	JUAN CARLOS POSSO LORA
Asunto	Medida cautelar

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el que solicita requerir al cajero pagador de la empresa MEDICINA INTEGRAL IPS SAS, para que explique las razones por las cuáles no ha cumplido la orden de embargo de lo que devengue el demandado JUAN CARLOS POSSO LORA como empleado de MEDICINA INTEGRAL IPS SAS.

Revisado el expediente, observa el Despacho que a través de auto de fecha 20 de abril de 2021 proferido por el suscrito Juzgado, se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende el demandado JUAN CARLOS POSSO LORA, identificada con C.C N° 73.134.834 como empleado de MEDICINA INTEGRAL IPS SAS, asimismo, se observa que dicha medida fue comunicada mediante Oficio, sin pronunciamiento alguno por parte del requerido.

Teniendo en cuenta lo antecedido, se ordenará requerir al cajero pagador de las empresas en mencion , a fin de que informe las razones por las cuales no ha seguido efectuando los descuentos ordenados en auto de fecha 20 de abril de 2021.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar.

SEGUNDO: Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador, de la empresa MEDICINA INTEGRAL IPS SAS, a fin de que explique las razones por las cuales no ha realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 20 de abril de 2021 por medio del cual se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende la demandada JUAN CARLOS POSSO LORA, identificada con C.C N° 73.134.834 como empleada de MEDICINA INTEGRAL IPS SAS.

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2015-00678-00

CUARTO: Prevengase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

Cartagena de Indias D. T. y C. 17 de julio del 2021

Señores
JUZGADO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
Ciudad.

Asunto: Dejando a Disposición Vehículo (Radicado N° 130014003012-2017-00289-00, Oficio N° OECM-COVID 19- 2085 -2021.

De manera atenta y respetuosa me permito dejar a disposición de ese despacho el siguiente vehículo así:

- PLACAS: TVB-594
- SERVICIO: PUBLICO
- LINEA: H1
- MARCA: HIUNDAI
- CHASIS: KMJWA37HADU54036Z
- MOTOR: D4BHD000255
- COLOR: BLANCO

HECHOS

El día 14/07/2021, siendo las 11:30 horas aproximadamente en el sector del barrio Campestre, en la ciudad de CARTAGENA, se procede a la inmovilización de vehículo relacionado anteriormente, ya que presenta solicitud de APREHENSION Y ENTREGA, por parte de su despacho, con el radicado 130014003012-2017-00289-00 oficio N° OECM-COVID 19- 2085 - 2021 fecha del auto 09/03/2021, Demandante BANCO BBVA S.A Contra ANTONIO BARRIOS FAJARDO CC 73.129.268

El vehículo es dejado a su disposición, en el parqueadero CAPTUCOL, ubicado en La cordialidad KM 10 teléfono 3208360050

Atentamente,

Patrullero Ballesteros Luis
Integrante de Patrulla Cuadrante 7-5
Cai San Pedro cel.3217686661

Elaborado por PT. LUIS BALLESTEROS
Revisado por PT. LUIS BALLESTEROS
Ubicación C:\timis documentos\informes 2020

Barrio san pedro transversal 54 Cartagena
Teléfono: 6531557
Jose.zuniga@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co



JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2017-00289-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-012-2017-00289-00
Demandante	BANCO BBVA
Demandado	ANTONIO BARRIOS FAJARDO
Asunto	Medida cautelar

Se advierte en el expediente, de 17 de julio de 2021, manifestando que deja a disposición el vehículo de placas TVB 594, de propiedad de ANTONIO BARRIOS FAJARDO, el cual se deja en el parqueadero CAPTUCOL.

En consecuencia, se decretará el secuestro de dicho vehículo y se nombrará como secuestre a GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAJES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. Asimismo, se comisionará al Inspector de Transito de esta ciudad, para que practique la diligencia de secuestro del vehículo de placas TVB 594 de propiedad del demandado, igualmente, se ordenará al secuestre, GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAJES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETESE el SECUESTRO del vehículo de placas TVB 594 de propiedad del demandado ANTONIO BARRIOS FAJARDO, que se encuentra en el parqueadero CAPTUCOL ubicado en la cordialidad km 10 teléfono 3208360050.

SEGUNDO: Nómbrase como secuestre a GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAJES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, quien puede ser ubicado en la Cra 3 N° 46 B-36 Teléfono 3174301257, grupomultigraficas@gmail.com, dentro del presente proceso. Hágase la Comunicación por el medio más expedito.

TERCERO: COMISIONESE AL INSPECTOR DE TRANSITO DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, para practique la diligencia de secuestro del vehículo de placas TVB 594 de propiedad del demandado ANTONIO BARRIOS FAJARDO.

CUARTO: Requerir a GRUPO MULTIGRAFICAS Y ASESORIAS EN BODEGAJES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS para que rinda un informe mensual detallado respecto de las gestiones realizadas como auxiliar de las justicia dentro del proceso de la referencia.

QUINTO: Por secretaria librese el respecto despacho comisorio con los insertos del caso.

NOTIFIQUESE Y CÚPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2017-00289-00

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2018-00818-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-012-2018-00818-00
Demandante	BANCO DAVIVIENDA SA
Demandado	MARIA RAMIREZ AGUDELO

Se advierte a folio 18 del cuaderno de ejecución, informe secretarial manifestando que la parte demandante solicita la actualización de despacho comisorio sin embargo el despacho comisorio elaborado incorpora un auxiliar de la justicia que ya no se encuentra en lista por lo que se actualiza la ordena emanada en auto de fecha 15 de febrero de 2019 por lo que se nombra nuevo secuestre de la lista de auxiliares de la justicia a MARGARITA IRINA CASTRO PADILLA, el cual puede ser ubicado en Mz. 15 Lote 10 Calle principal de Turbaco, Teléfono 3132952443 – 3013307753 – 3174273132, margarita.abogados@outlook.com Por secretaría elaborar los oficios respectivos. Además se Requiere a la señora MARGARITA IRINA CASTRO PADILLA para que rinda informe mensual y detallado de las gestiones realizadas dentro del proceso de la referencia como auxiliar de la justicia. Por secretaria librese el respecto despacho comisorio con los insertos del caso.”

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: teniendo en cuenta el auto de fecha 15 de febrero de 2019 se nombra nuevo secuestre de la lista de auxiliares de la justicia a MARGARITA IRINA CASTRO PADILLA, el cual puede ser ubicado en Mz. 15 Lote 10 Calle principal de Turbaco, Teléfono 3132952443 – 3013307753 – 3174273132, margarita.abogados@outlook.com Por secretaría elaborar los oficios respectivos. Además se Requiere a la señora MARGARITA IRINA CASTRO PADILLA para que rinda informe mensual y detallado de las gestiones realizadas dentro del proceso de la referencia como auxiliar de la justicia. Por secretaria librese el respecto despacho comisorio con los insertos del caso.”

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-012-2018-00818-00

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0532ca949c260ffa9382422ed4f95e8c76ffff705c2e3558d1e9829a170f697e

Documento generado en 02/08/2021 08:00:26 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2012-00562-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-013-2012-00562-00
Demandante	BANCOOMEVA
Demandado	FRANK SANTIAGO PALOMINO JULIO

Advierte el despacho a folio 17 del cuaderno de ejecución, memorial presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante, a través del cual solicita se decrete el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier forma de captación legal tenga o llegare a tener el demandado FRAN SANTIAGO PALOMINO JULIO, como empleado de FUNDACION CLINICA UNI8VERSITARIA SAN JUAN DE DIOS. Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciba el demandado FRAN SANTIAGO PALOMINO JULIO, identificada con C.C. No. 73.506.249, como empleado del FUNDACION CLINICA UNI8VERSITARIA SAN JUAN DE DIOS.

Limitese la cuantía en la suma de \$6.882.171 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria librense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2012-00562-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e6cee7aab6b54d94e79a5d6d9ee5b8bc0e9431a4d98ca9b9a0ec950690fe0558

Documento generado en 02/08/2021 08:00:28 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2014-00716-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-013-2014-00716-00
Demandante	BANCO DE BOGOTÀ S.A
Demandado	GERARDO OCAMPO SALAZAR
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante su apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

“Artículo 461. Terminación del proceso por pago. Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el apoderado judicial de la parte demandante con facultad para recibir tal como consta a folio 32-38 del c.p . Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello.



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez

Señor (a)
JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E.....S.....D.

Ref.: Ejecutivo Singular.

Demandante: Banco de Occidente – Rf Encore

Demandado: Alonso Simón Figueroa Carvajal

Rad: 00308/2016

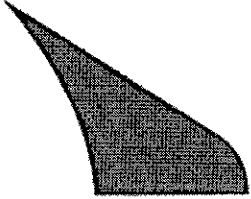
Origen: 13 Cmpal

CARLOS OROZCO TATIS, en mi condición de apoderado de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, solicito se proceda con la **captura e inmovilización** del vehículo de placas **BPZ121**, teniendo en cuenta que la medida de embargo fue inscrita.

Atentamente,



CARLOS A. OROZCO TATIS.
C.C. No.73.558.798 Arjona- Bolívar.
T.P. No. 121.981 C.S. de la J.



Carlos Orozco Tatis
Abogado

☎ (5) 6645492 - (57) 316 2725395

✉ corozco@avancelegal.com.co

🌐 www.avancelegal.com.co

📍 Centro Histórico cll 32 No. 8-21 piso 14. Cartagena, Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2016-00308-00

03 AGO 2024

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-013-2016-00308-00
Demandante	BANCO DE OCCIDENTE
Demandado	ALONSO SIMON FIGUEROA CARVAJAL
Asunto	Medida Cautelar

Visto el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita se inmovilice el vehículo, ordenado embargo dentro del proceso. Sin embargo, se realizó una revisión al proceso y no se encontró certificado por la Secretaria de Transito y de Transporte de Turbaco, manifestando que la medida de embargo sobre el vehículo se haya inscrito, por tanto no se accede a lo solicitado por la parte demandante.

Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: NO ACCEDE a lo solicitado por el apoderado de la parte demandante hasta tanto se allegue certificado de la Secretaria de Transito y de Transporte de Turbaco sobre la inscripción de la medida cautelar sobre el vehículo de placas BPZ 121.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

RV: Rad 13001400301320160101200 demandante : fmsd vs jaime segovia

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/06/2021 4:05 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (781 KB)
DOCUMENTO NELCY P020.pdf;

J03-234 NO

RV: R:

De: MAYERLY VEGA GAMARRA <mayerlyvega416@yahoo.es>

Enviado: viernes, 11 de junio de 2021 15:58

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: madelyn gamarra <madlyngc26@gmail.com>

Asunto: Rad 13001400301320160101200 demandante : fmsd vs jaime segovia

Rad 13001400301320160101200
Demandante : fmsd
Demandado jaime segovia

Buenas tardes, por medio de la presente adjunto memorial que contiene acuerdo de pago dentro del proceso de la referencia.

Enviado desde Yahoo Mail para Android

Rad 13
Demandante
Demandado

Rad 13
Demandante
Demandado

Rad 13
Demandante
Demandado

Rad 13
Demandante
Demandado

Rad 13
Demandante
Demandado

Rad 13
Demandante
Demandado

MAYERLY VEGA GAMARRA
ABOGADA
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PROCESAL

Señor
JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO EN CONTRA DE JAIME PATRICIO SEGOVIA ARTEAGA Y OTROS RAD.1012/2016.

Señor Juez:

Nosotros **JAIME PATRICIO SEGOVIA ARTEAGA, NELCY PACHECO PIMIENTA Y MAYERLY VEGA GAMARRA**, todos de condiciones civiles conocidas dentro del presente proceso, identificados como aparece al ple de nuestras firmas, a usted manifestamos que hemos llegado a un acuerdo pago el cual se resume en los siguientes puntos.

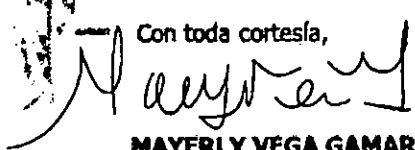
1. Que nos damos por notificados del mandamiento de pago y que no tenemos excepciones de mérito que interponer por lo que renunciamos a ellas y nos afianzamos a las pretensiones del demandante.
2. Que limitamos la cuantía de la obligación demandada en la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE. (\$4.644.503.00)**, suma que comprende capital, intereses corrientes, de mora y honorarios profesionales.
3. Que los demandados aceptan las cifras contenidas en el punto 2 del presente acuerdo, Por lo que autorizan a la apoderada de la parte demandante **MAYERLY VEGA GAMARRA**, para que retire la totalidad de los depósitos judiciales que reposan en su despacho y los que llegaren en lo sucesivo, descontados del salario de la demandada **NELCY PACHECO PIMIENTA**, identificada CC. No. 379, la apoderada en mención se compromete a reembolsar a los demandados los valores que superen el límite de cuantía, a continuación relacionamos los depósitos judiciales.

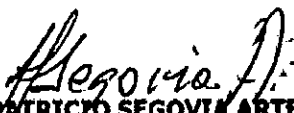
FECHA DE EMISION	VALOR DEPOSITOS
30/11/2017	\$ 105.211
13/06/2018	\$ 767.034
04/10/2018	\$ 436.017
27/11/2018	\$ 105.001
10/04/2019	\$ 546.357
17/06/2019	\$ 215.169
26/07/2019	\$ 113.871
22/08/2019	\$ 113.871
27/09/2019	\$ 113.871
31/10/2019	\$ 113.871
29/11/2019	\$ 113.871
31/01/2020	\$ 233.251
18/03/2020	\$ 233.251
13/04/2020	\$ 118.526
08/05/2020	\$ 118.526
12/06/2020	\$ 118.526
30/07/2020	\$ 118.526
28/08/2020	\$ 118.526
20/10/2020	\$ 242.561
12/11/2020	\$ 118.526
30/12/2020	\$ 116.035
10/03/2021	\$ 364.105
	\$ 4.644.503

MAYERLY VEGA GAMARRA
ABOGADA
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PROCESAL

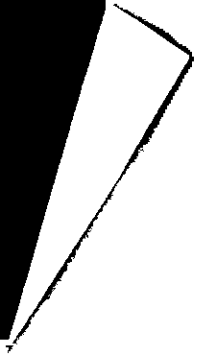
4. Solicitamos el levantamiento de la medida cautelar de embargo de salario de la señora **NELCY PACHECO PIMIENTA** identificada **CC. No. 37932393** como empleada de la Alcaldía de Arenal (Bolívar) Librese el Oficio respectivo dirigido al Cajero pagador y/o tesorero de la Alcaldía de Arenal (Bolívar).
5. Una vez entregados los depósitos judiciales antes relacionados, sírvase dar por terminado el proceso por pago total de la obligación demandada, archívese el expediente, desglóse el título valor a favor de los demandados.
6. Renunciamos a la notificación y ejecutoria del auto favorable

Con toda cortesía,


MAYERLY VEGA GAMARRA
CC. No. 45.522.653 de Cartagena
TP. No. 125.680 del C. S. de la J.


JAIME PATRICIO SEGOVIA ARTEAGA
CC. No. 9.284.153


NELCY PACHECO PIMIENTA
CC. No. 37932393.



JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-013-2016-01012-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-013-2016-01012-00
Demandante	FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO
Demandado	JAIME PATRICIO SEGOVIA ARTEAGA y otro
Asunto	Aprueba transacción

Se encuentra escrito presentado por la parte demandada y la demandante en el que manifiestan que llegan a un acuerdo de transacción para dar por terminado el proceso. Acuerdan que el monto de la deuda es por la suma de \$4.644.503.00, discriminados de la siguiente forma: que se cancelaran con los títulos judiciales existentes a favor del proceso.

Sobre el particular, conviene precisar que la transacción es una de las formas anormales de terminación del proceso, mediante la cual las partes sacrificando parcialmente sus pretensiones ponen término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precave un litigio eventual. La misma está consagrada de manera sustancial en el código civil, artículos 2469 al 2487 y procesalmente en el artículo 312 y 313 del C.G.P.

Teniendo dicha figura como uno de sus objetivos, la finalización de un proceso en curso, de aceptarse la misma se debe dar por terminado el mismo, tal como lo dispone el inciso 3° del artículo 312 del C.G.P...Según el cual *"El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción sólo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a éste continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquélla, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción."*

Haciendo una revisión del expediente, se advierte que en el acuerdo de transacción manifiestan que se hizo la entrega de la precitada suma a la parte ejecutante, así las cosas el Despacho, aprobará la transacción celebrada por las partes, a través de su apoderado judicial quienes cuentan con facultades expresas para transigir. De conformidad a lo anterior, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la TRANSACCIÓN presentada por las partes en la suma de \$4.644.503.00 por encontrarse ajustada a la ley. **ORDENAR LA ENTREGA DE ESA SUMA CON LOS TITULOS JUDICIALES EXISTENTES A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE.**



Radicado No. 13001-43-03-013-2016-01012-00

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la demandada NELCY PACHECO PIMIENTA como empleada de Alcaldía de Arenal Bolívar. Por secretaría líbrense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-89-03-013-2016-01037-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-013-2016-01037-00
Demandante	COPROPIEDAD EDIFICIO LAGO REAL
Demandado	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA
Asunto	Ordena a la secretaria.

Se observa memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante en el que solicita que se informe sobre los títulos judiciales recibidos a favor de CENTRAL S. A, por lo que ésta autoridad ordena a la secretaria comunicar al apoderado judicial lo atinente a las peticiones de fecha 25 de Noviembre de 2020 través del área de títulos judiciales.

Así mismo, se observa correo remitido entre la secretaria de la oficina de apoyo y el Juzgado Segundo Civil del Circuito sobre situaciones administrativas presentadas en torno a los recursos de apelación, por ende, se insta a la misma a fin de que nos indique si se resolvió la situación descrita. En consecuencia, el juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: ORDENAR a la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución área de títulos judiciales informe sobre los títulos judiciales recibidos a favor de CENTRAL S. A, por lo que ésta autoridad ordena a la secretaria comunicar al apoderado judicial lo atinente a las peticiones de fecha 25 de Noviembre de 2020 través del área de títulos judiciales.

Así mismo, se observa correo remitido entre la secretaria de la oficina de apoyo y el Juzgado Segundo Civil del Circuito sobre situaciones administrativas presentadas en torno a los recursos de apelación, por ende, se insta a la misma a fin de que nos indique si se resolvió la situación descrita

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2018-00738-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-013-2018-00738-00
Demandante	BANCO BBVA
Demandado	WENDY LUCIA MIRANDA VERGARA
Asunto	Medida cautelar

Se advierte memorial presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, en el que solicita requerir al cajero pagador de la empresa DENTISALUD, para que explique las razones por las cuáles no ha cumplido la orden de embargo de lo que devengue el demandado WENDY LUCIA MIRANDA como empleado de DENTISALUD.

Revisado el expediente, observa el Despacho que a través de auto de fecha 30 de enero de 2020 proferido por el suscrito Juzgado, se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende el demandado WENDY LUCIA MIRANDA, identificada con C.C N° 1.143.3269.499 como empleado de DENTISALUD, asimismo, se observa que dicha medida fue comunicada mediante Oficio, sin pronunciamiento alguno por parte del requerido.

Teniendo en cuenta lo antecedido, se ordenará requerir al cajero pagador de las empresas en mencion , a fin de que informe las razones por las cuales no ha seguido efectuando los descuentos ordenados en auto de fecha 30 de enero de 2020.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar.

SEGUNDO: Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador, de la empresa DENTISALUD, a fin de que explique las razones por las cuales no ha realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 30 de enero de 2020 por medio del cual se decretó el embargo de la quinta parte del sueldo legalmente embargable y demaselementos que lo integran que deveguende la demandada WENDY LUCIA MIRANDA, identificada con C.C N° 1.143.326.499 como empleada de DENTISALUD.

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2018-00738-00

CUARTO: Prevengase en el sentido que de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dicho valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S. M. L. V. tal como lo dispone el art. 593 del C. G. P.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ**

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9cedbf033c9bf9117f1458533147efd57488f6bbab7272249023b3017f44b5d8**
Documento generado en 02/08/2021 08:00:30 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-013-2018-00813-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-013-2018-00813-00
Demandante	COPROSAL
Demandado	GLADYS ESTHER GARRIDO TORRES

Esta autoridad en auto de fecha 07 de Julio de 2021 puso en conocimiento de la parte demandante la solicitud de terminación del proceso por pago, sin que se pronunciara al respecto.

Teniendo en cuenta lo expuesto, considera el Despacho necesario ordenar a la secretaria-área de títulos judiciales allegar relación de los mismos.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena

RESUELVE:

CUESTION UNICA: ORDENAR a la Secretaria área de títulos judiciales allegar relación de los descuentos efectuados al demandado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2017-00208-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-015-2017-00208-00
Demandante	BANCO DAVIVIENDA
Demandado	YANES CECILIA OSPINO PEREZ

Se observa que a través de memorial allegado al Despacho, la Dra. JOHANNA PINEDO ARRIETA apoderado judicial de BANCO DAVIVIENDA, manifiesta que renuncia al poder otorgado por el representado, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, aportando constancia de la comunicación a su poderdante, con la confirmación de recibido, visible a folio 31 del cuaderno de ejecución.

Pues bien, por encontrarse ajustada tal actuación a los preceptos de ley el despacho accederá a la renuncia de poder planteada por el citado abogado de conformidad a lo preceptuado el inciso 4º del artículo 76 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE

CUESTION UNICA: ACCEDER a la renuncia de poder presentada por la Dra. JOHANNA PINEDO ARRIETA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

Bolivar - Cartagena

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2017-00208-00

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e97bc3a82c846b97fd06930f6401084e5f5eb57a46b2a0ced3b0b28aa8dc95f9

Documento generado en 02/08/2021 08:00:32 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**SOLICITUD DE D-COMISORIO - J 3 ECM Rdo. 507-2017 Dte. BANCOLOMBIA Ddo.
ALVARO JOSE MARRUGO AHUMADA**

Carlos Orozco Tatis <corozco@avancelegal.com.co>

Mié 23/06/2021 2:10 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: ESTEFANI ANDREA OCHOA PEREZ <eochoa@avancelegal.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (143 KB)

SOLICITUD DE D-COMISORIO - J 3 ECM Rdo. 507-2017 Dte. BANCOLOMBIA Ddo. ALVARO JOSE MARRUGO AHUMADA.pdf;

Buenas tardes.

Señores (a).

Oficina de Apoyo de Ejecución Municipal de Cartagena.

Cordial saludo,

Con el presente e-mail le memorial para el proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia S.A. contra Álvaro Jose Marrugo Ahumada bajo el radicado 13001400301520170050700. Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena.

Cordialmente,



Carlos Orozco Tatis
Abogado

☎ (5) 6645492

(57) 316 2725395

✉ corozco@avancelegal.com.co

📍 Centro cll 32 No. 6-21 piso 14. Edificio Banco Popular
Cartagena, Colombia.



No imprima este correo electrónico: garantiza la vida de un árbol en el planeta. Imprima sólo si es necesario, preferiblemente en papel reciclado.

Conoce más de nosotros en www.avancelegal.com.co

Señor
JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.
E. S. D.

Ref. ROCESO DE BANCOLOMBIA S.A contra ALVARO JOSE MARRUGO AHUMADA.

Rad: 13001400301520170050700.

JUZGADO DE ORIGEN: 15 CM.

CARLOS OROZCO TATIS, en mi calidad de apoderado de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con el presente memorial le solicito se sirva a elaborar el despacho comisorio a fin de adelantar la diligencia de secuestro del vehículo auto motor de placas UGL - 414.

Atentamente,



CARLOS A. OROZCO TATIS
C.C No. 73.558.798 Arjona Bolívar.
T.P. No. 121.981 del C.S de la J.

Carlos Orozco Tatis
Abogado

☎ (5) 6645492 - (57) 316 2725395

✉ corozco@avancelegal.com.co

🌐 www.avancelegal.com.co

📍 Centro Histórico cll 32 No. 8-21 piso 14. Cartagena, Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2017-00507-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-015-2017-00507-00
Demandante	BANCOLOMBIA
Demandado	ALVARO MARRUGO AHUMADA
Asunto	Medida Cautelar

Visto el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, a través del cual solicita se proceda con el secuestro del vehículo de placas UGL 414, sin embargo luego de revisar el expediente no se encuentra por parte de la POLICIA NACIONAL informe de inmovilización del vehículo por lo que cual no se accede a lo requerido, toda vez que no se tiene certeza de la inmovilización y puesta en disposición del vehículo de placas UGL 414.

Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA,

RESUELVE:

CUESTION UNICA: NO ACCEDE a lo solicitado por el apoderado de la parte demandante toda vez que no se tiene certeza de la inmovilización y puesta en disposición del vehículo de placas UGL 414.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2018-00326-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-015-2018-00326-00
Demandante	BANCOLOMBIA SA
Demandado	YUDELIS DORIAS HERNANDEZ

A folio 34 del cuaderno de ejecución, se advierte memorial presentado por el Dr. CARLOS OROZCO TATIS, ratificando el poder conferido en memorial de cesión a folio 21 del referido cuaderno, a través del cual el cesionario ahora parte demandante REINTEGRA SAS confiere poder al Dr. CARLOS OROZCO TATI, identificado con C.C. No. 73.558.798 y T.P. No. 121.981 del C.S. de la J., para que lo represente dentro del proceso judicial de la referencia. Por lo que se le reconocerá personería al Dr. CARLOS OROZCO TATIS, como apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con el memorial poder conferido.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución Civil de Cartagena,

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: RECONOCER al Dr. CARLOS OROZCO TATIS, identificado con C.C. No. 73.558.798 y T.P. No. 121.981 del C.S. de la J., como apoderado judicial de la parte demandante REINTEGRA SAS, de conformidad con el memorial poder conferido.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Firmado Por:

Luis Alfredo Junieles Dorado

Juez Municipal

Menores 3

Juzgado Municipal

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2018-00326-00

Bolivar - Cartagena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

db5b25373b05f1cb217be4e3fcdc63b76d4bf1797b987f4e35f089f8b815b8bc

Documento generado en 02/08/2021 08:00:35 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2018-00456-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
RADICADO	13001-40-03-015-2018-00456-00
DEMANDANTE	BANCO DAVIVIENDA S.A
DEMANDADO	PEDRO RAMOS SALGUEDO
ASUNTO	RESUELVE LIQUIDACION DEL CREDITO

Revisado el presente proceso para proseguir el trámite verifica el Despacho que se encuentra pendiente aprobar la liquidación del Crédito, toda vez que no fue objetada, y se ajusta a derecho.

Con fundamento a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación del crédito allegada por el ejecutante, en la suma de **ciento veintidós millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta pesos (\$122.659.670)**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-89-03-015-2018-00864-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-015-2018-00864-00
Demandante	ROMERO ORTIZ S.A.S
Demandado	ELENA GARCÍA Y COMERCIALIZADORA EL GRAN PRECIO S.A.S
Asunto	Ordena a la Secretaría.

Esta autoridad en auto de fecha 04 de Mayo de 2021 requiere a las partes a fin de que aclaren la solicitud de entrega de títulos judiciales.

Teniendo en cuenta, lo informado por las partes esta autoridad ordena a la secretaria de apoyo de los Juzgados de ejecución-área de títulos judiciales a la parte demandante la entrega de títulos judiciales existentes en el proceso a la fecha y se elaboren los mismos en virtud del memorial de fecha 26 de Abril de 2021, esto es, a nombre de ROMERO ORTIZ S.A.S. En consecuencia, el juzgado

RESUELVE:

CUESTIÓN UNICA: ORDENAR a la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución área de títulos judiciales la entrega de títulos judiciales existentes en el proceso a la fecha y se elaboran los mismos en virtud del memorial de fecha 26 de Abril de 2021, esto es, a nombre de ROMERO ORTIZ S.A.S.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-015-2018-01023-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-015-2018-01023-00
Demandante	FUNDACION MARIO SANTODOMINGO
Demandado	ELSY CONTRERAS MONSALVA

Advierte el despacho a folio 17 del cuaderno de ejecución, memorial presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante, a través del cual solicita se decrete el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier forma de captación legal tenga o llegare a tener el demandado RAFAEL ANDRES CASTRO JULIO, como empleado y/o contratista de ELECTROCIVIL LTDA E INDETRA. Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciba el demandado RAFAEL ENDRES CASTRO JULIO, identificada con C.C. No. 73.352.159, como empleado y/o contratista del ELECTROCIVIL LTDA E INDETRA.

Limítese la cuantía en la suma de \$9.728.635 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria librense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior

OFI21-00023666

Bogotá D.C. jueves, 8 de julio de 2021

Señores

JUZGADOS DE EJECUCION DE CARTAGENA
Doctora YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETRIALES
Oficina de Apoyo Para los Juzgados Municipales de Ejecución
Centro Av. Carlos Escallón No. 8-59 Pasaje la Moneda piso 2 oficina 212
Cartagena de Indias

Asunto: Respuesta al Oficio No. OECM-COVID19-4074 PROCESO EJECUTIVO RDICADO 13-001-40-03-016-2017-00026-00

Apreciados señores:

Dando respuesta al Oficio No. OECM-COVID19-4074 PROCESO EJECUTIVO RDICADO 13-001-40-03-016-2017-00026-00 con el radicado EXT21-00050668; de fecha junio 25 de 2021; nos permitimos informarle que una vez revisada la información que reposa en el base de datos el funcionario **DANIAN ENRIQUE CASTELLAR FIGUEROA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.211.829 no es funcionario, pero si contratista de la Entidad, por lo cual se le descontara de sus honorarios la quinta parte. El límite total de la medida del embargo es de \$9.631.017,00 según oficio en referencia, dicho descuento se aplicará a partir del pago de los honorarios del mes de julio.

Lo anterior, fue certificado según MEM21-00020863; del 29 de junio del año 2021 Y certificación de contrato por prestación de servicio de los cual anexo copia.

Cordialmente:


SÁNDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Secretaria General
Anexo: 2 folios

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Martha Yaneth Calcetero		07/07/2021
Revisó	Haroldo Anibal Arenas Angarita		07/07/2021
Aprobó	Haroldo Anibal Arenas Angarita		07/07/2021

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 - 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co - correspondencia@unp.gov.co
SGI-FT-05 V3

Página 1 de 1

La suscrita Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección

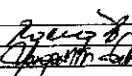
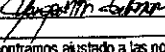
CERTIFICA

Que **DANIAN ENRIQUE CASTELLAR FIGUEROA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 73.211.829, ha celebrado los siguientes contratos de prestación de servicios con la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**, NIT 900.475.780-1, así:

NÚMERO DEL CONTRATO	085 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los servicios profesionales especializados en LA UNP, para apoyar Juridicamente a la Oficina Asesora de Planeación e Información de la UNP, en lo referente a los diferentes procesos contractuales del área y prestar apoyo a la coordinación de los diferentes contratistas de los grupos de trabajo adscritos a la oficina asesora de planeación e información de conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección - UNP.
FECHA DE INICIACIÓN	07 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021
VALOR HONORARIOS MENSUALES	\$7.500.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de junio del año 2021.


SÁNDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Rocio Angarita Rodriguez		30.06.21
Revisó	Martha Margarita Salazar Alonso		30.06.21
Aprobó	Sandra Patricia Borraez de Escobar		30.06.21

Los ambas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM21-00020863

FECHA : MARTES, 29 DE JUNIO DE 2021

DE : ORLANDO MORENO SALGUERO
Coordinador Grupo de Nómina y Prestaciones Sociales

PARA : SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Secretaría General

ASUNTO: PROCESO EJECUTIVO

En atención a la solicitud realizada mediante oficio No.4074 con fecha de 25 de junio de 2021 del **JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA**, recibida en la Subdirección de Talento Humano mediante código de registro EXT21-00050668, de manera atenta le informo que una vez revisada la información que reposa en la base de datos de los funcionarios de la entidad se verificó que el señor **DANIAN ENRIQUE CASTELLAR FIGUEROA** identificado con cédula de ciudadanía número 73.211.829 no es funcionario de la Unidad Nacional de Protección, por ende, no es pertinente proceder con la solicitud.

Sin otro particular me despido cordialmente, no sin antes refrendar nuestra firma disposición en la atención a los diferentes requerimientos presentados ante el programa de prevención y protección que lidera esta unidad.

Recuerde, que todos los trámites en la UNP son de carácter gratuito, y que puede enviar sus sugerencias para mejorar nuestra atención al ciudadano al correo electrónico correspondencia@unp.gov.co su opinión es muy importante para nosotros.

Cordialmente,

ORLANDO MORENO SALGUERO
Coordinador Grupo de Nómina y Prestaciones Sociales

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Leidy Carolina Castro Santamaría		
Revisó	Orlando Moreno Salguero		
Aprobó	Orlando Moreno Salguero		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 - 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co - correspondencia@unp.gov.co
SGI-FT-04 V3



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO

JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA Jn 29/4

ext 21-00050668

mem21-00020863

Cartagena de Indias, 25 de Junio de 2021
OFICIO No OECM-

COVID19- 4074 Señor:
Cajero Pagador:
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
La ciudad

ACCION	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE	NESTOR EMILIO GIRALDO RESTREPO CC 70.382.564
DEMANDADO	DANIAN ENRIQUE CASTELLAR FIGUEROA CC 73.211.829
RADICADO	13-001-40-03-016-2017-00026-00

mem21-20863

No Fx
si contratista

Cordial saludo,

Comunico a usted que el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena; mediante auto de fecha Dieciséis (16) de Junio de dos mil Veintiuno (2021); resolvió:

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar. **SEGUNDO:** Requerir por PRIMERA VEZ al cajero/pagador de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION a fin de que informen las razones por las cuales no han realizado los descuentos ordenado en auto de fecha 27 de Octubre de 2020 proferido por el suscrito juzgado.

El auto de la referencia decreto El embargo y secuestro previo de la quinta parte del excedente del salario mínimo que devenga el demandado DANIAN CASTELLAR FIGUEROA como empleado de LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
Limitase la cuantía en la suma de \$ 9.631.017.00

La medida fue comunicada con Oficio No OECM-COVID19-3034 de 03/11/2020

Prevengase, en el sentido que de hacer caso a este requerimiento, responderá por dichos valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S.M.L.M tal como lo dispone el numeral 10 del art 593 del C.G.P

En razón a lo ordenado en esta providencia los dineros descontados deben ser consignados en:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA DE LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA	130012041800
Código de Identificación	130014303000
NUMERO DE PROCESO	13001-40-03-016-2017-00026-00
DEMANDANTE	NESTOR EMILIO GIRALDO RESTREPO CC 70.382.564
DEMANDADO	DANIAN ENRIQUE CASTELLAR FIGUEROA CC 73.211.829

of 21-00023666

30

Así mismo nos permitimos informarle que El Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena asumió el conocimiento del mismo en virtud del Acuerdo PSAA13-9984 de 2013, PCSJA17-10678 de 2017 y PCSJA18-11032 de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura.

Al contestar sírvase citar la referencia del proceso.

Atentamente,



SECRETARIO

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

La presente comunicación se publica con firma digital, atendiendo a la necesidad de nuevas estrategias de trabajo, en razón a las contingencias causadas por la pandemia mundial del COVID 19, se deja constancia que la información consignada en esta comunicación fue extraída del expediente judicial, y las identificaciones de la suministrada en la demanda. Así mismo que en cumplimiento del artículo 11 del decreto 806 de 4 de junio del 2020, la oficina realizará la notificación de la comunicación, siempre que la dirección electrónica sea de dominio público, o se encuentre suministrada en el expediente. En caso de solicitar alguna corrección de la comunicación, la solicitud deberá ser enviada al correo cserelemcogena@ccandol.ramajudicial.gov.co indicando en el asunto CORRECCION DE OFICIO identificando el número de la comunicación ejemplo CORRECCION DE OFICIO N° COVID- 01 y adjuntarlo, el cual se estudiará y será corregido en el turno correspondiente. Es importante anotar que este oficio NO requiere actualización. Así mismo se le recuerda que OECMC no sella documentos originales, a excepción de copias debidamente autorizadas dentro del expediente

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda – piso 2 oficina 212
Cartagena -Colombia

Proyecto: MCO

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial.
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-016-2017-00026-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-016-2017-00026-00
Demandante	NESTOR EMILIO GIRALDO RESTREPO
Demandado	DANIAN CASTELLAR FIGUEROA
Asunto	PONER EN CONOCIMIENTO

Estando al Despacho el proceso de la referencia, contestacion por parte de cajero/pagador de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION visto a folio 26 del C.E por lo lo que se ponen conocimiento a la parte interesada.

En consecuencia,

RESUELVE

CUESTION UNICA: PONER EN CONOCIMIENTO a las partes de lo allegado por UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION visto a folio 26 c.e

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

Proceso
desempeñado 855

RV: JE03+13001-40-03-016-2017-00320-00+SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Manuel cabrales solano <cabralesabog@hotmail.com>

Mié 21/07/2021 4:16 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (12 KB)

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO EJECUTIVO DE BANCOOMEVA CONTRA ROXI MONTERO.pdf

Cordial saludo,

Reenvío solicitud de medida cautelar para su trámite dentro del proceso ejecutivo de Bancoomeva S.A contra Roxi Elena Montero Prens.

Atentamente,

MANUEL CABRALES SOLANO

Abogado

Centro, Avenida Daniel Lemaitre No. 9-45

Edificio Banco del Estado Oficina 906

Teléfono: 6551638

Cel: 310-3668053

Cartagena de Indias D. T. y C.

De: Manuel cabrales solano

Enviado: martes, 28 de julio de 2020 15:36

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: JE03+13001-40-03-016-2017-00320-00+SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Buenas tardes

Adjunto solicitud de medica cautelar en proceso ejecutivo de Bancoomeva contra Roxi Montero.

Atentamente,

MANUEL CABRALES SOLANO

Abogado

Centro, Avenida Daniel Lemaitre No. 9-45

Edificio Banco del Estado Oficina 906

Teléfonos: 6647558 – 6648219

Cel: 310-3668053

Cartagena de Indias D. T. y C.

RECIBIDO
FECHA: 21-07-2024
FIRMA: [Firma]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OFICINA DE APOYO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

256

Cartagena de Indias, 19 de Julio de 2021
OFICIO No OECM-COVID19- 4229

Señor:
BANCO WSAS
La ciudad

ACCION	PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE	BANCO DAVIVIENDA S.A NIT. 900.061.516-4
DEMANDADO	RODOLFO VELEZ GARCIA Y CIA S. EN C NIT. 806.000.947-3 RODOLFO VELEZ GARCIA C.C 9.080.937
RADICADO	13-001-40-03-004-2009-00779-00

Cordial saludo,

Comunico a usted que el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena; mediante auto de fecha Siete (07) de Julio de dos mil Veintiuno (2021); resolvió:

PRIMERO: Decretar el requerimiento de la medida cautelar

SEGUNDO: Requerir a **BANCO W SAS**, para que se pronuncie sobre la orden impartida en auto de fecha 15 de Julio de 2019 proferido por el suscrito juzgado.

TERCERO: Por Secretaria librese el respectivo oficio.

CUARTO: Prevéngase, en el sentido de hacer caso omiso a este requerimiento, responderá por dichos valores e incurrirá en multa de 2 a 5 S.M.L.V tal como lo dispone el numeral 10° del art. 593 del C.G.P.

Adjunto auto de fecha 15 de Julio de 2019.

En razón a lo ordenado en esta providencia los dineros descontados deben ser consignados en:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA DE LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA	130012041800
Código de Identificación	130014303000
NUMERO DE PROCESO	13001-40-03-004-2009-00779-00
DEMANDANTE	BANCO DAVIVIENDA S.A NIT. 900.061.516-4
DEMANDADO	RODOLFO VELEZ GARCIA Y CIA S. EN C NIT. 806.000.947-3 RODOLFO VELEZ GARCIA C.C 9.080.937

Así mismo nos permitimos informarle que El Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cartagena asumió el conocimiento del mismo en virtud del Acuerdo PSAA13-9984 de 2013, PCSJA17-10678 de 2017 y PCSJA18-11032 de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura.

Al contestar sírvase citar la referencia del proceso.

Atentamente,

SECRETARIO

YESICA PAOLA BARRIOS ARRIETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
ABOGADA CON FUNCIONES SECRETARIALES
Oficina De Apoyo Para Los Juzgados Municipales De Ejecución

Centro, Av. Carlos Escallon No. 8-59 - Pasaje la Moneda - piso 2 oficina 212
Cartagena -Colombia

Proyecto: MGN

157

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: DIECISEIS CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

RAD: 320-2017

REF: PROCESO EJECUTIVO DE **BANCOOMEVA S.A.** CONTRA **ROXI ELENA MONTERO PRENS**

MANUEL CABRALES SOLANO, abogado titulado con T.P.No.30.118 del C.S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado judicial de **BANCOOMEVA S.A.** dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito solicitar a usted lo siguiente:

Se sirva decretar el embargo y posterior retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo y demás emolumentos legalmente embargables que devenga la demandada **ROXI ELENA MONTERO PRENS** en su calidad de empleada de **DINACOL S.A.S.**, o el embargo de cuentas por cobrar que por cualquier concepto tenga la obligada con la misma entidad.

Sírvase elaborar el oficio correspondiente.

Atentamente,



MANUEL CABRALES SOLANO
T.P.No.30.118 del C.S. de la J.
C.C.No.73.082.028 de C/gena.

Centro, Av. Daniel Lemaitre #9-45 Edificio Banco de Estado Oficina 906
Teléfonos: 6647558 - 6648219.
Cartagena de Indias D. T. y C

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-016-2017-00320-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

PROCESO EJECUTIVO	SINGULAR
Radicado	13001-40-03-016-2017-00320-00
Demandante	BANCOOMEVA
Demandado	ROXI ELENA MONTERO PRENS

Advierte el despacho a folio 157 del cuaderno de ejecución, memorial presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante, a través del cual solicita se decrete el embargo y secuestro de los dineros que por cualquier forma de captación legal tenga o llegare a tener el demandado ROXI ELENA MONTERO PRENS como empleado de DINACOL SAS. Por ser procedente, el Despacho accederá a decretar la medida de embargo solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Decretar el embargo y secuestro de la 1/5 parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente y/o demás emolumentos legalmente embargables que perciba el demandado A ROXI ELENA MONTERO PRENS, identificada con C.C. No.22.798.439, como empleado del DINACOL SAS.

Limitese la cuantía en la suma de \$32.000.000 pesos.

SEGUNDO: Por secretaria librense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-016-2017-00320-00

Firmado Por:

**Luis Alfredo Junieles Dorado
Juez Municipal
Menores 3
Juzgado Municipal
Bolívar - Cartagena**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b87ba79969e602efb7b7a156aed90ab37ef569cadcf692f9d886e7cd324cebc8

Documento generado en 02/08/2021 08:00:37 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

**RV: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BBVA CEDIDO A AECSA S.A. CONTRA LUZ
NERIS GUARDO PADILLA -TERMINACION POR PAGO TOTAL**

Digitizados.

22-07-2021

MANUEL DE JESUS CARDOZO PATERNINA <manueldejcardozop@hotmail.com>

Jue 22/07/2021 12:34 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <csejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: edna.acosta580@aecsa.co <edna.acosta580@aecsa.co>; nataly.gonzalez268@aecsa.co <nataly.gonzalez268@aecsa.co>

1 archivos adjuntos (584 KB)

TERMINACION PAGO TOTAL LUZ NERIS GUARDO PADILLA.pdf;

Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E.

S.

D.

JUZGADO DE ORIGEN: DIECISES CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

**REF: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BANCO BBVA CEDIDO A
AECSA S.A. CONTRA LUZ NERIS GUARDO PADILLA.**

RAD: 00322-2018

MANUEL DE J. CARDOZO P; mayor, domiciliado y residenciado en esta ciudad, identificado con CC. No. 92.505.650 de Sincelejo, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. N° 92.505.650 con T. P. No. 85.641 del C. S. de la J., conocido en autos, como apoderado judicial de la parte ejecutante, respetuosamente me permito solicitar se sirva decretar la terminación del proceso de la referencia por pago total de la obligaciones judicializadas Nª 01589608448565, 01585001876507, 01589605083746, 01589607537343 Y 01589606113005, las cuales deben ser plasmadas y/o identificadas en el auto que resuelva la presente petición.

En consecuencia, señor juez, ordene sin lugar a costas, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas ya que no existe en el expediente orden judicial proveniente de otros despachos judiciales que solicite el embargo de remanente.

Es de anotar en caso de que existan depósitos judiciales producto de los embargos efectuados estos deben ser entregados al demandado al igual que los desembargos de las medidas cautelares decretadas.

Recibo notificaciones en las siguientes direcciones de correo electrónico:

manueldejcardozop@hotmail.com

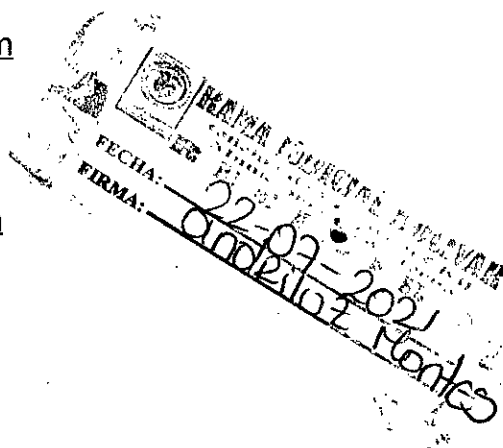
macapate@yahoo.com

manueldejcardozop2@gmail.com

Celular: 300-6009072

Cordialmente,

MANUEL DE J. CARDOZO P.
Abogado
Universidad de Cartagena



Especialista en Derecho Procesal UNILIBRE
Dirección: Centro, Av. Daniel Lemaitre No 9-45
Edificio Banco del Estado Oficina 305
Teléfonos: (5) 6648817 - Cel.: 3006009072
Cartagena de Indias

Señor.
JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: DIECISES CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

REF: PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR BANCO BBVA
CEDIDO A AECSA S.A. CONTRA LUZ NERIS GUARDO PADILLA.

RAD: 00322-2018

MANUEL DE J. CARDOZO P; mayor, domiciliado y residenciado en esta ciudad, identificado con CC. No. 92.505.650 de Sincelejo, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. N° 92.505.650 con T. P. No. 85.641 del C. S. de la J., conocido en autos, como apoderado judicial de la parte ejecutante, respetuosamente me permito solicitar se sirva decretar la terminación del proceso de la referencia por pago total de la obligaciones judicializadas N° 01589608448565, 01585001876507, 01589605083746, 01589607537343 Y 01589606113005, las cuales deben ser plasmadas y/o identificadas en el auto que resuelva la presente petición.

En consecuencia, señor juez, ordene sin lugar a costas, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas ya que no existe en el expediente orden judicial proveniente de otros despachos judiciales que solicite el embargo de remanente.

Es de anotar en caso de que existan depósitos judiciales producto de los embargos efectuados estos deben ser entregados al demandado al igual que los desembargos de las medidas cautelares decretadas.

Recibo notificaciones en las siguientes direcciones de correo electrónico:

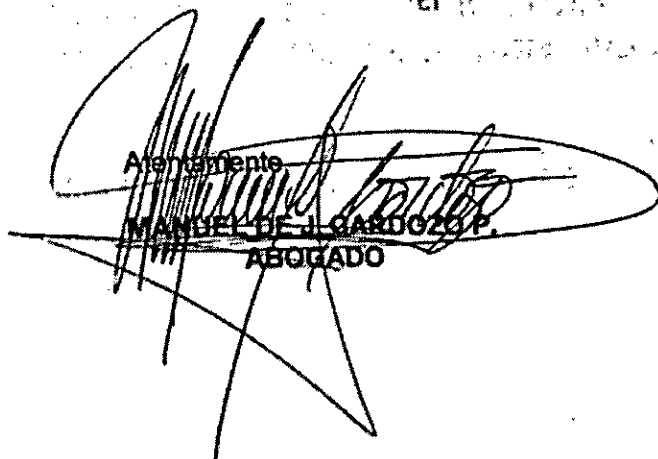
manueldejcardozop@hotmail.com

macapate@yahoo.com

manueldejcardozop2@gmail.com

Celular: 300-6009072

Atentamente,


Atentamente,
MANUEL DE J. CARDOZO P.
ABOGADO

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-40-03-016-2018-00322-00

03 AGO 2021

Cartagena de Indias D. T. y C.,

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-016-2018-00322-00
Demandante	BANCO BBVA S.A
Demandado	LUZ NERYS GUARDO PADILLA
Asunto	Terminación del proceso.

El proceso de la referencia ingresó al Despacho por solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la parte demandante mediante su apoderado judicial.

Anota el Despacho que el inciso 1º del artículo 461 del C. G del P, ad pedem litterae, previene:

***“Artículo 461. Terminación del proceso por pago.** Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.*

De la transcripción de la prementada disposición, es del caso señalar que en el sub lite se colman las exigencias anotadas; habida cuenta que quien presenta la solicitud de terminación es el apoderado judicial de la parte demandante con facultad para recibir tal como consta a folio 21 del c.p . Por lo precedente, el despacho dará por terminado el proceso por pago total de la obligación, así mismo se ordenará el levantamiento de las medidas existentes. Por lo anterior el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación No 01589608448565, No 01585001876507, No 01589605083746No 01589607537343, No 01589606113005. .

SEGUNDO: Decrétese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes o dineros de propiedad de la parte demandada. Por secretaría librense los oficios respectivos. **En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la respectiva autoridad.**

TERCERO: En caso de no existir embargo de remanentes entréguese los títulos restantes a los demandados, o por intermedio de su apoderado previa verificación de la inexistencia de sanciones disciplinarias, con facultades para recibir, si hay lugar a ello. 1



CUARTO: INSTAR a la parte demandada a fin de que allegue a la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecución los oficios de desembargo una vez sean retirados con la constancia de que han sido debidamente diligenciados.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriado este auto, archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
Juez



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-014-2018-00299-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

16 JUN 2021

PROCESO	EJECUTIVO
Radicado	13001-43-03-014-2018-00299-00
Demandante	BANCO CAJA SOCIAL S.A
Demandado	JULIANA ELLN SOLIS LORDUY

En su oportunidad la parte demandada solicitó el desglose de los documentos que soportaron la demanda para lo cual adjunta copia del arancel judicial.

Haciendo una revisión del expediente se observa auto de fecha 19 de agosto de 2019 que decretó la terminación por pago del proceso y si bien no ordenó el desglose del título valor, se entiende que de conformidad al artículo 116 del C.G.PP es procedente.

Por lo anterior, **y de conformidad al artículo 116 del C.G.P** al ser procedente el Despacho accede a ello previa constatación del pago del arancel judicial, esto es, a través de la Secretaría de Apoyo de los Juzgados de Ejecución proceder al desglose de los documentos que soportan la demanda. En consecuencia este Juzgado

RESUELVE

CUESTIÓN UNICA: ORDENAR el desglose del título valor y los documentos que soportan la presente demanda previo constatación del pago del arancel judicial, dejando las constancias de rigor de conformidad al artículo 116 del C.G.P. ORDENAR A LA SECRETARÍA INFORMAR A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL A FIN DE QUE PROCEDAN A EFECTUAR LO CONCERNIENTE PARA EL DESGLOSE.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

1. *revised*
20/10/2010

[illegible]

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicado No. 13001-43-03-014-2018-00299-00

Cartagena de Indias D. T. y C.,

03 AGO 2021

Proceso Ejecutivo	SINGULAR
Radicado	13001-43-03-014-2018-00299-00
Demandante	BANCO CAJA SOCIAL S.A
Demandado	JULIANA ELLN SOLIS LORDUY
Asunto	ORDENAR

En memorial presentado el apoderado judicial ha solicitado en varias ocasiones el el desglose teniendo en cuenta la terminación del proceso por pago de las cuotas en mora.

En auto de fecha 16 de Junio de 2021 ésta autoridad ordenó lo anterior, y nuevamente se tiene el expediente al Despacho sin que se haya actuado de conformidad. En consecuencia,

RESUELVE:

CUESTIÓN ÚNICA: ORDENAR a la secretaria de apoyo de los Juzgados de ejecución actuar de conformidad al auto de fecha 16 de Junio de 2021 por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO JUNIELES DORADO
JUEZ

